

ALFREDO SERRANO MANCILLA



AMÉRICA
LATINA
EN
DISPUTA



E C U A D O R





AMÉRICA
LATINA
EN
DISPUTA



© Alfredo Serrano Mancilla

© Fundación Editorial El perro y la rana, 2015

Centro Simón Bolívar,

Torre Norte, piso 21, El Silencio,

Caracas - Venezuela, 1010

Teléfonos: 0212.768.8300 / 768.8399

Correos electrónicos

atencionalescritorfepr@gmail.com

comunicacionesperroyrana@gmail.com

Páginas web

www.elperroylarana.gob.ve

www.mincultura.gob.ve

Redes sociales

Facebook: Editorialelperroylarana

Twitter: @perroyranalibro

Diseño de portada

David Herrera

Edición

Enrique González Atay

Corrección

José Jenaro Rueda R.

Diagramación

María Victoria Sosa

Hecho el Depósito de Ley

ISBN 978-980-14-3080-3

Depósito legal lf 40220158002713

Impreso en la República Bolivariana de Venezuela

La Colección Alfredo Maneiro, *Política y sociedad*, publica obras puntuales, urgentes, necesarias, capaces de desentrañar el significado de los procesos sociales que dictaminan el curso del mundo actual. Venezuela integra ese mundo en formación, de allí la importancia del pensamiento, la investigación, la crítica, la reflexión, y por ende, de las soluciones surgidas del análisis y la comprensión de nuestra realidad.

Firmes propósitos animan a esta colección: por una parte, rendir homenaje a la figura de Alfredo Maneiro, uno de los principales protagonistas de los movimientos sociales y políticos que tuvieron lugar en Venezuela durante los duros y conflictivos años sesenta, y por la otra, difundir ediciones de libros en los cuales se abordan temas medulares de nuestro tiempo.

Cuestiones geopolíticas: esta serie pretende servir de foro para la creación de una nueva cartografía contra-hegemónica del poder mundial, a través de la exploración en los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales de las relaciones norte-sur y sur-sur, sus estrategias e implicaciones para la humanidad.

ALFREDO SERRANO MANCILLA



AMÉRICA
LATINA
EN
DISPUTA



AGRADECIMIENTOS

Esto de agradecer no es ninguna cuestión protocolaria, es uno de los mejores momentos que tiene escribir un libro. Dar las gracias a aquellas personas que son fundamentales para que este proyecto haya acabado en buen puerto, es un verdadero placer.

Es por ello que me gustaría, sin más rodeos, dar las gracias a quien ha estado en todo momento detrás, delante, en medio en este libro: Gisela Brito, quien, además de ser mi compañera de vida, en este caso ha sido también la mejor compañía para que este libro sea lo que finalmente es. Ha sido ella quien ha estado pendiente en cada detalle de forma (con una gran capacidad editora), discutiendo cada idea de fondo, proponiendo e interpelando, cuestionando para profundizar en cada discusión; gracias, Gise, por esta tarea tras bambalinas, y soy consciente de que estas gracias se quedan cortas para explicar todo lo que tienes que ver en este libro. Seguramente hubiera sido más justo que aparecieras también en la portada, porque ha sido mucho tu buen trabajo para que el libro tenga todas las virtudes que tiene (los errores son míos). Nuevamente, gracias.

Gracias a todas esas personas que te encuentras en este camino recorrido por América Latina; a todas esas personas que te obligan a discutir, a repensar cada idea, a bucear en nuevos conceptos, a replantear cada tesis, a abrir los ojos ante un nuevo desafío. Gracias a ellos porque son los que hacen que este libro tenga más vida que otros. Gracias a Ricardo Patiño, Jorge Arreaza, René Ramírez, Patricia Villegas, Pedro Brieger, Atilio Borón, Guillermo Oglietti, Esteban de Gori, Sergio Martín, Íñigo Errejón, Teresa Morales, Juan Carlos Monedero, Ricardo Menéndez, Carmen Meléndez, Guillaume Long, Sergio Pascual, Alejandro Fierro, Franklin Ramírez, Jacques Ramírez, Julio Peña, Emir Sader, Álvaro García Linera, Kris González, Solka Agudelo, Carlos Marx Carrasco, Mauro Andino, Nicolás Oliva, Sebastián Carvajal, Simón Zerpa, Ximena Amoroso, Roberto Aguilar, Txema Guijarro, Mariela Pinza, Javier Jiménez, Manolo Monereo, Amílcar Salas, Iván Orosa, Pablo Imén, Manuel Canelas.

Gracias a Agustín Lewit y Sabrina Flax porque también tienen que ver con los inicios de este proyecto. Ellos están también presentes en este libro; gracias por apoyar en la investigación cuando este libro apenas había asumido forma alguna.

Gracias al Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) porque es indudablemente el detonador de este libro; desde este espacio, con muchos compañeros, comenzaron los debates en torno a esta *América Latina en disputa*.

Gracias también al Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, cuyo apoyo ha permitido la elaboración de este libro y al programa Prometeo de Ecuador.

Gracias a mis padres por saber convertir la lejanía en tanta cercanía. Gracias a ellos porque cada día me demuestran apoyo en esta decisión mía de estar tan lejos del lugar donde uno nace. Gracias, papá, por haberme ayudado a querer siempre conocer qué acontece en este continente latinoamericano, fruto de tus lecturas e inquietudes; gracias, mamá, por haberme dado tanta buena onda y energía (a veces imagino que tú has de haber nacido en Venezuela, por tu forma de ser). Gracias a ambos por haber aprendido a usar el *skype* y ahora el *whatsapp* porque así es todo más próximo (risas).

INTRODUCCIÓN. AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO

Ryszard Kapuściński, en su libro *Ébano*, alega sobre África que:

... este continente es demasiado grande para describirlo. Es todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Solo por una convención reduccionista, por comodidad, decimos África. En la realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe.¹

Algo similar se podría afirmar para América Latina, salvando las distancias. Definitivamente, hablar de América Latina como un todo siempre resulta arriesgado y ciertamente inapropiado; tal definición no puede ser usada para describir un lugar uniforme y monolítico. Es una categoría geográfica que en la última década se viene constituyendo sólidamente como un enclave geopolítico, pero eso no significa que esta región pueda ser concebida como un espacio homogéneo, ni en lo cultural ni en lo histórico, y tampoco en lo que concierne a la actualidad política y económica. Se emplea asiduamente este término, 'América Latina', para invocar a una historia que tiene evidentemente muchos factores en común, muchos elementos culturales compartidos, una relación dependiente con

1 Ryszard Kapuściński. *Ébano*, Editorial Anagrama, Barcelona, España: 2000.

el mundo desde que se insertara colonizadamente, como bien lo explica Aníbal Quijano en su artículo “El fantasma del desarrollo en América Latina”². Sin embargo, estas identidades y semejanzas no deben llevarnos a percibir a América Latina como si se tratara de un continente idéntico y simétrico.

Esta aclaración es tan obvia como necesaria por tratarse de un libro que abusa titulándose *América Latina en disputa*. Aunque es absolutamente cierto que América Latina es un continente en disputa y movimiento, este texto no se dedica a toda América Latina, sino que su título tiene como finalidad llamar la atención sobre lo que sucede, en términos generales, en la región para centrarnos más especialmente en algunos países que se mueven más que el resto; o mejor dicho, se mueven más a contracorriente de lo que vienen haciendo otros países que siguen moviéndose al son que se les marca desde afuera, con el consentimiento de las élites desde adentro. El objetivo principal de este escrito es poner la mirada sobre aquellos países que han transitado por una senda completamente diferente a aquella que estaba marcada desde el epicentro del neoliberalismo desde los años ochenta. No es fácil salirse del raíl hegemónico sin descarrilar; no ha sido, ni es todavía, tarea sencilla buscar la manera de labrar un nuevo camino distinto a aquel establecido en la escuela del pensamiento único³, como resultado del cierre del universo del discurso impuesto por la clase política dominante y los medios.

Al afirmar que no es fácil salirse del paradigma dominante es preciso considerar que: 1) no es fácil proponer otras alternativas (porque la hegemonía suele limitar excesivamente la capacidad para imaginar otras opciones), 2) no es fácil convencer a la mayoría de que realmente hay otras alternativas posibles y viables, 3) tampoco es fácil llevarlo a la praxis, y 4) a pesar de que es muchas

2 Aníbal Quijano. “El fantasma del desarrollo en América Latina”, en: *Revista de Economía y Ciencias Sociales*: 2000.

3 Véase más detalle en Herbert Marcuse. *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*, Joaquín Mortiz, México DF: 1965.

veces minusvalorado y/u olvidado, es mucho menos fácil continuar prolongadamente llevando a cabo esa otra propuesta social, económica y política, siempre con el apoyo de la mayoría. Son estas las fases que se deben atravesar para consolidar un cambio de época: no solo es cuestión de tener capacidad para cumplir exitosamente con una primera etapa en la que sí se puede obtener el apoyo popular, sino que el objetivo histórico es que ese respaldo inicial deje de ser efímero y esporádico para que acabe siendo el verdadero músculo vigoroso sobre el cual iniciar la segunda fase, y así hasta llegar a que el proceso de cambio sea irreversible, y no haya marcha atrás porque ni la mayoría social lo desee, ni la nueva hegemonía constituyente permita que la hegemonía constituida tenga capacidad para revertir todo lo conseguido.

Son fases de un nuevo ciclo histórico y político que vienen atravesando algunos países en la región, algunos habiendo cumplido casi a rajatablas con cada uno los requisitos en cada una de ellas y otros, tal vez, en una versión *light* apelando a un posibilismo relativo. Pero de una manera u otra, con las especificidades de cada uno es indudable que en América Latina, en diferentes países, se han producido cambios significativos que han permitido contrarrestar la propuesta neoliberal inaugurada en aquel Consenso de Washington (acuñado en 1989 por el economista John Williamson, pero que venía comandado desde finales de los setenta y principios de los ochenta por Margaret Thatcher y Ronald Reagan; y con previas experiencias piloto como la dictadura de Pinochet en Chile y la dictadura cívico-militar en Argentina). El nuevo sentido común existente en algunos países de la región, con efecto (parcial) de contagio sobre los otros, es una muestra inequívoca de que, además de haberse resistido a la hegemonía neoliberal, se ha conseguido consolidar un cambio de época que va más allá de un ciclo electoral favorable.

Se trata de un nuevo ciclo político abierto en muchos países de América Latina, que en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador se cristalizó en procesos constituyentes que culminaron en la elaboración de un nuevo pacto social; esto es, una nueva Constitución.

Nuevas reglas de convivencia para un nuevo tiempo que se abría, poniendo punto y final a la época neoliberal. Son tres escenarios que difieren del resto precisamente por este aspecto central: no aceptaron ninguna refundación que no fuera edificada sobre las bases de un nuevo contrato social, económico y político, sellado por la nueva mayoría ciudadana. Venezuela, Bolivia y Ecuador constituyen realmente la máxima expresión de este cambio de época en América Latina, lo cual no quiere decir que no haya habido casos como, particularmente, el argentino o el uruguayo –también el caso paraguayo hasta la destitución de Fernando Lugo– y quizás también (aunque en menor medida) Brasil, que no sean ejemplos de procesos políticos que están participando muy activamente en este nuevo cambio de época abierto en la región. Pero son los casos específicos de Venezuela, Bolivia y Ecuador los que más han avanzado, tanto en el cierre de la época neoliberal como en la inauguración de otra época totalmente diferente, que además marca el rumbo a otro horizonte estratégico. Venezuela con su Socialismo Bolivariano del siglo *xxi*, Bolivia con su Socialismo Comunitario del Vivir Bien, y Ecuador con su Socialismo del Buen Vivir, marcan un destino superador del capitalismo, interpelándolo desde sus entrañas, desde sus propias raíces, proponiendo un tránsito que va más allá de una época simplemente postneoliberal.

Es por esta razón que este libro se centra en esos tres países y no en otros, a pesar de que sin duda hay otros escenarios donde el proceso de cambio ha sido notable y ha inaugurado una época que no podría ser encorsetada desde ningún prisma neoliberal. El caso argentino es, seguramente, el más simbólico en este sentido y por ello se apelará a él en muchos aspectos para mostrar cómo también se ha logrado fundar un cambio de época, a pesar de no haber habido una refundación constitucional. También el caso de Brasil ameritaría estar presente a lo largo del texto (tanto por lo que representan los cambios adentro, pero fundamentalmente por la influencia que tiene fronteras afuera) y, seguramente, lo mismo para el caso de Uruguay, pero el propósito de este libro es realmente presentar una caracterización de los cambios más notorios y

significativos que se han producido en América Latina, en aquellos lugares donde los procesos políticos han supuesto un verdadero punto de inflexión, una ruptura con lo que venía sucediendo, al mismo tiempo que han logrado avanzar desde un nuevo paradigma constitucional, marcándose así nuevos desafíos estratégicos en lo económico, en lo político y en lo social. Esto no resta importancia al resto de procesos, ni pretende competir con ellos. No se trata aquí, como muchas veces se plantea, de discutir como si todo análisis debiera circunscribirse a una carrera de caballos entre los unos y los otros; no es riguroso realizar ciertas comparaciones (odiosas) ignorando las divergencias entre cada caso.

Es cuestión de explicar por qué el libro centra mayoritariamente su atención en estos tres países y no en el resto, pero sin que ello signifique que para tener una panorámica integral, amplia y rigurosa, se debería considerar también a esos otros países que también han sido capaces de poner en jaque al modelo imperante. También sería preciso hurgar al interior de otros países que aparentemente han cambiado poco (o mejor dicho, se han movido más como se pretendía desde afuera, desde los poderes económicos dominantes), para observar qué es lo que se está tambaleando en esos pactos firmados por arriba, descuidando lo que le pasa a la mayoría de abajo. Es, sin duda, necesario y urgente afrontar todas las aristas de este complejo entramado que realmente es América Latina. Este ensayo es solamente un primer acercamiento, con el objetivo de poner encima de la mesa cómo se caracteriza y problematiza esta particular América Latina en movimiento-disputa; que ha sido capaz de dejar atrás las décadas neoliberales perdidas, a favor de unos años que han supuesto una década ganada para la mayoría social. Han sido, estos últimos, unos años que conforman la primera fase de una época ganada, de este cambio de época que nació con el siglo *xxi*.

A partir de aquí, el desafío es no quedarse paralizado, vanagloriándose con halagos y virtudes propias y características de esta década ganada para Venezuela, Bolivia y Ecuador, y también para Argentina y Brasil y Uruguay. No se trata de pesimismo

paralizantes (ese 'todo está mal' que esteriliza cualquier proceso de cambio), pero tampoco de exceso de triunfalismo en retrospectiva. El gran reto es dar un paso más, un nuevo salto adelante para afrontar lo que resta por venir: los nuevos objetivos estratégicos e históricos para identificar las nuevas adversidades coyunturales (tanto adentro como afuera); de qué viento a favor se dispone, cuáles son las nuevas demandas de la mayoría social para así encontrar las respuestas, cómo se puede lograr irreversibilidad de todo lo conquistado, cuáles son las actuales y futuras contradicciones y tensiones para que sigan constituyendo la base-motor creativa del proceso de cambio. Son muchas las dimensiones impostergables que deben encararse para seguir de cerca rigurosamente el futuro de esta América Latina en disputa.

Después de las décadas perdidas, llegó una década ganada como parte de un cambio de época y, a partir de ahora, los próximos años constituyen una década en disputa, una nueva pugna en torno al sentido común de la siguiente etapa en este actual ciclo político ampliado de transformaciones sociales y económicas que tiene lugar en el continente.

Esa secuencia presentada gráficamente a modo de décadas, perdidas-ganadas-en disputa, constituye la base sobre la que se ordena este libro. No es posible discutir prospectivamente acerca de los ejes disputados en la región sin antes conocer cuál fue la estructura de dominación neoliberal característica de las décadas perdidas, pero tampoco es apropiado profundizar sobre la disputa sin haber ahondado en la década ganada, como punto de partida del cambio de época en América Latina. No se trata de presentar los capítulos como si estos fuesen compartimentos estancos. El objetivo es precisamente lo contrario: presentar cada etapa a partir de un diálogo fluido con las otras, porque solo así se pueden complejizar las interpretaciones sobre la disputa abierta en América Latina, fortaleciendo la argumentación y la fundamentación del análisis en torno a las múltiples dimensiones en las que esta se libra.

El capítulo siguiente representa este primer momento analítico: las décadas perdidas en América Latina en la época neoliberal.

Saber de dónde se viene y cómo funcionaba estructural y orgánicamente el modelo neoliberal en la región, y muy especialmente en los tres países que son objeto de máxima atención, se convierte en asunto prioritario para iniciar este recorrido geográfico, histórico y geopolítico. La intención no es únicamente presentar cuáles fueron los efectos devastadores de las políticas neoliberales en América Latina; además de ello, es importante conocer en detalle cómo se fue implementando la matriz dominante neoliberal y en qué principios rectores se basó la nueva propuesta económica-organizadora del capitalismo para esa casa⁴ llamada América Latina a partir de los años ochenta. Desentrañar qué es lo que realmente existe detrás del decálogo de Washington es imprescindible para comprender todo lo que avanzó el neoliberalismo y cómo llegó a ser en muchos momentos concebido como un orden económico y político irreversible. Resulta preciso conocer en profundidad al neoliberalismo, más allá de un simple recetario. Se trata de comprender el neoliberalismo como ese orden hegemónico capaz de consolidar el metabolismo social del capital, esto es, capaz de fundar y sostener un determinado conjunto de relaciones y reacciones laborales, comerciales, productivas, financieras y sociales (y también culturales), ocurridas al interior de un patrón económico siempre a favor de unos pocos, en detrimento de una mayoría.

Es tan vigorosa la concepción mundializadora de esta propuesta hegemónica neoliberal, que es obligado describir analíticamente los hilos de la interdependencia de América Latina con el centro de gravedad del capitalismo global. Todo ello abona la comprensión acerca de por qué los efectos sobre la población latinoamericana fueron, como ya es de sobra conocido, décadas perdidas que bien podrían haberse llamado de cualquier otra forma; décadas sufridas, décadas arrancadas, décadas en la que se expropiaron la soberanía y el derecho a disfrutar de una vida digna para la mayoría popular

4 El término 'economía', en su origen etimológico, proviene del griego *oikonomia*: *oikos*, hogar, y *nemein*, administración. La economía, desde esta premisa básica, ha de responder precisamente a esa esencia: cómo 'organizar la casa'.

en cada país. El endeudamiento y empobrecimiento social masivo conforman un pasado que no conviene olvidar, a pesar de que el presente y el futuro vayan marcando otros novedosos desafíos.

Ni Estado de Bienestar ni Estado de bienestar en miniatura: el neoliberalismo hizo desaparecer la seguridad jurídica que debía garantizar los derechos sociales de la mayoría ciudadana, a favor de una seguridad jurídica en materia de tratados bilaterales de inversión, de tratados de libre comercio que fueron en detrimento del bien común y en favor del enriquecimiento de unos pocos. Fue ese el punto de partida –y no otro cualquiera– el marco de no convivencia en el que emergieron nuevas propuestas que canalizaron esas demandas; aparecieron movimientos e instrumentos que transformaron el desencanto en esperanza. América Latina se configuró, como afirma Emir Sader⁵, en el eslabón más débil de la cadena mundial neoliberal, y ello es un hecho fundacional que marca y condiciona la prisa con la que se fueron articulando inicialmente aquellos procesos de cambio que buscaban, como fuere, enterrar la larga y sufrida noche neoliberal.

El capítulo segundo se dedica a presentar lo que ha significado la década ganada, como fase inicial de un cambio de época en América Latina, concentrando la atención en lo acontecido en los tres países-eje del análisis: Venezuela, Bolivia y Ecuador, sin dar la espalda a otros casos que también suscitan interés para comprender más ampliamente lo que supone este ciclo político de transformaciones en toda la región. Cualquier radiografía analítica de este período ha de iniciarse inexorablemente por una primera etapa de irrupción popular-plebeya, nacional-popular, que interpela y cuestiona en su totalidad al modelo vigente en esos años. No sería posible comprender esta década ganada, si no es atendiendo a este sujeto movilizador como ese nuevo topo, con potencia y capacidad emancipadora.

5 Emir Sader. *El nuevo topo: los caminos de la izquierda latinoamericana*, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires: 2009.

Con ese precedente, emergen los liderazgos de Hugo Chávez en Venezuela, el de Evo Morales en Bolivia y el de Rafael Correa en Ecuador; también el de Néstor Kirchner en Argentina, el de Lula da Silva en Brasil, el de Pepe Mujica en Uruguay y el de Lugo en Paraguay. Son procesos que no surgen de la nada ni de ningún laboratorio. Son propuestas constituyentes para los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador con el objetivo de refundarse; de renovar el pacto social, económico y político, incluyendo a la mayoría; de reapropiarse de todo lo que había sido expropiado por el neoliberalismo, de recuperar la soberanía controlando la riqueza estratégica existente en cada país, de abandonar la inserción subordinada y dependiente en el sistema-mundo.

Es otro paradigma que resurge para saldar, en una primera etapa y de la forma más urgente posible, la deuda social heredada que afectaba injustamente a cada ciudadano en su vida más cotidiana. No había paciencia que soportase las paupérrimas condiciones en las que vivía la mayoría social. Esta coyuntura adversa era el primer obstáculo para saltar porque a partir de ahí se podría pensar en las transformaciones estructurales y estratégicas necesarias para sostener este proceso de cambio en el futuro. Es por ello que el capítulo describe y repasa cómo se lograron en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en tiempo récord, avances sociales sin parangón en la historia de cada país. Se recorre paso a paso aquello que supone hoy una década ganada en lo económico, en lo social y también en lo político, y que ha permitido consolidar un cambio de época en América Latina. No solo ha habido avances sociales en materia de salud, educación, vivienda, servicios básicos, empleo y salario real, desnutrición y natalidad, etc., también se ha avanzado en cambios estructurales muy considerables en diferentes ámbitos de la política económica. De hecho, la consolidación de nuevos espacios de integración en América Latina (ALBA, Unasur, Celac y un nuevo Mercosur), con mayor grado de independencia de los países centrales, así como las nuevas alianzas geoestratégicas con otros polos geoeconómicos, son un pilar fundamental del nuevo cambio de época para esos países, pero también ha supuesto un

gran influjo en el resto de países en el modo de concebir el nuevo paradigma geopolítico.

El último capítulo es tal vez el más desafiante y novedoso en relación con los anteriores en tanto que procura abrir, a modo de aperitivo, un debate a futuro exhibiendo los ejes de disputa en América Latina para los próximos años. Es un primer intento de determinación de una suerte de decálogo en disputa en América Latina, esto es, dibujar los principales nudos gordianos que sí o sí se deben afrontar en los próximos años. Si el cambio de época es tal por las sustanciales modificaciones que se han producido, entonces será primordial realizar un sano ejercicio de inventario para identificar aquello que ya no es igual a lo de antes y, en consecuencia, surgirán seguramente exigencias y demandas de las mayorías, nuevos temas en discusión, en tensión, nuevas y viejas contradicciones, sean al interior del bloque o derivadas de la confrontación con el exterior. Son nuevos desafíos que aparecen tanto por errores propios, como por la necesidad de revisiones de los cimientos, o por reacomodos precisados para reequilibrar desfases y desequilibrios ocasionados por el mismo proceso de cambio. Estas son las claves para discutir acerca de la viabilidad y la sostenibilidad de este cambio de época; la irreversibilidad será más efectiva en tanto sea posible enfrentar los próximos años en disputa, acertando en la identificación de las nuevas tensiones y contradicciones surgidas al calor de la propia dinámica del vertiginoso proceso de cambio. Pero, además, hay un mundo ahí afuera que ha dejado de ser el mismo de antes, geopolítica y geoeconómicamente.

Más vale tarde que nunca porque va siendo hora de actualizar ese oportuno debate que abrió García Linera en relación con las contradicciones creativas de los procesos de cambio. Esto fue hecho hace unos años, cuando tal vez algunos procesos aún no habían tenido el tiempo necesario para consolidar suficientemente el nuevo proyecto hegemónico y, por tanto, sin perspectiva temporal amplia para saber con exactitud qué tipo de tensiones se debían afrontar como prioritarias, como aquellas que podrían ser denominadas de primer orden. Es, por tanto, momento oportuno para

aprovechar la ventana que se quedó entreabierta después de esos planteamientos, y así seguir contribuyendo al debate en relación con la reformulación de cuáles son actualmente las nuevas tensiones, al calor de lo que se vive hoy en día en la región latinoamericana, siempre teniendo en cuenta el cambiante contexto geoeconómico y geopolítico. El objetivo es fijar la mirada en la agenda abierta en disputa para los próximos años en América Latina a partir de las contradicciones, tanto aquellas que surjan al interior de los procesos de cambio como las que sean fruto de confrontación con otros modelos antagónicos aún vigentes en el continente y fuera de él.

Es preciso preguntarse por la relación dinámica entre aquello que se desea conservar como irreversible y todo lo que aún resta por revertir, por las posibilidades de gestionar exitosamente las urgencias de la coyuntura sin perder de vista las transformaciones estructurales; por la gestión estatal como nuevo tempo de la política; por la disputa por la nueva renta en destino y el papel del rentismo importador en esta pugna; por la dimensión productiva como centralidad económica estratégica para estos años; por la dialéctica entre las posibilidades reales de distribución (desde las raíces) y el camino exclusivo de las políticas redistributivas; por cómo conciliar el plano nacional con el supranacional; por la disputa geoeconómica mundial que plantea un punto de bifurcación entre la subordinación atlántica y la inserción *bricsiana*, y cómo esta última también tiene sus ventajas e inconvenientes; por cómo debe afrontarse la confrontación con una nueva otredad: la nueva derecha regional y mundial; y por último, preguntarse por el nuevo relato apropiado para una nueva época (acorde con los cambios respectivos). Los próximos capítulos invitan a discutir este movimiento: de las décadas perdidas a la década ganada y, en adelante, la década en disputa.

CAPÍTULO 1. ERA NEOLIBERAL: EL TIEMPO DE LAS DÉCADAS PERDIDAS

Emergencia y consolidación del neoliberalismo como paradigma hegemónico a nivel mundial

Durante los años setenta, el sistema capitalista comenzó a mostrar síntomas de ralentización y agotamiento respecto a su proceso de acumulación. La tasa de ganancia del capital en los países centrales fue desacelerándose, hasta llegar a estancarse. El *establishment* político y económico dominante respondió de inmediato buscando culpables, con un único objetivo: encontrar el nuevo orden económico para los próximos años, poniendo punto y final al modelo keynesiano que había venido imponiéndose para gestionar el capitalismo de forma global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conjuntamente y sin fisuras, la política en los países centrales, los organismos financieros internacionales y la teoría económica hegemónica alertaron en esos años setenta sobre la necesidad de otro mundo posible, que debía tener la responsabilidad de hacer renacer al capitalismo con más fuerza y vigor, y con más solidez para que volviera a hacer crecer la tasa de ganancia en forma sostenible para las siguientes décadas. Ello exigió una nueva forma de organizar la casa-mundo económica y políticamente; se

trataba de una reconfiguración del nuevo orden global del capitalismo, de tal forma que se asignaran renovadas funciones utilitarias y diferenciadas para cada uno de los actores que participan en este juego-mundo.

La guerra fría seguía como telón de fondo en esos años, aunque con menor intensidad que en las décadas previas⁶. Todo parecía indicar que la disputa entre ambos bloques se decantaba progresivamente a favor del capitalismo y en detrimento del campo socialista, quien continuaba perdiendo fuerza y aliados. Pero a pesar de que el enfrentamiento en clave geopolítica seguía vigente, el capitalismo –desde los países centrales– estaba más preocupado, en primera instancia, por reorganizarse en su seno para luego poder iniciar una ofensiva que le permitiera lograr, definitivamente, que los países no alineados ni a un lado ni al otro acabaran siendo aliados o, mejor dicho, alineados según el orden capitalista mundial. De esta forma, el objetivo era desmembrar progresivamente el campo socialista hasta terminar con la Unión Soviética, que no pasaba por su mejor momento económico.

En esta pugna, la discusión por el modelo económico que debía predominar y dominar no fue una cuestión baladí. ¿Cuál debería ser el modelo de acumulación capitalista para los próximos años? He aquí una de las principales cuestiones de fondo de ese momento histórico en plena disputa. En la búsqueda de culpables para la crisis, el Estado se llevó casi toda la responsabilidad y, en vez de discutir acerca de qué Estado era necesario para salir adelante, el planteamiento eran tan maniqueo como irresponsable: si el Estado (supuestamente) no funciona, entonces es preciso eliminarlo o reducirlo a la mínima expresión (solo suficiente para garantizar el orden capitalista que se pretendió implementar). La idea fue realmente acabar con el rol protagónico que había tenido el Estado en

las políticas keynesianas y transitar hacia un modelo donde eso que llaman mercado⁷ jugara un papel cada vez más preponderante.⁸

Aunque en muchas ocasiones se ha explicado la llegada de este nuevo modelo económico con base exclusiva en la dicotomía entre Estado/mercado, la nueva organización de la casa-mundo abordó el nuevo reto mucho más integralmente. Se llevó a cabo una rediscusión completa del modelo y se realizaron propuestas determinadas para cada uno de los aspectos que el capital exigía para que todo estuviera bien ordenado, permitiendo nuevamente un repunte sostenible de la tasa de ganancia. Se redefinieron los roles y tareas para todos los países insertados, subordinadamente, en el sistema capitalista. Para que se entienda aún más, simplemente, los países centrales precisaron que a partir de entonces la periferia fuera dependiente no solo a una velocidad –la comercial–, sino también a múltiples velocidades: por la vía productiva, tecnológica y financiera; todo ello sin olvidar la necesidad de seguir construyendo la dependencia epistemológica que facilitara, de esta manera, construir una verdadera hegemonía cultural y académica.

De esta forma, volvieron muchas de las ideas del liberalismo, pero tan rejuvenecidas y actualizadas y con tantos matices, que incluso se constituirían en un nuevo paradigma en sí mismas, muy diferente al corpus de ideas de donde procedían; porque el neoliberalismo no es ni siquiera una nueva versión del liberalismo, es una ecuación económica y política propia, con características únicas, que se convirtió en la nueva fórmula hegemónica de gestionar el capitalismo. Muchos autores siguen empecinados en hablar del neoliberalismo como una corriente política que parte del liberalismo. Esto podría ser aceptado en el momento de su nacimiento, a fines de los setenta, pero después de haberlo visto evolucionar

6 Ello no quiere decir que la tensión hubiese terminado, porque aún persistían situaciones complejas, como cuando Estados Unidos no aceptó el triunfo del Partido Comunista afgano en 1978 y detonó una guerra civil.

7 Las explicaciones en torno al eufemismo que usa la hegemonía neoliberal sobre el término ‘mercado’ se darán en próximas líneas.

8 Así, muchos autores defendieron por aquel entonces que el Estado de Bienestar había llegado a su estadio de agotamiento. Por ejemplo, Vito Tanzi. “El papel del Estado y la calidad del sector público”, *Revista de la Cepal*: 2000.

se puede afirmar rotundamente que es un paradigma económico-político en sí mismo, que se asienta sobre concepciones filosóficas propias de este nuevo momento histórico de finales de siglo xx.

El neoliberalismo fue (y sigue siendo) la llave mágica para ordenar el mundo capitalista, subordinando al ser humano y a la naturaleza a merced de la tasa de ganancia del capital privado. Ante tal desafío, el sistema capitalista procedió a diseñar un plan estratégico de largo aliento, estableciendo nuevos meta-objetivos y objetivos específicos, acompañados de un nuevo lenguaje para un renovado y moderno relato que facilitase la implementación de las medidas necesarias en materia de políticas económicas. Además, fue necesaria una arquitectura institucional internacional que funcionara como gran garante de este nuevo proyecto hegemónico; es por ello que donde aún había mucho por hacer aparecerían las nuevas instituciones y, en otros casos, se trató de afianzar las instituciones existentes, encaminándolas a los nuevos retos y desafíos.

Mucho se ha hablado de neoliberalismo desde uno u otro punto de vista político y académico, a favor y en contra de sus principios y sus políticas económicas, de sus diagnósticos y sus recetas. Justamente, una gran victoria de esta estructura dominante ha sido el ser discutido desde su propio plano, a partir de visiones maniqueas, como si todo se tratara de una variable dicotómica de sí o no, de todo o nada, como si no se pudiera discutir con matices sobre la veracidad de los supuestos sobre los que se construyen sus propios modelos, sobre los efectos y variables que nunca son considerados por tratarse de temas sociales que no deben ser objeto del debate económico, etc. Justamente, para evitar caer en esta trampa analítica, en las próximas líneas se presentan en forma resumida, pero rigurosamente, las principales bases estructurales del neoliberalismo, que son el sostén de este nuevo orden económico mundial hegemónico, instaurado para la gestión global del sistema capitalista. Sin conocer bien cómo funciona el neoliberalismo, metabólica y orgánicamente, es imposible luego entender sus consecuencias y su responsabilidad en las décadas perdidas en América Latina. El conocimiento sobre la caracterización estructural del

neoliberalismo y, por tanto, cómo opera en clave estructural, es un prerrequisito fundamental para posteriormente comprender por qué fue tan complicado disputar su irreversibilidad y por qué, además, a pesar de la década ganada del cambio de época en América Latina, en el siglo xxi todavía perduran ciertos retales no marginales de esta hegemonía que impide, muchas veces, mayores avances a favor de la mayoría social.

Anclaje en la Teoría Económica Neoclásica

El neoliberalismo se ancla en el paradigma teórico de la economía neoclásica, conformado a fines del siglo xix y principios del xx y, partiendo de este, diseña las políticas económicas que convienen al capitalismo para revitalizar el proceso de acumulación y concentración anhelado, virtuoso para el capital privado y vicioso para las mayorías populares. Hay que tener este punto claro como el cristal: no es que la economía neoclásica sugiera tal o cual cosa, sino que es al revés: es la política, los objetivos políticos los que se ponen encima de la mesa, y luego es la economía neoclásica la que logra sustentarlo con base en hipótesis marcianas que nada tienen que ver con la realidad. La esencia neoclásica facilita esta secuencia –esta forma de actuar– porque siempre parte de reducir la realidad a los supuestos que le interesan para demostrar el resultado que se ha propuesto demostrar. La teoría económica neoclásica no sirve, no vale, porque inventa un objeto de investigación, porque provoca la reducción del objeto de la ciencia económica. Son muchos los ejemplos con los que se puede mostrar cómo se trata de una economía del fraude⁹ en que se engaña desde las hipótesis, pero que, además, abusa de un aparataje instrumental metodológico, siempre cuantitativo, para presentarse como estudio técnico y, por tanto, neutral. Ahí está el otro punto fuerte del neoliberalismo: siempre presentar los análisis para lograr un objetivo

9 Como diría John Kenneth Galbraith. *La economía del fraude inocente*, Crítica, Barcelona: 1984.

disfrazado como algo de índole técnico y neutral, es decir, postpolítico. Este aspecto es fundamental para comprender que no hay ciencia económica ni herramienta metodológica neutral ni fuera de los confines políticos. Sin embargo, después de repetirlo hasta la saciedad, el neoliberalismo logró en sus albores posicionarse como una propuesta tecnocrática, siempre objetivando a su manera cualquier subjetividad posible y tratando de situarse imparcialmente, mostrándose indiferente frente a las parcialidades de la historia.

De esta manera el neoliberalismo, con la economía neoclásica como bandera, pretendía desplazar la disputa política por una disputa entre expertos, en la que el pueblo no tuviera nada que decir, acallándolo frente a las grandes sentencias de un grupo de técnicos muy cualificados que sabrían qué hacer para que las cosas fueran mejor para todos. Lo que no decían es que esa técnica estaba al servicio de un interés político determinado, que respondía a la desigual correlación de fuerzas económicas imperante en el mundo capitalista. El neoliberalismo usa la teoría neoclásica para conseguir un desplazamiento de eje político por uno exclusivamente técnico, permitiendo, así, excluir a las mayorías del debate político; todo ello es posible porque realmente sí hay una sintonía absoluta entre la teoría económica neoclásica y el neoliberalismo, al partir (ambos) de un mismo contenido en términos de filosofía política. Esa unidad se puede observar en cómo coinciden en relación con: 1) el individuo como sujeto de estudio y política, es decir, en la visión antropocéntrica del mundo, 2) la existencia de una visión colonizadora de la racionalidad suprema que permitirá homogeneizar cualquier heterogeneidad subjetiva y cultural, 3) la mercantilización del objeto de estudio económico (todo lo que no sea susceptible de ser mercantilizado no es de interés de esta nueva economía), y 4) la superioridad del valor de cambio en el mercado por encima del valor de uso. Son estas y otras coincidencias las que explican por qué hay que entender el neoliberalismo entendiendo la economía neoclásica.

Con relato y lenguaje

Aunque la economía preponderante lo trata formalmente con desprecio, el lenguaje es parte de la economía, porque la economía desde su etimología –organizar la casa– es política. Gracias al lenguaje, las políticas económicas se justifican y también se hacen más atractivas y digeribles. Para ello, el neoliberalismo usó una batería de términos, casi todos en tono muy positivo, buscando que no generaran rechazo. Fueron muchas las expresiones que permitieron al neoliberalismo un lenguaje propio, embaucador, capaz de enredarse en una narrativa muy sagaz y convincente, que era fundamental para servir como intermediario entre los técnicos y el pueblo. La ecuación perfecta: la política quedaba relegada a un plano invisible porque era este lenguaje, de publicidad (puro *marketing*), el que se ocuparía de narrar aquello que las mayorías deseaban escuchar, y luego eran otros, los expertos tecnocráticos, quienes se dedicaban a escribir la letra pequeña de cada una de las políticas económicas a implementar.

Por ejemplo, en el neoliberalismo, el término ‘modernidad’ se utilizó como pretexto para ‘norteñizar’ a todo el sur cuando se trataba de la periferia, porque, ¿a quién no le convence la idea de ser más moderno? Sí, seguramente algunos dirían no, pero la mayoría popular estaría dispuesta a aceptar cualquier cosa por ser más modernos después de siglos en los que el mito de lo moderno vino inoculado desde el Norte, como parte de un patrón de dominación económica y cultural. Así, con este término se permitieron modificar, por ejemplo, buena parte del Estado, reformulando su rol para convertirlo en garante de los postulados e intereses económicos del bloque dominante.

En el caso de las políticas económicas, estas venían bajo la proclama de ‘programas de ajuste’ y ‘planes de estabilización’. Comenzar por ajustar es aceptar una etapa previa: que hay desajuste. Y nuevamente, ¿a quién le gusta estar desajustado? Lo mismo si hablamos del vocablo ‘estabilidad’. También subyace una condición aceptada porque da calma y sosiego. Lo que no se llegaba

nunca a decir en un primer momento es qué se ajustaba y a qué se quería dar estabilidad. De hecho, nunca se estabilizaron unas condiciones salariales favorables y se ajustó la tasa de ganancia, sino que lo que sucedió fue todo lo contrario: el ajuste era sobre el ser humano y la estabilidad para el capital o, dicho de otro modo, lo que se vino con el neoliberalismo fueron programas de desajuste y desestabilización para los seres humanos.

Otra palabra bien empleada por el neoliberalismo fue el ‘consenso’, más concretamente en referencia al Consenso de Washington, como receta de las políticas económicas fundamentales del neoliberalismo para la mayoría de países de América Latina. Realmente, este llamado consenso fue el mayor de los disensos porque nunca estuvieron de acuerdo con él la mayoría de los pueblos, sino que fue un pacto entre muy pocos: algunos organismos internacionales bajo el auspicio de Estados Unidos, con la anuencia de las élites gobernantes, acostumbradas a ejercer el poder subordinadas a intereses foráneos. Se dio por válido como consenso el documento *What Washington means by policy reform* (“Lo que quiere decir Washington con reformar orientaciones políticas”), de Williamson¹⁰, porque el lenguaje supo imponer su habilidad frente a una realidad que distaba mucho de ser el contenido de ese significante.

Otro término muy recurrente para el neoliberalismo –y para la economía neoclásica– es el de ‘libertad económica’. Este sí que viene del liberalismo y su revolución liberal burguesa en Francia. La ‘libertad’ fue la palabra que condicionaba a cada una de las políticas económicas: libre comercio, liberalización financiera, libre mercado, etc. ¿Quién podría cuestionar que algo fuera libre? Nadie, pero sí hay que aclarar que la premisa de libertad está subordinada a una condición previa aún más importante; en otras palabras, ¿de qué sirve ser libre para comer, si no tienes qué comer?

10 Elaborado también en un documento como trabajo para una conferencia organizada por el Institute for International Economics, al que pertenece John Williamson (John Williamson. “What Washington means by policy reform”, en: John Williamson, (ed.), *Latin American adjustment: how much has happened*, Institute for International Economics, Washington: 1990).

Es trascendental ser libre para elegir qué comer, siempre y cuando, previamente, se haya solventado el problema de disponer de los recursos necesarios para poder elegir qué comer; por ello, el neoliberalismo manipuló constantemente el sentido de la libertad para llegar a una situación solo deseada para aquellos que han resuelto la etapa previa, es decir, disponer de las condiciones materiales para ejercer esa libertad en lo económico.

Estos son solamente algunos ejemplos de los eufemismos utilizados por el neoliberalismo para no decir lo que realmente hacen. Con ellos, y con una estrategia mediática afinadísima, el neoliberalismo fue construyendo su propio idioma, su propio relato, su propia narrativa, con capacidad de ir creando un sentido común de época, base fundamental para consolidar su hegemonía.

Economía de (libre) mercado

Conviene aclarar, desde un inicio, que el término mercado –desde el neoliberalismo– es siempre utilizado como eufemismo para no decir verdaderamente que esa institución de intercambio de bienes y servicios es un lugar donde solo hay pocas empresas que tienen todo el poder económico. El mercado realmente esconde la estructura económica detrás de cada lugar de intercambio, y la llamada economía de mercado es una suerte de adaptación del darwinismo en materia económica y social: un sálvese quien pueda, una suerte de ley del más fuerte pero que se da con condiciones de partida desiguales, después de que unos pudieran entrenar en las mejores condiciones y otros no tuvieran ni para comer. Cuando se habla de economía de mercado se pretende mostrar una fotografía de un instante determinado, en estático, a partir del cual, sin historia ni pasado, se determinan las condiciones de precio del bien en cuestión. Y esto es válido para comprar cualquier bien suntuario, así como también para los bienes más básicos para el ser humano y para los que constituyen derechos sociales. Todo ha de ser mercantilizado, incluso la fuerza de trabajo (cuestión que se verá en un siguiente punto). La economía de mercado es una

apuesta por la mercantilización de todo lo que es intercambiable. Con esta defensa, el neoliberalismo pretendía ampliar el abanico de negocios posibles para que el capital privado pudiera participar, lucrándose a partir de transacciones en cualquier materia, sea en vivienda, salud, educación, acceso a servicios básicos (agua, luz, gas), etc.

Realmente, el mercado neoliberal es la antítesis del verdadero mercado en el que concurren muchas empresas, que da como resultado un precio a partir de esa competencia infinita. La economía de (libre) mercado del neoliberalismo es sencillamente la forma encubierta de ejercer un poder económico determinante, para establecer condiciones de intercambio favorables para el capital concentrado en pocas corporaciones. El mercado es la más ingeniosa manera de hacernos creer que hay una mano invisible que regula las condiciones finales de precio en cualquier intercambio económico de bien o servicio. Aunque parezca mentira, esto aún se explica en las aulas de muchas universidades que dicen ser muy prestigiosas. Así, el neoliberalismo despersonalizó la gran disputa de economía política existente en cada intercambio; con ello, la economía de (libre) mercado pretendió siempre apartar a la puja distributiva de la controversia económica.

El papel del Estado

La discusión acerca del rol del Estado es el centro de gravitación del neoliberalismo y, por ende, de los abordajes teóricos y metodológicos de la economía neoclásica. El neoliberalismo logró instalar un falso debate entre Estado sí-Estado no, y dejar de lado el verdadero debate en torno a qué Estado se quiere, al servicio de quién, en beneficio de qué modelo económico, favoreciendo qué patrón de acumulación. El neoliberalismo retomó decididamente el tópico del liberalismo clásico: *laissez faire, laissez passer* –dejar hacer, dejar pasar– para hacer especial referencia a la desaparición del Estado en la economía. Pero esta dicotomía es falsa porque el neoliberalismo jamás se planteó la desaparición del Estado, en tanto

este era necesario como guardián de la nueva política económica y sus consiguientes firmas de adhesión a tratados internacionales en materia comercial, financiera y de inversiones; se necesitaba, además, un Estado asegurador ante cualquier riesgo de impago de la deuda pública a los acreedores internacionales. Nótese, en este punto, que en América Latina, esta deuda pública fue en gran medida ocasionada como mecanismo de transferencia de recursos hacia sectores privados, a pesar de que estos no habían cumplido sus responsabilidades económicas en materia de desarrollo industrial.

En concreto, el Estado con el neoliberalismo no debía evaporarse sino reducirse, relocalizarse, pero sin perder la autoridad para poder comenzar controladamente un período de privatizaciones de derechos sociales básicos (educación, sanidad, vivienda, pensiones, etc.) y sectores estratégicos (petróleo, otros sectores energéticos como la electricidad, recursos naturales como el agua, etc.). El capitalismo, por tanto, gozaría entonces de nuevos sectores económicos en los cuales imponer su lógica mercantilista y comercial, pudiendo obtener adicionales tasas de ganancia. Se abrían nuevas posibilidades que ampliarían mercados para que el capital pudiera diversificar sus negocios, acumulando a una mayor velocidad. Todo ello se haría bajo el nombre de la modernización del Estado, como eufemismo para ocultar que comenzaría un largo camino de privatizaciones de sectores económicos muy rentables en tanto constituían piezas fundamentales en la economía, con una demanda cautiva en el caso de los servicios públicos.

Hay que aclarar esto: no se trató de privatizar lo que no funcionaba, sino que en la mayoría de las ocasiones se realizó una privatización de muchos sectores con alto nivel de rentabilidad económica. Este proceso de privatización fue en realidad el vaciamiento de los sectores estratégicos en la mayoría de países de América Latina, que comenzaba a transitar por la larga noche neoliberal. En los casos de la mercantilización de derechos sociales, esto suponía conceder al capitalismo la posibilidad de subordinarlos a la tasa

de ganancia; la prioridad era el beneficio empresarial frente a ese derecho social.

Así, se hablaba de 'ajuste' para implementar una política de reducción de inversión social e inversión pública, gracias a la privatización de los sectores estratégicos y la pérdida de derechos sociales. Sin embargo, lo que no se decía es que la despatrimonialización pública por venta de activos públicos importantes, vinculados a sectores energéticos y estratégicos, generaba un ingreso a corto plazo (por los ingresos de la venta) mejorando así las cuentas públicas, pero una pérdida de ingresos públicos en el largo plazo porque en el futuro no habría empresas públicas. Pan para hoy, hambre para mañana. Esta política de reducción del gasto público perjudicaba claramente a aquellos que necesitaban de políticas que compensaran las injusticias heredadas de décadas y siglos pasados; más que una política de ajuste, fue una política de exclusión, desajuste y desestabilización debido a una deuda social que iría creciendo enormemente. El neoliberalismo impuso que las políticas del Estado en educación, sanidad, vivienda, fueran consideradas de gasto público y no como una inversión social, una clara muestra de su concepción política respecto a garantizar estos derechos sociales.

La otra gran disputa del neoliberalismo, en relación con el Estado, fue la nueva política fiscal. La nueva corriente política y económica deseaba poner punto final al modelo keynesiano, y también a ciertas teorías de Hacienda Pública (neoclásicas, no marxistas ni institucionalistas) que entendían que el Estado había de participar siempre y cuando existieran fallas del mercado. Los impuestos son el mecanismo que permite precisamente disponer de los ingresos públicos necesarios a partir de la propia riqueza de un país, para luego llevar a cabo políticas sociales y de inversión en sectores estratégicos. En este punto, el neoliberalismo lo tenía fácil porque siempre es más cómodo convencer a las mayorías para no pagar impuestos, pero esta comodidad lleva aparejada la incomodidad de no disfrutar, en muchos casos, de los bienes básicos y tener garantizado el acceso a todos los derechos sociales. El

neoliberalismo se encargó de hacer propaganda en contra de los impuestos presentándolos como una carga fiscal, como una privación de libertad.¹¹

El superávit o equilibrio presupuestario fue el otro gran dogma neoliberal en esta materia. Era la mejor forma de amputar al Estado la potestad de ser rector de la planificación económica, o de la capacidad de intervenir y reaccionar frente a situaciones desfavorables. Además, este dogma tenía que aplicarse año a año en cada ejercicio fiscal, sin considerar que el horizonte temporal podría ser superior. En oposición al modelo keynesiano de controlar las cuentas presupuestarias de forma plurianual, el neoliberalismo exigía que cada año las cuentas públicas fueran equilibradas contablemente, aunque esto ocasionara desequilibrios sociales. Con esta maniobra se diferenciaba el sector público de la manera en que operan la mayoría de las familias o incluso el sector empresarial, quienes contemplan asumir un nivel de endeudamiento anual, siempre y cuando haya capacidad para generar ingresos en los siguientes años. Por el contrario, el neoliberalismo convirtió el déficit en un problema, cuando en realidad este no es tal si hay capacidad de generar riqueza suficiente, para ir obteniendo ingresos públicos que sigan pagando los desfases presupuestarios necesarios para realizar la inversión estratégica requerida, según la deuda social y económica heredada.

El neoliberalismo, por lo tanto, lograba hablar de austeridad fiscal para conseguir su objetivo real: no permitir que el Estado participara en la economía, salvo en aquellos temas que sí requería el capital privado: garantizar el pago de la deuda pública, firmar tratados internacionales, ejecutar privatizaciones de sectores estratégicos y garantizar las regulaciones pertinentes a favor del capitalismo corporativo. Este último punto ha sido muy confundido cuando se han enumerado los principios del neoliberalismo, porque muchas veces se dice que neoliberalismo es sinónimo de

11 Visto así por los más ultraneoliberales que heredaban la tradición pura más liberal sobre este aspecto.

desregulación y eso no es cierto, de ningún modo. El neoliberalismo apostó a que el Estado siguiera siendo un ente regulador que permitiera, justamente, que los capitales tuvieran seguridad jurídica para asegurarse una fructífera tasa de ganancia.

Con relación al Comercio Internacional

La nueva era neoliberal requería, para el capital privado, un mayor expansionismo hacia nuevos mercados sin barreras arancelarias ni paraarancelarias; el capital necesitaba más territorio. La mundialización de la economía deseaba acelerarse para transitar hacia una mayor globalización económica capitalista. El modo de acumulación capitalista tenía que resolver una de sus contradicciones sistémicas mediante la ampliación de las fronteras de posibilidades de consumo: se necesitaban consumidores por todo el mundo; se requerían patrones de consumo del Norte por todos los Sures. América Latina, con una importante población y donde un largo proceso de colonización cultural había dado significativos resultados, era el lugar ideal para expandir mercados en la búsqueda del nuevo dorado de consumidores. Para ello, el reducido proteccionismo habría de ser sustituido por tratados de libre comercio que evitaran regulaciones para corregir asimetrías entre los países firmantes. Los acuerdos de libre comercio son la mejor forma de abusar del poder monopolista de unos países frente a otros o, mejor dicho, de algunas transnacionales sobre algunos países periféricos. La defensa neoliberal de los tratados de libre comercio centra toda su atención, pretendidamente, en la discusión sobre aranceles de uno y otro lado, sin atender a los verdaderos factores económicos fundamentales que determinan los efectos sociales sobre la población.

Las políticas comerciales han evolucionado mucho desde su etapa inicial. Las políticas comerciales en los países centrales del sistema capitalista habían optado desde hacía tiempo por concentrarse en otras modalidades de proteccionismo, abusando de su posición dominante respecto a la periferia. Este proteccionismo

no requería de aranceles, sino de ingeniería comercial en otros ámbitos. Fueron muchas las políticas comerciales en ese camino, pero se podrían destacar dos grandes grupos: 1) barreras paraarancelarias hacia afuera, y 2) políticas proteccionistas hacia adentro. Sobre el primer punto hay que destacar que desde ese momento el neoliberalismo comenzó a desarrollar un conjunto de normas sanitarias y fitosanitarias, que funcionan a partir de un trajinado principio precautorio y de certificados de calidad exigidos a los productos externos, a partir de laberínticas metodologías unilaterales por parte de los países centrales. Estas barreras no arancelarias, desde hace años, son políticas mucho más efectivas para obstaculizar el ingreso de productos periféricos sin la necesidad de tener que aumentar aranceles.

Sobre el segundo punto, también la posición dominante de los países centrales sobre la periferia se comenzó a ejercer –con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial– con una intensa política de subsidios a la producción y a sus exportaciones de productos primarios. El mejor ejemplo de esto es lo que sucedía en Europa, cuando surgió la Política Agrícola Común, en 1962, con la excusa de la soberanía alimentaria, y se comenzó a subsidiar a los productores de alimentos, haciendo así que su costo real de producción se redujera mucho, lo que le permitía competir afuera en condiciones mucho más favorables que las que generaban los costos de producción de los países periféricos, a pesar de que estos tenían bajos salarios. Esta política, en muchas ocasiones, llega hasta el punto perverso de otorgar subsidios por encima incluso del costo de producción, permitiendo así establecer precios predatorios (el denominado *dumping*), poniendo, en consecuencia, un gran obstáculo a la entrada competitiva de los productos latinoamericanos al territorio europeo, o ayudando a la entrada de productos europeos a América Latina.

El neoliberalismo, en materia de comercio internacional, mostraba entonces su trastorno bipolar y su hipocresía, exigiendo libre comercio afuera al mismo tiempo que protegía adentro a sus capitales privados nacionales, mediante políticas económicas que

usaban precisamente al sector público como actor central para regular vía medidas paraarancelarias o subsidiar producción nacional. Para asegurarse de que el mundo capitalista asumiera las reglas y las trampas del libre comercio, se necesitaba de una nueva arquitectura institucional. Por tal razón, en 1986, en una reunión del GATT¹², se aprobó el comienzo de la creación de un nuevo organismo internacional, sincronizado con la nueva era neoliberal del comercio mundial capitalista. El GATT quedaba viejo para las nuevas pretensiones¹³. Las negociaciones para disponer de este organismo, conocidas como la Ronda de Uruguay, tardaron ocho años hasta consolidarse la Organización Mundial del Comercio (OMC), que desde entonces se convertiría en el ente regulador a favor del libre comercio, asegurándose primordialmente que la periferia tenía que estar insertada en los países centrales mediante esos candados.

El fenómeno de la financiarización

El neoliberalismo rápidamente entendió que el comercio no era una cuestión exclusivamente de intercambio material de bienes y servicios, sino que había otros sectores aún por descubrir, para que el capitalismo pudiera reactivar su acumulación sin necesidad de depender únicamente de forjar la dependencia comercial. El capitalismo mercantil en su primera etapa y el industrial durante el último siglo habían sido generosos con el proceso de acumulación, pero eran insuficientes en la nueva era para la reproducción del capitalismo con independencia de una base material. Como siempre, tan ingenioso, el capitalismo en su etapa neoliberal se

reinventa no solo en las nuevas reglas para ordenar la casa, sino también en el objeto de transacción.

Para ello, el capitalismo industrial dio paso a la emergencia de la financiarización de la economía; esto es, la base de intercambio podría partir del mundo financiero sin necesidad de seguir imbricada por una base material equivalente. La apuesta, de allí en más, era que las rentas de naturaleza financiera pudieran incrementar sustancialmente su proporción dentro de la renta nacional, muy por encima de la industrial. La financiarización es, en definitiva, el aumento de la importancia del capital financiero que se traduce en el creciente protagonismo económico y político de los agentes que lo representan y, por tanto, en el incremento de su capacidad para imponer sus intereses.

Así, con esta nueva estrategia de largo plazo, el capitalismo neoliberal se garantizaba el destino del exceso de liquidez de los petrodólares, no padecer más la crisis del fordismo, sortear la caída de la productividad del capitalismo industrial (en parte por agotamiento tecnológico), y no tener que pelear en la puja distributiva con los trabajadores, puesto que el nuevo sector, el financiero, no es precisamente intensivo en mano de obra, sino que más bien prescinde de ella. Esto último suponía una gran ventaja a favor del capitalismo neoliberal, financiarizado en relación con el resto de las modalidades de acumulación capitalista.

Al analizar el neoliberalismo, no es posible no relacionarlo estrechamente con este fenómeno de la financiarización. A partir de esta máxima, el programa económico neoliberal comienza a diseñar un nuevo marco macroeconómico para que el capital financiero sea más protagónico que el Estado y que el capital industrial. La nueva arquitectura institucional será elaborada a favor del mundo financiero, de los accionistas y acreedores de la deuda financiera, y también en busca del control de la inflación para evitar que esta mermara el capital.

El neoliberalismo, además, se caracterizó desde su inicio por el fomento de la apertura financiera para desconectar la relación entre ahorro e inversión nacional, porque a partir de ese momento

12 Acuerdo General de Aranceles y Comercio, por sus siglas en inglés.

13 Por ejemplo, el GATT era incompetente para el libre comercio porque su artículo XIX permitía que un país miembro impusiera medidas para proteger sus industrias, siempre y cuando hubiera comprobado que las importaciones causaban daño a una industria específica (Gustavo del Castillo. "El proteccionismo estadounidense en la era de Reagan", *Comercio Exterior*: 1987).

el capital podría volar de un lugar a otro como quisiera, sin pagar peaje alguno y con viento a favor, gracias a regulaciones a su medida. No es cierto que se desreguló el mercado financiero; por el contrario, lo que se hizo fue regular para garantizar la máxima seguridad jurídica para su tasa de ganancia.

El mito de la Inversión Extranjera Directa (IED)

La Inversión Extranjera Directa es una vía mediante la cual se abren las barreras para que el capital extranjero se introduzca en otro país y pueda quedarse –presentándose como inversión– el tiempo que estime rentable, sin ningún tipo de compromiso de reinversión de utilidades netas. Se trata, en definitiva, de una buena manera de extranjerizar el control de empresas de capital nacional, esto es, un trasvase de poder hacia el extranjero ocasionando una pérdida de importancia del capital nacional en favor del transnacional.

Esta IED no siempre es productiva ni está asociada con el ámbito industrial; no siempre va en sintonía con la planificación estratégica del desarrollo nacional ni con los objetivos económicos de un país; no siempre es regulada por la legislación nacional de acogida, sino que trae consigo su propia jurisdicción. Este aspecto es realmente la gran trampa de este formato de inversión venido de afuera, porque el país receptor no solo importa capital, sino que acaba importando legislación extranjera, con la consiguiente pérdida de soberanía que esto conlleva. Para ello, el neoliberalismo empleó otro eufemismo, el de la seguridad jurídica, que refiere sencillamente a que las leyes nacionales de acogida no sirven para el tratamiento jurídico de la inversión extranjera. Para el neoliberalismo solo hay seguridad jurídica cuando: 1) la legislación nacional se reforma para acomodarse a los principios internacionales de regulación jurídica de inversiones o, 2) cuando directamente se acepta la legislación de afuera como propia a partir de tratados internacionales.

Justamente para asegurar que la inversión extranjera directa tuviese trato extranjero y no nacional, el neoliberalismo trajo consigo dos artilugios, nuevamente presentados como técnicos, pero que conllevaban un gran trasfondo político. El primero fue la puesta en valor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial con sede en Washington (Estados Unidos) que, a pesar de haber estado en vigencia desde 1966, en los años del auge del neoliberalismo se convirtió en el árbitro internacional que dirime cada vez que surge un conflicto entre la inversión extranjera y la legislación nacional. El segundo fueron los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que constituyen el núcleo de la seguridad jurídica. Un TBI es un contrato entre países, que permite regular las inversiones extranjeras entre los mismos de forma aislada en relación con la legislación nacional. Con esto, la inversión extranjera se asegura de tener un limbo jurídico propio, que nada tiene que ver con la legislación nacional. Estos TBI se centraron en establecer regulaciones impositivas favorables, exentas de muchos impuestos, sin ningún tipo de obstáculo en su entrada y salida y, especialmente, permitían que hubiese una máxima facilidad para el envío de utilidades netas (obtenidas a partir de la inversión) como remesa a las casas matrices.

Con el paso del tiempo, y dado el escaso compromiso de reinvertir utilidades en la empresa adquirida y participada, la transnacional iba remitiendo las utilidades a su casa matriz en su país de origen y, por lo tanto, en términos netos, era previsible que la salida de capital mediante este mecanismo fuera muy superior a la entrada que se había producido en un primer momento en calidad de IED. Así, la inversión extranjera directa pasaba de ser una fórmula para atraer inversiones a considerarse un mecanismo de fuga de capitales.

Fragmentación geográfica de la producción mundial

El neoliberalismo también modificó la planificación productiva a escala mundial, en pos de un régimen más cómodo y rentable para el

capital industrial en esta nueva era de la financiarización. El sistema fordista comenzó a ser desplazado por un régimen de acumulación flexible, asentado en la irrupción de un nuevo paradigma tecnológico (dominado por la electrónica, la biotecnología, la informática y las comunicaciones). La liberalización comercial y financiera facilitaba una mayor deslocalización productiva, que permitía cambiar geográficamente la forma de producir en el mundo.

El neoliberalismo dispuso que la producción industrial ya no debía estar concentrada en un país, sino que se podría usar todo el mundo capitalista para producir a escala global. Lo importante era que la transnacional controlara todo el proceso productivo, aunque este se diera en diferentes territorios. De esta manera, en esta etapa los capitales comenzaron a migrar desde las naciones centrales hacia aquellas zonas de la periferia que ofrecían mano de obra barata y/o diversos incentivos económicos (subsidios a la exportación, exenciones impositivas, zonas francas). Los países centrales se quedaron con las actividades de mayor valor agregado, las más intensivas en conocimiento y, por el contrario, las que requerían mayor mano de obra migraron hacia los países periféricos. Esta nueva etapa de encadenamientos productivos mundiales también se explica por la reducción de los impuestos aduaneros, bajada del costo de los transportes y de las telecomunicaciones, el auge de tecnologías, la movilidad del capital y de los factores de producción, como asimismo la proliferación de los acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio.

Los encadenamientos productivos ya no eran nacionales, sino que pasaban a una dimensión transnacional. A partir de ese momento, se puede hablar de la importancia, en la era neoliberal, de las Cadenas Globales de Valor (CGV) como concepto asociado a transformaciones productivas de la época. La nueva configuración se caracteriza por una fragmentación geográfica de la producción mundial. Ahora la fábrica no estaba en un país, sino que existían infinitas fábricas desagregadas, para una o más fases de la cadena de producción, repartidas por el mundo. En tal sentido, el imperio

del capitalismo no se circunscribía a su dimensión comercial, financiera o de inversiones, sino que también el ámbito productivo pasaría a ser rehén de ese expansionismo sin fronteras para que la acumulación capitalista pudiera optimizar todo el territorio mundial. Se pasaba del *made in USA*, a una mercadería *made in the world*.¹⁴

Con este reordenamiento productivo a escala mundial, de tránsito de lo nacional a lo transnacional, también se modifican las relaciones geopolíticas y geoeconómicas. Los patrones de dependencia no solo se volverán característicos de los vínculos comerciales y financieros, sino también de un entramado productivo cada vez más globalizado. El principal desafío para los países en desarrollo era insertarse en los eslabones más avanzados de esas cadenas para poder apropiarse del mayor valor agregado posible, pero esto no será nunca factible porque es el capital privado transnacional quien controlará toda la cadena de valor global, con independencia del lugar donde se produzca cada parte del producto final. Los países industrializados apostaban al capitalismo financiero y tecnológico y, por ende, comenzaban a defender un proceso de sustitución de industrialización que delegaban a la periferia, gracias al control de sus transnacionales.

El neoliberalismo concedía, así, un nuevo rol a la periferia para que pudiera no industrializarse, pero sí participar en el proceso mundial de industrialización. Esto cambió significativamente el modo de acumulación capitalista configurado desde el origen de la Revolución industrial. A partir de los años ochenta, algunos países de la periferia capitalista se incorporarían a este proceso productivo mundial, no solo como exportadores de materias primas, sino esta vez con un patrón productivo con bajo valor agregado,

14 El ejemplo más recurrente en manuales de economía es el de la muñeca Barbie, un producto diseñado por Mattel en California, con una estructura plástica elaborada en Taiwán, un cabello de nailon producido en Japón, vestidos de algodón originarios de China, moldes y pigmentos fabricados en Estados Unidos, ensamblada en Indonesia y Malasia, sometida en California a control de calidad, y distribuida y comerciada por diversas empresas en todos los rincones del mundo.

mejorando mínimamente sus términos de intercambio y, muchas veces, mejorando también el saldo de su balanza comercial.

Flexibilización laboral

La fuerza de trabajo es otro factor clave que debe atender el capitalismo en su nueva tarea de “reorganización de su casa” bajo la clave neoliberal. Siempre que hubo una reducción en la tasa de ganancia, la respuesta del capital fue compensarla de forma inminente por la vía laboral, con reducción de salarios o por despido. El neoliberalismo no iba a cambiar esa forma de resolver la puja distributiva, pero la alteraría parcialmente.

Para ello, el neoliberalismo comenzó hablando de ‘flexplotación’ con el objetivo de disponer de la máxima flexibilidad en la gestión de las condiciones laborales, para lograr una sostenible rigidez de los beneficios empresariales. Jamás se habló de flexibilidad con relación a la tasa de ganancia; esta solo era circunscrita a la fuerza laboral, que sí debía ser elástica para que la acumulación capitalista siguiera su ritmo.

La financiarización y la reconfiguración productiva permitían que el neoliberalismo diseñara nuevas formas de reorganizar el trabajo. Los métodos tayloristas o fordistas seguían prevaleciendo en la producción industrial, a partir de entonces más concentrada en la periferia. Sobre este tejido laboral se aceleraba el proceso de segmentación del mercado laboral; cuanto más dividido fuera el colectivo laboral gracias a individualizadas condiciones contractuales pactadas con los trabajadores, menos opciones había para que estos se unieran en demandas comunes, porque sencillamente no las había. Esta suerte de balcanización en lo laboral permitía una negociación asimétrica desfavorable para el trabajador, que veía así mermado su poder de negociación de las condiciones laborales frente a la empresa. La flexibilización fue el proceso por el cual los salarios se tenían que ajustar a cualquier antojo de la tasa de ganancia. La subordinación del salario a la acumulación capitalista es lo que el neoliberalismo llamó flexibilizar. Se tenían que

preparar las legislaciones para evitar nuevamente una confrontación entre la fuerza trabajadora y el capital, que pusiera en riesgo la salud de la tasa de ganancia.

En la nueva periferia industrializada el trabajador se insertaba en una división internacional del trabajo en sectores económicos de bajo valor agregado y, por tanto, la productividad laboral era baja, y así su salario. Desde ese momento, el capitalismo en su versión neoliberal diseñó una gran cantidad de nuevas modalidades de contratos que precarizan la fuerza de trabajo; aparecen los contratos por horas¹⁵, según la necesidad volátil del capital; se reforma la legislación laboral, abriendo nuevas posibilidades en las que el despido es procedente.

Sumado a esto, la Organización Internacional de Trabajo¹⁶ en el año 1982, a partir de una especie de malabarismo jurídico, permitió que se considere ‘ocupado’ aquella persona que hubiera trabajado al menos una hora en su última semana de referencia. Así se contabilizan cifras macroeconómicas muy saludables para la economía dominante, pero que desvirtúan la esencia básica de la fuerza de trabajo. Ese nuevo mercado laboral, digno para unos pocos y empobrecedor para la mayoría, se exportó –con particularidades– también desde los países centrales hacia la periferia, lo que contribuyó a que el neoliberalismo dejara de ser un sistema cualquiera para ser el hegemónico en todas las dimensiones posibles de la economía, de la política y de la sociedad.

Desarrollo Humano y Sostenible

El neoliberalismo afrontó la dificultad de tener que revivir un paradigma muy criticado, después de su fracaso en el ámbito social y ambiental. El desarrollo, a secas, no podría seguir erigiéndose en la bandera de las décadas pasadas, puesto que los resultados

15 Aparecen los contratos parciales y temporales.

16 Es una organización dependiente de Naciones Unidas, nacida en el año 1919.

en materia social y ambiental no eran aceptados ni desde adentro del propio sistema. Para ello, las organizaciones internacionales debían proponer alguna reforma (invisible) del paradigma desarrollista, que sin acabar con él pudiera seguir nucleando todas las expectativas para las mayorías. Era inadmisibles defender que el desarrollismo había triunfado en plenitud, porque este siempre había sido desigual y nunca pudo evitar las cifras paupérrimas en cuestiones sociales. Incluso en los países centrales comenzaron, desde el propio seno de la corriente principal (economía neoclásica), a cuestionar las tasas de pobreza y desigualdad, por ejemplo, con los trabajos de Atkinson, Sen y Townsend, en Reino Unido, y luego replicados para el resto de países de Europa y Estados Unidos¹⁷. Suponía una dificultad seguir hablando de desarrollo en medio de crecientes protestas, al mismo tiempo que muchos estudios iban apareciendo para llamar la atención sobre las cifras de empobrecimiento salarial y de desigualdad del ingreso. Siempre dentro del *mainstream* de la economía, esta nueva corriente teórica y metodológica –que pasó a llamarse Economía de la Desigualdad y de la Pobreza, comandada, entre otros, por Amartya Sen¹⁸– ponía en jaque al propio sistema, mostrando empíricamente que había pobreza y desigualdad en los países centrales, y no desde teorías marxistas o contrahegemónicas.

Esta corriente propuesta tenía serias limitaciones: 1) el carácter negativo de los objetivos estudiados: desigualdad y pobreza en vez de igualdad y riqueza; 2) el uso de la igualdad en lugar de la equidad; 3) el orden de dicho sintagma nominal, de tal manera que

17 Anthony Atkinson. *Poverty in Britain and the Reform of Social security*, University Press, Cambridge: 1970a; Anthony Atkinson. "On the measurement of Inequality", *Journal of Economic Theory*: 1970b; Amartya Sen. *On Economic Inequality*, Clarendon Press, Oxford: 1973; Amartya Sen. "Poverty: An Ordinal Approach to Measurement", *Econometrica*: 1976; Amartya Sen. *Sobre la desigualdad económica*, Editorial Crítica, Barcelona: 1979; Peter Townsend. "A plan to help the low paid: the reform of earned income relief", *Poverty: Journal of the Child Poverty Action Group*: 1971.

18 Quien luego fuera premio Nobel de Economía en el año 1998.

se relega a un segundo término a la desigualdad (en vez de decir la equidad de la economía), y 4) dejaba fuera del análisis la acumulación originaria y todo aquello que fuera riqueza; solo se centraba en el ingreso salarial cuando eso hace que se deje de considerar toda la desigualdad existente en términos de riqueza y patrimonio, que no necesariamente es renta salarial. Sin embargo, a pesar de las infinitas limitaciones que tiene este nuevo tópico económico (en la economía neoclásica), era capaz de interpelar al proclamado éxito del desarrollo, que no era suficiente para garantizar sosteniblemente niveles bajos de desigualdad y pobreza ni en los países centrales.

Frente a esto, el paradigma desarrollista hegemónico tenía también que reinventarse para evitar cualquier reconocimiento expreso del fracaso del mismo. Lo más fácil fue la adjetivación del término: de desarrollo a desarrollo humano. Con esta etiqueta se pretendía humanizar al desarrollo, ponerle rostro humano a un paradigma que hasta el momento solo se había concentrado en el crecer económicamente, para que la acumulación capitalista siguiera siendo sostenible en el tiempo. Entonces, desde los primeros años del neoliberalismo se comienza a correr en la dirección de la búsqueda de un nuevo desarrollo, pero sin salirse de lo esencial de lo viejo. La solución fue, y sigue siendo, el término de 'Desarrollo Humano' como nueva meta social.

Así, el neoliberalismo favoreció la creación de la idea de una suerte de capitalismo bueno, que busca resolver el conflicto de justicia social, de equidad, de tensión distributiva, mediante el logro del Desarrollo Humano. Este nuevo término es coetáneo con el neoliberalismo y nace de la mano de, justamente, el hombre que había denunciado los elevados índices de desigualdad y pobreza en los países centrales: de Amartya Sen, quien comienza a trabajar en el concepto durante la década inicial de los ochenta. Luego, a partir del año 1990, el término Desarrollo Humano tomó especial relevancia debido al Informe de Desarrollo Humano redactado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A partir de entonces, abusando del reduccionismo cuantitativo –derivado de la economía neoclásica–, nace el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que se calcula a partir de PIB, esperanza de vida y tasa de alfabetismo. Este índice se calcula a partir del valor promedio (en PIB per cápita, en esperanza de vida), denotando así cualquier perspectiva distributiva. El desarrollo, esta vez con apellido humano, apuesta por un Estado que debe pensar en la bondad del mercado como resolución de problemas, lo cual se explica porque nunca se desmarcó del neoliberalismo como modelo de acumulación capitalista.

Pero el problema no solo había sido de índole humano y social en las décadas de oro del capitalismo, sino que también sobrevino la preocupación ambiental, siempre vista desde la óptica de la dependencia del capitalismo por el medio ambiente como insumo productivo. Esa crisis medioambiental era la crisis del capitalismo dependiente de recursos naturales en manos de otros países periféricos más soberanos, que se reapropiaban de los mismos y los vendían, pero con nuevas condiciones y a precios más elevados. La guerra de Yom Kipur en 1973 de Israel contra algunos países petroleros árabes, en un primer momento, y luego la denominada crisis del petróleo de 1979 por la guerra entre Irán e Irak¹⁹, volvió a generar incertidumbre en la provisión del petróleo y una consiguiente subida de los precios del mismo.

Hasta el capitalismo había dado la espalda a las discusiones explícitas en torno a la importancia de los recursos naturales en el modelo de acumulación. El informe Meadows había alertado ya sobre esto²⁰ y ahora, nuevamente, en este nuevo momento

19 Esa guerra tiene lugar en el momento en que la revolución islámica iraní acaba con el régimen del sah y desea acabar también con la relación imperialista de los Estados Unidos. Esto no gustó nada a los norteamericanos, y menos porque aún prevalecía como telón de fondo una guerra fría en la que la Unión Soviética se veía como el principal aliado del nuevo Irán.

20 En el año 1968, en Roma, se reunieron científicos, investigadores y políticos, preocupados por los cambios medioambientales que estaban afectando a la sociedad y al planeta. Se funda el Club de Roma, precursor

de organizar la casa, el nacimiento del neoliberalismo también requería de un capitalismo verde que pusiera el otro lado de la cara a su voracidad por consumir naturaleza. Por todo ello, el concepto de desarrollo se acomodó sobre el término de sostenibilidad; a partir de entonces, el desarrollo iba a poseer otro calificativo, el de ‘sostenible’. Una nueva adjetivación que permitía justamente responder desde el sistema capitalista a otra demanda importante: la medioambiental.

El desarrollo sostenible incorpora el aspecto intergeneracional a través de la cuestión ambiental, pero siempre vinculante a la mirada del consumo bajo un modelo capitalista: poner en peligro a generaciones futuras por consumir muchos recursos naturales hoy; que el consumo actual pueda poner en peligro al consumo de mañana. A partir de este término, el neoliberalismo resuelve el problema de justicia ambiental promoviendo programas de responsabilidad ambiental, de reciclaje, de los mercados de emisión, de mejoras tecnológicas, pero nunca poniendo al medio ambiente en el marco de un sistema holístico, integral, que coevoluciona con el resto de sistemas (económicos, culturales, políticos); o más allá del sentido crematístico (monetario), o considerándolo un recurso estratégico y no una simple mercancía (*commodity*). En síntesis, con ese híbrido, de desarrollo humano y desarrollo sostenible, el neoliberalismo sortea la decadencia del paradigma desarrollista y lo reinventa a partir de dos nuevos adjetivos que responden a la justicia social y ambiental, pero siempre interpretado desde la estructura de acumulación capitalista.

En definitiva, la verdadera propuesta del neoliberalismo son estos diez puntos expuestos y no aquel que se denominó Decálogo de Washington. El decálogo de verdad nada tenía que ver con el decálogo de mentira que se escondía en estos diez mandamientos: 1) disciplina presupuestaria, 2) racionalidad en el gasto

del desarrollo del Informe Meadows –presentado por Dennis Meadows y editado en Estados Unidos en el año 1972–, con el objetivo claro de investigar sobre la problemática ambiental: es la primera vez que se plasma la grave crisis ecológica que afecta al planeta.

público, 3) reforma impositiva, 4) liberalización financiera, 5) política cambiaria competitiva, 6) liberalización del comercio internacional, 7) eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas, 8) modernización del Estado, 9) desregulación de los mercados, y 10) protección de la propiedad privada.

Esta nueva propuesta política y económica había comenzado a tomar forma en las reuniones que se venían dando a mediados de los setenta entre el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Reserva Federal norteamericana, para resolver la caída de la tasa de ganancia que ponía en peligro el ritmo de acumulación capitalista. Sin embargo, se usaron otras coartadas para crear la necesidad de una nueva forma de organizar la casa del capitalismo con el fin de disimular ese verdadero objetivo: recuperar la tasa de ganancia en forma sostenible y, lo que fue mucho más importante, que esto se hiciera en forma irreversible, sin posibilidad de dar marcha atrás.

Una de las coartadas fue la inflación galopante, que realmente afectaba al capital financiero internacional emergente a inicios de la década de los ochenta. Si la preocupación hubiese sido el poder adquisitivo de los trabajadores, la solución inmediata hubiera sido velar por la mejora de los salarios en lugar de buscar obsesivamente que no subieran los precios. Pero los precios definitivamente perjudican el valor real del capital financiero; la inflación nunca fue cuestionada como resultado de un tema de disputa distributiva ni de economía política. Era preferible eclipsar el debate acerca de quiénes son los formadores de precios. Toda la atención se concentró por la vía de la demanda, esto es: 1) con menos gasto público, 2) con restricción monetarista (que redujera el dinero en circulación haciéndolo más costoso, aumentando la tasa de interés y, por tanto, reduciendo la inflación), y 3) sin aumentos salariales que encareciesen los costes de producción ni que presionaran a los precios por una mayor disposición a consumir.

La otra gran coartada fue la deuda que se había venido generando en buena parte del mundo, a favor de la banca privada mundial. La verdadera razón de esta deuda financiera –en la

mayoría de países de la periferia y, muy especialmente, en América Latina– se puede sintetizar en el mecanismo siguiente: el Estado asumía préstamos financieros procedentes del exterior, con alto costo, para llevar a cabo un proceso de industrialización que ni era planificado ni contaba con las condiciones de partida adecuadas para ello; luego, el Estado delegaba en cierto sector privado esta tarea y, entonces, volvía a prestar los recursos financieros a favor de dicho sector privado, pero a coste cero o a muy bajo coste, o incluso sin obligación de retorno. En la mayoría de los casos, estas empresas privadas no tenían incentivos ni interés, ni el *know-how* suficiente para acometer tal labor y, por tanto, nunca se llevaba a cabo la industrialización prevista, pero en cambio sí se había producido una transferencia de recursos a favor de cierta élite privada nacional, generándose así un endeudamiento público externo innecesario e improductivo.

Esta política suponía un negocio perfecto a favor de unos pocos que recibían préstamos sin necesidad de devolverlos, debido a que la obligación quedaba en forma de deuda pública. Este sistema de endeudamiento ilegítimo, en forma de deuda externa, fue definitivamente usado como chantaje para la implementación de políticas económicas venidas como salvadoras. “O pagas o te explicamos cómo puedes pagar”: algo así era el lema llegado desde afuera a muchos países de América Latina. En este sentido, el Plan Brady fue una de las principales propuestas para reestructurar la deuda de la periferia contraída con los bancos comerciales²¹. Este plan se basaba en permitir que la deuda vencida fuera pagada sustituyéndose por otra deuda futura, siempre a mayor tasa de interés, sujeta a nuevos compromisos de política económica impuestos desde afuera. Un esquema que permitía una renegociación de la deuda, trasladándola hacia el futuro, pero con un gran aumento del costo (por los nuevos intereses). Se constituía así una suerte de deuda eterna que acababa atrapando al país bajo el mandato de los

21 El Plan Brady comenzó oficialmente en 1989, pero ya llevaba años poniéndose en práctica. Se llama así por el nombre de su creador, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

organismos internacionales, que desde entonces podían imponer la política económica por control remoto. La nueva política económica aconsejada –de facto, de obligado cumplimiento– se enfocaba en vender todas las empresas públicas para pagar la deuda pasada a la mayor velocidad posible. Además, era aconsejado perseverar con la estructura primario-exportadora, porque así se podrían obtener ingresos suficientes que permitirían el pago de dicha deuda con los acreedores privados internacionales.

Las justificaciones económicas estaban preparadas, pero faltaban los líderes políticos y tomadores de decisiones que implementasen todas las recetas aconsejadas. Sin embargo, esta vez, las políticas neoliberales no solo fueron recomendadas para la periferia, sino que en el epicentro de los países centrales del sistema capitalista mundial también se venía desarrollando una nueva forma de hacer política económica, acabando definitivamente con el modelo keynesiano que proponía al Estado como agente contracíclico. Las victorias de Margaret Thatcher en 1979, en el Reino Unido, y de Ronald Reagan en 1980, en Estados Unidos, son hechos claves en este sentido²². El triunfo de coaliciones de ultraderecha en los países capitalistas centrales marcó un punto de inflexión irreversible en el futuro de la economía en el mundo capitalista. Los dos líderes de partidos ultraconservadores pusieron en práctica una versión sui géneris del modelo liberal: el neoliberalismo. Paradojas de la historia, dos conservadores se convirtieron en adalides del neoliberalismo, coincidiendo en casi todo: oposición férrea contra la Unión Soviética hasta acabar con el campo socialista, reordenamiento mundial para que el neoliberalismo fuera el modo de gestionar global y hegemonícamente el capitalismo, y puesta en práctica de los pilares del modelo neoliberal, usando los organismos internacionales para disciplinar a los países periféricos.

El capitalismo neoliberal surgió, en efecto, de estos dos países centrales, pero rápidamente se propagó por el mundo durante la década siguiente como si se tratara de un arma de destrucción masiva. Entró en vigor, así, el “neoliberalismo de verdad”; un modelo hegemónico mundial para gestionar la acumulación capitalista en las siguientes décadas: décadas que serían ganadas para unos pocos a costa de ser perdidas para la gran mayoría social. Lo que muchos llaman la era de la información, de las tecnologías, de la globalización, del período postfordista, de la financiarización, del libre mercado, es solamente una forma de llamar eufemísticamente al capitalismo en su nueva forma: la neoliberal.

Pero a pesar de que los portavoces de la ortodoxia dominante prosiguen afirmando que Reagan y Thatcher fueron los pioneros del neoliberalismo, el nuevo capitalismo neoliberal ya había sido ensayado antes en algunos países de América Latina, y no precisamente por la vía de la democracia, sino que había sido inculcado forzosamente mediante dictaduras. Así sucedió en varios países del cono sur. Las experiencias del neoliberalismo vía dictadura en América Latina, antes de los ochenta, son manifestaciones muy evidentes de que el sistema también buscaba por la vía no electoral probar estas recetas en países importantes de la región. Los casos de Chile, con Pinochet, y Argentina, con Videla, son pruebas de dictaduras cívico-militares que impusieron los postulados neoliberales para cambiar el modo de acumulación capitalista en esos países. El primer experimento neoliberal fue en Chile. El golpe militar contra Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, pretendía evitar la emergencia de un nuevo campo socialista en la región²³. Luego, la dictadura de Pinochet fue el laboratorio perfecto para que los países centrales ensayaran cómo implementar el neoliberalismo. Paradoja: los *Chicago Boys* decidían el destino del pueblo chileno.²⁴

22 Thatcher ganó al desgastado Partido Laborista con el 43,9% de los votos, y estuvo en el cargo durante tres mandatos hasta 1990. Reagan fue Presidente entre 1981 y 1989 por el Partido Republicano, ganando las elecciones ante Jimmy Carter a fines de 1980.

23 El golpe militar fue precedido por una planificada guerra económica contra Salvador Allende: se cortaron préstamos del exterior, se indujo una inflación acelerada y galopante, acompañada de desabastecimiento empresarial para sembrar malestar, etc.

24 La Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago

Milton Friedman, padre de la escuela de Chicago y gurú en la gestación del neoliberalismo, acuñó el término ‘el milagro chileno’ para referirse a la disciplina ejemplar de la política económica en ese país, que se sintetizaba en un documento clave en la historia económica del neoliberalismo en América Latina, curiosamente llamado *El ladrillo*²⁵. El texto base de la revolución neoliberal en América Latina recogía los postulados básicos del nuevo sistema, aún no hegemónico en la región, pero con pretensión de serlo en las décadas siguientes. En Argentina, bajo la dictadura cívico-militar comandada por el general Videla, y con Martínez de Hoz²⁶ como ministro de economía, se inició apresuradamente el camino hacia el neoliberalismo, favoreciendo al concentradísimo sector agroexportador mediante políticas de (mega)devaluación del tipo de cambio, y en contra de cualquier burguesía industrial que optara por el desarrollismo nacional. Además, se practicó una reforma financiera que preparó al país para su inserción neoliberal en el mundo financierizado. La desindustrialización y el sobreendeudamiento estaban asegurados. Como diría el economista Aronskind, “Martínez de Hoz fue exitoso en subdesarrollar al país”.²⁷

Estos son solo dos ejemplos que se adelantaron a los tiempos neoliberales. En ambos países se aplicaron algunas políticas económicas neoliberales, pero aún parcialmente, porque el paquete integral neoliberal vino con el mal llamado Consenso de Washington, en auxilio de la hiperinflación y la crisis de la deuda externa de

firmaron un convenio en 1956, para que estudiantes chilenos hicieran postgrados en esa universidad de Estados Unidos, donde Milton Friedman era profesor. De ahí viene la vinculación de los *Chicago Boys* con Chile.

25 Escrito, entre otros, por Álvaro Bardón Muñoz, presidente del Banco Central en la época de Pinochet (1977-1981), y Sergio de Castro, ministro de Economía (1973-1976) y ministro de Hacienda (1976-1982), doctor en Economía por la Universidad de Chicago.

26 Hijo de la oligarquía agroexportadora, expresidente de una petrolera (Petrosur) y una importante cementera (Acindar), con vínculos con Rockefeller y muy relacionado con los organismos internacionales.

27 Ricardo Aronskind. “Exitoso en subdesarrollar al país”, en: *Página 12*, 30 de abril de 2010.

la mayoría de los países de América Latina, ya en la década del ochenta. El truco era infalible: primero se inducía a la hiperinflación y se generaba deuda externa, y luego se acudía a solucionarla, fundamentalmente, para que el neoliberalismo se impusiera hegemónicamente dentro de cada país.

Con el trasfondo de la caída del muro de Berlín y la pérdida de poder de la Unión Soviética, el neoliberalismo se consolidó en las décadas de los ochenta y noventa, definitivamente, como modelo económico en casi todos los rincones del mundo. Pocos lugares tomaron un camino diferente a aquel que se proponía desde el centro de gravitación del nuevo patrón de acumulación capitalista mundial. El neoliberalismo se convirtió entonces en la religión económica en mayúsculas, por elección u obligación; cualquiera que se saliera de ella, o pretendiera cuestionarla, tendría un castigo inminente, económico y político. El imperialismo norteamericano encontraba, así, su receta perfecta para transitar hacia el capitalismo del siglo XXI.

El sistema-mundo dominante obligó a que todo –absolutamente todo– girara en torno a la acumulación capitalista, gracias a unos mandamientos neoliberales resumidos eufemísticamente en programas de ajuste y estabilidad. Sin embargo, lo que realmente venía sucediendo (y siguió ocurriendo) era lo contrario a dicho eslogan neoliberal: un gran desajuste e inestabilidad económica, política y social, para la mayoría de los ciudadanos sometidos a estas recetas. Todos los indicadores de endeudamiento social a nivel planetario, en todas sus zonas periféricas, mostraron que el remedio era peor que la enfermedad y, sin embargo, la economía dominante no les concedió a esos datos la más mínima importancia. La economía real quedó absolutamente desplazada por variables nominales; la economía financierizada tomó el máximo protagonismo en esa nueva utopía neoliberal. Los organismos internacionales hegemónicos siguieron con la construcción del nuevo orden económico mundial, en formato neoliberal, evitando que pudiera ocasionarse cualquier grieta posible y, en el caso que esta

se produjera²⁸, siempre debería existir el margen de maniobra para evitar que las estructuras del sistema se desvanecieran. El orden hegemónico global planificó precisamente cualquier situación adversa que pudiera sucederse como consecuencia de las propias contradicciones al interior del mismo sistema. Su pretendida irreversibilidad debía, justamente, construirse sobre esa base; sobre la necesidad de dotarse de dispositivos de acción y reacción, de ajuste y reajuste, en el caso de que algún desequilibrio se produjese, como bien se observa en el momento en que llegó la recesión económica a Estados Unidos, a inicios de los años noventa.

En el epicentro del capitalismo mundial, Estados Unidos, el Gobierno de Bill Clinton²⁹ intentaba poner punto final a los años de recesión de la era Bush, en 1991-1992. Con su eslogan de campaña “Es la economía, idiota”, Clinton concentraba su atención en subrayar la importancia de la economía en las discusiones políticas. El nuevo modelo económico para Estados Unidos navegó en la ortodoxia neoliberal, pero intentando rescatar los roles de otro Estado, un rol más importante que aquel que proclamaba el neoliberalismo por ese entonces; pero siempre un Estado corporativo,

28 Por ejemplo, una situación adversa sobrevino a principios de los años noventa: el mundo capitalista volvió a tener una recesión económica mundial, no tan abrupta como la de otros momentos históricos, pero sí con efectos negativos en términos de crecimiento económico, empleo, productividad. Por ejemplo, algunos datos que constatan esa recesión económica son los siguientes: Estados Unidos tiene una tasa negativa de crecimiento económico en 1991 (-0,8%); Gran Bretaña sufre la recesión más fuerte desde 1945; en Suecia, la recesión es la más violenta desde la postguerra. Aunque la recesión se retrasa en Alemania y en los demás países de Europa occidental, estalla, sin embargo, a mediados de 1992 y se prolonga durante 1993-1994; en 1993, la producción industrial de Alemania cae un 8,3 % y para el conjunto de países de la Unión Europea la producción total cae un 1%; Japón, desde 1990, cae en un estado de recesión. El desempleo a nivel mundial bate nuevos récords históricos: en 1991, los veinticuatro países de la OCDE eliminaron seis millones de puestos de trabajo; entre 1991 y 1993 se destruyeron ocho millones de empleos en los doce países de la Unión Europea. Nuevamente, el capitalismo tuvo una recaída económica por causa estructural.

29 Bill Clinton, en representación del Partido Demócrata, venció a George W. Bush en las elecciones de 1992, con el 43,01% de los sufragios. Clinton retuvo el mandato en las elecciones de noviembre de 1996.

corporativizado, tan necesario, útil y proactivo, para que muchas empresas estadounidenses pudieran volver a crecer y disponer de todas las ventajas, dentro y fuera del país, en su actividad económica transnacional. Es decir, Clinton no aplicó con exactitud el omnipresente Decálogo de Washington, aunque esto no significa que su propuesta económica fuese keynesiana. El principal objetivo de su política económica fue el crecimiento económico, con estabilidad presupuestaria (incluso la obtención del máximo superávit fiscal posible) y bajo control inflacionario, sin dar marcha atrás en la ya madura financiarización de la economía de Estados Unidos y a nivel mundial.

Clinton tampoco rechazó la política de producción afuera pero con control adentro, esto es, una política económica a favor de las empresas transnacionales, que fragmenta la producción geográficamente a nivel mundial, aprovechando los bajos costes salariales de la periferia y las ventajas institucionales en materia de inversión y comercialización que les eran provistas. En otras palabras, Clinton continuó la política desindustrializadora de años anteriores, de tal forma que Estados Unidos aprovechara el control imperial sobre una gran fábrica-mundo. Así, se descentralizó la producción mundial, pero centralizando los beneficios empresariales en manos de las transnacionales que tenían la casa matriz en suelo norteamericano.

Esta nueva economía, por tanto, estuvo basada en un creciente endeudamiento comercial externo, que solo podría ser sostenido por la gran expansión monetaria, permitida gracias a la hegemonía mundial de la moneda estadounidense. Clinton no alteró nada del patrón de acumulación heredado de Bush en cuanto a su distribución, y solo modificó algunas herramientas de política económica para asegurarse crecimiento económico con estabilidad inflacionaria, para que el capital financiero no sintiera ningún tipo de depreciación. La política de austeridad fiscal proclamada existió solamente para muchos ámbitos sociales que necesitaban compensar la continuidad de una política pública intensamente armamentística; así se podría lograr un mayor control del déficit

presupuestario. Clinton ordenó las cuentas públicas con base en una privatización del sistema sanitario, de educación, de la ciencia y tecnología, etc., reduciendo así el gasto público, al mismo tiempo que seguía manteniendo un alto desempeño de su política pública de defensa. De esta forma, manifestaba internamente que su propuesta económica era una tercera visión³⁰, procurando, de esta manera, alejarse del salvaje neoliberalismo donde todo era cuestión de mercado, y también del exceso de Estado amparado por las teorías más keynesianas. En definitiva, Clinton disputó el sentido del neoliberalismo sin cuestionar su esencia ni sus metas y objetivos.

Al mismo tiempo que esto sucedía, en el otro gran polo económico del capitalismo, Europa, se fue conformando un proceso de integración con el máximo respeto a la lógica neoliberal. Los criterios de Maastricht³¹ dejaron claro que la convergencia entre los países de Europa era marcada por variables nominales, como la inflación, tasa de interés, déficit público y deuda pública, sin mencionarse absolutamente nada acerca del empleo, desigualdad o pobreza, salarios o productividad. Todo era cuestión de crear un gran mercado para que el capital europeo y mundial pudiera disponer de todas las ventajas posibles, para que el negocio fuera aún más rentable. Con esta ordenación intraeuropea, parecida a la que disponía en el mundo, se distinguió entre países centrales (Alemania y Francia) y periferia (España, Portugal, Grecia y, quizás, también Italia), cada uno con roles diferentes, con patrones de inserción distintos, con reparto de valor agregado desigual.

Europa se reconfiguró internamente a doble velocidad, con centro y periferia, para seguir siendo considerada como bloque

30 Como lo dijera, explícitamente, Joseph E. Stiglitz cuando era el jefe del Consejo de Asesores Económicos y responsable técnico del Reporte de Bill Clinton.

31 Los criterios de convergencia, o criterios de Maastricht, son los requisitos que deben cumplir los Estados pertenecientes a la Unión Europea para ser admitidos dentro de ellas a todos sus efectos. Los criterios vienen establecidos en el artículo 121 del tratado que establece la Comunidad Europea.

central en el sistema capitalista mundial. Sin acabar del todo con el Estado de Bienestar, comenzaron a desarrollarse unas políticas públicas de obsesión por el déficit público, que tuvieron su continuidad en la ola de privatizaciones de muchos países periféricos, desmantelando todo el sector público. Fue la forma más inmediata de disponer de recursos públicos en el presente, solventando la exigencia del déficit en el corto plazo, aunque esto implicara, en el medio plazo, perder capacidad futura de generar ingresos públicos (tal como se demuestra en estos años). Se vendieron las empresas públicas más rentables, se perdió soberanía mediante una suerte de expropiación de los sectores estratégicos, se cedió soberanía por amputación de la política monetaria, mediante la creación de un Banco Central Europeo³² que solo priorizó la estabilidad monetaria y el control inflacionario. La moneda única, el euro³³, fue sin duda el destino final de la paulatina pérdida de soberanía monetaria y cambiaria. Como dice Jacques Sapir³⁴, la moneda única fue la mejor forma de evitar posibilidades futuras de otras políticas económicas, a pesar de las diferentes estructuras económicas heredadas de cada país. Europa optó, entonces, por convertirse en un gran mercado en el que cualquier derecho social podría ser mercantilizado, en busca de una suerte de 'unión del capital europeo' que obedeció a patrones neoliberales en todas las relaciones económicas, políticas y sociales. Europa cumplió, a rajatablas, con todos sus deberes para conformar un nuevo polo económico, con diferente rol al que había

32 El Banco Central Europeo (BCE) fue establecido por el Tratado de Amsterdam en el año 1998; fue el sucesor de Instituto Monetario Europeo, que fue creado en el año 1994 con el objetivo de manejar los problemas de transición a la nueva moneda, por parte de los países que iban a adoptar el euro, y para preparar la creación del propio BCE.

33 El nombre de euro fue adoptado oficialmente el 16 de diciembre de 1995 y se introdujo en los mercados financieros mundiales como una moneda de cuenta a inicios de 1999. Las monedas y billetes del euro entraron en circulación el 1.º de enero de 2002, en los doce estados de la Unión Europea que adoptaron el euro en aquel año.

34 Jacques Sapir: *Cuatro pistas para salir de la crisis*, El Viejo Topo, Madrid: 2010.

tenido en el pasado para subordinarse plenamente a la configuración económica mundial, diseñada por Estados Unidos.

Al otro lado de los países centrales estaba una extensa periferia que, a pesar de presentarse como un todo monolítico, no se puede afirmar de ninguna manera que fuera homogénea. No toda la periferia estuvo (ni está) en el mismo nivel de velocidad de inserción al sistema capitalista, ni bajo las mismas características de relacionamiento. Por ese entonces, también se produjo la crisis financiera asiática³⁵, explicada en gran medida por su política de atracción de capital a cualquier precio, caiga quien caiga. Tal como recomendaron los organismos internacionales, la alta retribución del capital financiero fue la política económica de incentivos de buena parte de los países asiáticos; esto ocasionó, en consecuencia, que por ejemplo hasta 1997 Asia atrajera casi la mitad del total de capital llegado a los países en desarrollo. Este hecho, unido a una inexistente política de economía real a favor de incrementar la productividad, hizo que la burbuja financiera asiática saltara por los aires.

El panorama en América Latina no coincidía con la situación asiática porque ya había padecido su crisis –la de la hiperinflación y la deuda externa–, y desde entonces fue una región plenamente encauzada en la senda neoliberal. Los problemas que América Latina le presentaba al capitalismo ya habían sido solventados; sin embargo, ahora los problemas eran otros, de índole social y económico, pero no afectando a la tasa de ganancia del capital, sino que,

35 La crisis financiera asiática fue un período de máxima complejidad financiera, que tuvo lugar en la mayoría de países de Asia en 1997 y que ocasionó un gran temor mundial por contagio financiero. También fue conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional. Muchos autores consideran que esta comenzó el 2 de julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa, y que luego, por efecto dominó, le sucedieron otras devaluaciones en Malasia, Indonesia y Filipinas, repercutiendo también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Sin embargo, la devaluación no fue la razón, sino un detonante que posee causas estructurales como, por ejemplo, la fuerte dependencia del capital financiero extranjero. Krugman, en 1994, adelantó que el milagro económico asiático solo sería sostenible si este venía acompañado de un aumento sostenido de productividad de los diferentes factores productivos (Paul Krugman. "The Myth of Asia's Miracle-A Cautionary Fable", *Foreign Affairs*: 1994.

por el contrario, el impacto negativo se cebó en contra de la mayoría ciudadana en todos los países del continente. La deuda financiera externa comenzó a estar acompañada por la galopante deuda social. Cada gobierno latinoamericano siguió obedeciendo a pie juntillas todo lo que se determinaba en el epicentro capitalista en materia de política económica. Las políticas económicas no entendían de nacionalidades, ni de historia propia, ni de condicionantes culturales: todo era un copiar-pegar independientemente del país que se tratara.

El neoliberalismo había logrado homogeneizar de manera forzada cualquier heterogeneidad; siempre la misma receta para cualquier país sin importar que el paciente tuviera un historial clínico diferente el uno del otro. El pretexto radicó en igualar el diagnóstico (país en desarrollo, antes llamado país subdesarrollado) y los objetivos, con independencia del tipo de sociedad que se tratara (siempre lo mismo: progreso, bienestar, crecimiento, desarrollo, desarrollo humano, desarrollo sostenible). Entonces, una vez conseguido este patrón de igualación, el camino irrevocablemente debía ser el mismo. Así, ningún país podría salirse ni un milímetro del sendero marcado, porque siempre existía la posibilidad –por parte del organismo internacional de turno (fuese FMI, BM o BID)– para chantajear con estrangulamiento financiero externo, con promesas sobre las futuras oportunidades de inversión y con políticas comerciales a su favor.

Pero para completar el análisis es imprescindible precisar que el neoliberalismo no solo tenía presente el hoy, sino también el mañana; fue siempre muy precavido a la hora de planificar el orden económico mundial, por ello se fue radicalizando cada vez con mayor énfasis para que no hubiera posibilidad de punto de retorno. Esto es, buscó cómo dotarse de las estructuras necesarias, políticas-económicas-sociales-culturales-institucionales, que impidieran cualquier marcha atrás. Las políticas económicas neoliberales procuraron efectivamente edificar una hegemonía irreversible, en la que no cupiera ninguna otra alternativa capaz de desmantelarla. Todas las reglas políticas, económicas y culturales persiguieron

que solo ese mundo fuera posible. Así, las nuevas instituciones dominantes centraron su máxima atención en que todo el mundo se insertara en esa nueva lógica económica internacional, resultando muy costoso estar fuera de ella. A medida que la expansión del capitalismo neoliberal crecía, más difícil era esquivar caer en sus redes; las nuevas reglas mundiales, además, procuraron que la hegemonía fuera duradera y, para ello, tuvo que asegurarse que frente a cualquier potencial crisis/tambaleo del sistema capitalista, las soluciones solo podrían ser pensadas desde adentro del mismo sistema de acumulación. Esta fue la victoria neoliberal de esos años, de la segunda mitad de la década de los noventa, que aseguró que las alternativas exclusivamente fueran consideradas factibles y adecuadas, si estas no cuestionaban el orden imperante.

Evitar el éxito de cualquier intento contrahegemónico sería, desde sus inicios, uno de los grandes desafíos para el proceso neoliberal como mecanismo expansivo y calibrador del patrón de acumulación capitalista; para ello, el sistema, con sus infinitas extremidades, logró tejer un laberinto del cual era difícil salir. La hegemonía económica neoliberal vino de la mano de una gran hegemonía política, social y cultural. Todo aquello que se propuso a fines de los setenta e inicios de los ochenta, en el famoso decálogo neoliberal, había tenido tiempo suficiente para desarrollarse, constituyéndose hacia fines del siglo xx como una matriz dominante en materia de política económica. Las universidades trabajaron con mucho empeño para dar el sostén teórico y metodológico a esta batería de órdenes políticas. La economía neoclásica (como vimos antes) consiguió un matrimonio perfecto con la economía neoliberal; la primera se encarga de enseñar en el sacrosanto mundo académico toda la teoría e instrumentos metodológicos, mientras la segunda se dedica a mostrar que solo hay un único camino posible, una única economía posible, una única forma de ordenar la vida económica de todos, aunque sea solo a favor de unos pocos.

La estrategia elegida fue presentar lo uno disociado de lo otro, esto es, la economía neoclásica como algo técnico absolutamente separado de la economía neoliberal como proyecto político; así, se

generaba una falsa desvinculación que converge hacia el pensamiento único económico. Esta economía, presentada en forma de postpolítica, aparentemente neutral y siempre circunscrita a un tema técnico, es el atajo propicio para evitar que se debata sobre objetivos políticos, tanto en lo táctico como lo estratégico, para decidir qué hacer en materia de economía. El neoliberalismo logró esta sintonía virtuosa para acabar haciendo lo que realmente quiso, apenas sin cuestionamientos de las escuelas de pensamiento económico. O mejor dicho, la escuela del pensamiento único económico desplazó a todas aquellas que se opusieron o cuestionaron muchos de los aspectos asumidos como dudosas verdades por los modelos matemáticos, característicos de la economía neoclásica, para explicar lo que habría que implementar en sociedades caóticas sin comportamiento matemático ni modelizable. Por estas razones, no fue fácil que apareciese cualquier alternativa a la única economía posible; todo estuvo poderosamente en contra para la emergencia de otra economía posible, ni en los países centrales y menos aún en lugares periféricos ampliamente conquistados por la doctrina neoliberal del Consenso de Washington.

Con todo este sistema hegemónico neoliberal consolidado, ya hacia fines de siglo xx se había alcanzado el objetivo de hacer crecer exponencialmente los intercambios comerciales, pero siempre bajo condiciones de reparto desigual a favor de una minoría, que era quien se quedaba con el mayor porcentaje del valor agregado que se venía generando. En esta tarea también tuvieron una labor fundamental las políticas de la Organización Mundial del Comercio y su fomento de los Tratados de Libre Comercio (TLC), los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en Materia de Comercio (Adpic)³⁶ y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI); todo ello ayudado y garantizado gracias a un árbitro

36 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los Adpic o, en inglés, Trips), aparece en el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC, firmado en 1994. Establece la privatización del conocimiento con base en un complejo régimen de la propiedad intelectual. Para ver una revisión crítica de ello, léase a René Ramírez, *La virtud de los comunes*, El Viejo Topo, Barcelona, España: 2015.

mundial, juez y parte, como es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

El libre comercio logró realmente sostener una determinada forma de repartir los beneficios comerciales: con injusticia y desigualdad. La lógica del libre comercio parte de una premisa falsa: todos los países están en la misma línea de salida para competir a ver quién puede obtener más ventajas comparativas en la producción de determinado bien o servicio. Esto es lo mismo que creer que el mundo comienza ahora, sin importar la historia pasada, ignorando cómo se fueron conformando las ventajas que ahora son de partida, acumuladas por la dominación de unos sobre otros. A partir de ahí, entonces, se procura convencer apelando al trato igualitario en cada acuerdo comercial, desconociendo precisamente cuán desiguales son las condiciones de partida para cada país. El trato igualitario de dos países que son desiguales entre sí siempre es la manera más injusta de aplicar una política económica.

Las políticas de subvenciones y ayudas públicas, por ejemplo, en Estados Unidos (EE.UU.) o en la Unión Europea (UE) mediante la Política Agrícola Común (PAC), también fueron claves en estas décadas neoliberales con el objetivo de abaratar los costes de producción de los productores privados de los países centrales, protegiéndolos e incluso impulsándolos a conquistar el Sur con exportaciones de bienes agroalimentarios. Las políticas de discriminación de precios vía *dumping*³⁷ y las infranqueables barreras para arancelarias siguieron siendo la norma desde los países centrales para obtener esas ventajas competitivas frente a los países periféricos.

Estas son únicamente algunas de las políticas económicas impuestas a favor de un comercio-intercambio desigual, siempre a favor de los mismos. Pero también siguió funcionando toda

37 En este sentido, puede verse la problemática del *dumping*, derivada de muchas ayudas públicas en países centrales que superaban los costes de producción de bienes, permitiendo que salieran a competir afuera a precios más que competitivos; es decir, a cualquier precio posible porque siempre había ganancia garantizada por la política de subsidios de los países centrales.

la locomotora neoliberal en materia financiera, haciendo de la economía un ámbito más financiarizado que real. La llamada liberalización financiera fue precisamente eso: una forma de establecer reglas de juego afines a los capitales financieros para que estos pudieran moverse, a diestro y siniestro, sin tener que pedir permiso, convirtiéndose en aves de paso con capacidad de obtener rentabilidades exageradas a partir de simples movimientos especulativos. La economía real quedó desplazada en un segundo plano y siempre supeditada al poder de las finanzas.

En lo laboral, los países centrales acometieron reformas en pro de flexibilizar los salarios y las condiciones laborales (y de despido) de los trabajadores, con el objetivo de garantizar la rigidez de una alta tasa de beneficio para las grandes empresas. En materia de inversiones, el propósito fue permitir el desembarco de las transnacionales en cualquier rincón que tuviera potencial de rentabilidad; las privatizaciones en muchos sectores estratégicos se constituyeron en el lugar preferente para la llegada de la inversión extranjera directa. Donde antes había un derecho social como, por ejemplo, el derecho a disponer de luz eléctrica, suministro de agua o recolección de basura, el neoliberalismo lo convirtió en un gran bazar para un negocio en el que nunca llegó a haber competencia sino, más bien, todo lo contrario: muy pocas empresas que pudieron conformar estructuras oligopólicas que controlaron mercados con alta demanda cautiva. Este fue el resultado del neoliberalismo en materia de ordenamiento empresarial: mientras la teoría económica seguía aplicando modelos explicativos ficticios, basados en una supuesta libre competencia que nunca existía en la vida económica real, los mercados eran controlados por muy pocas grandes firmas transnacionales. La concentración empresarial fue un hecho que perdura hasta el día de hoy.

En suma, el nuevo orden económico neoliberal fue confeccionando un nuevo mundo a su medida en las regulaciones laborales, en lo financiero, en lo comercial, en lo productivo, en las políticas públicas; en un Estado corporativizado, garante del cumplimiento de los compromisos a favor del nuevo orden económico mundial.

Indudablemente, el neoliberalismo logró durante esas décadas construir su nuevo sentido común de época. Oponerse, cuestionarlo o proponer cualquier otra alternativa contrahegemónica por aquel entonces podría ser tan perseguido como lo fue Galileo Galilei en su época.

La llegada del neoliberalismo a América Latina

El proceso vivido a partir de los años setenta, en que el capitalismo se reinventó a sí mismo, reorganizándose y marcando un nuevo horizonte de época para seguir reproduciéndose hacia adelante bajo la novedosa forma del neoliberalismo no es un proceso inédito en su trayectoria histórica como modo de organización de la economía mundial. Siempre fue así: desde que el capitalismo existe, este siempre ha sabido cómo afrontar cualquier crisis interna a partir de una suerte de intratransición que nunca permite una salida por afuera, sino que la misma surge y se desarrolla en el mismo seno del sistema. Así fue en la crisis de sobreproducción de 1870; el mismo hecho se repitió en el período de entreguerras con el New Deal, o después de la Segunda Guerra Mundial cuando el capitalismo reordenó la casa-mundo desde la nueva hegemonía estadounidense, con el patrón dólar que sustituía al oro como referencia mundial, con todo lo acordado en Bretton Woods, con una nueva arquitectura internacional (OTAN, NNUU, FMI, GATT) y con nuevas reglas de inserción de la periferia en el sistema-capitalista-mundo.

América Latina, como pieza en este tablero geoeconómico, fue objeto subordinado en aquella reconfiguración mundial de la postguerra. Según dictaban las necesidades del capitalismo internacional, buena parte de la región se insertó al sistema mundial por la vía fallida del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Muchos países cumplieron fielmente el rol impuesto desde el centro del capitalismo global, como proveedores de materias primas sin valor agregado y como consumidores (pero

a velocidad periférica, nunca capaces de lograr los niveles de desarrollo de las economías desarrolladas).

Como se explicó anteriormente, con un nuevo horizonte de época, con el objetivo del nuevo desarrollo como bandera, el capitalismo central se autolegitimó para poder implementar todas las recetas políticas y económicas que realmente fueron convenientes para seguir construyendo el orden económico global más deseado por el capital internacional. En el reparto de roles, a los países de la periferia latinoamericana les tocó el de economías en vías de desarrollo. La teoría hegemónica del momento obviaba a propósito una cuestión central: el potencial desarrollo de los mismos países desarrollados estaba relacionado e interconectado con el mismo subdesarrollo de los países subdesarrollados, esto es, el patrón de dependencia existente entre los unos y los otros era más que significativo desde que se mundializara la economía. Esto iba a ser un condicionante determinante en la relación de los unos con los otros mientras perdurasen los mecanismos de interdependencia entre ellos.

Además de este hecho ignorado en los planteamientos que llegaron desde el Norte con el objetivo de manejar el rumbo del Sur, existían también premisas e hipótesis sobre las que se diseñaron las propuestas de política económica que eran absolutamente falsas. Se presumían escenarios de partida que distaban enormemente de aquello que mostraba la realidad económica y política; es decir, las políticas en busca del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) chocaban con una realidad que no tenía las condiciones objetivas para su éxito: no había un sector empresarial privado con deseos de alterar su rentable actividad económica derivada de las exportaciones. La incipiente burguesía importadora tampoco deseaba asumir riesgo alguno en una actividad industrial, teniendo justamente garantizado su nicho de mercado por comprar afuera aquel bien que vendía fronteras adentro, obteniendo una notable tasa de ganancia.

Así, en muchos países pequeños de América Latina, los mercados internos no eran suficientes para ser atractivos para esa oligarquía agroexportadora que prefería seguir vendiendo

afuera bienes sin valor agregado. Y en casos de países más grandes, algunos habían tenido un éxito moderado en esos modelos ISI más centrados en bienes con escaso valor agregado, muy alejado del proceso de industrialización cada vez más complejo de los países desarrollados. Otros países, como Venezuela, tenían tal cultura rentista petrolera (impuesta desde el Norte), que no hubo ninguna intención real de salir de ese patrón primario exportador; pero en todos los casos, sea en países pequeños (por ejemplo, Bolivia y Ecuador), en países grandes (como Argentina, México y Brasil), y también en un caso tan atípico como el venezolano, todos se insertaron al sistema capitalista como este había decidido: 1) dependientes porque sus exportaciones eran materias primas demandadas por los países centrales, ejerciendo así el poder de monopsonio (poder de compra); 2) dependientes por la vía importadora; 3) dependientes tecnológicamente; y 4) dependientes financieramente, gracias a los préstamos que venían de los organismos internacionales de crédito (del sistema capitalista) para la implementación de políticas económicas que buscaran, a sabiendas de que no era posible, el modelo ISI.

Este último punto fue determinante a la hora de entender por qué se fue generando una gigantesca deuda financiera con los países centrales, de tal magnitud que luego sería utilizada como un mecanismo de presión en los años siguientes. Esa deuda pública, en la mayoría de las ocasiones, venía explicada en gran medida por la existencia en esos años de un Estado que René Zavaleta denominó 'aparente'³⁸; un Estado de élites poco democratizado y democratizador, que se dedicaba a hacer una intermediación desigual, prestando al sector privado cantidades ingentes para que este se dedicara a aquello que no quería dedicarse, es decir, a industrializarse, a costa de un endeudamiento que acabaría pagando toda la mayoría social años después. Esta transferencia de recursos del sector público al sector privado, sin contraprestación obligatoria

38 René Zavaleta. *El Estado en América Latina*, Editorial Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba: 1990.

alguna por parte de este último fue la causa central de un endeudamiento público del Sur con el Norte iniciado fundamentalmente en las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Este era el camino trazado desde el Norte y eran pocos los ejemplos en América Latina que buscaron salir de él, y aquel que lo intentara siempre tuvo una réplica vehemente por parte del sistema capitalista en forma de golpes de Estado y dictaduras.

Luego, como ya se ha descrito en el apartado anterior, el mundo capitalista volvió manos a la obra a reorganizarse hacia adentro para afrontar otra nueva crisis del sistema a finales de los setenta. Latinoamérica no fue tampoco ajena a este proceso: la crisis de la deuda y la hiperinflación fueron las excusas perfectas para el desembarco de las políticas económicas neoliberales durante los años ochenta y noventa, comandadas y piloteadas desde el denominado Consenso de Washington, que bien podría haberse denominado el Disenso del Sur frente a la Imposición del Norte. El capital privado internacional supo diseñar la estrategia previa que luego pudiera permitir la intervención en modo de auxilio desde afuera, pues la llegada a la región de esa primera onda expansiva neoliberal en los años ochenta, precisamente, fue justificada a partir del rescate de la deuda externa y la hiperinflación que venía generándose hacia una década.

Esa suerte de etapa preneoliberal vino también acompañada de la conquista teórica y metodológica para impedir cualquier salida keynesiana (en el seno del marco capitalista) u otra opción de corte socialista. No obstante, en América Latina, la corriente teórica más influyente en muchas propuestas nacional-populares que se desarrollaron, algunas cuestionando el capitalismo y otras no, fue la teoría de la dependencia de la Cepal que, con una fuerte impronta desarrollista y nacionalista, planteaba el objetivo de reconquistar la soberanía y la independencia. Son los casos, por ejemplo, de Torrijos en Panamá, Alvarado en Perú, también –a pesar de su corto tiempo– de Torres en Bolivia (antes también con el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia, en el año 1952), y con Perón

en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, y anteriormente Lázaro Cárdenas en México.

Con este marco previo, el neoliberalismo para América Latina tenía, por tanto, que combatir contra el imaginario de carácter nacionalista y popular de esos modelos que sí habían tenido una notable influencia en el pasado y que todavía, a inicios de los años ochenta, tenían más importancia en el sentido común de lo que pudiera imaginarse. Si el neoliberalismo quería por ese momento imponer a esta periferia latinoamericana nuevas condiciones para una inserción subordinada, entonces debía afrontar la labor de terminar de una vez con esta idea nacionalista-desarrollista del pasado que, a pesar de sus errores, quedó en el imaginario de la mayoría popular como una forma real de obtener la verdadera independencia política y económica, tan anhelada desde la misma creación de los Estados-nación latinoamericanos.

Sin perder tiempo, el neoliberalismo se aplicó meticulosamente a esta tarea. Se empeñó en aplicar la totalidad del decálogo de Washington, sin dejar absolutamente nada que se escapara de lo trazado en el guion mundial. Comenzó una primera etapa repleta de eufemismos útiles e instrumentales para decir una cosa y hacer la contraria. Llegaron las proclamas de la racionalidad instrumental, la competencia perfecta, el mercado, la seguridad jurídica, la flexibilidad, la libertad económica, la eficiencia y la competitividad. Son todos términos con un claro doble rasero que permitieron acometer, indudablemente, duras acciones, pero siempre con un lenguaje económico y político suave. El arte del nuevo relato es todavía un hecho poco estudiado en los manuales de economía, a pesar de su importancia en la efectividad de las medidas económicas que se quieran tomar. El neoliberalismo supo de esta importancia y no disoció lo uno de lo otro, la explicación y la narrativa eran iguales o más importantes que la propia política económica. Aunque la teoría económica dominante, la neoclásica, puso todo su énfasis y empeño en lo cuantitativo y en la discusión tecnocrática, la realidad económica y política contradujo esta tesis.

El Consenso de Washington dictaminó desde afuera los lineamientos para combatir la crisis de la deuda y la hiperinflación que azotó a los países de América Latina mediante reformas y programas de ajuste estructural, orientados a: 1) una mayor disciplina fiscal con restricción del gasto público y reforma tributaria, para un adelgazamiento y debilitamiento del Estado; 2) gestión privada de los medios de producción; 3) defensa del derecho de la propiedad privada por sobre los derechos económicos, sociales y culturales; 4) liberalización de la tasa de interés y desregulación de mercados financieros; 5) tipo de cambio competitivo, y 6) la inserción de las economías emergentes en el comercio mundial mediante una apertura sin condiciones.³⁹

Se vino el paquete integral de medidas económicas en formato rescate, que debían ser implementadas en cada país latinoamericano; para ello, fue preciso también disponer de los socios partidarios en cada lugar para que así implementaran estas medidas, siempre apelando a que la mayoría social había sido quien había elegido democráticamente esta propuesta. La vieja partidocracia, que había jugado un papel clave en las décadas anteriores, nuevamente asumía la tarea de ser quien sirviera como intermediario de garantía para aplicar los dictámenes venidos de afuera. No era necesario, muchas veces, disponer de una mayoría social porque se eligieron presidentes con menos del 25% del total de votos, gracias a las alianzas partidarias entre la misma casta política. De hecho, no existían por aquel entonces muchas opciones diferentes en el sistema partidario, porque el mismo sistema se dotaba de mecanismos legales (pero no legítimos) para expulsar cualquier alternativa que no compartiera la centralidad de ese pacto social entre las élites. Y en el caso remoto de que una alternativa contrahegemónica llegara a ganar unas elecciones, esta tenía una corta duración asegurada, fuese por golpes de Estado, por muertes supuestamente accidentales o, simplemente, por una asfixia exterior a través de los múltiples dispositivos económicos y financieros internacionales.

39 J. Williamson. *Op. cit.*

En esta disputa, el rol del Estado fue sin lugar a dudas uno de los principales campos de batalla. Uno de los principales objetivos del orden hegemónico neoliberal siempre fue reformar el nuevo Estado, adaptándolo a las necesidades y nuevas reglas de juego. En el ámbito económico, las políticas neoliberales fueron encaminadas a destruir al Estado como productor, como controlador de los sectores estratégicos, y a dejarlo como un regulador a favor de una asignación con mera lógica capitalista. Así, el neoliberalismo logró que el Estado transformara su rol, pero sin hacerlo desaparecer. Mucho se ha escrito sobre la eliminación del Estado durante la época neoliberal, pero esto nunca sucedió de esta manera; más bien habría que precisar que el nuevo Estado en época neoliberal fue responsable de facilitar la entrada de América Latina a las lógicas de la OMC (Organización Mundial del Comercio), mediante la firma de los Tratados de Libre Comercio, de los Tratados Bilaterales de Inversión y del sometimiento al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).

El nuevo Estado neoliberal no dejó nunca de ser regulador de las relaciones económicas, siempre a favor de unos pocos en detrimento de la mayoría. La soberanía de cada país en América Latina fue extirpada así a favor de intereses ajenos, a favor de una inserción subordinada y desigual en el mundo. El patrón primario exportador fue fortalecido en los países de la periferia; las escasas fuerzas productivas industrializadoras que existieron antes de la llegada del neoliberalismo desaparecieron; los índices de desindustrialización llegaron a su máximo nivel, pero lo más preocupante es que, además, se consiguió que cualquier futuro intento de industrializar fuera casi misión imposible. Lograr irreversibilidad en este proyecto dominador fue siempre el gran objetivo estratégico.

Tal como lo dictaba el nuevo paradigma, la demanda interna fue casi siempre satisfecha por una intensa política de importaciones, que generó una fuerte dependencia de la satisfacción de necesidades respecto a las empresas transnacionales. De esta manera se vino moldeando en su etapa inicial lo que luego podríamos

llamar una suerte de 'rentismo importador del siglo xxi' (aspecto que veremos en el capítulo cuarto). El capital transnacional fue el actor principal como sustituto del intento de producción interna. El modelo productivo en esos años fue designado según las exigencias mundiales; en consecuencia, la transferencia de valor hacia el exterior estuvo asegurada, las relaciones de intercambio fueron absolutamente inequitativas y el patrón productivo nacional, en tanto a productos y productores, estuvo en fuerte grado de dependencia con los patrones productivos internacionales.

Este intercambio desigual entre centro y periferia fue reforzado por la hegemonía de las políticas económicas neoliberales y por sus instituciones internacionales (FMI, BM, BID), que a su vez también generó un intercambio ecológicamente desigual, en el que los recursos naturales de los países periféricos estaban dispuestos para la expoliación de las multinacionales de los países centrales, a cambio de bajos salarios y una multitud de pasivos ambientales. América Latina reforzó así su "especialización en perder", resultado de sus grandes dotaciones en recursos naturales que eran requeridos desde los países centrales del sistema-mundo capitalista. El capitalismo (neoliberal) por desposesión, como dice Harvey, fue puesto en práctica desde ese entonces.⁴⁰

En síntesis, durante la larga noche neoliberal se implementaron todas las políticas necesarias para que se produjera una transferencia de valor de unos a otros, de una mayoría popular (empobreciéndose) a una minoría (enriqueciéndose). En términos generales, Latinoamérica padeció y sufrió en carne propia el fracaso de ese modelo económico. A partir de entonces, la deuda verdadera pasó a ser humana, social, laboral. Las nuevas recetas derivaron, a contrapelo de lo que se auguraba, en la implementación de políticas económicas que tuvieron un alto impacto en la fragmentación social y económica de todos los países de la región: incremento de la pobreza, exclusión económica-social-política-cultural, aumento de la desigualdad, desempleo, precarización de las condiciones de

40 David Harvey. *The new imperialism*, Oxford University Press: 2003.

trabajo y erosión de la naturaleza, fueron moneda corriente en los países de la región, lo cual profundizó la debacle de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.

En relación con la articulación supranacional, en este período, la región nunca miró hacia sí misma, los escasos espacios de integración estaban diseñados desde el centro del sistema-mundo, atendiendo estrictamente a una óptica comercial y dejando de lado absolutamente el aspecto productivo, el financiero, el social y el cultural. Única y exclusivamente se valoraba la integración comercial, centrada en facilitar las mejoras estructurales para que el comercio fuera asimétricamente libre y creciera, de tal forma, que en las economías nacionales no se pudiese garantizar un cambio real en el patrón de acumulación a favor de las mayorías excluidas.

Como herencia, el triunfo del neoliberalismo en el terreno político y simbólico dejó sociedades fragmentadas con escaso poder de organización. Los valores individuales desplazaron cualquier discusión acerca de lo colectivo. Se disoció cada día más la relación entre lo que cada uno hace y el destino colectivo de las sociedades; lo público también pasó a estar tan estigmatizado, que cualquier iniciativa privada era bien vista; el descrédito de la política fue traducido a favor de una política en *petit comité*; el colonialismo epistemológico se exacerbó más y más, dando la espalda a cualquier debate que surgiera desde la propia raíz histórica de cada lugar; y lo que sí fue verdaderamente crucial es la capacidad que tuvo el neoliberalismo de arrebatar las esperanzas de que otro mundo fuera posible, porque se habían encargado ellos de fijar el único horizonte de época posible.

Algunos resultados de las décadas perdidas: Venezuela, Bolivia, Ecuador y apuntes sobre el resto de América Latina

En este apartado se trata de presentar en detalle cómo el neoliberalismo se implementó, provocando varias décadas perdidas para los tres países que son objeto de máxima atención en este libro. Como se ha argumentado en el capítulo introductorio, la

elección de estos países –Venezuela, Bolivia y Ecuador– no tiene como objetivo restar importancia a todo lo sucedido en el resto de la región, y especialmente en otros países que sí han tenido un papel protagónico en esta América Latina en movimiento, en constante disputa. La selección de estos tres países responde a que en ellos se dieron, en este tránsito de décadas perdidas a década ganada, procesos de refundación constituyente que transformaron en forma drástica el pacto social, de raíz, sustituyendo aquel que fuera realizado por arriba, por otro en el que la nueva mayoría social participa activamente. Son, además, tres procesos de cambio que dan una identidad significativa al cambio de época regional en marcha, porque hacen posibles horizontes estratégicos que van más allá de poner punto y final al neoliberalismo, abogando por la construcción de otros marcos de convivencia que permitan disputar la hegemonía capitalista mundial.

En las próximas líneas se presentan los casos específicos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, y cómo en estos países fue penetrando la hegemonía neoliberal, ocasionando varias décadas perdidas para la mayoría social. Indudablemente, tomar estos tres países por sí solos no sirven, si queremos extraer conclusiones generalizadas para toda América Latina, porque en cada país el neoliberalismo se fue implementando con sus particularidades y especificidades a pesar de existir un patrón común. No obstante, la centralidad de este libro reside en el intento de caracterizar e identificar esta América Latina en movimiento y, para ello, es fundamental atender a aquellos países que han tenido un papel más que destacado en esta disputa, contribuyendo protagónicamente a impulsar este cambio de época regional.

Ello no resta importancia a otros países como Argentina, Uruguay y Brasil, y otros como Nicaragua, El Salvador o Paraguay, durante los años de Lugo, que son también piezas claves para entender mejor lo que está sucediendo en todo el continente latinoamericano. El libro, a fin de profundizar en uno de los principales ejes troncales de esta América Latina en disputa, se concentra en los tres países mencionados porque son ellos los principales lugares donde los procesos de cambio han sido más vigorosos,

más determinantes y, seguramente, los que más influencias han tenido para que la región haya transitado de las décadas perdidas a la década ganada. Por tal razón, en esta sección, con el propósito de conocer cuál fue la caracterización de este cambio de época, es preciso aproximarse y conocer en detalle lo que supuso el neoliberalismo en estos países, cómo penetró y se implementó y, finalmente, cuáles son los rasgos característicos de las décadas perdidas para la mayoría del pueblo venezolano, boliviano y ecuatoriano.

Esta primera radiografía permitirá más adelante entender mejor la dimensión del cambio de época. Saber de dónde se parte ayuda a comprender la magnitud de los cambios, el tránsito hacia la década ganada y, especialmente, facilitará abrir la discusión –a futuro– en torno a los principales ejes estratégicos que están en disputa en la región (abordados en el capítulo tercero).

Venezuela

El Pacto de Punto Fijo, firmado por los partidos de la élite gobernante en 1958, marcó la historia de Venezuela durante las últimas cuatro décadas del siglo xx e instauró, de facto, un sistema de alternancia bipartidista entre Acción Democrática (AD) y Comité Organización Política Electoral Independiente (COPEI), vigente hasta el triunfo de Hugo Chávez en 1998. Durante ese período, la democracia pactada del puntofijismo se caracterizó por una concentración de los poderes económicos y de la renta petrolera con la exclusión de las mayorías. La Gran Venezuela era la Venezuela de unos pocos que seguían lucrándose con la explosión petrolera, sin ningún tipo de viraje hacia el cambio de una matriz productiva. La política social, por su parte, se redujo a un Estado de Bienestar en miniatura, apenas lo indispensable para amortiguar el descontento creciente de la población, que veía pasar de lejos las grandes transferencias de recursos públicos que se realizaban a favor de un sector reducido de la sociedad venezolana.

Durante los años setenta y ochenta, a pesar de la alta recaudación de ingresos públicos gracias a la renta petrolera (por altos

precios del petróleo), el Estado venezolano comenzó a endeudarse sin base en equivalencia industrializadora. El dinero llegó a las manos de una pequeña élite económica dominante, que no lo usó para invertir adentro, sino para ahorrar afuera lo que le sobraba de consumos internos excesivamente suntuarios. La nueva actividad económica, fuera de la esfera petrolera, consistió en la importación de todo aquello que comenzaba a demandarse internamente, obteniendo una tasa de ganancia fácil y sin necesidad de emprender ningún camino riesgoso.

De esta forma, al igual que en buena parte de los países latinoamericanos, durante esta década se fue constituyendo en Venezuela una masa de deuda externa que no tuvo un destino social ni mucho menos productivo; solo tuvo un destino ocioso a favor de una minoría que la transfería al exterior. La deuda externa venezolana fue realmente utilizada como ahorro externo de la élite económica dominante del país, que la depositó fuera de Venezuela, aunque el compromiso de pago a futuro se quedó internamente en manos del Estado venezolano. Comenzaba así un período de externalización de la renta petrolera que se extendería, profundizándose durante las siguientes décadas.

En 1983 tuvo lugar una especie de detonante –que funcionó también como excusa–, lo cual permitió, a la postre, facilitar y acelerar la vía para que el neoliberalismo desembarcara en Venezuela. Dicho acontecimiento es conocido como el Viernes Negro, y consistió principalmente en una megadevaluación –el dólar pasó de valer 4,3 bolívares a 15 bolívares– que devino inmediatamente en una importante hiperinflación. En lo inmediato, la exportación de petróleo que se realizaba siempre en dólares, pasó, en consecuencia, a generar más bolívares, permitiendo así aliviar las finanzas internas. Pero este efecto positivo de la devaluación, que siempre favorece al exportador –en el caso venezolano, el sector público, exportador de petróleo, dominado por intereses privados– tenía grandes inconvenientes. En primer lugar, la devaluación encareció las importaciones y, por tanto, tuvo un fuerte efecto inflacionario; en segundo lugar, provocó una gran fuga de capitales. Y

además, esa devaluación no resolvió de ninguna manera el grave problema de la deuda externa en dólares, contraída por todos los gobiernos del puntofijismo para contentar a una burguesía nacional que no llegó nunca a producir nada porque, por el contrario, se especializó cada vez más en el sector importador. Un cuadro macroeconómico vulnerable que se sumaba a un descontento social cada vez más intenso.

La posterior política económica implementada bajo la presidencia de Lusinchi (1984-1989), quien dio inicio a la larga noche neoliberal en Venezuela bajo el absurdo lema de “Un gobierno de austeridad y sensibilidad social”, se debe entender en el marco de la ola (inicial) llegada a América Latina a inicios de los ochenta, en auxilio de la deuda externa y como forma de combatir la inflación. Venezuela, además, no es un país pequeño ni que pase desapercibido en el sistema-mundo, porque su renta petrolera no es en absoluto desestimable y su papel proveedor de petróleo resultaba, en ese momento, más determinante que nunca para diversificar y reducir la dependencia de los países árabes. Por todo ello, el neoliberalismo también acudió al país caribeño rápidamente para procurar ordenar esa casa, tal como la acumulación capitalista exigía en el cambio de época global.

La situación venezolana fue aún más compleja cuando los precios del petróleo comenzaron a bajar, en el momento en que el capital logró controlar el devenir de ciertos países árabes. Con ello, los ingresos públicos se vieron fuertemente afectados, situación que se agravó por la dependencia exclusiva del Estado frente a los mismos y la ausencia de una reforma tributaria que recaudase ingresos públicos procedentes de la generación de riqueza interna. A ello cabe sumarle que la gestión de Pdvsa, siempre en manos estatales pero liderada por directivos de Exxon, Shell y Mobil –quienes le impregnaron una lógica privada–, fue encaminándose en versión neoliberal a contemplar al Estado como un contrincante en vez de como su propietario. En esta década el pulso interno en Pdvsa fue decantándose claramente a favor del interés privado hasta acabar desencadenando, años más tarde, con Carlos Andrés Pérez en 1990,

en lo que luego se llamó la Política Petrolera de Apertura, que no fue más que política de reversión al capital privado transnacional de parte de la actividad productiva petrolera⁴¹. A decir verdad, esta política pseudoprivatizadora de Pdvsa ya venía desde 1983 y se fue consolidando a medida que transcurrieron los años (neoliberales), hasta llegar al punto de disponer de escaso nivel real de renta petrolera en manos del Estado.

Inmediatamente después del Viernes Negro, y como antesala del Plan Brady⁴² que viniera más tarde, se renegoció la deuda externa venezolana para evitar el impago del corto plazo a cambio de pasarla a deuda de largo plazo, incrementándola por la vía de la amortización de intereses. Así se fue pasando de deuda externa a una deuda eterna a favor de los acreedores internacionales (la banca privada en su mayoría), y bajo el control de organismos internacionales afines y protectores de esos intereses.

Las elecciones de diciembre de 1988 designaron a Carlos Andrés Pérez para un segundo mandato como presidente de la IV República⁴³. Acción Democrática renovaba así el cargo al frente del gobierno venezolano para culminar lo que se había empezado en la etapa anterior: una Venezuela neoliberal en el sentido más integral posible. La tensión en el país fue cada vez más significativa porque las políticas económicas no lograron atender a las necesidades sociales ni a las demandas básicas de la mayoría del pueblo, cada vez más empobrecido y excluido. En su discurso inaugural, Carlos Andrés Pérez hizo hincapié en la necesidad de transformaciones

41 Alberto Montero. “Petróleo, el maná de la discordia”, en: Juan Torres López, (coord.), *Venezuela, a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana*, Icaria, Madrid: 2006.

42 El Plan Brady fue una herramienta muy útil, diseñada por Estados Unidos en clave geopolítica, porque fue permitiendo controlar a países periféricos según las necesidades en materia de deuda. Se trataba de una renegociación de la deuda, intercambiando deuda presente por deuda futura, pero a costa del aumento de costes e intereses y siempre sujeto a determinantes en la política macroeconómica que se debía llevar a cabo.

43 Resulta electo con 3.879.024 votos (52,91% de los votantes); hasta esa fecha, el mayor número de votos en términos absolutos.

importantes y radicales. La traducción de estas palabras se concretó en el programa neoliberal más de moda por esos años en América Latina, tutelado por Washington. A escasísimo tiempo de asumir la presidencia, el 16 de febrero de 1989 el presidente electo anunció que el Gobierno había firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aceptando el programa neoliberal como mandato del Norte de obligado cumplimiento. En esa línea, también se renegotió la deuda externa en el marco ampliado de los planes de reestructuración mediante el Plan Brady.⁴⁴

Venezuela seguía intercambiando deuda presente por deuda futura, pero a costa de aumentar el capital adeudado y sus servicios de amortización mediante artilugios muy creativos e ingeniosos. La deuda externa era cada vez más eterna. La fórmula fue como un juego de magia para niños ingenuos: se prometió un gran descuento en el corto plazo (entre 20-50%), pero luego, gracias a la obligatoriedad de tomar ciertas medidas en política económica, el acreedor se aseguraba nuevos beneficios por otras vías y transferencias de recursos a su favor, derivados de políticas de privatización y también compromisos para condiciones muy ventajosas en el marco de un endeudamiento futuro. Dentro de este plan había infinitas formas de garantizarse que el acreedor cobrara a futuro todo lo que se descontaba en el presente, por ejemplo, mediante la concesión de preferencias vía instrumentos financieros, como el *swaps*⁴⁵, que facilitaba el intercambio de deuda por inversiones.

Paralelamente a esta negociación de la deuda externa, la política petrolera se hacía más servil a favor de los intereses transnacionales. Venezuela dejaba atrás mucho de lo conquistado cuando se había alineado con la política de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); por el contrario, por esas fechas inició un

44 Venezuela había sido el primer país en aplicar el Plan Brady; este plan fue asumido luego de un viaje del presidente Carlos Andrés Pérez a Estados Unidos.

45 Un *swap*, o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras; los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de interés.

período de acercamiento a los países consumidores (países industrializados) nucleados en la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Pdvsa abandonó la política de la maximización de beneficios (por la vía de un equilibrio entre precios y cantidades) para pasar a una política de maximización de los volúmenes de producción, para satisfacer las exigencias de los países rectores del neoliberalismo⁴⁶. Además, aprovechando un viejo artículo (el 5.º) de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos en el Congreso Nacional, que el mismo Carlos Andrés Pérez había dispuesto cuando fuera presidente en los años setenta, se permitió que el capital privado acudiera en casos especiales.

Esa ventana permitió la entrada masiva del capital privado a la industria petrolera venezolana, para expropiar la máxima cantidad posible de renta petrolera al Estado y transferirla a favor de la acumulación capitalista mundial. Así comenzó un proceso de internacionalización de la industria petrolera venezolana con una expansión hacia el exterior, adquiriendo diecinueve refinerías en todo el mundo, lo que permitió que Pdvsa pudiera transferir fuera del alcance del fisco un importante volumen de sus ganancias, utilizando el mecanismo de los precios de transferencia⁴⁷. El efecto inmediato de esta apertura petrolera fue la reducción de ingresos públicos, no solo por la caída del precio del petróleo, sino también por la fuga de ingresos derivada de la privatización. Lo esperado: la llegada de inversión extranjera directa se convirtió en tiempo récord en fuga de riqueza.

46 Según A. Montero, *op. cit.*, esta expansión de la producción se trató de justificar sobre unas proyecciones de la demanda de hidrocarburos exageradamente optimistas para el medio plazo, y acabó desembocando en un conflicto continuado con la OPEP.

47 Según Mommer, en la segunda mitad de los noventa Pdvsa transfirió fuera de Venezuela en torno a 500 millones de dólares anuales en beneficios, y durante los dieciocho años que duró la 'apertura petrolera' las filiales extranjeras de Pdvsa nunca pagaron beneficios a la compañía matriz en Caracas (Bernard Mommer. *Petróleo global y Estado nacional*, Editorial Comala, Caracas: 2003).

De esta manera, la renegociación de la deuda y la nueva política petrolera, junto con la neodependencia en otras dimensiones de la política económica, implicaron una absoluta pérdida de soberanía porque el pueblo no había votado al FMI, ni al programa de políticas económicas del verdadero Decálogo de Washington. Carlos Andrés Pérez explicó que El Paquetazo (tal como se conoció a ese conjunto de medidas neoliberales) constituía una necesidad impostergable para facilitar la inserción del país en el sistema mundial. Lo que no explicó es que se trataba de una inserción dependiente y subordinada al sistema capitalista mundial y a su tasa de ganancia. Se trataba de incorporar a Venezuela obedientemente al patrón de acumulación capitalista mundial, con una absoluta pérdida de soberanía.

De todas las medidas que el FMI preveía implementar, en sintonía con el Banco Mundial, hubo dos de ellas que fueron ejecutadas en forma inminente: 1) aumento de precios internos de venta de combustible, y 2) eliminación del cambio diferencial. Cuando entró en vigencia ese aumento en la gasolina el 26 de febrero de 1989, los precios de los pasajes urbanos de los transportes públicos se incrementaron en forma exorbitante y la respuesta del pueblo no tardó en producirse⁴⁸. Al día siguiente, 27 de febrero las ciudades-dormitorio de Caracas, como Guarenas (municipio de la periferia caraqueña), amanecieron con manifestaciones de protesta que fueron expandiéndose a lo largo de todo el país, aunque se concentraron especialmente en la capital. Los acontecimientos que se suscitaron a partir de la expansión de estas protestas es lo que se conoce como El Caracazo.

Las protestas continuaron hasta el día siguiente. El presidente Carlos Andrés Pérez declaró suspendidas las garantías constitucionales, decretando el toque de queda bajo el Plan Ávila y ordenando la represión de los desórdenes, a modo de advertencia de que el

48 Se aumentó el precio de la gasolina y otros derivados del petróleo en el mercado nacional, durante tres años, con un primer aumento de 100% (cinco centavos de dólar) en el precio de la gasolina y un 30% en el del transporte.

gobierno no toleraría acciones de semejante naturaleza. Mucha gente murió –no existen cifras precisas– producto de la gran represión de ese día. El Caracazo cristalizó la protesta popular frente a la reciente historia económica y política de Venezuela. Los detonantes fueron ciertas medidas concretas, propias de una línea neoliberal estructural. La subida de precios en combustible, en un escenario progresivo de empobrecimiento de las mayorías, era un golpe duro para la pérdida de poder adquisitivo. La otra medida fue la unificación de un tipo de cambio flotante, fijada sin control alguno, dependiente de aquellos (con poder de mercado) que compran y venden, eliminando así el tipo de cambio preferencial para algunos bienes y servicios que requerían importarse por necesidad.

Esto condujo inexorablemente a un incremento de precios en bienes básicos que afectó negativamente a la población de bajos recursos. Ambas medidas, que provocaron El Caracazo, solo fueron una parte marginal de lo que aún estaba por venir con todos los Programas de (des)Ajuste Estructural y los Planes de (des)Estabilización en los próximos años. No obstante las fuertes movilizaciones, la ofensiva neoliberal continuó con el capital internacional como gerente. Carlos Andrés Pérez se había comprometido ya en ser el representante de la filial venezolana del neoliberalismo y anunció El Gran Viraje, en la misma línea de las medidas que habían provocado El Caracazo.

Este nuevo programa se basó en las siguientes políticas económicas: 1) aceptar permanente supervisión del FMI con el objetivo de volver a endeudarse (cifra que llegará a los 4.500 millones de dólares en los tres años siguientes); 2) fijación de la tasa de interés bajo los poderes del mercado (hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%); 3) barrer los controles sobre los precios de todos los productos, a excepción de dieciocho renglones de la cesta básica, permitiendo así que los grandes oligopolios pudieran fijar su tasa de ganancia mediante el precio de su máximo interés; 4) incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico, y aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; 5) reducción

del déficit fiscal (imponiendo como tope el 4% del PIB), mermando así el –hasta entonces raquítrico– Estado de Bienestar; 6) privatización de las empresas públicas estratégicas, tales como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv); y 7) eliminación de aranceles de importación, provocando así una alta dependencia importadora.

Este último aspecto era vital para dejar atrás los viejos sueños del desarrollismo nacional, basado en el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (de la teoría de la dependencia), e ir transitando hacia su opuesto: subdesarrollo mediante otro modelo, el ISP: Importación por Sustitución de Producción. Así, el neoliberalismo consolidaba la inserción dependiente del patrón primario exportador de Venezuela como periferia del sistema-mundo capitalista. Las medidas, conocidas como el Gran Viraje, se reforzaban con la mencionada renegociación de la deuda mediante los planes de reestructuración –principalmente el Plan Brady– y la continuación del plan pseudoprivatizador del sector petrolero, que no cejaron en ningún momento.

En la misma línea económica, durante la siguiente presidencia, la de Rafael Caldera (1994-1999) se hizo oficial el IX Plan de Desarrollo de la Nación 1995-1999, bautizado por sus autores como ‘un proyecto de país’, que constituyó la denominada Agenda Venezuela dictaminada por el FMI para los próximos años. El Plan se centró literalmente en cinco puntos: 1) la inserción estratégica del país en el contexto internacional, con el proyecto estratégico Venezuela en la sociedad global del siglo xxi; 2) la transformación del aparato productivo: una estrategia macroeconómica para el desarrollo con equidad; 3) la construcción de una economía competitiva con equidad, ambiente y ordenamiento del territorio para sustentar el nuevo desarrollo; 4) el proyecto de solidaridad social: calidad de vida y solidaridad social; y 5) la transformación de la educación y el conocimiento, y la reforma del Estado para el nuevo proyecto de país.

Toda esta retórica, como parte de un relato basado en eufemismos, escondía lo que verdaderamente se explicó en el

apartado primero de este capítulo (el verdadero decálogo del neoliberalismo). Cuando se decía inserción estratégica en el contexto internacional, significaba apostar por la recién nacida Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en Miami, en la Cumbre de las Américas, para que el país fuera una pieza subordinada definitivamente en su rol primario exportador e importador de valor agregado, dependiente de los países centrales; cuando se hablaba de estrategia macroeconómica, realmente quería decirse que se debían asumir todos los programas de ajuste y planes estructurales macroeconómicos del neoliberalismo; la reforma del Estado se usaba para evitar afirmar que se debía privatizar lo público, dejando siempre un resto mínimo estatal que garantizara la seguridad jurídica a favor de los capitales; se aludía a la solidaridad social sin decir que esta estaba condicionada a la evolución de la tasa de ganancia. Este era el verdadero significado del proyecto de país de Caldera para Venezuela.

En definitiva, por debajo de nombres rimbombantes, fuese El Gran Viraje o la Agenda Venezuela, la política económica siguió la secuencia marcada por el neoliberalismo mundial. Frente a ello, los cambios prometidos no se hicieron realidad y las políticas económicas presentaron paupérrimas cifras, tanto en materia económica como social⁴⁹. Los efectos fueron, a grandes rasgos, similares al resto de los países analizados:⁵⁰

49 En los artículos de Torres y Montero se puede observar el complejo escenario, justo antes de que Chávez llegara a ser presidente (Juan Torres López y Alberto Montero Soler. “¿Ha hundido Chávez la economía venezolana?”, *Observatorio de la economía latinoamericana*: 2004; y Juan Torres López, “La economía: tiempos de convulsión, luces y sombras”, en: Juan Torres López, (coord.), *Venezuela, a contracorriente. Los orígenes y las claves de la Revolución Bolivariana*, Icaria, Barcelona: 2006).

50 Para más detalle de estos impactos negativos del neoliberalismo, véase el libro *El Pensamiento económico de Hugo Chávez* (Alfredo Serrano. *El pensamiento económico de Hugo Chávez*, Vadell Hermanos, Caracas: 2014).

- La tasa de pobreza en 1980 era del 22%, mientras que a fines de los noventa ya estaba entre el 54% y 70%. La pobreza extrema en 1998 estaba próxima al 40%.⁵¹

- En promedio, el PIB per cápita se había mantenido constante (crecimiento 0%) durante los años noventa (y un 75% por debajo del PIB per cápita de 1977).

- Entre 1990-1998 el 70% de los puestos de trabajo creados fueron en el sector informal.

- Venezuela era en ese momento el tercer país más desigual del mundo; en el año 1997 el 30% de los hogares más ricos disfrutaban del 61,3% de la riqueza; entre 1975 y 1997 la clase media venezolana se redujo del 56,9% al 31,3%.⁵²

- En 1998 la dependencia importadora era de tal magnitud, que se compraba afuera de Venezuela el 70% del consumo de alimentos del país.

- En el período 1983-1998, la devaluación promedio anual fue del 795%.

- En 1995 el gasto social en relación con el PIB se situó alrededor del 7,6%.

- El gasto público en salud había bajado a mediados de la década, en relación con 1990. En 1999 había 194 médicos por cada cien mil habitantes y existía un 20% de enfermedades crónicas sin control.

- Los ingresos petroleros pasaron de un 18,3% del PIB en 1991, al 3,9% en 1999, lo cual colocó a Venezuela como el octavo país productor de petróleo. El ingreso petrolero por persona cayó de 310 dólares en 1994 a 225 dólares en 1998; en el período 1990-1998 la producción petrolera aumentó en 50%, mientras sus costos de producción lo hicieron en un 175%.

- El 30% del gasto del Gobierno central se destinaba al pago de la deuda pública en el año 1998.

51 Por ejemplo, en el año 1994 la pobreza en Venezuela afectaba al 60% de la población.

52 Patricia Márquez y Ramón Piñango, (eds.). *En esta Venezuela. Realidades y nuevos caminos*, IESA, Caracas: 2003.

- Los precios seguían aumentando de manera sostenida. La inflación promedio en los últimos veinte años fue del 44% anual; en el período 1989-1998 los precios crecieron a una tasa promedio anual del 53%.

Además, el mayor endeudamiento social venía acompañado de un cuadro macroeconómico paupérrimo en términos cuantitativos. Ni un economista ortodoxo daría por bueno el análisis de coyuntura económica de Venezuela en 1998, que se podía sintetizar en: 1) baja sustancial del ingreso petrolero de exportación; 2) fracaso del modelo sustitutivo de importaciones; 3) desequilibrio en la balanza de pagos; 4) incremento de la deuda externa y agotamiento de las reservas internacionales; 5) aceleración inflacionaria y encarecimiento desmedido del costo de la vida; 6) devaluación continua del bolívar, con la concomitante dolarización de la economía; 7) decrecimiento de la actividad productiva de la nación; 8) desajuste del Producto Interno Bruto y disparidad intersectorial de productividad; 9) crisis de financiamiento de la gestión económica y social del Estado; y 10) liberación de precios y eliminación de subsidios⁵³. Estos diez ejes constituyen el verdadero decálogo en cuanto a los efectos macroeconómicos, como consecuencia de aquel decálogo de auxilio y rescate que acabó siendo de hundimiento económico y social.

En definitiva, las consecuencias sociales y económicas del período neoliberal en Venezuela dejaron como saldo un país en ruinas, que comenzaría a ser refundado a partir de la llegada a la presidencia de Hugo Chávez, ya en el ocaso del siglo xx. Hasta ese momento, el país presentaba un alto grado de fragmentación social con un Estado al servicio de unos pocos, desatendiendo por completo la deuda social que afectaba a la mayoría del pueblo venezolano.

53 Adolfo León Atehortúa Cruz y Diana Marcela Rojas Rivera. "Venezuela antes de Chávez: auge y derrumbe del sistema de 'punto fijo'", *Anuario colombiano de historia social y de la cultura*: 2005.

Bolivia

Bolivia ha padecido históricamente de un patrón de crecimiento sustentado forzosamente en la minería y en otros recursos naturales claves para el desarrollo mundial. No fue esta una elección propia, sino que ha sido una imposición foránea desde que se inicia el proceso de colonización. Este modelo de dependencia fue alterado con la Revolución de 1952, liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)⁵⁴, cuando en efecto se produjeron ciertos cambios –al menos en la fase inicial– en la forma de gestionar la soberanía respecto a sus propios recursos naturales; pero poco duró ese empeño porque rápidamente se produjeron diferentes contraofensivas que impidieron avanzar en la construcción del proyecto nacional-popular, más desarrollista, que había dado sus primeros pasos a favor de tener mayor control de los sectores estratégicos (nacionalización de las minas), de una política agraria más democratizadora y de llevar a cabo políticas sociales redistributivas.

Un claro ejemplo contrarrevolucionario fue cuando en 1955 el gobierno boliviano aprobó el Código Petrolero, permitiendo que la compañía Gulf Oil controlara el 90% del gas boliviano. Las actuaciones del gobierno se fueron alejando cada vez más del significado de las siglas del partido que le llevó al poder; igualmente, se sucedieron los golpes de Estado en los años siguientes: en el año 1964 el general Barrientos dio un golpe de Estado; después de la muerte de Barrientos, en el año 1969, Luis Adolfo Siles asumió la presidencia, pero también sufrió otro golpe militar por parte del general Alfredo Ovando Candía; el intento de Asamblea Popular de Juan José Torres, con una propuesta ambiciosa de recuperación de soberanía, también duró muy poco; en el año 1971 llegó el golpe militar de Hugo Banzer, instaurando una dictadura militar que duró hasta

54 La presidencia fue usurpada de inmediato por una junta de gobierno militar; en respuesta, los trabajadores y campesinos lideraron una insurrección nacional armada en abril del año siguiente, llevando de nuevo al MNR al poder.

el año 1978; después se sucedieron vaivenes de diferentes presidentes⁵⁵, con fuerte presencia de la Unión Democrática Popular (UDP).⁵⁶

Después de ese período y actuando bajo mucha presión, el presidente Hernán Siles anunció la convocatoria a elecciones el 6 de agosto de 1985, siendo nuevamente Paz Estenssoro –el mismo que fuera presidente con el MNR en el año 1952– quien ganara las elecciones, convirtiéndose desde ese momento en el principal valedor del desembarco neoliberal con la implementación de las políticas económicas determinadas en el Consenso de Washington.

En Bolivia, la década de los setenta fue un período de crecimiento gracias al aumento de los precios del estaño y del petróleo en los mercados internacionales. Sin embargo, ese aumento de los ingresos fue insuficiente para financiar el monto del volumen de importaciones que se venía produciendo; el resultado fue un incremento del déficit comercial y, frente a ello, el endeudamiento externo volvía a aparecer como única respuesta posible, tal como mandaban los cánones del manual dominante a nivel internacional. A finales de la década de los setenta, la caída de los precios de las materias primas que Bolivia exportaba al resto del mundo, junto con el aumento generalizado de los tipos de interés, además del progresivo endeudamiento externo, fue configurando un escenario altamente complejo. La restricción externa se fue haciendo cada vez más insostenible; el estrangulamiento externo de la economía boliviana, unido a la incapacidad interna para generar las divisas suficientes, hizo imposible seguir sosteniendo el pago del servicio de la deuda externa y el pago de las importaciones.

55 Según datos de la Corte Nacional Electoral, desde el año 1978 hasta 1982 existieron ocho presidentes: Juan Pereda Asbún, año 1978; David Padilla Arancibia, años 1978-1979; Walter Guevara Arce, año 1979; Alberto Natusch Busch, año 1979; Lydía Gueiler Tejada, año 1980; Luis García Meza, años 1980-1982; y Guido Vildoso Calderón, año 1982. En 1982, es elegido un nuevo presidente: Hernán Siles.

56 La UDP fue una alianza entre el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), el Movimiento Nacionalista Revolucionario de la Izquierda (MNR-I) y el Partido Comunista de Bolivia.

Como sucedió en tantos otros países de América Latina, la recesión económica no tardó en llegar. A partir de 1982 el peso de la deuda externa se hizo, por entonces, insoportable⁵⁷ y se desató un proceso hiperinflacionario que asoló al país⁵⁸. Esta mezcla explosiva acabó desembocando en la suspensión de pagos en el año 1984, que puso punto y final a la etapa anterior, dando lugar al inicio de una nueva época: la neoliberal. Tales circunstancias permitieron y aceleraron el “auxilio” del FMI y el Banco Mundial; ambas instituciones –junto con otras como el BID– acabaron con hacerse, por vía indirecta, con los resortes de gobierno del país, utilizándolo a su antojo como laboratorio experimental para aplicar las recetas neoliberales en materia de política económica.

De esta forma, la respuesta a la crisis desde el FMI y el BM se articuló en dos dimensiones diferenciadas: por un lado, un plan de estabilización orientado, en lo fundamental, a recuperar la estabilidad de los precios y, por otro, un proceso de ajuste estructural de la economía boliviana en sentido estricto. Con el plan de estabilización se articularon políticas de choque destinadas a recuperar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas y, en concreto, de los precios internos y externos. Ese plan giró en torno al aumento del grado de apertura externa de la economía, a la reestructuración del sector público y la desregulación del mercado de trabajo o, mejor dicho, la regulación del mercado laboral con las nuevas reglas de flexibilidad para que el gran empresario tuviera aún más poder para definir las condiciones de contratación y despido, y de los salarios.

Para todo ello, en el año 1985 se aprobó el Decreto Supremo 21.060, centrado en cinco ámbitos fundamentales para la estabilización neoliberal: disciplina fiscal, reforma tributaria, liberalización

57 La deuda externa había pasado de suponer un 223% de las exportaciones en 1980 a un 420% en 1984.

58 La tasa de crecimiento de los precios fue en 1982 del 296,5%, en 1983 del 328,5% y en 1985 alcanzó el 11.570% anual (Juan Cariaga. *Estabilización y desarrollo: importantes lecciones del programa económico de Bolivia*, FCE-Los Amigos del Libro, La Paz: 1996).

de la tasa de interés⁵⁹, tipos de cambio competitivos y eliminación de las restricciones a la importación; luego, llegó una segunda etapa a partir del Decreto Supremo 21.660 de julio de 1987, que profundizaba la apertura de las importaciones con la adhesión de Bolivia al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio, por sus siglas en inglés).

Estas duras medidas de estabilización se acompañaron con un programa de ajuste, cuya finalidad fue la reforma de la estructura de la economía boliviana para reconstituir las bases del proceso de acumulación, sobre un sustrato que no iba a alterar en nada el patrón dependiente de la misma sino que, por el contrario, iba a acentuarlo aún más. Así, la reestructuración productiva se realizó sobre la base de la reprimarización económica. En este sentido, la apertura de la economía se realizó a partir de la privatización y venta al capital transnacional de las principales empresas públicas (que venían controlando ciertos sectores estratégicos y con alta rentabilidad), y se complementó con la continuación en el ajuste sobre el trabajo y el definitivo desmantelamiento del sector público mediante nuevos mecanismos. Fue a partir del año 1991 cuando se sancionó un conjunto de leyes que habilitaron la privatización y capitalización de muchas empresas estatales.

En primer lugar, se aprobó la Ley de Inversiones 1.182 en 1990⁶⁰, durante la presidencia de Paz Zamora; a ella le siguieron la aprobación de las Leyes de Privatización en 1992 y de la Ley de Capitalización en 1994⁶¹, ya bajo el gobierno de Sánchez de Lozada. Las

59 Se profundizó la liberalización financiera al disponer que las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero sean libremente pactadas entre el banco y los usuarios, pero siempre bajo desigualdad de condiciones.

60 La Ley 1.182 contemplaba una serie de privilegios inusitados para el inversionista extranjero: plena libertad cambiaria y de movilidad de capitales; posibilidad de establecimiento en zonas francas y, por lo tanto, exentas total o parcialmente de imposiciones tributarias y arancelarias; y la posibilidad de rescindir libremente los contratos de trabajo y la descentralización de la negociación salarial.

61 Conceptualmente, la capitalización es un modelo de privatización en el que un inversionista estratégico adquiere el 50% de una compañía pública y

tres pueden considerarse, sin lugar a dudas, las reformas legales más importantes del proceso de reestructuración productiva en Bolivia. Gracias al sustento legal de esas reformas, se privatizaron un total de 84 empresas públicas y se capitalizaron otras diez (traducido en un valor de 1.677.360 millones de dólares). Según el BID, por ese entonces Bolivia era el país con mejor índice de privatización de toda América Latina en la década de los noventa (con un valor del índice de 0,9 frente al 0,3 del promedio). En cuanto al índice de avance de reformas estructurales, elaborado también por el BID –que mide entre 0 a 1 los avances en reforma comercial, reforma financiera, reforma tributaria, privatización y reforma en el mercado laboral–, a finales de la década de los noventa Bolivia se situaba en el primer lugar con un valor del 0,7 frente al promedio de diecisiete países latinoamericanos de 0,58⁶². A todo ello hay que sumar los importantes cambios acaecidos tanto en el ámbito de las pensiones, en el que se sustituyó el sistema de reparto por uno de capitalización individual a través de la Ley N° 1.732 de noviembre de 1996, como en el sector de los hidrocarburos.

Como resultado de la aplicación de todo ese conjunto de políticas económicas, Bolivia atravesó un profundo proceso de desindustrialización; en 1985 el PIB de la industria representaba el 16% del total y en el 2005 el grado de industrialización bajó hasta el 11,7%⁶³. La estructura de generación de empleo e ingreso venía descrita en modo de pirámide invertida: en el sector manufacturero, el 83% de la base de la pirámide laboral boliviana correspondía a unidades familiares campesinas y microempresas de menos de cinco personas, que producían apenas el 25% del ingreso; mientras

su control administrativo, y a cambio el socio se compromete a invertir el 100% de su aporte de capital (equivalente a la estimación del inversionista del 50% del valor en libros de la empresa) en la compañía para financiar nuevas inversiones.

62 Eduardo Lora. "Las reformas estructurales en América Latina: qué se ha reformado y cómo medirlo". [documento de trabajo 348]. Banco Interamericano de Desarrollo: 2001.

63 Ministerio de Planificación y Desarrollo. *Plan Nacional de Desarrollo*, Bolivia: 2006.

que el 7% de la cúpula laboral, conformada por empresas de más de cincuenta personas, contribuía con el 65% de ingreso. En el medio estaba una débil franja de pequeños y medianos productores que producían el 10% del empleo y el 10% del ingreso.⁶⁴

Los resultados en el ámbito laboral de todos estos programas de ajuste fueron nefastos: veintitrés mil mineros del sector público y cinco mil del sector privado perdieron su trabajo; dieciocho mil empleados públicos fueron despedidos; el salario real en los sectores público y privado se redujo en un 40%. Consecuentemente, se intensificaron las desigualdades económicas y sociales generándose un aumento desmesurado de la pobreza. Además, empeoraron los problemas de nutrición y se agravó el proceso de exclusión social y económica de la mayoría de la población en favor de una minoría.

Esas mismas políticas enmarcadas en los programas de (des)estabilización y planes de (des)ajuste tuvieron efectos también estructurales en lo social; no solo se circunscribieron a algunas de las necesidades básicas insatisfechas, sino que tuvieron un impacto muy desfavorable en las condiciones de vida de buena parte de la población boliviana. Según la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape)⁶⁵ en el año 2000, en pleno apogeo del modelo neoliberal, el porcentaje de pobres en Bolivia era del 66,4% y la pobreza extrema (o indigencia) alcanzaba al 45,2% de la población, llegando esos porcentajes en el área rural al 87 y 75%, respectivamente, y agravándose aún más en el caso de la población indígena de las zonas rurales, donde llegaba al 89 y 78%, respectivamente. En términos de desigualdad, Bolivia presentaba en aquel año 2000 un valor para el índice de Gini⁶⁶ de 0,57, concentrándose el 45% del ingreso en el 10% más rico de la población y solo el 1% del ingreso en el 10% más pobre. Y si lo medimos por el lado

64 George Gray. *La economía boliviana más allá del gas*, PNUD, Bolivia: 2005.

65 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape). *Economía y Política Económica*, Bolivia: 2006.

66 El índice de Gini es una medida cuantitativa de la desigualdad relativa; su valor puede oscilar entre 0 (máxima equidad) y 1 (máxima desigualdad).

del consumo, cabe resaltar que el 10% más rico de los bolivianos consumía veintidós veces más que el 10% más pobre.

En el año 2003, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la prevalencia de desnutrición para niños menores de tres años fue del 24,2%. A fines del año 2005, Bolivia ocupaba el lugar 113 del discutido Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La esperanza de vida era de poco más de 64 años. El analfabetismo en adultos afectaba al 13,5% de la población. El número de médicos por cada cien mil habitantes era de 73. La desnutrición afectaba al 21% de la población boliviana entre los años 2000-2002. La tasa de mortalidad infantil era de 53 niños muertos por cada mil nacimientos en el año 2003. El informe Panorama Social de 2005, de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), identificaba que entre un 20% y un 30% de la población boliviana no disfrutaba de una fuente adecuada de agua. Más del 40% de la sociedad sufría de hacinamiento, no poseía un sistema adecuado de eliminación de excrementos y el piso de sus casas era de tierra. Entre los niños de 7 a 12 años, más del 40% no acudía a ningún establecimiento educativo. Además, entre el 30% y el 40% de la sociedad boliviana no tenía servicio sanitario ni electricidad.

Son cifras suficientes y elocuentes para constatar cómo el neoliberalismo se cebó también con Bolivia. El resultado fue un par de décadas perdidas para la mayoría boliviana, fruto de la implementación de todas las políticas económicas auspiciadas por el Consenso de Washington. Esos años solo supusieron décadas ganadas para las empresas transnacionales y para una reconcentrada oligarquía local como únicos beneficiarios de aquellas recetas, mientras que la mayor parte de los bolivianos y bolivianas veían crecer sus dificultades para poder vivir bien. El endeudamiento y empobrecimiento social marcó definitivamente esa era neoliberal que cambió definitivamente a Bolivia y a su futuro. Hasta ese momento, a pesar de las protestas que se venían sucediendo a lo largo de todo el país, ni los más optimistas podían imaginar que un cambio de época era posible, pilotado por

organizaciones sociales que habían sido excluidas del pacto por arriba, y por un presidente indígena –Evo Morales Ayma– todavía desconocido a nivel nacional a pesar de haber logrado llegar al Congreso en el año 1997, electo como diputado por Cochabamba (con el 70% de los votos), y con las siglas de un partido ya registrado: el Movimiento al Socialismo (MAS), refundado por el propio Evo en ese mismo año.

Ecuador

El modelo económico ecuatoriano, seguido históricamente hasta el año 1965, tuvo una base predominantemente agrícola. Se trató de un modelo primario agroexportador, o también conocido como modelo de crecimiento hacia afuera, en particular por la dependencia económica del país en la evolución de las exportaciones agrícolas, muy particularmente del banano. En Ecuador, el modelo desarrollista, basado en la intervención del Estado y en la sustitución de importaciones como estrategia de industrialización, había procurado tomar forma en la década de los sesenta, aunque su verdadero impulso se pretendió a partir de los años setenta gracias al auge petrolero⁶⁷, que permitía disponer de más recursos para canalizarlos en este gran reto para salir del patrón primario exportador que había condenado al país desde hacía siglos. En esos años el país fue gobernado por dos dictaduras militares hasta 1979: el primer régimen militar, encabezado por el

67 Tal como indica Francisco Guerra, “en 1967 la transnacional Texaco Gulf Oil confirma la existencia de petróleo en el Oriente ecuatoriano, la misma que ingresa a la extracción y exportación de petróleo en 1972, determinando en los años setenta un apreciable incremento de la riqueza nacional, convirtiéndose en el principal generador de divisas e ingresos fiscales. Si para 1973 las exportaciones de petróleo frente a las exportaciones totales del país representaron cerca del 50%, para 1981 dicha relación fue cercana al 68% más aun cuando el sector externo estaba estancado desde la crisis bananera de 1965” (Francisco Guerra. *Análisis del modelo económico y social ecuatoriano*, [tesis de maestría no publicada], Flacso: 2001, p. 15).

general Rodríguez Lara⁶⁸ (1972-1976, conocido como gobierno nacionalista y revolucionario), quien impulsó políticas de redistribución social moderada e intentó una reforma agraria; sin embargo, la fuerte oposición de las clases dominantes debilitó estos intentos de reforma y culminó finalmente en otro golpe militar en 1976. Este segundo régimen militar era conservador y abandonó las políticas de reforma.

Definitivamente, los años setenta fueron fructíferos en el objetivo de utilizar los recursos petroleros para una industrialización de Ecuador, que acabase con el patrón de intercambio desigual que venía sufriendo desde hacía siglos. A pesar de lo proclamado, por ejemplo, en el primer gobierno militar a través de los “Lineamientos Fundamentales del Plan Integral de Transformación y Desarrollo”, en el que se establecieron tres prioridades económicas estratégicas –industrialización, modernización agrícola y diversificación de las exportaciones–, los logros fueron mínimos en función de los desafíos marcados, y sí comienza a apreciarse con mucha fuerza la presencia de la inversión extranjera directa, en forma de grandes consorcios transnacionales (especialmente estadounidenses) como actores fundamentales de este proceso de transformación de la estructura económica residente en el país. La dependencia externa se explicaba por ese entonces, por un lado, por la vía clásica de la exportación de materias primas sin valor agregado y, por otro lado, en la participación de la inversión extranjera directa en el incipiente proceso industrializador, que tuvo mucho que ver en la generación de una importante deuda externa.

Luego llegaron gobiernos elegidos democráticamente: Jaime Roldós (1979-1981) y luego Osvaldo Hurtado (1981-1984) como sucesor, después de la muerte de Roldós a consecuencia de un accidente aéreo acerca del cual todavía hoy existen muchos interrogantes. Este no fue un hecho menor porque Roldós fue un presidente muy activo en clave geopolítica, en la reivindicación de los

68 Poniendo punto y final al período conocido como ‘el velasquismo’ (en mención a los cinco períodos presidenciales de Jose María Velasco Ibarra) en el año 1972.

derechos humanos que seguían violándose en dictaduras protegidas por algunos importantes países centrales, y también en buscar que América Latina fuera capaz de crear espacios propios, emancipados del Norte, para definir sus instancias y mecanismos para el relacionamiento regional sin necesidad de acudir a los organismos internacionales tutelados desde Estados Unidos. Después del fallecimiento de Roldós, el sucesor Hurtado nuevamente retomó la agenda internacional impuesta desde afuera y volvió a Ecuador a la senda de una inserción subordinada, tanto política como económicamente.

Desde el año 1977 en adelante, como había sucedido en tantos lugares en América Latina, la deuda externa comenzó a dispararse. Fundamentalmente, era la deuda pública externa aquella que se incrementó exponencialmente con la misma matriz de endeudamiento: esos recursos no fueron redistribuidos socialmente, sino que estuvieron más dirigidos a una minoría agroexportadora local, a una pequeña burguesía nacional que había asumido la responsabilidad (fallida) de industrializar al país y, cómo no, a las transnacionales que habían logrado participar en ese reparto del pastel. Muchas veces en forma de incentivos y otras en subsidios directos, sea como fuere, la deuda externa se constituyó en un gran peso muerto para la economía. Esta, una vez más, fue la excusa utilizada por los organismos económicos internacionales para la arremetida neoliberal. La gran crisis de la deuda aconteció en el año 1982, en pleno gobierno de Hurtado; a partir de ese entonces se comenzaron a aplicar algunas medidas en política estatal, orientadas a la apertura de la economía con el asesoramiento del FMI. Las mismas constituyeron el preámbulo de lo que posteriormente sería un largo proceso de consolidación y profundización neoliberal que se extendería hasta iniciado el siglo XXI.

En dicho recorrido es posible distinguir dos períodos: una primera fase iniciada en 1984, avivada por el gobierno de corte empresarial de Febres Cordero, dirigente del conservador Partido Social Cristiano donde resultó más fácil la implementación de muchas de las políticas neoliberales, entre las que destacaron

las siguientes: 1) liberalizar el tipo de cambio desde el primer momento; en el mismo año de su toma de posesión, la Junta Monetaria permitió que libremente se llevara a cabo un proceso de devaluación que favorecía a los exportadores; 2) liberalización de las tasas de interés, permitiendo un alto diferencial entre la tasa activa y pasiva, ideal para los prestamistas en contra de quienes necesitaban pedir prestado; 3) apertura indiscriminada del sistema financiero a favor de libre entrada y salida del capital transnacional; 4) apertura comercial, evitando así cualquier tipo de posibilidad proteccionista y apostando todo a la continuidad de un modelo primario exportador; 5) liberalización de los precios de muchos bienes básicos (la manteca, el aceite comestible, hierro, llantas y tubos); 6) privatizaciones de muchas empresas públicas con actividad en sectores estratégicos; y 7) regulación del mercado laboral a favor de la flexibilización, tal como dictaba el libreto neoliberal.

Durante este período se gobernó a base de decretos económicos, con un fuerte empeño en la reducción del gasto público en materia social; a ello se sumó la congelación del salario mínimo. También se aplicaron políticas de ajuste acordadas con el Fondo Monetario Internacional, en relación con la subida del precio de los combustibles y de los pasajes del transporte público. Poco a poco, en corto tiempo, Febres Cordero se autoproclamó como el gran adalid de las políticas de ajuste exigidas desde afuera. Después del debilitamiento de Febres Cordero, ocasionado en gran parte por la resistencia popular a las medidas neoliberales (con la pérdida de un referéndum sobre la reforma política y habiendo perdido también la mayoría en el Congreso), llegó una segunda fase que frenó en cierta medida la ofensiva neoliberal.

La presidencia de Rodrigo Borja, entre los años 1988 y 1992, supuso una suerte de paréntesis en esta época porque su propuesta venía más en la línea de un tímido programa socialdemócrata, con la intención de retomar algunos de los aspectos económicos que había defendido cuando perdiera contra Febres Cordero en las elecciones anteriores; aunque, a decir verdad, Borja dejó atrás su vieja postura a favor del Estado y de una política fiscal más

expansionista. Prefirió, finalmente, relativizar el rol del Estado en su propuesta económica; durante su mandato, sin ser una persona que encarnase la doctrina neoliberal al dedillo, expresó su fe en un modelo de economía mixta en el que convivieran la planificación estatal y la propiedad privada. Aunque sí hay que destacar la constitución de Petroecuador en sustitución de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), que logró la titularidad del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano; una filial de Petroecuador –Petrotransporte– reemplazó a Texaco como operadora del oleoducto.

Por otro lado, si bien antes, como opositor, planteaba la necesidad de renegociar la deuda con los acreedores internacionales, en su etapa presidencial era más proclive a “no entablar confrontaciones estériles con los acreedores internacionales, pero sí continuó exigiendo una reprogramación de los pagos para poder atender las necesidades internas del desarrollo, crear los excedentes necesarios y después pagar lo adeudado. Borja heredó un cuadro macroeconómico caracterizado por una inflación anual del 80%, un desempleo en torno al 15%, un déficit fiscal equivalente al 17% del PIB y la evaporación de las reservas internacionales. Frente a ello, el presidente descartó la terapia de choque y se decantó por un ajuste gradual y sostenido. Prosiguió, por el contrario, con la regulación a favor de la flexibilización del mercado laboral (que abrió las puertas a la instalación de empresas maquiladoras). En resumen, Borja no fue ni lo uno ni lo otro: ni un máximo exponente del neoliberalismo, pero tampoco logró torcerle el pulso a la hegemonía neoliberal.

La segunda fase del neoliberalismo en Ecuador vino de la mano del nuevo presidente Durán Ballén (1992-1996). Apenas iniciado el nuevo gobierno, se implementó un paquete de fuertes medidas económicas, entre las que destacaban una devaluación del 35% y el alza de los precios del combustible de alrededor del 160%, del gas en 200% y de la electricidad en 120%. Además, en este período se introdujeron importantes cambios en la legislación, que dieron el sustento jurídico para la implementación de estas reformas económicas. En 1993 se sancionó la Ley de Modernización del Estado,

marco para la liberalización económica que apuntaba a la desregulación y apertura de los mercados y, a su vez, fue el sustento legal para la privatización de las empresas públicas, en razón de lo cual se creó el Consejo de Modernización del Estado, encargado de implementarlas. La reforma a la Ley de Hidrocarburos generó que la participación en los ingresos petroleros se redujera del 90% al 33%, habiendo incluso contratos en los que se entregaba el 100% de los beneficios a la contraparte extranjera. En el año 1994 se reformó la Constitución Nacional, mediante una consulta popular que permitió introducir los cambios necesarios para seguir implementando el modelo económico en marcha.

Las consecuencias sociales de estas medidas económicas no se hicieron esperar. Ya a mediados de la década de los noventa, la enorme mayoría de la población había visto desmejoradas sustancialmente sus condiciones de vida; las cifras de desempleo y pobreza habían aumentado notablemente. La particularidad del caso ecuatoriano reside en que durante el proceso de ajuste estructural, su economía entró en la más profunda crisis de su historia. En 1999, durante la presidencia de Jamil Mahuad (1998-2000), se produjo la mayor crisis financiera de la historia del país. Como afirma Martín-Mayoral “su origen se remonta al gobierno de Durán Ballén y la promulgación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; impulsada por el FMI, esta ley disminuyó el control de la Superintendencia de Bancos sobre las entidades financieras”⁶⁹. El colapso económico de 1999 no puso fin a la larga historia de ese modelo, su desenlace fue la amputación de la política monetaria mediante la dolarización de la economía. Fue así como Ecuador perdió su soberanía monetaria y con ella a uno de los principales instrumentos de política económica para ganar competitividad en un contexto de apertura comercial. Tras la quiebra del sistema bancario y del decreto de dolarización (año 2000, durante el gobierno de Mahuad), se produjo una sustancial salida de

ecuatorianos al exterior en un proceso migratorio sin precedentes en la historia del país.

Entre los años 1997 y 2000 se sucedieron cinco gobiernos. La crisis política, la protesta social y los conflictos entre las élites acarrearón la más profunda crisis socioeconómica de la historia del país; posteriormente, llegaron más acuerdos con el FMI y sus clásicos planes de ajuste en la economía, de la mano de Lucio Gutiérrez, candidato que se había aliado con Pachakutik –el brazo político del movimiento indígena–, a quien traicionó poco después de llegar al poder en 2002. Finalmente, Lucio Gutiérrez fue destituido en 2005, en medio de una fuerte ola de protestas y movilización social en la capital del país, conocida como “La rebelión de los forajidos”.

Los resultados de los paquetes de medidas de ajuste neoliberal en el país fueron desastrosos. Entre 1990 y 2000 el índice de Gini pasó de 0,456 a 0,555, expresando un marcado crecimiento de la desigualdad en la distribución del ingreso; durante el quinquenio 1995 y 2000, la cantidad de personas bajo la línea de pobreza se duplicó para pasar de 3,9 a 9,1 millones de personas –de un total de trece millones de habitantes–, lo que representa, en términos porcentuales, un crecimiento dramático del 34% al 71% de la población en situación de pobreza; la pobreza extrema pasó del 12% al 31%⁷⁰. Para el mismo período (1995-2000), la tasa de mortalidad en menores de cinco años era de 45,6 por cada mil nacidos vivos⁷¹. En el año 2000, el analfabetismo alcanzaba al 8,4% de la población mayor de 15 años y, por el contrario, el gasto público en educación era del 1,5% del PIB (el más bajo de toda América Latina para ese año).

En cuanto al desmantelamiento del Estado, si bien en el caso ecuatoriano no fue tan extremo como el caso boliviano, una cifra

69 Fernando Martín-Mayoral. “Estado y mercado en la historia de Ecuador”, *Nueva sociedad*: 2009, p. 129.

70 Alfredo Serrano y Alberto Acosta. “Ecuador frente a la crisis económica internacional: un reto de múltiples aristas”, *Revista de Economía Crítica*: 2009.

71 Comisión Económica para América Latina (Cepal). *El panorama social de América Latina*, Santiago de Chile: 2003.

habla por sí sola: en el año 2004 Ecuador poseía una presión fiscal del 10,38%, muy por debajo del promedio para América Latina (13,58%), lo cual supuso una importante limitación respecto al papel redistribuidor del Estado. La inversión social en Ecuador para ese mismo año representaba solo el 6,6% del PIB, muy por debajo del que poseía en los años noventa (8%); era el segundo porcentaje más bajo de toda América Latina, siendo el valor promedio 15,9% para el período 2004-2005. En el año 2006, casi el 40% del presupuesto general del Estado se destinó al servicio a la deuda.

El panorama social de América Latina⁷² muestra los siguientes resultados para el año 2006, justo antes de la llegada de Rafael Correa a la Presidencia de la República, después de las décadas perdidas provocadas por el neoliberalismo:

- El índice de Gini para Ecuador en el año 2006 fue de 0,507.
- El 19,3% de la población poseía un ingreso inferior al 50% de la mediana.
- El 10% de la población más pobre solo disponía del 1,2% del total de ingresos.
- El decil más rico poseía 14,8% más de ingresos que el que tenían los cuatro deciles más pobres, que era del 14,8%.
- La tasa de pobreza y de indigencia eran de 36,8% y 13,6%, respectivamente.

Estos son únicamente algunos datos que permiten demostrar el empobrecimiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano y el consecuente descrédito de los partidos políticos tradicionales durante las últimas décadas del siglo xx. A esos indicadores sociales, cabe añadir que el crecimiento económico durante el período 1980-2000 fue negativo (-14% de PIB). Se mire por donde se mire, sea en perspectiva macroeconómica o desde un enfoque microsocioal, los resultados de la larga noche neoliberal son propios de décadas perdidas también para el caso ecuatoriano.

72 Según estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). *El Panorama Social de América Latina*, Santiago de Chile: 2008.

Apuntes sobre el resto de América Latina

El resto de América Latina también continuó por la senda de la hegemonía neoliberal; se fueron poniendo en práctica al pie de la letra las políticas económicas recetadas por el Consenso de Washington. Cada país con su especificidad, pero todos al unísono orquestado e impuesto desde el Norte. El recetario ya es por todos conocido y las consecuencias también; no es necesario repetir aquí el conjunto de lineamientos económicos y políticos que sirvieron como eje vertebrador de la época neoliberal en cada rincón de América Latina, con la excepción de Cuba, que seguía con su modelo económico socialista. El resto de países respetaron los mandamientos neoliberales a rajatablas; nadie se salió del guion. A lo sumo, algunos se anticiparon tal como estaba encomendado por los poderes económicos y financieros centrales.

Ya hemos dicho que Chile y Argentina iniciaron su periplo neoliberal en dictadura cívico-militar; uno con Pinochet y el otro con Videla. En el primero de los casos, en Chile, *El ladrillo* fue el programa económico traído desde la Universidad de Chicago e implementado a favor de una minoría, mientras la mayoría fue excluida: el modelo chileno se constituyó en una bandera-ejemplo del programa neoliberal por antonomasia. En Argentina, la dictadura cívico-militar (1976-1983) puso en marcha un plan que sentó las bases para la transformación del modelo económico, orientándolo a favor del sector financiero en detrimento del sector industrial-productivo⁷³. Así, se produjo un proceso amplio de desindustrialización que luego sería profundizado durante la década de los noventa, echando por tierra los intentos desarrollistas llevados a cabo en el país desde la década del treinta por gobiernos de distintos signos políticos; esto fue acompañado

73 La reforma financiera fue uno de los principales ejes de ese programa económico, liderado por el ministro de Economía, Martínez de Hoz, con el sustento jurídico de la sanción de la Ley 21.526 de Entidades Financieras.

de un endeudamiento excesivo por razones únicamente financieras⁷⁴. En ambos países, tanto en Chile como Argentina, al acabar las dictaduras el neoliberalismo no terminó; todo siguió tal como había estado marcado previamente. En Chile, con el gobierno de la Concertación, una gran coalición de partidos políticos que puso fin al gobierno de Pinochet en 1988⁷⁵ prosiguió por el camino neoliberal, sin grandes cambios en la política económica.

En Argentina, luego de la dictadura, el primer presidente de la etapa democrática fue el radical Alfonsín, quien procuró frenar tímidamente el neoliberalismo pero le fue absolutamente imposible. El enorme endeudamiento externo heredado, la desestabilización económica de los sectores corporativos, las corridas bancarias y el estallido hiperinflacionario, provocaron que el presidente terminara anticipadamente su mandato en 1989, entregando el poder a Carlos Menem, quien de inmediato daría inicio a un proceso de privatizaciones y profundización neoliberal sin parangón en la historia económica argentina, que se extendería, con resultados desastrosos en lo económico y en lo social, hasta la crisis de finales de 2001 durante el gobierno de la Alianza (1999-2001).

Otros dos importantes países en la región, por su tamaño, Brasil y México, tuvieron historias similares en cuanto a la profundización de la época neoliberal. En el caso de Brasil, el neoliberalismo también tuvo su protagonismo durante todos los años ochenta y noventa. Su cara más visible, paradójicamente, se evidenció durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (durante dos mandatos, de 1995 a 2003), quien había sido uno de los principales precursores de la teoría cepalina de la dependencia en décadas anteriores. Anteriormente, el fin de la dictadura en 1985 no supuso, ni mucho menos, un gran cambio en la política económica:

74 Al finalizar la dictadura, el endeudamiento público se incrementó en un 364%.

75 Gobernó en Chile desde 1990 a 2010, hasta que venciera Piñera; en la primera etapa (1990-2000) gobernaron los demócratacristianos, y luego venció el Partido Socialista desde 2000 hasta 2010 (Lagos y Bachelet).

el neoliberalismo comenzó a introducirse paulatinamente en Brasil, hasta que Cardoso se consolidara como el gran valedor de este orden económico hegemónico. Después de años de las viejas políticas neoliberales, en 1999 Brasil sufrió una importante crisis económica con el consecuente deterioro de los indicadores sociales.

México también inicia su periplo neoliberal desde inicios de los años ochenta. El período presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) podría ser considerado como arranque de la historia oficial neoliberal en el país azteca, por su empeño en las privatizaciones de las grandes empresas estatales. Esta estrategia tuvo continuidad con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000). El Partido Revolucionario Institucional (PRI) había olvidado ya, por aquel entonces, de dónde procedían sus siglas y cuáles eran los principios fundacionales de ese movimiento político. Todo se hacía según fijaba el mandato neoliberal; seguramente, en este sentido, el hecho más emblemático de esta inserción neoliberal a nivel mundial fue la firma, en 1994, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) entre México, Estados Unidos y Canadá, que afianzó el rol subordinado de esta potencia latinoamericana a favor del orden hegemónico neoliberal, en detrimento del vivir bien de la mayoría social.

Perú tampoco sorteó la senda neoliberal. Desde la dictadura vino implementándose el modelo neoliberal, continuó con Alan García (en su mandato 1985-1990), y luego la llegada de Fujimori en el 1990 solo tuvo que profundizarlo. Desde sus primeros pasos, Fujimori decidió llevar a cabo una importante devaluación de la moneda, provocando así un proceso hiperinflacionario que tuvo efectos muy negativos sobre el poder adquisitivo real de la mayoría ciudadana. Introdujo rápidamente a Perú como satélite subordinado en el sistema financiero internacional; se llevaron a cabo significativas privatizaciones de las compañías del Estado a manos extranjeras. Al finalizar los años noventa, el 60% de la población estaba desempleada o subempleada; el resto de indicadores económicos y sociales habían sufrido también las consecuencias de las políticas neoliberales.

Colombia fue otro país más que se sumó a la fiesta (para unos pocos) neoliberal. Aunque venía poniendo sus cimientos desde antes, fue en 1990 cuando asumió la presidencia César Gaviria Trujillo, uno de los pistoletazos de salida para consolidar el modelo neoliberal: con la excusa de su famosa frase “Bienvenidos al futuro” se dio inicio al final del modelo proteccionista de la economía, para darle paso a otro modelo aperturista al servicio del capital transnacional; desde ahí en adelante comenzó una seguidilla de firmas de tratados de libre comercio con los países centrales, privatizaciones de las empresas públicas y políticas de ajuste para la mayoría social a favor de una minoría que seguía enriqueciendo. Un dato es clave para entender las consecuencias de este modelo: la tasa de desempleo pasó de 10,6% a fines del 1990, a 20,3% en el año 2001, después de una década neoliberal.

En Uruguay, con Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle como máximos exponentes de este modelo; en Paraguay, el dictador Alfredo Stroessner fue quien inició el modelo neoliberal, seguido en la misma línea económica por Andrés Rodríguez Pedotti y Juan Carlos María Wasmosy Monti; en Centroamérica, El Salvador, con el partido conservador Arena a la cabeza, también llevó a cabo la misma tarea; en Guatemala, Honduras y Costa Rica también seguían sucediéndose presidentes que tomaban el mismo sendero. Así podríamos seguir enumerando lo que fue aconteciendo a lo largo y ancho de todo el continente bajo el manto neoliberal; casi nadie se salió de este guion bien marcado desde los organismos económicos internacionales. Los efectos fueron realmente parecidos, después de recetas similares. Los salarios de los trabajadores habían caído estrepitosamente en este período⁷⁶; la riqueza se fue concentrando cada vez más en menos manos. El comercio internacional era cada vez más desfavorable para América Latina, sopor-tando unos términos de intercambio desigual muy negativos. El capitalismo por desposesión se fue imponiendo en los confines de

la región. Las condiciones de vida de la mayoría social empeoraron en forma aparentemente irreversible; la pobreza y la indigencia crecían a medida que las políticas económicas neoliberales fueron implementándose. La deuda social estaba omnipresente para la mayoría del pueblo latinoamericano. Esa es la América Latina de entonces, la América Latina de la época neoliberal: el tiempo de las décadas perdidas.

76 El ingreso de los trabajadores había disminuido en un 25% durante la década de los noventa en América Latina (Bell Lara y Luisa López. *La cosecha del neoliberalismo en América Latina*, Cuadernos Clacso: 2004).

CAPÍTULO 2. LA ÉPOCA GANADA: MÁS QUE UNA DÉCADA GANADA

A lo largo de los últimos años, en este siglo **xxi**, la región ha sufrido innumerables cambios en cuanto a nuevos gobiernos, nuevas políticas económicas y novedosos espacios de articulación económica y política entre sus países, que eran impensables a fines del siglo **xx**. Durante los años ochenta y noventa el neoliberalismo se había extendido como sistema hegemónico en América Latina, instaurando un modelo de capitalismo altamente expropiador, por desposesión, practicado en democracias aparentes sin democratizar la economía, sino todo lo contrario.

En casi toda la región, los gobiernos nacionales impulsaron en esta etapa modelos económicos basados en la privatización de los sectores públicos estratégicos, favoreciendo así la externalización de los excedentes económicos (fugados de los países de origen hacia el exterior). Además, fueron frenados e interrumpidos los incipientes procesos de industrialización en aquellos países donde existieron, de tal forma que se fue orientando la economía hacia el sector financiero. Se fueron generando modelos económicos donde no cabía la posibilidad de desarrollo con soberanía nacional, eternizando el rol subordinado del continente como abastecedor de materias primas para el mercado mundial. La reprimarización

económica fue constante y, en consecuencia, el patrón de acumulación siguió concentrando riqueza en muy pocas manos agroexportadoras.

Todo esto, al contrario de lo que sostienen muchos autores, se llevó a cabo no mediante la desaparición del Estado, sino achicándolo hasta un mínimo indispensable tal que garantizase la seguridad jurídica que permitiera privatizaciones, la firma de tratados bilaterales de inversión, los acuerdos de libre comercio, y disponer de fuerzas represoras que impidieran brotar cualquier protesta de esa suerte de viejo topo que deseaba irrumpir en las calles, en las plazas. Con ello, el neoliberalismo logró consolidar en América Latina un modelo estatal que excluía a la gran mayoría de la población, siendo, por el contrario, una fiel representante de un sector mínimo privilegiado. Este Estado, ilusorio, aparente, no aglutinaba a la sociedad en términos culturales ni sociales, no se orientaba a incorporar los hábitos ni las prácticas políticas de la sociedad, sino que por su misma configuración dejaba al margen a amplias capas de la población que no tenían participación real en la vida política. El nuevo Estado neoliberal, en esta forma, se correspondía más con un intento de crear una sociedad/país oficial en vez de atender a la sociedad/país real.

Las profundas crisis económicas y políticas en las que quedaron sumidos gran parte de los países de la región, tras el auge neoliberal y las crudas consecuencias sociales que originaron las políticas de (des)ajuste estructural y los planes de (des)estabilización implementados para (supuestamente) paliarlas, fueron el contexto/terreno fértil para el surgimiento de un amplio ciclo de movilización social que se extendió a lo largo y ancho del continente. El rechazo al régimen neoliberal de acumulación se hizo sentir con fuerza desde el campo popular y se tradujo en la emergencia o reactivación de movimientos sociales que tomaron un cariz reactivo respecto al neoliberalismo.

En este contexto de fuerte efervescencia y movilización popular, impulsada por la falta de horizontes de vida de las grandes mayorías de la población, en varios países de América

Latina comenzaron a emerger inéditos proyectos de corte alternativo al paradigma neoliberal hegemónico a nivel mundial. La región fue cambiando de signo político durante la primera década del 2000, con la notable excepción de Venezuela, pionera en el “giro a la izquierda” en el continente, tras la asunción de Chávez en 1999. Fueron muchos los pueblos que decidieron elegir otra opción y muchos los gobiernos que propusieron otro pacto, en lo político, en lo económico y en lo social. Un pacto más real, de verdad, donde las mayorías sí contaban como tal en la toma de decisiones; un pacto de mayorías que deseaba poner punto y final a esos viejos pactos por arriba, ignorando todo lo que pasaba abajo.

Hugo Chávez en Venezuela es fruto de ello; Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, también. Los tres propusieron nuevas constituciones, dando cauce al empuje de los poderes constituyentes deseosos de refundar sus países; a partir de ahí se continuó con novedosas políticas que procuraron, a velocidad forzada, revertir el patrón capitalista neoliberal, tan concentrador de riqueza como distribuidor de pobreza. Otros países en la región también se sumaron a esta fórmula, pero en versión *light*, sin salirse de la estructura heredada, sin disputar el Estado originario, pero sí procurando cambiar todo lo posible dentro del viejo marco constitucional; fue el caso de Lula en Brasil y Kirchner en Argentina, también hay que incluir en esta línea a Mujica en Uruguay (luego sucedido por Tabaré Vázquez) y el breve paso de Lugo en Paraguay, hasta que fue destituido por el golpe parlamentario. Tanto para unos como otros gobiernos que iniciaron significativos procesos de cambio (unos más que otros), el nuevo pacto en el menor plazo posible tenía un nítido objetivo: desendeudar socialmente a gran parte de la población, esto es, buscar cómo lograr una década ganada para los mismos que habían sufrido más duramente las fallidas décadas perdidas del neoliberalismo.

De esta manera, tras dos largas décadas de hegemonía neoliberal en América Latina, la emergencia de estos nuevos proyectos políticos dio inicio a un cambio de época para el continente más desigual del planeta. Son muchos los países que se han embarcado

en este difícil pero necesario camino de comenzar a construir una nueva organización económica, política, social y cultural, de fuerte profundización democrática, de ampliación de los derechos sociales en medio de un mundo globalizado. Esta tarea no fue ni es hasta el momento, en absoluto, una labor sencilla: desandar décadas de redistribución regresiva del ingreso, de dilapidación de los recursos nacionales, de pérdida vergonzosa de la soberanía económica y política, de profundo endeudamiento social, con un Estado ausente para la gran mayoría de la población entregada al desempleo y la pobreza extrema.

Era imperioso, para romper con la hegemonía neoliberal, mover las fichas del tablero político y recuperar el rol del Estado, revalorizando su potencial como organizador de la vida política, sacándolo del relego al que lo sometió el neoliberalismo al presentarlo como ineficiente, incapaz, burocrático, y contraponiéndolo en el imaginario con el sector privado, capaz de generar ganancias y administrar de manera técnica y eficiente. Es decir, una vez asaltado el poder, el desafío abierto para los proyectos progresistas pasó a ser la puesta en marcha y consolidación de modelos de gobierno que demostraran poder gestionar el Estado e implementar políticas públicas, cuyo horizonte fuera diametralmente opuesto al que había hegemonizado las décadas precedentes. Transformar el Estado después de haber alcanzado el poder se constituyó en un ejercicio altamente complejo, y más si se tiene en cuenta que no solo había que hacer al Estado más eficiente, sino que había que conseguir eficiencia al mismo tiempo que se transformaban las urgentes condiciones de vida de la mayoría social.

Aún con la pesada herencia neoliberal a cuestas, en buena parte de América Latina se consiguió en esta década poner en marcha un proceso de construcción de un nuevo Estado y de un nuevo poder, que incluyó el empoderamiento de amplias capas sociales antes marginadas. El primer gran hito de este proceso fue la incorporación de los sectores subalternos a la vida política; los altos niveles de aprobación y el apoyo popular que se traduce en inmensos caudales de votos en los gobiernos de buena parte de los

países de la región se explica, en parte, porque se trata de fuerzas políticas surgidas desde los márgenes de la institucionalidad partidaria tradicional, al calor de las luchas sociales en contra del empobrecimiento y la exclusión neoliberal. En esta década, movimientos y organizaciones sociales de diversas identidades y estructuras organizativas, ahora articulados por nuevos Estados comandados por gobiernos con fuertes liderazgos, como es el caso de Lula en Brasil, Chávez en Venezuela (ahora Nicolás Maduro), Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, y Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, se fueron imbricando en un novedoso tejido social y político, consiguiendo poner freno a la profunda fragmentación social y política heredada de las décadas perdidas neoliberales.

Estos años de siglo XXI suponen una década ganada para América Latina porque el Estado volvió a estar en el centro de la discusión política y social, ya no como problema sino como espacio privilegiado –aunque no el único– de la política y la vida en común. Su retorno reabrió gran parte de las cuestiones históricas de los procesos emancipadores: su relación con la construcción de comunidad, con la democracia, la representación y la libertad, su articulación territorial y la diversidad étnica, su transformación, la institucionalidad y los equilibrios de fuerzas, su autonomía relativa o sus inercias; sobre todo, puso en agenda política su condición de campo de disputa.

Por otra parte, América Latina consiguió en esta década poner fin a la larga noche neoliberal, al menos en otros dos sentidos. En primer lugar, incorporando a los sectores populares no solo a la vida política, sino generando inclusión social en términos económicos. Se produjo al tiempo una suerte de reenclavamiento positivo de las grandes mayorías de la población, enraizado en el desendeudamiento social que generaron las políticas de inclusión y de redistribución de la riqueza, con la consecuente ampliación de derechos para amplios sectores sociales. Tras más de una década de gobiernos progresistas en la región, los indicadores sociales y económicos muestran resultados más que favorables en términos de la redistribución del ingreso, que impactaron favorablemente

en los sectores populares; pero el impacto no solo fue positivo en estos sectores, sino que a la vez se produjo una gran ampliación de los sectores medios, que vieron multiplicadas sus opciones de ascender socialmente en un contexto de bonanza económica. Crecimiento económico con creación de empleo, reducción de la pobreza y la indigencia, políticas sociales de transferencias condicionadas, orientadas a los sectores más marginados, y una marcada reducción de la desigualdad, forman parte de un cuadro inédito en la historia que solo fue posible por el impulso de procesos políticos fuertemente respaldados por la mayoría de la población.

En segundo lugar, estos proyectos en marcha con significativos procesos de cambio (nuevamente, unos más que otros), encabezados por líderes de una gran densidad política, consiguieron desplazar el eje del debate político instalando una agenda discursiva de fuerte oposición al neoliberalismo. En términos simbólicos, lograron transformar el lenguaje político, instalando en la sociedad ideas contrahegemónicas que funcionan tensionando la realidad política, al abrir el horizonte hacia propuestas de corte emancipador. Nuevos debates y nuevas prácticas políticas, con mayor participación de la ciudadanía, se pusieron en marcha al calor de la recomposición del tejido social que se encontraba profundamente fragmentado como herencia del neoliberalismo. De esta forma, los proyectos de cambio en curso en la región consiguieron ir instalando en el debate político nuevos consensos y un nuevo sentido común; disputaron el lenguaje del neoliberalismo, cuestionando a la vez estructuras profundas arraigadas socialmente como parte de la hegemonía de los sectores liberal-conservadores, mantenida –aunque no sin interrupciones– desde la conformación de los Estados nacionales.

En este contexto novedoso en el campo discursivo, el panorama intelectual y cultural latinoamericano se encuentra marcado por un cierto repliegue defensivo –que no desaparición– de estas ideas liberal-conservadoras y de los proyectos de las élites históricas, que están experimentando importantes mutaciones para adaptarse a los nuevos consensos en despliegue, anudados a partir de la crisis

del modelo neoliberal y basados en una nueva centralidad política de “las masas” como sujeto político. Pero a pesar de este repliegue o necesidad de adaptación a un campo discursivo que se observa en los sectores conservadores, marcado por la centralidad de algunos de los términos, valores y propuestas progresistas, el alcance relativo de la hegemonía del relato postneoliberal tiene enormes desafíos por delante para acometer su sedimentación en una sociedad civil y una estatalidad que consoliden los cambios en marcha.

En dicho escenario, tan desafiante como complejo, el proyecto latinoamericano comenzó a transitar una primera fase de construcción unitaria que a la vez dio lugar a tensiones de disputa interna. A partir de ese momento conviven en la región, en términos políticos, gobiernos que están apostando a la construcción de transiciones hacia alternativas al capitalismo (tal es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia); otros que han continuado y perfeccionado el modelo neoliberal-conservador (como el caso de Colombia, Perú, México, Costa Rica, Chile y Panamá); y unos terceros países que, sin proponer explícitamente superar el orden capitalista, promueven cambios profundos fundados en principios de justicia social, independencia económica, soberanía política, la revalorización del papel del Estado, la primacía de los derechos humanos en la construcción de la política pública, y la recuperación de la política como práctica para intervenir y transformar la realidad (como son los casos de Brasil, Argentina, Uruguay, El Salvador, Nicaragua y Paraguay (durante el gobierno de Lugo).

La tensión política está a la orden del día en esta nueva América Latina. En el marco de una contraofensiva de los sectores reaccionarios en la región, con el apoyo de EEUU, se sucedieron intentos fracasados de desestabilización y golpe de Estado en Bolivia (2007-2008), Ecuador (2010), Venezuela (2002, 2014, 2015). En Paraguay, Fernando Lugo fue destituido por un golpe parlamentario en 2012, perpetrado por el propio partido por el que había sido electo presidente –el liberal–, luego de haber gobernado el país desde 2008 y habiendo representado una esperanza fallida para el pueblo paraguayo, en términos de las escasas políticas de cambio estructural

implementadas. A este complejo escenario hay que añadir también intentos fallidos de democratización de la estructura económica, a partir de medidas adoptadas por gobiernos que habían sido elegidos originalmente bajo signos políticos conservadores; tal es el caso de Honduras, que derivó en un golpe de Estado en 2009, luego de que el presidente constitucional Manuel Zelaya, electo por el Partido Liberal, impulsara medidas económicas tendientes a la redistribución en favor de las mayorías e intentara convocar una asamblea constituyente.

En este giro político en marcha, en este nuevo ciclo histórico de transformaciones políticas y económicas, fueron emergiendo inéditos espacios de integración que comenzaron a cambiar el marco de relacionamiento supranacional a nivel regional. Entre estos nuevos intentos, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) ha sido, sin lugar a dudas, uno de los nuevos lugares de encuentro para que algunos países de la región comiencen a construir un nuevo paradigma político-social-económico que establezca principios de justicia a la hora de relacionarse, ya sea en el ámbito comercial, cultural, social y financiero y, a pesar de haber llegado tarde, ahora acertadamente también en el ámbito productivo. No puede haber integración plena y virtuosa, si no existe integración productiva con base en la complementariedad; solo así, con esa estrategia, se podrán llevar a cabo planes nacionales de desarrollo que sean sostenibles, soberanos, emancipadores y que logren verdaderamente intervenir en las razones estructurales de las asimetrías económicas.

En este mismo sentido, también cabe destacar la aparición de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2008, como nuevo espacio de convivencia de todas las naciones suramericanas que supone un avance significativo en la ardua tarea de emanciparse desde el Sur de muchos condicionantes que venían imponiéndose desde el Norte; a ello hay que sumar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que desde el 2010 se erige en el nuevo referente de discusión política para todos los países de

América Latina sin necesidad de tener que acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero el proyecto de integración en curso, liderado por el bloque progresista, no está exento de tensiones y contradicciones al interior mismo de la región.

En dirección opuesta al ALBA y también a ese otro Mercado Común del Sur (Mercosur), reformado (al menos parcialmente, en comparación a lo que fue ese mismo espacio en la época neoliberal) con la presencia de Venezuela y futura entrada de Bolivia, se constituyó en abril de 2011 la Alianza del Pacífico, un bloque comercial integrado por Chile, Colombia, México y Perú, con Panamá, Costa Rica y Guatemala, en proceso de incorporación, y Uruguay y Paraguay como países observadores, entre otros. Esta alianza, estimulada por EEUU, se configura como una nueva organización supranacional que aglutina a un grupo de países, cuyos gobiernos hacen propias las bases del proyecto neoliberal-conservador y asumen su subordinación a las directrices del país del Norte, lo cual abre nuevos desafíos para el proyecto emancipador.

En suma, los últimos años, esta década ganada para buena parte de América Latina en términos de desendeudamiento social y expansión democrática, se han caracterizado por un desplazamiento vigoroso de las relaciones comerciales, productivas, sociales, culturales y políticas. Este proceso abierto a partir de la emergencia de gobiernos que pusieron en marcha proyectos políticos de corte progresista posibilitó, en primer término, un corrimiento del eje político-social-económico en buena parte de la región, lo cual se expresa principalmente en la recuperación del rol del Estado. Estos países consiguieron romper con la hegemonía neoliberal que había configurado un Estado excluyente al servicio de los intereses económicos de los sectores dominantes.

Además, en segundo lugar, el cambio de época latinoamericano supuso una ruptura con la descomposición social heredada del neoliberalismo, cuyo signo fue una reconfiguración del tejido social que a su vez funcionó como freno a la progresión del empobrecimiento de las mayorías y en contra, igualmente, de la renuncia a la soberanía nacional, iniciando así un cambio de rumbo político

en el que se consiguió implementar políticas de redistribución de la riqueza, mejorar las condiciones de vida populares apostando por la inclusión de las grandes mayorías, y recuperar la soberanía nacional en sectores estratégicos. En tercer lugar, este cambio de época latinoamericano se expresó en la emergencia de iniciativas populares que marcaron la reconfiguración de los términos de la participación social, incorporando a la disputa política a amplias capas de población invisibilizadas, provenientes de sectores antes excluidos.

Por último, no podemos dejar de enfatizar que el cambio de época en la región no puede pensarse desconectado de lo que ha venido sucediendo en el mundo en plena transición geopolítica y geo-económica. Lo que pasa afuera está íntimamente interconectado con lo que sucede región adentro, y viceversa. Por ello, este tercer capítulo comienza con una panorámica global de cómo el mundo ha ido reconfigurándose en otro orden multipolar, con nuevos actores, con otros relacionamientos, incluso con un cierto tambaleo de las viejas categorías de centro, semiperiferia y periferia, que tan útiles fueron en el siglo xx para entender a este globo terráqueo.

Luego de esta amplia panorámica se trata, en los siguientes subapartados, de aproximarse a ese eje-núcleo, a ese centro de gravitación del cambio de época en América Latina, para conocer con más profundidad lo que ha supuesto la década ganada –en contraposición a las décadas neoliberales– en cada caso, cómo se fueron gestando, consolidando y, hasta cierto punto, todo lo que se ha logrado hasta el momento de irreversibilidad. Para ello se abordan analíticamente los procesos políticos de Venezuela, Ecuador y Bolivia como casos paradigmáticos que sustentan el cambio de época, una época ganada para la mayoría social, dando cuenta de las principales conquistas y profundizando en los núcleos centrales de cada proceso, así como también en sus contradicciones internas que marcan el horizonte de los desafíos por venir (algo que será abordado centralmente en el último capítulo). No obstante, a lo largo de este capítulo se tiene en cuenta no solo

lo que ha venido aconteciendo en el seno de este bloque de países, sino también algunos elementos imprescindibles que ocurrieron en otros países y que ayudan a enriquecer la fotografía geopolítica de lo que es la región latinoamericana en pleno desarrollo, en este cambio de época.

Seguidamente, en la última sección de este capítulo se analizan las transformaciones en los modos de articulación entre los países de la región que dieron paso a un inédito proceso de integración supranacional, que ubica a América Latina cada vez más como un polo de poder propio en un contexto de reacomodamiento geopolítico a nivel mundial, y también la dimensión bolivariana, esto es, una suerte de Consenso Bolivariano que ha sustituido realmente a ese viejo Consenso de Washington y que permite fijar un nuevo espacio regional que sirve como músculo para garantizar los procesos nacionales de cambio y una reinserción más soberana e inteligente en el sistema-mundo.

El contexto geo-económico del siglo XXI. La reconfiguración del sistema-mundo entre la hegemonía del neoliberalismo y la transición hacia un mundo multipolar

Los albores del siglo XXI en el epicentro del capitalismo mundial: EE.UU. y UE

El mapa económico a inicios de siglo XXI en el mundo capitalista se explica sustancialmente como resultado de los últimos veinte años de la gran hegemonía, lograda gracias a la todopoderosa revolución política-económica-social neoliberal. Un orden geo-económico complejo y heterogéneo se ha venido gestando en pleno movimiento en estos últimos años. El neoliberalismo se ha dotado de un orden globalizador con capacidad para implementar un paradigma único, con base en un pensamiento único, en cuanto a las relaciones económicas internacionales que ya no son exclusivamente de índole comercial y productiva, sino que ahora las finanzas también tienen un papel primordial. Este nuevo

orden interdependiente, de interconexión global, de múltiples aristas y dimensiones, se constituye como una suerte de magma en gran medida incontrolado, en el que todo se reacomoda de otra manera, en el que han irrumpido nuevos topes, nuevos países, que comienzan a reinsertarse bajo otros criterios en el nuevo mapamundi económico. No todo está bajo control fuera de los centros de poder, aunque el capitalismo neoliberal así lo pretenda mediante su hegemonía cultural, política, social y económica. Se trata de una gran paradoja de este nuevo orden globalizador neoliberal: el neoliberalismo necesita de un fuerte expansionismo para aumentar aceleradamente la tasa de ganancia del capital, pero ese mismo prerrequisito ha sido el terreno fértil para que fuera emergiendo un nuevo mundo multipolar en el que cada vez aparecen, con más fuerza, nuevos bloques que precisamente frenan el patrón de acumulación del mismo neoliberalismo.

A inicios de siglo *xxi*, la Unión Europea (UE) se dotaba del Tratado de Niza con el objetivo de apuntalar el nuevo diseño de sus estructuras institucionales para continuar: a) forjando hacia adentro un proceso de integración neoliberal, de distribución geográfica de funciones económicas, conllevando a un patrón de intercambio desigual intrarregional, con una periferia (España, Portugal y Grecia) al servicio de los intereses de los países centrales, y b) seguir siendo polo económico central pero siempre como actor secundario, cediendo a Estados Unidos la manija para ordenar el mapamundi. El gran objetivo de la nueva UE era constituir un gran espacio económicamente mercantilizado, donde el capital tuviera mejores opciones para hacer negocio. El reto principal estaba por llegar en 2002 con la entrada de una moneda única –el euro– que amputaría la diversidad de políticas monetarias nacionales y, por ende, extirparía la soberanía cambiaria y monetaria a cualquier país que se atreviera a poner en jaque lo determinado por los poderes económicos y financieros en Europa y en el mundo.

El bienestar social pasaba a ser una cuestión de segundo orden porque los temas salariales, de derechos básicos, de distribución de la riqueza, de inclusión, no eran objeto prioritario de ninguno

de los textos que se venían pergeñando en su seno. El Tratado de Maastricht ya había declarado los criterios de convergencia para formar parte de esa Unión Europea; todo era cuestión de convergencia nominal (vía tasa de interés, inflación, déficit fiscal y deuda pública), sin interés alguno por todo lo que tuviera que ver con la economía real. Europa, a inicios de siglo *xxi*, seguía decidiendo ser una pieza más del engranaje sistémico del nuevo orden global del capitalismo neoliberal, y dejar que el Estado de Bienestar siempre fuese una variable de ajuste en función de las exigencias de la tasa de ganancia del gran capital.

Al otro lado del océano, por su parte, Estados Unidos inició su siglo *xxi* con cambio de gobierno: el candidato republicano George W. Bush venció en noviembre del 2000 al candidato demócrata Al Gore, por la mínima en el voto electoral⁷⁷ y con mucho ruido de fraude⁷⁸. La llegada de Bush al poder supuso una mayor *neoliberalización* del modelo neoliberal ya vigente. Su propuesta era aún más purista, si cabe, en el marco de los mandamientos neoliberales en materia económica, a favor de la reducción de impuestos (para las capas más ricas del país), privatización de la salud (eufemísticamente llamado modernización de la salud) y, eso sí, la reducción del gasto público no aplicaba para algunas corporaciones privadas. Bush defendió desde su primer momento que el modelo suyo no podría ser tan regulador e intervencionista como el de Clinton. La discusión se centró más en la disputa entre una versión *light* vs.

77 En el sistema estadounidense de las elecciones presidenciales, el voto electoral determina el ganador y Bush ganó esta cuenta, aunque Gore recibió el mayor número de votos (la llamada “votación popular”). Bush ganó con 271 votos electorales, contra los 266 de Gore; aunque este ganó en número de votos, Bush había sido el vencedor en 31 de los 50 estados. Ninguno de los candidatos recibió la mayoría de los aproximadamente 105 millones de votos emitidos. Bush recibió 50.456.002 votos (47,9%) y Gore 50.999.979 (48,4%). El resto de los votos se los repartieron los candidatos minoritarios.

78 Se hallaron irregularidades en las papeletas que se usaron en ciertas zonas de Florida, a la sazón, el estado que decidiría las elecciones. Tras varios recuentos, el Tribunal Supremo dictaminó que el vencedor había sido Bush.

versión *hard* del neoliberalismo, pero sin salir del consenso neoliberal⁷⁹. Bush anunció la necesidad de un conjunto de medidas económicas de corte liberalizador, esto es, privatización de algunos sectores rentables y estratégicos al servicio de los grandes intereses corporativos e industriales. El Presidente electo asumió el 20 de enero de 2001 y, a pesar de que el poder económico contaba con tener todo bajo control neoliberal, un significativo hecho inesperado para buena parte del mundo alteró el escenario político: el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, que ocasionó la muerte de cerca de tres mil personas y más de seis mil heridos, debido a la destrucción del entorno del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono. Desde ese momento en adelante todo cambió en el mundo en materia de seguridad nacional y seguridad democrática, como así anunciara el propio presidente Bush, para llevar adelante una serie de guerras e invasiones en todo el mundo, cometiendo un sinnúmero de injusticias y atrocidades absolutamente contrarias a cualquier espíritu democrático.

Bush no modificó la centralidad de la política económica respecto a Clinton; ambos tenían un centro de gravedad común. Pero sí hubo algo que los distinguió: Bush puso prioritariamente su mirada en otro enclave del mundo, después de haber sido golpeado en su propia casa en septiembre del 2001, con la intención de reapropiarse de todo el petróleo ahí en juego para seguir disponiendo de la materia prima más importante del mundo. Esto no quiere decir que los ojos del poder estadounidense no estuvieran también atentos a América Latina⁸⁰, pero sí es cierto que la intensidad relativa fue distinta respecto a la etapa anterior.

79 Para más detalles en torno al consenso neoliberal entre Bush y Clinton, léase el capítulo "El Consenso neoliberal: Bush, Clinton, Greenspan y el FMI", en: Robert Pollin, *Los contornos del declive*. Akal, Madrid: 2005.

80 Nunca dejó de haber estrategia de Estados Unidos contra América Latina. Según entrevista a Burbach, este ubica dos fases en la política de la administración de Bush hacia el hemisferio: inicialmente, fue controlada principalmente por los neoconservadores bajo la figura dominante de Otto Reich, nominado en 2002 como subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos. En 2003 se produjo un cambio cuando Thomas

Estados Unidos estaba confiado en disponer del control suficiente y absoluto gracias al nuevo orden económico impuesto por el Consenso de Washington en toda América Latina, por lo que era imprevisible cualquier vuelco de esta situación controlada. Esta sensación de satisfacción por los deberes hechos en las décadas pasadas hizo que si bien la política beligerante contra la región latinoamericana no cesara ni un segundo, el siglo XXI se iniciara con relativa calma para Estados Unidos cuando miraba para América Latina, pensando que toda la economía (y también la política instituida) estaba bajo absoluto dominio y control.

Las políticas económicas comerciales en materia de inversiones, en materia financiera, implementadas en la época neoliberal e iniciadas a fines de siglo XX, habían aparentemente conseguido que la soberanía del Sur estuviera residiendo en muchos consejos de administración de las grandes transnacionales con sede en algún país del Norte. Los Estados en América Latina se habían convertido en células, todas ellas interconectadas e interdependientes a partir de las políticas económicas direccionadas desde los centros de poder del capital transnacional. La deuda externa fue paulatinamente convirtiéndose en deuda eterna. Los sectores estratégicos en la región pasaban a manos de estrategias ajenas, con otros objetivos que nada tenían que ver con lo que era provechoso para la mayoría de los ciudadanos en cada país. El neoliberalismo logró así conseguir que hubiera un sector público reducido, pero lo suficientemente consistente para poder dar seguridad jurídica a los beneficios empresariales gracias a ir cediendo soberanía. Las políticas de ajuste y los programas de estabilización para América Latina, según el neoliberalismo global, habían ya ordenado tan significativamente la casa latinoamericana a su antojo a inicios del siglo

Shannon asumió la conducción de los asuntos hemisféricos. La llegada de Negroponte como secretario de Estado adjunto tenderá a consolidar esas posiciones, y con el rango de segundo de a bordo de Condoleezza Rice, él tiene el poder de imponer su perspectiva por sobre la de Shannon, en la política hacia América Latina (Sally Burch. "La política de Bush hacia América Latina", *América Latina en movimiento*, 2 de marzo de 2007, en: <http://www.alainet.org/es/active/16141>

xx, de tal manera que todo parecía en calma para hacer irreversible la hegemonía de esta nueva modalidad del capitalismo. Todo estaba en calma, salvo un pequeño detalle que se escapó de muchos manuales ortodoxos de economía: la variable no considerada fue el apetito por lo imposible del pueblo latinoamericano.

La conformación de un nuevo orden mundial: entre la hegemonía del neoliberalismo y la transición hacia un mundo multipolar

Un hecho característico del neoliberalismo, ya incuestionable a inicios del siglo XXI, es la financiarización de la economía capitalista mundial. El capitalismo neoliberal en auge desde fines de los años setenta había desestimado la economía real, industrial, como la primera fuente de creación de riqueza y, por ende, de obtención de rentabilidad económica. El sector financiero fue considerado desde ese entonces como aquel que tiene más ventajas para crear más riqueza monetaria, no necesariamente real, siendo posible crear el máximo valor de capital ficticio en el más corto tiempo posible y, a partir de ello, poder obtener la máxima tasa de ganancia. Bajo este esquema, además de disponer de ventajas en materia de ganancia, también se disfruta de otra gran ventaja: el coste laboral es mínimo. Los conflictos laborales prácticamente son inexistentes, pues no se necesitan trabajadores en este nuevo sector y, además, no se requiere de recursos naturales. Es propicio para ser considerado como algo propio de una dimensión extraterrestre que se ha constituido en los últimos años como cuestión de absoluta prioridad en lo terrestre. Es una fórmula mágica de crear rentabilidad infinita, que no está sometida a ninguna restricción de un mundo finito. Todas estas prerrogativas fueron determinantes para fomentar durante esta época neoliberal una economía especulativa, de casino, que crea valor ficticio a partir de apuestas y expectativas, con multitud de operaciones infinitesimales.

La financiarización galopante, un fenómeno consolidado a inicios del nuevo siglo, genera nuevos rentistas; rentistas contemporáneos

del siglo XXI que justifican en una gestión virtuosa del riesgo su mayor virtud, aunque detrás de ello ocultan que el riesgo es gestionable a su favor, cuando se goza de una posición dominante gracias al poder económico e informativo. Además, el riesgo es compensado –y mucho– por aquello que los organismos internacionales dominantes llaman ‘seguridad jurídica’, que en la mayoría de las ocasiones no es más que una forma legal que ata mediante su letra pequeña cualquier contingencia derivada de la incertidumbre. La financiarización realmente nunca tuvo un riesgo considerable que asumir porque todos remaban a su favor, tanto leyes como organismos, como estructuras, como gran parte de la política económica que permitía que las finanzas no estuvieran al servicio de la economía real y productiva.⁸¹

Ese rentismo financiero que se convirtió en esencia constituyente del neoliberalismo, además forjó un entramado interdependiente de relaciones entre países, entre los capitales privados transnacionales que entran y salen sin control alguno, sin tener que dar explicaciones, sin necesidad de rendir cuentas. La imposibilidad dentro del neoliberalismo de democratizar el poder económico reside en la imposibilidad de controlar una valorización ficticia, proveniente de ese nuevo mundo económico financiarizado. El neoliberalismo creó así una condición más de irreversibilidad que dificulta volver atrás (incluso a un capitalismo industrial desfinanciarizado), o salir hacia delante por fuera de este laberinto financiarizado.

De este modo, la dependencia económica no se explica ya solo por las relaciones comerciales ni productivas; no contemplar esta dimensión es obviar una cuestión fundamental de la gran estructura económica neoliberal, característica a inicios de este siglo XXI. Un dato habla por sí solo en este sentido:

81 El 90% de los movimientos de capitales a inicios de siglo XXI (calculados en dos billones de dólares) son no productivos.

... entre 1986 y 2004 el PIB mundial se multiplica por tres, y las exportaciones de bienes y servicios por cinco, mientras que el crecimiento de los mercados financieros es muy superior: el intercambio medio de divisas se multiplica por nueve, las emisiones internacionales de títulos por siete, los préstamos bancarios internacionales en términos netos por ocho, y el mercado de productos derivados (contando solo los bursátiles) por noventa y ocho; entre 1980 y 2001, la capitalización bursátil sobre el PIB pasa del 50% al 152% en EEUU, sube del 8% al 103% en Francia y del 9% al 61% en Alemania; los beneficios obtenidos por las empresas financieras sobre los del sector no financiero saltan desde aproximadamente el 15% en la década de los cincuenta a casi el 50% en 2001.⁸²

Otra característica de este mundo económico del siglo XXI es la estructura económica capitalista altamente concentrada. La reconfiguración del capital privado postcrisis, de finales de los setenta, evolucionó hacia una mayor concentración: más capital pero en menos manos. Por ejemplo⁸³, en 1998 las diez principales empresas, según su sector, controlaban el 35% de la industria de productos farmacéuticos, el 70% en materia informática y el 86% en las telecomunicaciones; los países desarrollados controlan el 97% de todas las patentes del mundo. No solo era el mundo financierizado aquel que se construía a base de máxima concentración, sino que todos los sectores de la economía real caminaban en la dirección contraria a una progresiva democratización. El poder económico se reorganizó en una gran red, pero con pocos nudos gordianos, que son los verdaderos controladores del resto de los movimientos. Este dato es absolutamente elocuente: el conjunto de las quinientas mayores empresas multinacionales tienen ingresos conjuntos superiores al

82 Bibiana Medialdea. *Subdesarrollo, capital extranjero y financiarización. La trampa financiera de la economía brasilera*, [tesis doctoral no publicada], Universidad Complutense de Madrid: 2010, p. 123.

83 Para más detalles, véase el capítulo de Susana Mas Mok, "Transnacionalización de la economía mundial", [documento de trabajo 09/04], La Habana, Centro de Investigaciones de la Economía Mundial: 2004.

PIB de todo el bloque de la UE o de Estados Unidos; estas quinientas multinacionales han pasado de representar el equivalente del 38% al 43% entre 1996 y 2006.⁸⁴

Además, esta concentración se caracteriza por otro rasgo distintivo: el capital es cada vez más transversal a los diferentes sectores económicos: apenas van quedando pocos grandes capitales especializados en un determinado sector económico. El gran capital va fagocitando a los pequeños capitales, controlando así desde los grandes sectores estratégicos (como petróleo, telecomunicaciones, eléctrico, otros) como aquellos sectores también estratégicos de bienes agroalimentarios, manufactureros, y otros del cada vez más emergente sector de servicios. Se produce un proceso acelerado de fusiones entre unas y otras empresas, que comienza a constituir una nueva fotografía de la dispersión del capital privado. La economía capitalista que había venido desarrollándose en el siglo pasado transita hacia una nueva matriz estructural, que tiene como pilares a pocas pero grandes transnacionales que se denominan empresas sistémicas, esto es, aquellas que sostienen el nuevo sistema.⁸⁵

A partir de este escenario, pensar en otra economía posible obliga necesariamente a afrontar la realidad de una economía dominante, capaz de tener presencia preeminente en todos los países, que acaba contaminando el comportamiento de la economía real. De hecho, el siglo XXI llegó en medio de una gran tormenta financiera, la denominada 'burbuja punto com' que hace referencia al período de crecimiento en los valores económicos de empresas relacionadas con el campo de Internet, gracias al bucle especulativo

84 Joan-Eugeni Sánchez. *El poder de las empresas multinacionales*, [ponencia presentada en X Coloquio Internacional de Geocrítica]: 2008.

85 De hecho, años después, surgió un impactante estudio acerca de la red mundial del capital que es controlado por muy pocas manos. Los autores del estudio son Stefania Vitali, James B. Glattfelder y Stefano Battiston, investigadores de la Universidad de Zurich (Suiza), quienes publicaron su trabajo el 26 de octubre de 2011 bajo el título "La red de control corporativo global" (*The Network of Global Corporate Control*), en la revista científica *PlosOne.org*, pero que fue censurado años anteriores por la Universidad Sonoma State de California.

que tuvo lugar entre 1997 y 2001. Este fenómeno económico atrajo la creación acelerada de un nuevo grupo de compañías basadas en internet, designadas comúnmente ‘empresas punto com’, que buscaban máxima rentabilidad no tanto por su actividad económica, sino a partir de prácticas especulativas que revalorizaran su capital ficticio. Todo ello acabó con lo que se conoce como el ‘estallido de la burbuja punto com’⁸⁶ que tuvo un efecto notable sobre muchas economías occidentales donde el capital se había intoxicado por haber acudido en masa a una actividad económica que no tenía base real que la sostuviera y, rápidamente, como golondrinas financieras, acudieron a otro lugar que les volviera a permitir seguir comiendo o, como buitres, salieron en busca de otro país a punto de morir.

Otro elemento clave para caracterizar el mundo económico del siglo *xxi* es la brecha tecnológica que constituye un factor determinante en relación con la fijación de los términos de intercambio a nivel global. Lo tecnológico, que realmente es atribuible a la nueva economía del conocimiento, se convierte en este nuevo siglo en un patrón clave de la neodependencia importadora. Los sectores industriales que generan más valor agregado (siempre bajo una lógica de valor de cambio y no de valor de uso), en esta nueva modalidad de capitalismo neoliberal, son aquellos que se caracterizan por ser altamente tecnológicos. Los bienes intensivos en tecnología están desde su nacimiento articulados en estructuras oligopólicas, en manos de pocas firmas privadas. La era del conocimiento tan aplaudida por el neoliberalismo escondía realmente lo que se pretendía imponer: una era desigual del conocimiento.

El conocimiento en el marco del neoliberalismo no es un bien común, sino que está sometido a las reglas mercantiles marcadas por la propuesta económica; es propiedad de unos pocos, siendo usado como nuevo patrón de dominación para el siglo *xxi*. Así,

86 El índice Nasdaq (Bolsa electrónica de Nueva York) cayó estrepitosamente; pasó en poco tiempo de estar cotizando por encima de cinco mil puntos (año 2000) a estar por debajo de mil en un período menor de dos años.

cualquier intento de industrialización de países periféricos, dirigido por los organismos internacionales, está sujeto a insumos intermedios de alto componente tecnológico que son actualmente propiedad de los países centrales. Esta nueva dependencia tecnológica es otro sostén añadido para edificar el nuevo orden económico mundial, dificultando cualquier salida del laberinto globalizado de orden neoliberal.

Otro punto clave para entender el complejo orden geoeconómico de siglo *xxi* es el avanzado proceso de fragmentación geográfica de la producción mundial, iniciado décadas atrás. Fue conveniente –en términos de rentabilidad para la tasa de ganancia del capital privado– dispersar los procesos productivos a nivel mundial, con fábricas en cada lugar del mundo, todas ellas participando parcialmente según cometido prefijado, encadenadas por un control de la propiedad privada de la transnacional. De esta manera, el neoliberalismo planificó un modelo de producción postfordista, supranacional, que delegó en cada lugar aquello que necesitó con el menor coste posible para apropiarse del máximo valor agregado disponible. Las transnacionales captan, de esta forma, el máximo valor de la renta generada en muchos países y aprovechan justamente su hegemonía tecnológica para asegurarse de que nadie pueda copiar este proceso productivo de generación de mucho valor agregado, que requiere un alto volumen de recursos. A su vez, el neoliberalismo también negó la transferencia tecnológica; el saber hacer, ese llamado *know-how* tecnológico, es para unos pocos porque solo así se aseguran de que los otros no puedan hacer lo mismo, y de esta forma le generan un marco de competitividad desleal a partir de la vieja teoría de las ventajas comparativas.

Sin embargo, en ese escenario de control aparentemente total sobre el nuevo mundo económico fueron surgiendo, con mucha fuerza, algunos países que comenzaron a participar de ese proceso tecnológico sin tanta obsesión por innovar, sino, más bien, queriendo al menos hacer lo que otros ya hacen, aprovechando que venían siendo lugares de destino de muchas empresas transnacionales. En esto, China e India, así como otros países asiáticos, comenzaron a

posicionarse como nuevos centros tecnológicos. Se dedicaron, a su vez, a insertarse desde una mejor posición en las nuevas cadenas globales de valor. Aprovecharon ese cierto desprecio que el epicentro capitalista venía teniendo por la economía industrial, por la economía real, para ser ellos los que comenzaran a llevar a cabo procesos de industrialización, conformando nuevos polos económicos. Se propusieron buscar el eslabón más débil del nuevo orden neoliberal para buscar cómo tener una posición más ventajosa, tanto en materia productiva como tecnológica y también monetaria. Sobre este último punto, por ejemplo, China supo dedicarse a ser el nuevo socio privilegiado de Estados Unidos en sus relaciones comerciales, vendiéndole nuevos productos y convirtiéndose en el nuevo centro de acumulación de reservas en dólares del mundo. El elevado déficit comercial de Estados Unidos tiene su contrapartida, hoy en día, en la enorme cantidad de reservas en dólares que China acumula.

Pero no solo fue China la que se fue creando su propio espacio, el denominado nuevo Consenso de Beijing, creó sus nuevas reglas de relaciones comerciales, con nuevas fórmulas de inversión extranjera, creando nuevos lazos con economías periféricas, y muy especialmente, aplicando su nueva diplomacia financiera; fueron otros países, otras regiones, que vieron en el neoliberalismo un proceso hegemónico, pero que a la vez iba dejando muchos cabos sin atar. Se iban abriendo grietas a lo largo de ese tupido manto que venía construyendo el orden neoliberal mundial.

El neoliberalismo no había calibrado con precisión cómo el nuevo mundo globalizado podría controlarse de punta a punta. Las ventajas de la expansión imperial del sistema de producción también tendrían efectos contraproducentes; dicho de otro modo, aunque por un lado había grandes beneficios para las empresas transnacionales por ordenar la producción a partir del sistema-mundo, aprovechándose del empobrecimiento salarial de la periferia (y deslocalizando cualquier potencial conflicto laboral). Por otro lado, esta transnacionalización de la producción conllevaba a que los países centrales tuvieran una nueva dependencia de la

periferia. Estos nuevos países emergentes, que ya no constituyen la periferia del siglo xx, aprovecharon el hecho de disponer de un papel protagónico en materia de la producción mundial y donde, poco a poco, también acudían las inversiones extranjeras, y así los capitales financieros internacionales.

Estados Unidos comenzó entonces un proceso de endeudamiento externo elevado como forma de sostener un nivel alto de consumo interno. El *american way of life*, en cuanto a niveles de consumo, no venía de la mano ni de subida de salarios ni de producción adentro, sino más bien se venía sosteniendo mediante un sistema crediticio sin base material en cuanto a ahorro interno, y con alto déficit comercial debido a un significativo aumento de los niveles de importación. El capital transnacional productivo migraba a mucha velocidad a los nuevos centros de producción que se instalaban en el mundo, para dar viabilidad a este nuevo proceso de segmentación geográfica de la producción mundial. Así comenzaba también a generarse un nuevo patrón de concentración en menor escala del capital privado, situándose en nuevos enclaves. Esto fue dando lugar, progresivamente, a otro mapamundi económico; fueron desencadenándose nuevos polos económicos emergentes que se van conformando lentamente.

En este sentido, si bien recién iniciado el siglo xxi aún no se hablaba del grupo del Brics⁸⁷ (Brasil-Rusia-India-China-Suráfrica), ni de BRIC (sin Suráfrica), ya había comenzado a aparecer un grupo de países con mucho potencial de crecimiento, con una nueva posición en el sistema-mundo, y con oportunidades de relacionamiento muy fuertes entre ellos para que en futuro próximo pueda ser un grupo a considerar en la nueva transición geoeconómica. China es, probablemente –por su historia, sus dimensiones geográficas, su potencial económico, su planificación y su

87 El origen del acrónimo Brics tiene lugar en el año 2001; se debe fundamentalmente al economista Jim O'Neill, quien acuñó el nombre para agrupar a los principales mercados emergentes, aunque los países no asumieron la idea oficialmente hasta 2008.

estrategia⁸⁸—, el país considerado como cabeza de dragón de todo ese grupo de países que ya son emergidos, más que emergentes. Esa nueva multipolaridad emergente, o ya emergida, aún padece mucho de la hegemonía neoliberal que no acaba de desvanecerse en su totalidad. Por ejemplo, en el plano de lo tecnológico todavía existen grandes diferencias entre un grupo de países centrales y estos otros países. Sin embargo, estas diferencias se van achicando a medida que comienzan a desarrollarse políticas estatales de ciencia y tecnología, que atraen a talento humano para copiar-pegar tecnologías, e incluso para llevar a cabo algunas políticas de innovación tecnológica en aquellos países con más tradición en esta materia.

A pesar de que este proceso progresivo de transición geoeconómica se venía forjando desde los primeros años del nuevo siglo, el *establishment* económico dominante se apresuró a explicar todo desde el ángulo que más le interesó destacar: todo se debe a una cuestión de transitar hacia el capitalismo global. Así es como explicaron muchas instituciones internacionales⁸⁹ las posibilidades de emergencia mundial de este grupo de países en materia económica; según esta tesis, todo se debía a cómo el capitalismo tenía que reproducirse expansivamente. El objetivo, desde los centros

hegemónicos de decisión es que la inserción de los nuevos polos sea siempre a través de criterios capitalistas y, de ser posible, desde criterios acordes al neoliberalismo. Bajo esta premisa defendida desde la hegemonía, se procura evitar poner en peligro el ordenamiento capitalista centro-periferia, que tan buenos resultados había venido dando desde hacía siglos a la tasa de ganancia del capital privado transnacional. La idea era bien sencilla: el capitalismo neoliberal, en el peor de los escenarios, podría aceptar la emergencia de una semiperiferia, pero nunca alterando la condición hegemónica de Estados Unidos ni del resto de países centrales (como es el caso de la Unión Europea). De lo contrario, de ponerse en riesgo ese orden económico mundial, entonces sí que sería necesario tomar medidas correctivas urgentes para evitar que el mundo transitara de una hegemonía unipolar a un nuevo mundo multipolar.

Así, a diferencia del largo siglo xx⁹⁰, el hasta el momento corto siglo xxi comienza mostrando una hegemonía con algún síntoma de tenue agotamiento y de dificultad, ante nuevas situaciones en las que ha perdido el control del mapa geoestratégico. Es anticipado proclamar el desmoronamiento de esa hegemonía, pero algún atrevido autor⁹¹ ya manifiesta que el siglo xxi está en marcha con una dominación sin hegemonía. Estados Unidos, aún dominador del mundo, afronta este nuevo siglo a sabiendas de que el mundo comienza a dejar de ser tan monolítico para transitar hacia una creciente fragmentación multipolar, de nuevas alianzas selladas, que en algunas situaciones evitan pasar por el visto bueno ejercido por los órganos de control de los países centrales y sus respectivos organismos transnacionales. Ese lento pero progresivo reordenamiento geopolítico a nivel mundial no impide que la hegemonía neoliberal siga estando vigente en cualquier rincón del planeta

88 El desafío que China planteaba para el futuro a medio plazo es político y económico, no militar, esfera que quedaría reducida a la autoprotección. En esta línea se sitúan las declaraciones del presidente Hu Jintao en 2004 al defender la emersión rápida y pacífica, reflejada en la doctrina de los 4 noes (a la hegemonía, a la fuerza, a los bloques y a la carrera de armamentos) y los 4 síes (generar confianza, reducir las dificultades, desarrollar la cooperación y evitar la confrontación). De hecho, a lo largo de la historia, China no ha llevado a cabo una política expansiva y agresiva con sus vecinos, habiendo cambiado poco sus fronteras. Ello es acorde con la falta de interés de los estados de Asia oriental desde el siglo xvi de construir imperios extensos, en competencia mutua y a lanzarse a una carrera de armamentos comparable a la europea.

89 El texto más importante quizás, desde el *establishment* económico, es *La tesis BRIC*, defendida en el ensayo *Dreaming with BRICs: The Path to 2050*, que reconoce que Brasil, Rusia, India y China han cambiado sus sistemas políticos para abrazar el capitalismo global (Goldman Sachs. "Dreaming with BRICs: The Path to 2050", *Global Economic Papers*: 2003).

90 Expresión tomada del indispensable libro de Giovanni Arrighi para entender qué sucedió a lo largo de todo el siglo xx (Giovanni Arrighi. *El largo siglo xx. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época*, Akal, Madrid: 1999).

91 El mismo Giovanni Arrighi lo manifiesta en esos términos. *Op. cit.*

con contadísimas excepciones; sin embargo, el siglo XXI camina con esta incertidumbre –cada vez más defendida por autores heterodoxos⁹²– acerca de la posible transición geoeconómica hacia un mundo multipolar, en el que el Brics tendría un rol fundamental, pero también otras regiones emergentes del Sur económico, como es el caso de América Latina.

La aceleración de la transición geoeconómica postestallido financiero

No es posible caracterizar este siglo XXI sin acercarse a lo que supuso la mal denominada crisis financiera mundial del 2008, que no fue financiera sino una crisis orgánica, integral, del funcionamiento del capitalismo, con múltiples aristas: económica, política, cultural, social, ecológica. La eclosión en los centros de poder del capitalismo financiero (EEUU y Europa) funcionó como catalizador, profundizando los movimientos en la reconfiguración del sistema económico mundial.

La crisis sistémica que atraviesa el capitalismo en su versión neoliberal tuvo su detonante financiero en ese momento, pero lo financiero no puede ser concebido como la raíz estructural de la crisis, sino que debe ser visto como consecuencia de un orden mundial capitalista, hegemónico y dominante, que continuamente, a lo largo de toda su historia, ha demostrado la incapacidad para sostener su propia estabilidad. La apuesta al mundo financierizado estalló por los aires: la economía financiera capitalista gozó de plena autonomía para proceder como quisiera y sin dar explicaciones, ni siquiera a la economía real capitalista. El capitalismo, adoptando la forma neoliberal, fue favoreciendo la tremenda expansión de la intermediación financiera, con un fuerte aumento

92 Wallerstein es uno de los autores que se manifiesta anticipadamente sobre la progresiva decadencia de la hegemonía económica de Estados Unidos y la apertura a una nueva situación geopolítica con la emergencia de nuevos polos (Immanuel Wallerstein. “La debilidad de los Estados Unidos y la lucha por la hegemonía”, *Monthly Review*: 2003).

de los activos financieros de los intermediarios como porcentaje del PIB⁹³: en Estados Unidos el porcentaje es de 306% en 2007; en la eurozona es de 507% en 2008⁹⁴. El nuevo orden económico capitalista, a partir de la propuesta neoliberal, impuso el mundo financierizado como escondite ideal para oxigenar y reimpulsar la tasa de ganancia del capital. La reorganización económica real capitalista quedó definitivamente atada, sometida y subordinada a la dictadura de la economía financiera; sin embargo, las finanzas tuvieron vida propia, autonomía plena. Lo trascendental, por tanto, había dejado de ser únicamente si el jugador marcaba un gol en el terreno de juego; ahora lo verdaderamente primordial reside en las apuestas sobre quién meterá el gol.

Este desplazamiento de la centralidad económica –la real por la financiera–, como parte esencial del capitalismo en su modo neoliberal, además de otros rasgos característicos (por ejemplo, la producción fragmentada mundialmente), explican más orgánicamente la crisis. A las consecuencias de este modelo muchos le siguen llamando crisis, porque así evitan explicar las causas estructurales del sistema capitalista, ahora en modalidad neoliberal. La jerarquía financiera en el modelo económico capitalista no vino determinada por una imposición extraterrestre; fue el mismo capital, que solo es uno, el que optó por esta vía, porque en un primer estadio Estados Unidos, como país hegemónico, apostó en la nueva era neoliberal a reactivar su economía a través de un fuerte consumo pero sin ahorro interno, esto es, aumentar el consumo de la población estadounidense no por aumento del salario real, sino a través de un sistema crediticio anclado en modelo financiero

93 Véase Xavier Vives. *Information and Learning in Markets: the Impact of Market Microstructure*, Princeton University Press: 2010.

94 Según las estimaciones del propio Banco Mundial, el sector financiero global alcanzó un tamaño de 255,9 billones de dólares en 2011, esto es, 3,7 veces el PIB mundial; si añadimos a esto que el valor de los derivados financieros y las operaciones extrabursátiles poseen un valor para el mismo año de 407 y 605 billones de dólares respectivamente, la relación entre economía financiera y economía real es de 18,1 veces a favor de la primera.

especulativo, irreal, ciertamente ficticio. Así se fue tejiendo esa maraña financiera que comenzó con crédito fácil para todos, sin que ello tuviera contraparte en la economía real.

El caso de la vivienda fue el más llamativo de todos y el que atrajo la atención porque suponía unas jugosas tasas de ganancia. ¿Cómo vender a la población sin ingreso, sin trabajo, sin propiedades?⁹⁵. Mediante créditos y préstamos que los bancos concedieron a todo riesgo, porque este riesgo que se asumió en su activo luego lo terminaron revendiendo (por tanto, pasando a ser pasivo), gracias a una economía global interdependiente y financiarizada. Y fue así como surgieron los llamados activos tóxicos o bonos basura: son papeles-deudas que muestran un valor nominal a partir de una opción de cobro a futuro, sin saberse realmente si tal cobro se llegará a realizar o no, si la persona tendrá capacidad real o no de pagarlo, si habrá riqueza real que sostenga esos endeudamientos. De esta manera, quedaron intoxicados los balances contables de las entidades financieras, muy alejados de lo que verdaderamente iba ocurriendo en las economías reales.

El neoliberalismo permitió esta política de entronización de las finanzas, que desmaterializa parcialmente la economía real y que solo en contadas dosis requiere a las mayorías como objeto de crédito de consumo (o hipotecario). Así, el ajuste neoliberal por la vía salarial se compensa con el desajuste financiero, que pretende sustituir salarios por crédito para que el efecto riqueza no decaiga e incluso aumente. Se logra crear una esfera ficticia, inmaterial: la financiera y todas sus operaciones derivadas, para ajustar en la esfera económica material y real. Esto explica la crisis: lo financiero es consecuencia y no causa de nada; de esta manera, afirmar que la crisis económica mundial es una crisis financiera, por culpa de las hipotecas *subprime* o hipotecas basura, es decir demasiado poco de lo que pasó.

La economía neoclásica, aquella que beben los denominados “expertos”, hegemónica en la academia, en las revistas académicas,

95 Se llamó por ello ‘Teoría Ninja’, por las siglas en inglés de: *no income, no jobs, no assets* (no ingreso, no trabajo, no propiedad).

se ha empeñado en explicar la crisis de esta forma tan miope, reduccionista, parcializada, sin querer observar la integralidad del funcionamiento metabólico del capitalismo; por ello, considerar que la quiebra de Bear Stearns (importante banco de inversión) en junio de 2007, de Fannie Mae y Freddie Mac (dos principales entidades hipotecarias norteamericanas) en julio 2008, de Lehman Brothers (cuarto banco de inversión norteamericano) en septiembre de 2008, son las razones de la crisis, es iniciar la casa por el tejado sin saber qué se colocará en el suelo como cimiento. Luego, afirmar que hubo efecto contagio porque el capitalismo neoliberal es absolutamente interdependiente, y más aún en el plano financiero, es decir una verdad a medias porque se evita explicar las causas reales estructurales de toda esta explosión financiera.

A partir de ahí, después de la eclosión financiera los caminos tomados por los centros de poder no fueron exactamente los mismos; Estados Unidos se fue por un camino y la Unión Europea por otro. El primero se dedicó a aplicar una suerte de keynesianismo regresivo o, como diría Kotz⁹⁶, de capitalismo corporativo, de salvataje a favor de algunas corporaciones, de socialización de pérdidas de algunas empresas claves para sostener el edificio del capitalismo global, acompañado de una política de relajación cuantitativa, de emisión monetaria por encima de sus propios límites establecidos, comprando muchos bonos basura, evitando el riesgo para el capital privado, y así, estabilizando al propio sistema capitalista pero con recetas llamadas parcialmente heterodoxas, propias de las denominadas palomas en la Reserva Federal.

Al otro lado, el otro epicentro de la explosión fue la Unión Europea, que también se dedicó a hacer salvataje público del sector bancario privado, de tal forma que la deuda privada de la banca privada pasó a ser recatalogada como deuda pública del sector público. Así fue como se sostuvieron a flote las entidades financieras sistémicas (tal como las denomina el propio lenguaje

96 Véase David Kotz. “The Financial and Economic Crisis of 2008: a Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism”, *Review of Radical Political Economics*: 2009.

hegemónico); en cambio, a diferencia de la reserva federal, el Banco Central Europeo apenas participó en compras de bonos basura (hasta el año 2015), de tal manera que el desajuste financiero fue realmente afrontado a partir de un endeudamiento público, principalmente de los Estados de la periferia europea. La política obligada para la periferia europea fue la siguiente: gastar los recursos públicos disponibles para salvar a la banca, al mismo tiempo que hundía a la mayoría social inmersa profundamente en una década perdida que aún perdura.

Con ese telón de fondo, habiendo transcurrido casi una década desde el *crash* financiero, la transición geoeconómica se fue acelerando a gran velocidad. Si bien es cierto que la ralentización económica post 2008 se hizo notar en todas partes del mundo, también es cierto que esta desaceleración fue muchísimo mayor en los países centrales que en el resto de bloques emergentes. Las tasas de crecimiento económico, de intercambio comercial, de ritmo de inversiones en los países del Brics, y también en América Latina, fueron más positivas que en el resto del epicentro del capitalismo mundial; además, la reducción del desempleo, la reducción de pobreza y desigualdad, y las mejoras sociales, también gozaban de mejor salud en los nuevos polos económicos que en Estados Unidos y Europa. Este nuevo escenario ciertamente permitió que hubiera incentivos reales para que las alianzas internacionales geopolíticas y los niveles de interconexión económica entre los nuevos polos emergentes, sin necesidad de pasar por los países centrales, fueran creciendo y consolidándose a marcha forzada.

En suma, este siglo *xxi* no está resultando nada proclive para la inalterabilidad de la hegemonía de Estados Unidos (con su satélite, la Unión Europea). El orden globalizador neoliberal ha sido incapaz de evitar la emergencia e irrupción de nuevos topes que reconfiguran una transición geopolítica hacia un mundo multipolar. Esta transformación, también geoeconómica, es de hecho incompatible con las condiciones globales que precisa Estados Unidos para sostener su extraordinario doble endeudamiento, en lo comercial (en 2014 fue un 6% más con respecto al año anterior:

505.000 millones de dólares) y en lo fiscal (asciende a 59,4 billones de dólares); si el dólar deja de ser la única y exclusiva moneda de referencia mundial, entonces el país más endeudado del mundo comienza a tener graves problemas para mantener esa forma de gestionar la economía internamente. En los últimos años, el proceso paulatino de desdolarización en la acumulación mundial de reservas hace peligrar precisamente esa posición exclusiva dominante; la participación del dólar en las tenencias de reservas mundiales pasó de representar el 71,1% en el año 2000 hasta el 60,7% en 2011; el yuan chino ya es usado como moneda de reserva en un total de cuarenta bancos centrales. A este escenario adverso también debemos sumar que: 1) cada vez es más significativo el intercambio comercial en monedas propias entre muchos países (véanse ejemplos como Rusia con China, Japón con China, y aquella prevista en el seno del Brics), 2) Estados Unidos continúa inmerso en un largo y estructural proceso de desindustrialización desde hace tres décadas, 3) las transnacionales con casa matriz en Estados Unidos han dejado de controlar monopolísticamente las cadenas globales de valor.

Por todo ello, 'a Estados Unidos no gustar este mundo' y, muy particularmente, 'no gustar esta América Latina' que conforma un pivote clave en este nuevo orden económico y político mundial. América Latina es otra y muy diferente a aquella América Latina de las últimas décadas del siglo *xx*. Esta América Latina viene viviendo un ciclo histórico de transformaciones que ha logrado avanzar enormemente en la recuperación soberana de sectores estratégicos, con especial importancia en la reapropiación de la renta de los recursos naturales. Con otra forma de hacer política económica se ha redistribuido la renta casa adentro, saldándose así buena parte de la deuda social heredada del neoliberalismo, satisfaciéndose las necesidades básicas y derechos sociales. Se constata que la economía en América Latina es otra, que ha puesto fin a las décadas perdidas neoliberales, generándose un nuevo sentido común de época que hace que la mayoría social siga eligiendo estas propuestas políticas de cambio frente a guerras económicas,

fondos buitres, agencias de calificación de riesgo, o editoriales en *The Economist* o en *The Wall Street Journal*.

Este mundo del siglo XXI ya no es aquel del siglo XX. Hace años hubiera sido inimaginable que: a) por ejemplo, a inicios del año 2015, China haya acordado una inversión en América Latina de 250.000 millones de dólares para la próxima década (en los diez años anteriores, este dato fue de cien mil); b) en el año 2014, en Brasilia, tuviera lugar la cumbre del Brics creando el Banco de Desarrollo y un Fondo de Reservas; c) Unasur esté dedicada a disponer de un nuevo árbitro regional que dirima en caso de conflictos con inversiones extranjeras directas, sin necesidad de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) (dependiente del Banco Mundial); d) las relaciones comerciales-inversiones Sur-Sur cada vez son más importantes a nivel mundial (pasó de suponer un 6% en 1985 a un 24% en 2010, mientras que el comercio Norte-Norte retrocedió al 38% en ese mismo período); en materia de inversiones extranjeras directas, las de flujo Sur-Sur ya son casi 50%, e) la construcción del canal de Nicaragua (como vía fluvial que conecta mar Caribe, océano Atlántico y océano Pacífico) se realice con participación estratégica de China, como opción alternativa frente al dominio estadounidense del canal de Panamá. Estos son simplemente algunos rasgos que describen el nuevo contexto geoeconómico que deberá ser tomado en cuenta a la hora de caracterizar el cambio de época que vive la región latinoamericana, tanto puertas adentro como en sus nuevas relaciones hacia fuera.

La emergencia del cambio en América Latina: Venezuela, Bolivia y Ecuador

Venezuela

El 4 de febrero de 1992 se produjo en Venezuela una insurrección militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, liderada por el teniente coronel Hugo Chávez. Motivos no faltaban: la pobreza

del pueblo en los barrios, en los cerros, en los campos; una democracia que no democratizaba la riqueza, sino que más bien excluía; la pérdida de soberanía e independencia, las privatizaciones a favor de unos pocos, que dibujaban un paisaje desolador para la inmensa mayoría del pueblo. La búsqueda de la emancipación de la hegemonía neoliberal era la gran razón estructural de esta difícil decisión de levantarse frente al orden constituido y establecido, servil al capital transnacional. La democracia había sido reducida a su sentido más mínimo; no había democracia real en ningún aspecto de la vida social, política ni económica del país. El Norte imponía las políticas económicas para que Venezuela se acomodara a la nueva reconfiguración mundial capitalista.

Este intento fallido de levantamiento militar, si bien fracasó en términos de la llegada al poder, fue sin duda un triunfo político que disparó la popularidad del movimiento y resultó el germen de inicio de la Revolución Bolivariana. Luego de la rebelión militar, Chávez fue encarcelado durante dos años, al cabo de los cuales comenzó un largo camino que lo llevó a perfilarse como un posible candidato para el cambio en Venezuela, con una propuesta bajo el brazo: la Agenda Alternativa Bolivariana. Ya en 1998, tras una intensa campaña electoral en la que el candidato bolivariano fue difundiendo un programa económico profundamente antineoliberal, haciendo uso de un lenguaje disruptivo que, en contraposición a la visión tecnocrática dominante, presentaba la economía como algo cercano a la gente; el 6 de diciembre el Polo Patriótico ganó las elecciones con el 56,20% de los votos, dieciséis puntos por encima del candidato opositor, que no llegaba al 40%. Así, Hugo Chávez Frías se convirtió en el primer líder de lo que sería el eje no-neoliberal de la región, que ganó las elecciones de su país en un momento histórico marcado por la hegemonía neoliberal de fines de siglo XX, cuando todo el continente mostraba una gran homogeneidad ideológica en los partidos gobernantes.

A contracorriente de esa hegemonía, el chavismo emergió en el escenario político venezolano como una nueva fuerza con un programa de gobierno profundamente antineoliberal, poniendo

fin a cuarenta años de bipartidismo en el país. Luego de décadas de gobiernos que habían favorecido la concentración de la riqueza en manos de grupos económicos dando la espalda al pueblo, Hugo Chávez llegó al poder como un representante legítimo de la grandes mayorías excluidas del país, que habían decidido poner freno a la avanzada neoliberal. Con ello, la democracia aparente del puntofijismo dio paso, después de casi medio siglo, a una democracia real: representativa, participativa, económica, social y protagónica. Los rectores de una economía de los de arriba cedieron el turno a otra economía posible: la economía humanista, popular, nacional y desarrollista, antineoliberal y bolivariana, propuesta por el nuevo presidente. Su proclamado 'Por ahora' de 1992 se convertía en 1998 en un 'ahora es cuando'.

Al tomar posesión de su cargo, el mandatario electo juró sobre una 'moribunda Constitución' y prometió dar inicio a un proceso profundo de transformación cuyo puntapié inicial y fundamental sería la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En la Venezuela de aquellos años, el movimiento popular, surgido a modo de nuevo topo irrumpiendo en el escenario político, modificó la vieja y anquilosada correlación de fuerzas políticas del pasado; la Constitución no podría seguir respondiendo a una realidad del pasado. Por eso rápidamente, el 25 de abril de 1999, apenas dos meses después de que Chávez asumiera la Presidencia, el pueblo ya estaba votando en un referéndum para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, como consulta vinculante⁹⁷ que realizó dos preguntas a la voluntad popular acerca de la sustitución o no de la Constitución de 1961 y, por consiguiente, la aprobación de las bases del funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. La mayoría del pueblo venezolano dio un respaldo absoluto a esta ruptura democrática que apuntaba a democratizar realmente la vida política del país⁹⁸, y a que se eligiera a los miembros

97 Se realizó mediante un decreto ejecutivo y después de la aprobación de la Corte Suprema de Justicia y revisión del Consejo Nacional Electoral.

98 Las preguntas fueron las siguientes: Pregunta 1: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el

representantes del nuevo poder constituyente; las elecciones no tardaron en realizarse para conformar esa Asamblea Constituyente. En julio de 1999 la mayoría fue nuevamente a favor de las filas de Chávez, obteniendo 125 asientos de 131 (es decir, el 95% del total).⁹⁹

La Asamblea Constituyente se instaló el 3 de agosto de 1999 y desde ese momento se estableció un período de seis meses para redactar la nueva Carta Magna. El nuevo poder constituyente asumía legítima y legalmente todo el poder político, dando por terminados los poderes concedidos a las instituciones constituidas y derivadas de un pacto prescripto. Después de un proceso dinámico, con mucha participación popular en la presentación y discusión de todo tipo de propuestas¹⁰⁰, se llegó a tener confeccionada la propuesta para la Carta Magna en noviembre de ese mismo año, para que luego se sometiera a referendo popular el 15 de diciembre de 1999. El apoyo nuevamente fue mayoritario: el 71,78% de los votos a favor. La nueva Constitución fue promulgada definitivamente por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de

Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?; Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha 24 de marzo de 1999, y publicadas en su texto íntegro en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.669 de fecha 25 de marzo de 1999? En la pregunta 1 el 'Sí' fue del 87,75%; a la segunda pregunta, el 'Sí' fue de 81,74%.

99 Esto es considerando que en este grupo se incluye a todos los pertenecientes a grupos tribales indígenas, y considerando que la oposición obtuvo solo seis asientos.

100 Así lo relatan personas que participaron como asesores técnicos en ese período como, por ejemplo, Rubén Martínez: "Por el Palacio Legislativo, lugar en que sesionó la Constituyente entre agosto y noviembre de 1999, pasaron todo tipo de operadores políticos y sociales: partidos políticos, asociaciones vecinales, ecologistas, organizaciones de derechos humanos, etc. Los debates constituyentes eran transmitidos en directo por la televisión" (Rubén Martínez. "El proceso constituyente: la activación de la soberanía", en: Iñigo Errejón y Alfredo Serrano. *¡Ahora es cuando, carajo! Del asalto a la transformación del Estado*, El Viejo Topo, Madrid: 2011).

diciembre de 1999, y entró en plena aplicabilidad desde el 1.º de enero del año 2000.

De esta forma, el siglo XXI en Venezuela se inició con un nuevo contrato social, político y económico para la República Bolivariana de Venezuela, tal el nombre que la Carta Magna establecía. Chávez lo había sostenido desde antes de llegar al poder: no podría haber cambio real sin cambiar el marco constitucional del que se derivaban las leyes que regulaban la vida económica del país. La Constitución vigente hasta el año 1999 cristalizaba un pacto político caducado: el pacto de las élites dominantes que excluyeron a las mayorías en el contrato social, el pacto del Punto Fijo que defendía a cualquier precio una democracia aparente sin democratización real en el terreno económico. El obsoleto marco constitucional había privilegiado y permitido la venta de la soberanía, la importación de leyes del exterior a través de Tratados Bilaterales de Inversión, la aceptación de ser arbitrado por el Ciadi dependiente del Banco Mundial, así como también había establecido facilidades para que la inversión extranjera pudiera convertirse en remesas de utilidades netas sin ningún compromiso en el país, etc.

Era magnánima la estructura legal del pasado que el neoliberalismo había conseguido penetrar en cada política económica, carcomiendo cualquier otra posibilidad; frente a ello, la Constitución Bolivariana de Venezuela recogió el espíritu del pueblo en el marco de una nueva correlación de fuerzas. Por los contenidos propios, así como por la forma de llegar a ella, muchos teóricos constitucionalistas¹⁰¹ han afirmado que esta nueva propuesta supuso la apertura de una corriente alternativa al constitucionalismo tradicional

101 Véase el artículo de Roberto Viciano, resaltando la relevancia de la propuesta en cuanto a la democracia participativa; y Antonio de Cabo, respecto a la originalidad de la nueva arquitectura institucional propuesta (Roberto Viciano. "La columna vertebral de la Revolución, el fenómeno participativo en la Venezuela Bolivariana", en: Juan Torres López, (coord.), *Venezuela, a contracorriente, los orígenes y las claves de la Revolución Bolivariana*, Icaria, Madrid: 2006; y Antonio de Cabo. "Las transformaciones institucionales", en: Juan Torres López, (coord.). *Venezuela, a contracorriente, los orígenes y las claves de la Revolución Bolivariana*, Icaria, Madrid: 2006).

y hegemónico. De ahí también el potencial creativo del proceso constituyente venezolano y lo vigoroso de su irradiación hacia el resto del continente: dicho proceso abrió un horizonte de posibilidad para la región, al instalar una agenda constituyente que daría lugar a otros procesos de refundación, como los casos de Ecuador y Bolivia, impensables pocos años antes.

Desde la perspectiva económica, la búsqueda de una nueva Constitución era una forma robusta y sostenible de afrontar la transición deseada para poner fin al neoliberalismo. Un nuevo pacto económico, plasmado en el documento político más relevante del país, sería la base sobre la cual construir la economía que Chávez venía defendiendo: nacionalista, desarrollista, humanista, bolivariana y antineoliberal. La propuesta en Venezuela en lo económico era combinar una doble velocidad en dos dimensiones esenciales: urgencia en resolver el endeudamiento social sin tiempo que perder y urgencia para cambiar la base legal, desde su raíz constitucional, para edificar una nueva estructura económica que requeriría más tiempo político y económico. La intención era dedicar el mayor esfuerzo a satisfacer necesidades básicas en calidad de derechos, como una cuestión de Estado, para que todo lo posterior se construyera desde un pueblo con alimentación, educación y salud satisfechas; por ello, el texto constitucional apuesta por una humanización integral de la política económica, algo que aunque pueda parecer obvio a ojos de no-economistas, la teoría económica neoclásica nunca consideró una prioridad.

Con este nuevo marco constitucional, Hugo Chávez comenzó a forjar una economía real centrada en el pueblo, y no un pueblo al servicio de una economía capitalista. En este sentido, la primera acción en materia de política económica de la Revolución Bolivariana, con el fin de afrontar las urgencias impostergables en las que se encontraba gran parte de la población, fue el Plan Bolívar 2000, lanzado a inicios de 1999. Este plan fue la primera pieza del complejo entramado futuro que constituirán las Misiones Bolivarianas. Se trataba de un plan cívico-militar de orientación cortoplacista, que utilizó medios y recursos de la plataforma militar para

intentar dar respuesta a las necesidades sociales de la población en situación de máxima exclusión social. Este plan fue la plataforma de relanzamiento de la política social del gobierno, buscando poner a las Fuerzas Armadas en contacto directo con las comunidades más necesitadas y modificando así el papel del Ejército, que de ahora en adelante, además de ser garante de la defensa del Estado y de las fronteras venezolanas ante cualquier intento de desestabilización del exterior, asumiría un rol activo como agente social en las problemáticas propias hacia el interior del país. En este sentido, constituyó el germen de inicio de la fusión cívico-militar que posteriormente se erigiría como un rasgo característico de la Revolución Bolivariana.

La intención por parte del Ejecutivo, innegablemente, era fortalecer los programas de desarrollo social y garantizar que los recursos destinados al sector social llegasen efectivamente a la población más empobrecida y excluida, con la mayor celeridad posible, evitando las trampas burocráticas de un Estado caduco sin tener que pasar por los miles de vericuetos remanentes de un Estado de Bienestar (en miniatura) fallido. Por ello, el Plan Bolívar 2000 comprendió un conjunto de actividades definidas como de asistencia pública, en las que se incluyeron acciones de mejoramiento, recuperación y/o construcción de viviendas, de infraestructura educativa, de reorganización del sistema de salud pública con énfasis en la atención primaria, apoyada en la organización comunitaria de la población y un programa de empleo rápido, así como acciones de beneficencia en las comunidades de pobreza crítica y extrema, que incluyeron suministros gratuitos de alimentos y de implementos básicos, entre otras acciones similares. En definitiva, este plan marcó la nueva tendencia de la construcción de un renovado Estado, no burgués, participativo, no pasivo ni distante del poder popular. Se trataba solo de un embrión, aún insignificante, de lo que después tomaría la forma de un nuevo Estado que la Revolución Bolivariana conseguiría configurar en la Venezuela del siglo XXI: el Estado de las Misiones.

Complementariamente, durante los primeros meses de gobierno, gracias a la Ley Habilitante¹⁰² promulgada el 23 de marzo de 1999, se llevaron a cabo en simultáneo un conjunto de importantes acciones económicas, de las cuales merecen ser destacadas las siguientes por su importancia estratégica:

1. Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. El principal objetivo fue organizar y unificar las distintas leyes que regulaban la producción hidrocarburífera en el país; regulando la propiedad pública del petróleo, impidiendo la privatización y estableciendo el control, por parte del Estado, de cualquier empresa dedicada al negocio del petróleo. La principal disposición estableció que la extracción del crudo debe ser competencia del Estado, al menos en un 51%, al tiempo que otorgó a Pdvsa una participación del 30% como regalía sobre los crudos extraídos en cualquier yacimiento. Anteriormente ese impuesto era del 16,7%.

2. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Tal como lo expresa su Artículo 1.º, dicha ley buscó establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa. La ley busca eliminar, además, el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Al mismo tiempo, la normativa buscó garantizar la soberanía alimentaria y finalizar la etapa de importación de alimentos y de infrautilización de los recursos agrarios

3. Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. El objeto de esta ley fue crear, estimular,

102 La nueva Constitución Bolivariana consagró como herramienta jurídica la Ley Habilitante, la cual faculta al presidente durante un plazo determinado para dictar decretos con fuerza de ley sobre las materias que considere pertinentes. Se trata de una ley que debe ser sancionada anticipadamente por las tres quintas partes de la Asamblea Nacional.

promover y desarrollar el sistema microfinanciero orientado a facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros, en forma rápida y oportuna, a las comunidades populares y autogestionarias, las empresas familiares, las personas naturales autoempleadas o desempleadas, y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, que desarrolle o tenga iniciativas para desarrollar una actividad económica, a objeto de integrarla en las dinámicas económicas y sociales del país. En este sentido, se puede observar la importante acción de creación del Banco del Pueblo Soberano, una institución del sistema microfinanciero de Venezuela con un enfoque de desarrollo soberano, social, sostenible, endógeno y humanista, y orientada a fortalecer la construcción de una nueva economía: la economía comunal.¹⁰³

4. Ley de Estímulo para el Fortalecimiento Patrimonial y Racionalización de los Gastos de Transformación en el Sector Bancario. La ley reguló las condiciones, requisitos y procedimientos que deberían cumplir para fusionarse los institutos de intermediación financiera; asimismo en dicho instrumento jurídico se definieron las modalidades de fusión permitidas. En definitiva, se procuraba tener un marco regulatorio que ordenara la reconfiguración del mercado bancario, evitando que se produjera un exceso de concentración perjudicial para los intereses del pueblo venezolano. No es un modelo demasiado ambicioso pero sigue siendo acorde a esta primera fase de mínimos en la política económica, concretamente en lo financiero.

5. Ley para la regularización y control de los arrendamientos; que declaró de interés público general, social y colectivo toda materia relacionada con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, a

tal efecto. Mediante la misma, el Estado puede implementar cualquier medida que permita desarrollar las bases y mecanismos necesarios que garanticen, a todas las ciudadanas y los ciudadanos, el goce del derecho humano a una vivienda y hábitat en condiciones dignas, que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Esta nueva política económica para la vivienda supuso verdaderamente una declaración de intenciones que persigue que la vivienda no sea un objeto cualquiera en las relaciones mercantiles, sino que ha de estar condicionada a una política pública de garantías.

El nuevo marco conceptual de la política social, además, se sustentó en una política de inversión social con notable presupuesto público: la inversión social pasó del 7,8% del PIB en 1998, al 11,8% del PIB en 2001. Esto permitió iniciar de manera decidida un camino de recuperación soberana de las riendas de la economía y una reapropiación de los sectores estratégicos por parte del Estado, posibilitando que pudiera comenzar a saldarse la profunda deuda social que en la última fase del neoliberalismo mantenía al 55% de la población bajo la línea de pobreza. Con esto queda en evidencia que la Revolución Bolivariana no venía a reformar el viejo Estado de Bienestar (en miniatura) venezolano; no era una cuestión de parches ni de reformas marginales. Su proyecto político se basaba en lograr una economía humanizada a partir de un nuevo Estado, sin copiar ni pegar ningún Estado del Bienestar de las terceras vías en Europa.

Pero este proceso incipiente de transformación, así como también las políticas económicas que comenzaban a dar los primeros resultados en favor de las mayorías, debió enfrentar grandes dificultades en esos primeros años, al menos en dos sentidos: en primer término, es necesario plantear que esa herencia de la deuda social venía acompañada por otra aún más complicada de resolver: la herencia de un Estado ciertamente desmantelado, inexistente para desarrollar muchas competencias desaparecidas, y un retal de Estado corporativista, burocratizado al servicio de intereses particulares, poco democratizado en su funcionamiento y en sus objetivos trazados: un Estado útil para el modelo neoliberal.

103 Se centra en facilitar el acceso a servicios financieros y no financieros, en forma rápida y oportuna, a las comunidades populares y organizadas, las empresas familiares, las personas naturales, las cooperativas y cualesquiera otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, que desarrollen o tengan iniciativas para desarrollar una actividad económica, a objeto de integrarlas en el desarrollo de un nuevo modelo económico, basado en los principios de la participación ciudadana, justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, productividad y solidaridad.

Cambiar aquello supuso uno de los primeros retos de Chávez como presidente; la transición hacia un cambio de época en lo económico exigía una reconstrucción que no podría hacerse reacomodando el viejo Estado Burgués, aparente, incapaz de ser eficaz socialmente, con mecanismos obsoletos. Era necesario poner en marcha la construcción de un nuevo Estado, con el enorme esfuerzo político, económico, social y logístico que ello implica.

En segundo lugar, este proceso se vio truncado en 2002, cuando las fuerzas reaccionarias realizaron una gran alianza contra el chavismo entre los sectores que no estaban dispuestos a acatar las reglas democráticas procedimentales, mediante las que el pueblo había elegido ya al nuevo gobierno, ni tampoco a respetar una democracia más integral, prevista para democratizar las relaciones económicas. Ese nuevo pacto conservador disfrazaba, bajo el manto de una supuesta defensa de la democracia, las verdaderas intenciones de desalojar como fuera al gobierno elegido democráticamente por amplia mayoría del pueblo venezolano. Fueron estos sectores los que en abril de 2002 impulsaron un golpe de Estado que sacó del poder a Chávez por dos días, fracasando, finalmente, debido al fuerte apoyo popular que desató una ola de manifestaciones en todo el país. Posteriormente se recurrió a la estrategia de golpe económico, poniendo en marcha a fines de ese mismo año un paro petrolero y sabotaje económico, con el objetivo de reinstaurar un gobierno cuyas políticas económicas respondieran al capital privado, a dar seguridad y confianza a las inversiones extranjeras. La política de reapropiación soberana de la renta petrolera, en origen, a favor de la mayoría social, supuso un cambio muy significativo respecto a lo que el capital transnacional estaba acostumbrado a hacer en Venezuela.

En este sentido, el paro petrolero del año 2002 fue una clara respuesta del capital contra la democracia venezolana, dando muestras inequívocas de que el cambio de época iba a tener que sortear muchos obstáculos. Indudablemente, después de una leve recuperación económica y social iniciada desde la llegada de Hugo Chávez, el doble golpe del 2002 tuvo consecuencias notables.

Después de un crecimiento económico del PIB sostenido en los tres primeros años de la presidencia de Chávez, la caída del PIB petrolero fue de 25,9% para el último trimestre del 2002, y del 39,3% para el primer trimestre del 2003; el PIB total registró una caída de 15,8% durante el cuarto trimestre de 2002 y se redujo en un 27% en el primer trimestre del 2003; todo ello debido al sabotaje petrolero que trajo consigo una disminución abrupta de las principales actividades económicas del país. En el año 2003 el PIB tuvo una contracción del 9,4%.

El efecto sobre la economía real fue inmediato, especialmente en un sector que había disfrutado de una significativa mejora en estos recientes años: el sector laboral. La tasa de desempleo se disparó inmediatamente al 20,7% (el nivel más alto desde 1967); destaca que se produjo en gran medida un *lockout*, pues en muchas empresas, fábricas y comercios los trabajadores querían continuar trabajando, pero los dueños tomaron la decisión de parar y todo desencadenó en muchos despidos o penalizaciones en materia salarial por parte de la patronal. Se destruyeron más de 700.000 puestos de trabajo en esos pocos meses. La inflación, que había venido conteniéndose, volvió a ascender hasta el 31% en el año 2002, provocando pérdida de poder adquisitivo que hacía recordar todo aquel endeudamiento social de la época neoliberal.

La reducción de ingresos públicos petroleros por el paro del sector generó un elevadísimo déficit fiscal en el año 2002 y también en el año 2003, porque un mes sin actividad es dejar de obtener muchos ingresos derivados de la venta del petróleo¹⁰⁴, principal ingreso del país caribeño; además, la recuperación de la actividad petrolera no es una cuestión inmediata después de los innumerales daños ocasionados a la industria en todas las cadenas del sistema productivo. La producción total de crudo disminuyó en un 68%, tendiendo dicho porcentaje a descender aún más debido a la detención de la producción, a las restricciones de almacenamiento,

104 El país dejó de percibir ingresos por cerca de 15.000 millones de dólares, al dejar de vender más de 3 millones de barriles de petróleo durante sesenta días.

a la paralización de 29 unidades de compresión en algunas zonas del país y al detenimiento de otras actividades.

Las consecuencias fueron nefastas para la población: hubo escasez de alimentos y gasolina durante y después del paro, que tardó en restablecerse conforme a los niveles anteriores a los golpes. Muchas empresas pequeñas y medianas quebraron debido a que dependían de las empresas que agrupaba Fedecámaras –cámara impulsora del paro– para realizar sus actividades. Hubo una notable caída de los depósitos bancarios, del 8%. Todas estas cifras económicas tuvieron una traducción inmediata en pobreza y desigualdad; si bien desde 1998 a 2001 la pobreza se había reducido de 49% a 39%, en 2002 y 2003 la pobreza volvió a subir hasta 41,5% y 54%, respectivamente¹⁰⁵; la pobreza extrema se había reducido de 21% a 14,2% en el período 1998-2001, pero volvió a subir a 16,6% y 25,1% en 2002 y 2003, respectivamente; la desigualdad había descendido en el período 1998-2001 de un valor del índice de Gini de 0,486 a 0,457, pero volvió a crecer a 0,494 y 0,481 en 2002 y 2003, respectivamente.

Finalmente, el intento del 2002 para frenar un proyecto económico popular fue infructuoso. Chávez sabía que la fuerza política y social que se aglutinó para exigir su retorno también constituía una fuerza económica a su favor para abrir el cambio de época posneoliberal en esos primeros años (para luego caminar hacia otro estadio superior más ambicioso que fue denominado transición hacia el Socialismo Bolivariano del siglo *xxi*). La Década de Plata, tal como fue propuesta por el presidente en el primer Plan Nacional de Desarrollo del año 2001, no pudo iniciarse en el año previsto por consecuencia del doble golpe de 2002, pero esto no alteró el reto estratégico transformador, ya que la misma solo tuvo un reajuste para ser iniciada después del golpe, a partir del 2003 hasta el 2012.

¹⁰⁵ Valor de pobreza en porcentaje de hogares para primer semestre del año, según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (Mark Weisbrot, Rebecca Ray y Jake Johnston. *La economía bajo el Gobierno de Morales*, Center for Economic and Policy Research, Washington: 2009).

Políticamente, Chávez salió reforzado ese año, a pesar de las vicisitudes, porque la mayoría del pueblo le había dicho que no había marcha atrás, que el punto de no retorno estaba superado. Los próximos años, desde 2003 en adelante, el reto de consolidar el proyecto de transición económica (para salir del neoliberalismo) continuaría en marcha. El Estado de las Misiones fue la elección institucional de la Revolución Bolivariana para dar respuesta a la gran deuda social que afectaba cada de una de las esferas de la vida cotidiana del pueblo venezolano, en todos los rincones del país. La Misión no es una ayuda puntual ni parcial, ni de corte asistencialista clásico, sino que se trata de una política pública de alta rentabilidad y eficacia social, que procura involucrar al poder popular en la organización de esta tarea y en la ejecución de la misma; una Misión para cada problema, tantas Misiones como problemas sociales existan. Así, con esta particularidad venezolana, Chávez inventó una nueva fórmula de curar todas las enfermedades sociales derivadas de la deuda social heredada del neoliberalismo.

El proclamado Estado Social de la nueva Constitución tenía así su fiel reflejo en este Estado de las Misiones. Los precedentes, como fue señalado anteriormente, en la etapa más inicial de Chávez fueron los primeros operativos de instrumentación inmediata a través de la alianza cívico-militar para sectores necesitados, cuyos exponentes fueron el Plan Bolívar 2000 y el Fondo Único Social, y el Plan de Asistencia Alimentaria Popular. Sin embargo, la paulatina conformación del Estado de las Misiones daría un paso más porque se trata de una política pública sistematizada, articulando una acción integral con participación popular, procurando tener autonomía suficiente para no replicar las herencias de un fracasado Estado Burgués con intentos fallidos de Estado de Bienestar a la europea. Así, Venezuela comenzó, ladrillo a ladrillo, a conformar una megaestructura tan arraigada en el pueblo que ni los opositores se atreven a cuestionarla cuando participan en cualquier campaña electoral.

Este nuevo Estado de las Misiones interactuó con las nuevas políticas públicas según avanzaron las circunstancias internas

y externas, políticas, sociales, culturales y económicas; tuvo que convivir con los diferentes planes nacionales de desarrollo, con los renovados horizontes estratégicos que se iban redefiniendo sin corsé ni vagos anclajes. Desde su surgimiento, el Estado de las Misiones tuvo que recorrer el camino que hay desde un proyecto postneoliberal a otro estadio superior, no tan reactivo sino más propositivo, esto es, el denominado Socialismo Bolivariano del siglo XXI; tuvo que transitar de una economía centrada en cómo resolver las urgencias y necesidades básicas postgolpe 2002 a otra economía en la que las necesidades y demandas se fueron redefiniendo y transformando, gracias justamente a un proceso de cambio muy vigoroso. La progresiva democratización del consumo a favor de toda la población venezolana es un hecho que definitivamente obligó, obliga y seguirá obligando a reacomodar permanentemente el Estado de las Misiones, imprimiéndole una lógica dialéctica, dinámica y no estática.

Nadie puede saber a ciencia cierta si Hugo Chávez tuvo previsto desde un inicio construir sólidamente este Estado de las Misiones, como fórmula para transformar estructuralmente el aparato estatal heredado de las décadas perdidas neoliberales, o si por el contrario, procuró ir respondiendo coyunturalmente a las urgencias que se venían presentando. Es complicado ahora realizar este tipo de adivinanzas retrospectivamente. Lo importante realmente es certificar que al cabo de una década, más allá de cómo fue previsto desde un inicio –desde 2003 al 2013– la Década de Plata es un hecho irrefutable que ningún organismo internacional se ha atrevido a cuestionar. Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todos y cada uno de ellos han destacado los avances en materia de economía humanista, social y popular: reducción de la pobreza, más justicia en la distribución de los recursos económicos, mejora del empleo y el salario real, resultados positivos en la lucha contra el hambre, aumento del

Índice de Desarrollo Humano, democratización de la educación con mejoras significativas en materia de alfabetización, reducción de la mortalidad infantil, mejora en el acceso al agua y a otros servicios básicos, mejora en la salud y mejora en términos de vivienda.

En cifras-resumen, esto se traduce en: a) la pobreza se redujo del 50% al 27,2% en el período 1999 a 2013, b) la pobreza extrema pasó de 16,9% hasta 8,8% desde 1999 a 2013, y la pobreza extrema pero medida por necesidades básicas insatisfechas ha tenido una disminución progresiva desde 10,8% en 1999 hasta ubicarse en 2013 en 5,5%; c) la desigualdad pasó de 0,48 a 0,39 desde 1998 a 2013 (medida por el valor del índice de Gini); d) en lo alimentario, Venezuela es el país de América Latina y el Caribe más avanzado en la erradicación del hambre: la tasa de desnutrición se redujo desde un 21% en 1998 a menos del 3% en 2011; se ha pasado de producir el 51% de los alimentos que se consumía en 1999 a producir el 71% en 2012 (todos son datos de la FAO en 2011); e) Venezuela es el primer país del mundo al que la Unesco le concedió una calificación de 96 puntos (en una escala de 100) en el año 2010, en honor a las metas alcanzadas en materia de inclusión en alfabetización y educación inicial, primaria, secundaria y universitaria; la tasa neta de escolaridad secundaria se incrementó sustancialmente, pasando de 50,7 en 2000 para ubicarse en 74,2% en 2012; y la matrícula universitaria creció de 894.418 estudiantes en el 2000 a 2.630.000 en 2014, ubicando al país en el quinto lugar a nivel mundial; f) la tasa de desempleo pasó de un 15,2% en 1998 a un 7,8% en 2013, con la creación de más de 4 millones de empleos; el incremento en el empleo formal es de casi diez puntos, mientras que la tasa de participación de los asalariados en la riqueza del país es de 64,3%;³⁾ entre el 2000 y el 2013 la mejora del IDH es cuatro veces mayor que los avances experimentados durante las dos décadas anteriores; el IDH en el año 2013 (0,764) está considerado en categoría alto; h) la mortalidad infantil se redujo de 25 por 1.000 (en 1990) a 14 por 1.000 (en 2012); i) el 96% de la población tiene acceso ahora a agua limpia; j) en 1998 había dieciocho médicos por cada diez mil habitantes, mientras que en la actualidad son 58 por cada diez mil; k) el hacinamiento en

hogares se redujo de 14,6% a 9,5% durante esta década; el indicador de vivienda sin servicios básicos bajó de 15,7% a 9,5%; l) la cantidad de pensionados pasó de 387.000 en 1999 a más de 2.521.789 en 2013.

Un tema tan controversial, como es la inflación, amerita ser precisado desde varios aspectos. En primer lugar, nadie puede dudar de que la subida generalizada de los precios en Venezuela es un aspecto todavía por resolver, porque tiene efectos negativos en cuanto a la merma del poder adquisitivo para la mayoría venezolana. Sin embargo, hay que considerar que la inflación en Venezuela es un fenómeno estructural y que viene desde muy lejos. Nada dicen los economistas ortodoxos de que en las décadas perdidas neoliberales, antes de la llegada de Chávez, la inflación promedio anual era de 34%, mientras que en esta década ganada la inflación anual es de 22%. Esto es así sin contar los datos de los dos últimos años –2013 y 2014–, que han tenido altas tasas de inflación de forma muy preocupante: 56,2% y 68%, respectivamente. En el año 2012 la inflación anual fue de 20,1%.

La conformación de precios responde a una problemática que va mucho más allá de simples relaciones entre variables, tal como lo pretende explicar el paradigma económico dominante. Detrás de los precios existe una economía política de la inflación, esto es, unos responsables con nombre y apellido, que conforman precios, que son los encargados de incrementar los precios a lo largo de toda la cadena de valor (de cambio). El problema inflacionario se explica realmente por el lado de la oferta y no tanto por la demanda. La razón primordial de cómo se conforman los precios viene dada por los propios límites en la oferta y, fundamentalmente, por la estructura concentrada de oferta en manos privadas, de fuerte composición oligopólica, que aprovecha una posición dominante de mercado para fijar precios abusivos. Los precios son el resultado, en última instancia, de una puja distributiva en la que se disputa la apropiación de la riqueza del país. Al observar la evolución de los precios en este período en Venezuela, se puede afirmar rotundamente que en valores promedios la inflación anual ha bajado, en comparación con la época neoliberal. Sin embargo, aún los precios

presentan valores muy elevados. En los últimos dos años, de hecho, la inflación es uno de los aspectos más adversos en materia económica.

¿Cuáles son las explicaciones para entender este comportamiento tan volátil? No existe relación directa entre devaluación e inflación (la devaluación del bolívar en 2005, 2008 o 2010 no tuvo efectos inflacionarios), ni en la relación entre emisión monetaria e inflación, por mucho que se empeñen los organismos internacionales en defender esta tesis¹⁰⁶; ni tampoco en la relación entre

¹⁰⁶ Por ejemplo, la Cepal en su último informe sobre economía venezolana 2014 afirma que la inflación de años 2013 y 2014 se debe a la expansión monetaria:

... en 2013 la política monetaria fue fuertemente expansiva. Se produjo un aumento interanual medio de los agregados monetarios M1 y M2 del 66% y el 65%, respectivamente, muy superior a la inflación media interanual, que fue del 40%. (...) Durante los primeros cuatro meses de 2014 la política monetaria siguió siendo marcadamente expansiva y los agregados M1 y M2 presentaron en promedio aumentos interanuales del 76% y el 75%, en forma respectiva. La inflación media interanual en el mismo período fue del 59% (Comisión Económica para América Latina (Cepal). El panorama social de América Latina, Santiago de Chile: 2014).

Sin embargo, el documento no revisa solo unos años atrás en los que en la misma Venezuela en el año 2005, el incremento monetario interanual fue por encima del 100% y la inflación anual fue del 14,4%. Otro ejemplo se observa en el documento La falsabilidad del monetarismo, en el que citando a Zaiat, se afirma que en Argentina:

... en el lapso 2007-2013, con momento de expansión y contracción monetaria, los índices de precios se mantuvieron en niveles altos estables, ya sea en el indicador oficial (10 por ciento) o en los privados (20-25 por ciento). O sea, las tensiones inflacionarias fueron constantes independientemente del mayor o menor crecimiento de la base monetaria (emisión de dinero) [Además se añade que en] el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos no sobrepasó el 10,3 % de 2008 a 2012 mientras que la emisión monetaria fue de casi el 160% en el mismo período; en el Reino Unido marcó 16,4% habiendo sido su emisión casi un 203%, para Brasil la variación de precios resultó de 27,6 % y habiéndose expandido su emisión casi un 123% y China tuvo una variación de precios del 16,6% para un crecimiento de la emisión de poco más del 100%; en el período ya señalado (Adrián González. La falsabilidad del monetarismo, Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, Caracas: 2014).

más inversión social/salarios e inflación, porque tampoco se ha cumplido en estos años. El Gobierno Bolivariano consiguió crecer, repartiendo, sin generar más inflación, sino todo lo contrario, desacelerándola a pesar del incremento sostenido en los salarios. Fue precisamente un año en contracción y de ralentización de salarios (año 2014) en el momento en el que más crecieron los precios. La inflación en Venezuela es un fenómeno mucho más complejo que simples relaciones matemáticas entre dos variables; el principal factor explicativo de la inflación está en el muy concentrado sector importador y en el sector de las cadenas de distribución y comercialización. El emergente sector importador privado en Venezuela aprovechó el desfase derivado de los diferentes ritmos de crecimiento entre consumo y oferta productiva.

Si bien durante esos años hubo logros tímidos en la producción de alimentos y otros bienes básicos manufacturados, la velocidad con la que se incrementó el consumo (más democratizado) de los hogares venezolanos fue mucho mayor. Este desequilibrio estructural fue aprovechado, sin lugar a dudas, por el capital privado nacional –en connivencia con el capital transnacional– para dedicar toda la actividad económica a la importación, así como a las tareas de distribución y comercialización. Así que la oferta necesaria de esos nuevos bienes era satisfecha por una estructura económica privada muy concentrada, que disfrutaba del poder de mercado necesario para establecer altos precios. El capitalismo penetró de esta forma en la reestructuración económica que se estaba produciendo en Venezuela en estos años. El rentismo importador del siglo XXI constituye un fenómeno económico propio de países en los que se produce una transformación inmediata de las pautas de consumo de la mayoría de la población, pero sin posibilidad real de satisfacerla mediante una transformación inmediata –a la misma

En definitiva, por cada caso que encuentra la Cepal para encontrar la relación perseguida entre emisión monetaria e inflación, podemos encontrar otro contraejemplo que confirma lo contrario. ¿Y esto por qué? Porque la inflación va mucho más allá de una relación simple y reduccionista de dos variables nominales debido a que la economía real tiene mucho que decir en esta disputa.

velocidad– de la matriz productiva. La evolución del cambio de la matriz productiva ha sido mucho más lenta que el creciente cambio de la demanda interna; en esa brecha se colaron los factores inflacionarios por la vía de estructuras concentradas importadoras, y también de distribución y comercialización.

Definitivamente, la inflación es el resultado de un fenómeno complejo que tiene su explicación en clave estructural, y a pesar de que en Venezuela se han mejorado las cifras de inflación en relación con la época neoliberal –con la salvedad de los dos últimos años: 2013 y 2014–, es preciso abordar este tema porque sería el aspecto más ensombrecido en una década ganada, que ha tenido muchas luces en el terreno de lo social, lo laboral, lo económico. Sin embargo, es preciso poner la inflación en relación con el poder adquisitivo para dimensionar con mayor precisión el efecto negativo de esta sobre la vida de los ciudadanos venezolanos. En el caso del salario mínimo, hay que considerar que el poder adquisitivo real de este ha mejorado en un 21,5% desde 1998 hasta la actualidad; el salario mínimo aumentó mucho más de lo que lo hizo el nivel de precios. Otro aspecto a destacar en esta década ganada en materia macroeconómica es la relación entre el PIB y la deuda pública del gobierno central, que bajó del 54,3% en promedio para el período 1984-1998, al 28% promedio entre 1999-2013. El desendeudamiento público ha sido otra gran victoria de este período porque permite realmente dotar al proceso de más independencia y soberanía económica hacia el futuro.

En el plano internacional, en plena transición geoeconómica mundial el líder Hugo Chávez supo darle un fuerte impulso a la construcción de mecanismos de integración en la región; su rol fue fundamental para posicionar a Venezuela como un actor de peso en la reconfiguración del mapa geopolítico internacional. En este sentido, en diciembre de 2004 Chávez inició la quijotesca tarea de armar una alianza entre pueblos de América Latina, en forma antagónica hacia aquello que seguía creciendo como modalidad de integración neoliberal del capital: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). De esta manera, Venezuela se puso a la cabeza

de una propuesta de integración regional contrahegemónica; la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) nació en diciembre de 2004 en una reunión entre Hugo Chávez y Fidel Castro en La Habana (Cuba). Esta nueva alianza puso de manifiesto la jerarquía que Chávez concedió desde el 2004, en adelante, a la dimensión bolivariana en el pensamiento económico y su praxis. Este frente antiimperialista, creado e inventado desde el Sur para el Sur, con los pueblos del Sur, supone una propuesta que combina el oportunismo táctico, adecuadamente, con la visión estratégica de largo aliento para reubicar a Venezuela con América Latina en un nuevo polo privilegiado en la transición geoeconómica en curso. Chávez había advertido desde tiempo atrás que el mundo unipolar venía en decadencia y que, al mismo tiempo, se iba conformando un nuevo mundo multipolar en el que había que reubicarse con inteligencia estratégica y soberanía. Además, desde el año 2013 Venezuela es miembro pleno de Mercosur, quinta economía del mundo.¹⁰⁷

A nivel internacional, más allá de las fronteras regionales, Venezuela tiene una posición privilegiada (en la región y en el mundo) y una relación engrasadísima con esa economía ya emergida: el Brics. Hugo Chávez también logró emancipar a su país del yugo del Ciadi, juez y parte que arbitra las inversiones extranjeras desde la OMC. En suma, es importante afirmar que Venezuela está en una posición infinitamente mejor para insertarse soberanamente en el tablero económico mundial en estos próximos años por sus importantes alianzas con países como China, Rusia y, muy particularmente, con el resto de América Latina; se podrían seguir enumerando los hitos de esta década ganada para la Venezuela bolivariana. El resultado alcanzado por el Estado de las Misiones es más que satisfactorio en estos años y se ha constituido como una de las bases esenciales de la época ganada en materia económica. La Revolución Bolivariana planteó la importancia irrenunciable de una etapa en transición,

107 Tal es la importancia de la dimensión de alianzas e integración regional, que se dedica un apartado especial en este tercer capítulo para abordarlo como pilar sustancioso de esta década ganada.

de esta década ganada en la que nadie se cayera del barco, sino lo contrario: que todos se subieran a él para afrontar el nuevo reto estratégico en los próximos años. El objetivo fue rescatar a cada ser humano para que llevara una vida cotidiana digna. La economía, según lo que propone el chavismo como identidad política y económica, por encima de cualquier otra discusión, ha demostrado tener gran predilección por un rasgo humanista, de fuerte compromiso social y popular.

En el plano de la política, Venezuela entendió que la democracia no solo podría ser circunscrita al plano procedimental, es decir, a ganar elecciones (cosa que Chávez hizo permanentemente y, además, todas ellas avaladas internacionalmente); la democracia integral, la real, debe ser aplicada a muchos otros planos de la vida diaria para el pueblo venezolano. Por esto, Chávez se empeñó en que la riqueza, los derechos sociales, los servicios básicos, el acceso al consumo, la educación, la salud, y la participación política se democratizaran.

Como balance de la última década y media, la Revolución Bolivariana en Venezuela logró revertir parcialmente la correlación de fuerzas económicas desfavorable para las mayorías. Después del golpe petrolero, el chavismo logró en su década ganada una amplia democratización de una base económica material, gracias a las políticas siguientes: el control efectivo y reapropiación de sectores estratégicos, políticas económicas y sociales cada vez más redistributivas e inclusivas; más soberanía en la inserción en la economía mundial, acompañada de una nueva arquitectura regional. La centralidad en la economía real en estos quince años permitió saldar una deuda histórica: la deuda social. La nueva direccionalidad del uso de la renta petrolera (reapropiada en su origen) hacia la construcción de un sólido Estado de las Misiones y la mejora permanente salarial (real) de una mayoría excluida históricamente generó un aumento exponencial del consumo privado, pero también de consumo público.

La inversión social ha sido en este tiempo una cuestión innegociable, manteniéndose muy por encima del 60% del presupuesto,

lo que demuestra el carácter social y humanista de la propuesta económica en Venezuela en este cambio de época. Todavía queda mucho por hacer en lo que el mismo Chávez denominó la ‘Década de Oro’, fase que aún no ha podido iniciarse por imprevistos como la propia muerte del presidente el 5 de marzo de 2013, las elecciones siguientes en las que el excanciller Nicolás Maduro Moros ganó frente a Henrique Capriles Radonsky en abril del mismo año; los permanentes intentos de desestabilización por buena parte de la oposición (con infinitas guarimbas¹⁰⁸ y propuestas como ‘La Salida’ y el ‘Acuerdo Nacional para la Transición’), al no aceptar que hasta el momento no pueden ganar en una cita electoral, y también por los intentos de injerencia desde afuera, como la última orden ejecutiva de Obama que considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Todos estos factores conjuntamente, unidos también a algunos desaciertos por parte del Ejecutivo en no dar el salto adelante en la forma más veloz posible en materia económica, han supuesto que el inicio de esta otra fase se haya postergado más de lo deseado. A partir de ahí, como veremos en el capítulo siguiente, se abren nuevos desafíos y retos, y también la necesidad de superar contradicciones propias de cualquier proceso de cambio revolucionario.

Bolivia

La aplicación de las recetas económicas del Consenso de Washington no hizo más que empeorar las ya complejas condiciones de vida que la mayoría del pueblo boliviano padecía desde hacía siglos. Durante los años del neoliberalismo, más que nunca, las transnacionales y una concentrada oligarquía nacional se enriquecieron abismalmente, mientras muchos bolivianos se hallaban en una situación de despojo y empobrecimiento extremo. Este

¹⁰⁸ ‘Guarimbas’ es como se conoce en Venezuela a los disturbios callejeros, cierres de calles, que además trajeron muchas muertes en el año 2014, y que en el año 2015 vuelven a pretender un escenario inestable para derrocar al Gobierno Bolivariano.

panorama insostenible fue creando el caldo de cultivo para muchas protestas y movilizaciones, que fueron el germen de inicio de un proceso constituyente en el país andino. La mayoría de las voces coincidían en un núcleo común: cambiar Bolivia, refundarla. Las principales demandas de los movimientos sociales se aglutinaron en torno a dos grandes ejes, que luego serían vertebradores de un nuevo proyecto emancipador: 1) nacionalización de los recursos naturales; y 2) convocatoria a una Asamblea Constituyente que representara al nuevo poder constituyente y que tuviera el mandato de crear una nueva Constitución Política del Estado. Detrás de estos dos ejes subyacía un tercero: poner en práctica el paradigma del Vivir Bien (*suma qamaña* en aymara, *suma qawsay* en quechua, o *ñande reko* en guaraní).

No es fácil reconocer un único hecho fundante de este proceso de movilización e insurrección plebeya contra el orden hegemónico. Son muchos los hechos y sucesos que fueron aconteciendo en los noventa y en los primeros años del siglo XXI, para tener en cuenta la caracterización de este ciclo histórico. Rubén Martínez, en el intento de identificar la génesis del proceso constituyente boliviano, lo relata de forma rigurosa y sucinta de la siguiente manera:

La marcha de los indígenas, en 1990, la denominada “guerra del agua”, en 2000 y 2001, y la caída del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada –la acción frente a la masacre de febrero de 2003– fueron pasos importantes hacia la activación directa de la soberanía del pueblo. Este periodo que Cabezas ha denominado “ciclo rebelde” estuvo conformado por acciones que, como defienden Iglesias y Espasandín, se enmarcaron en un contexto global en transición donde intervienen un buen número de factores externos y, fundamentalmente, a nivel interno, el principio del fin del sistema tripartito (Movimiento Nacionalista Revolucionario-MNR, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria Nueva Mayoría-MIR-NM, y Acción Democrática Nacionalista-ADN), en crisis tras la nueva hegemonía de participación no partidaria, así como la partidaria (principalmente el Movimiento al Socialismo-MAS). En efecto, esta situación

ha servido de elemento para lo que García Linera ha destacado como *estructura institucional en crisis*, y una de las razones es que los partidos políticos no hayan cumplido el papel de intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. “La sociedad ha comenzado a construir otros mecanismos de mediación política, otros vehículos de canalización de sus expectativas y demandas, sindicatos, gremios, juntas de vecinos, asociaciones productivas que se han convertido en los mecanismos extrainstitucionales de la canalización de expectativas sociales, esto ha generado un proceso de dualización (...). Hoy en día (...) se hace política en el Parlamento, pero también se hace política en los sindicatos, se hace política en los gremios, se hace política en las comunidades.¹⁰⁹

En este contexto de amplia movilización popular y contra todos los pronósticos electorales, Evo Morales resultó elegido presidente de la República en diciembre de 2005 con un porcentaje abrumador del 54% –inédito en la historia política de Bolivia–, convirtiéndose en el primer mandatario de origen indígena del país. Su propuesta de gobierno estaba sostenida en la convocatoria a una asamblea constituyente, promesa que recogía un mandato de la mayor parte de los movimientos sociales. A escasos meses de asumir el poder, el 6 de marzo de 2006, el presidente cumplió su promesa mediante la promulgación de una ley especial de convocatoria a asamblea constituyente para instalarse el 6 de agosto en la ciudad de Sucre, capital constitucional de la República. El proceso constituyente fue arduo, y se extendió mucho más del plazo estipulado, pero lo más significativo es que contó con una amplia participación de representantes de todos los sectores de la sociedad boliviana, incluidos aquellos que habían sido históricamente mantenidos al margen de la vida política del país, como era el caso de los representantes de los sectores indígena-originario-campesinos:

Finalmente, después de múltiples interrupciones, de intentos de desestabilización, y de cambios imprevistos para sortear sucesivos obstáculos, a mediados de diciembre del año 2007 se aprobó en detalle la nueva Constitución Política del Estado para Bolivia, la cual no fue refrendada por el pueblo hasta el 25 de enero del 2009 –un año después de la fecha prevista–, debido a los innumerales conflictos que tuvieron lugar durante 2008, cuando un grupo de prefectos opositores de los departamentos de la denominada ‘media luna’¹¹⁰ encabezó sucesivos intentos de secesión y desestabilización interna que apuntaban a socavar la gobernabilidad del poder nacional. En la misma fecha, enero de 2009, se llevó a cabo en forma simultánea con el referéndum constitucional el referéndum dirimitorio sobre el texto del artículo relacionado con la propiedad de la tierra.¹¹¹

En el marco de la histórica deuda con los sectores indígena-originario-campesinos, el Estado Plurinacional de Bolivia (nuevo nombre a partir del nuevo texto constitucional) reconoció por primera vez la existencia de 36 naciones originarias, así como sus lenguas y costumbres, protegiendo el derecho a la identidad de los pueblos y marcando un precedente fundamental en la historia de lucha de los pueblos indígenas en América Latina.

De todos los temas discutidos y negociados durante la Asamblea, la sección económica fue una de las que más atención atrajo debido a su potencialidad en el intento de romper con el modelo económico instrumentado durante las décadas previas de neoliberalismo en el país. La nueva propuesta económica de la Constitución quería poner punto y final a un patrón económico que se

109 R. Martínez. *Op. cit.*, pp. 42-43.

110 Hace referencia a cuatro departamentos del país: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

111 En este sentido, el pueblo, interpelado de forma directa, debía decidir cuál de las dos definiciones de latifundio planteadas desde la Asamblea Constituyente quería que apareciese recogida en la Constitución. Más concretamente, la decisión se centraba en cuál era la extensión de tierra mínima para que una propiedad pudiera ser calificada como tal, si las cinco mil o las diez mil hectáreas.

sustentaba milimétricamente sobre el Decálogo de Washington y que tuvo graves consecuencias para el pueblo boliviano. De hecho, el primer artículo de la Sección dedicada a la Organización Económica del Estado del nuevo texto constitucional propone que el reto fundamental de Bolivia es mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos, dando respuestas a los problemas reales de la mayoría de la población (campesinos, mujeres, poblaciones indígenas originarias) y evitando que los beneficios sean exclusivamente para unos pocos.

La propuesta de 'constitución económica' trazó objetivos muy diferentes a los enunciados en otras Constituciones anteriores, porque necesariamente suponía la instrumentación de políticas económicas alternativas que permitieran configurar progresivamente un nuevo paradigma económico, superador de las viejas trampas del desarrollismo que había hecho estragos en la economía boliviana. Es justamente por ello que la nueva Constitución Política del Estado posicionó en primer lugar una nueva lógica económica –la comunitaria– como mecanismo fundamental para dejar atrás el sistema colonial y neoliberal imperantes hasta entonces. A su vez, se le otorgó al Estado un papel más protagónico en la economía, tanto para reajustar los desequilibrios ya existentes como para propulsar esa nueva lógica comunitaria en todas las relaciones económicas que pudieran resultar determinantes para alcanzar el Vivir Bien del pueblo.

En definitiva, a partir de la llegada de Evo Morales al gobierno, Bolivia decidió refundar el país y cambiar su patrón de acumulación. Para ello apostó desde un primer momento por sentar las bases para un nuevo modelo económico, en el que el Estado pasaría a ser un actor central como controlador y propietario de los sectores estratégicos, obteniendo así un mayor excedente económico que luego se iba a redistribuir exitosamente. Esto permitió una vasta inclusión de una buena parte de la población boliviana que había sido excluida de manera sistémica durante siglos.

No había tiempo que perder porque las urgencias no tienen la paciencia que cierta intelectualidad presupone para discusiones

eternas o para transformaciones de largo plazo. Lo primero fue salvar el corto plazo para evitar la defunción del largo plazo y para empezar había que evitar que la institucionalidad heredada, injusta y también –por qué no decirlo– importada, fuera fagocitando cualquier intento de cambio. Para ello era fundamental trabajar simultáneamente en dos planos, poniendo en marcha una transformación profunda de la estructura económica, al tiempo que se resolvían las urgencias del corto plazo, rescatando de la pobreza extrema al pueblo boliviano a la mayor brevedad posible. Así, en sus primeros años de gobierno el MAS inició una acelerada y vigorosa política de reapropiación de los sectores estratégicos (transporte eléctrico, telecomunicaciones y transportes), y de redistribución de la riqueza mediante un híbrido muy virtuoso: acciones a favor de la inclusión y políticas estructurales de inversión social y en infraestructuras.

Se abrieron entonces múltiples desafíos para el Estado boliviano. Por un lado, el papel clave que debía asumir en el cambio del régimen de acumulación, debiendo asentar las bases para la democratización de los medios de producción e interviniendo abiertamente en el ámbito del pacto social y de la concreción de la comunidad social y política, modificando sus límites y las relaciones internas que la definen. Y, por otra parte, el Estado también enfrentaba el desafío de realizar potentes políticas redistribuidoras tanto de la riqueza como de los propios medios productivos, cuestión que no podía esperar y para lo cual debía incrementar sus fuentes de ingresos y mejorar su capacidad de distribución y redistribución mediante una nueva política fiscal, recaudadora y mucho más progresiva, que permitiera más soberanía tributaria para evitar la dependencia excesiva del gas y otros recursos naturales, mitigando así las consecuencias del modelo extractivista sobre la naturaleza y para liberar al país de la inestabilidad que le imponía la volatilidad de los precios internacionales de esos recursos.

En paralelo con el proceso constituyente, el primer gran hito del proceso de cambio en Bolivia se produjo casi un mes después de la convocatoria a la asamblea y a solo cien días de gobierno. El 1.º de

mayo de 2006 el presidente decretó la nacionalización de los hidrocarburos, puntapé inicial en la construcción de un nuevo modelo económico soberano, que devolvía al Estado el control absoluto del sector hidrocarburífero. De esta forma, el Estado asumía las riendas de uno de los principales sectores estratégicos de la economía boliviana, habilitando un círculo virtuoso de dirección soberana de la política económica en la que el Estado pudo apropiarse del excedente económico que antes se giraba al exterior, e iniciar una política de redistribución del ingreso en favor de las mayorías. La nacionalización de los hidrocarburos ha permitido que la producción del gas natural se duplique y que los ingresos públicos se multipliquen por diez (pasaron de 673 millones de dólares a 5.599 millones de dólares) en este período de Revolución Democrática y Cultural liderada por Evo Morales.

Asimismo, al recuperar el Estado su rol como redistribuidor de recursos y su función de definir soberanamente su política económica, se recuperó el control en materia fiscal, monetaria y financiera, y con ello la posibilidad de orientarlas hacia el objetivo de redistribución económica y de ampliación y diversificación de la matriz productiva. Posteriormente, se implementaron en forma complementaria programas más pequeños que han consentido democratizar el paulatino cambio de la matriz productiva: un buen ejemplo es el programa Proleche, a favor de los productores pequeños de leche para defenderlos del monopolio y con fijación de precios de consumo, la creación de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, la Empresa Azucarera San Buenaventura, la Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia, etc.

En el plano de las urgencias inmediatas, el gobierno puso en marcha una batería de medidas en el ámbito de política social, que suponen transferencias condicionadas en efectivo mediante el pago de asistencias sociales, con el objetivo de comenzar a saldar la enorme deuda social heredada del neoliberalismo. En 2013 estos programas alcanzaron al 36,6% de la población. Los principales son:

a) Bono Juancito Pinto: el decreto supremo 28.899, del 26 de octubre de 2006, promulgó este bono como una ayuda económica

escolar para los niños; de acuerdo con el Artículo 2 de este decreto, el beneficio debe ser distribuido en dos cuotas, cada una de 100 bolivianos (unos quince dólares). El primer pago corresponde a inicios de la gestión escolar y el segundo al cierre de la gestión. Este bono Juancito Pinto es concebido como subsidio a la permanencia escolar, que sirve para mejorar las condiciones de vida de la niñez y es ejecutado con recursos generados por la nacionalización de los hidrocarburos.

b) Renta Dignidad: a finales del año 2007 el gobierno del MAS aprobó este programa con el fin de otorgar una pensión vitalicia a las personas mayores de 60 años; algo más que necesario, teniendo en cuenta que Bolivia ocupa el penúltimo lugar de esperanza de vida en Latinoamérica. El nuevo programa Renta Dignidad permite que los mayores de 60 años, que tengan un ingreso mensual, reciban 1.800 bolivianos anuales (alrededor de 260 dólares); en tanto que aquellos que no perciban una renta de jubilación podrán contar con 2.400 bolivianos cada año (unos 350 dólares).

c) Bono Juana Azurduy de Padilla: implementado el 1.º de mayo del 2009, tiene como objetivo reducir los índices de mortalidad materno-infantil. Se puso en marcha con el registro de las embarazadas y los niños menores de un año en todos los centros de salud del país. Durante el proceso prenatal la madre recibirá 50 bolivianos por cada uno de los cuatro controles a que deberá someterse; tras el parto recibirá 120 bolivianos y, finalmente, recibirá cada dos meses 125 bolivianos para la alimentación del niño o la niña hasta los dos años de edad.

En este mismo sentido, se puso en marcha el Plan Vida para erradicar la extrema pobreza en el país, que supone un presupuesto de 2.900 millones de dólares que serán distribuidos en soberanía alimentaria, en servicios sociales y en servicios básicos, aunque en este último terreno hay ya avances significativos con el aumento de la cobertura de electricidad (del 64,4% en 2001 al 83,5% de la población en 2013) y del acceso a agua segura (85,2% en 2013, cuando en 2001, según datos de INE, era de 71,8%). Todavía queda pendiente avanzar en la cobertura del alcantarillado, que aún tiene

una cobertura deficiente (solo 44,7% en 2014), tal como señaló el presidente Morales al asumir su tercer mandato.

Todos estos programas han sido creados para tratar de atender necesidades imperiosas de corto plazo y desde esa perspectiva deben ser contemplados. Son parte fundamental de esta década ganada para Bolivia porque han supuesto una forma muy efectiva de resolver urgentemente la deuda social heredada, apostando claramente por una suerte de economía del ahora, del ya. Aun así, este gran avance también se explica gracias a la definición de nuevas políticas económicas en clave estructural y estratégica, como han sido la reapropiación de la renta de los recursos naturales en origen y la forma de llevar a cabo las nuevas políticas redistributivas, al mismo tiempo que se ha ido avanzando significativamente en materia de soberanía.

A mitad de noviembre de 2006 también tuvo lugar otro suceso no menos importante en este camino de cambios: las modificaciones de la Ley del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, que pretendía fundamentalmente: a) regular de manera justa y equitativa los procesos de reagrupamiento y redistribución de la tierra, b) corregir y agilizar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, y c) tramitar rápidamente la personalidad jurídica de las comunidades indígenas campesinas. Este cambio no suponía la expropiación de la tierra a los latifundistas, como muchos escribieron, sino que implicaba la reversión social de los latifundios improductivos, lo que permitiría que muchos pequeños campesinos pudieran aprovechar colectivamente tierras ociosas. Un gran avance hacia una verdadera democratización de los medios de producción.

En suma, la propuesta de economía plural, marcada en la nueva Constitución Política del Estado, estuvo desde un inicio encaminada al Vivir Bien de las bolivianas y los bolivianos, a partir de un nuevo pacto de convivencia armonioso que busca evitar la dominancia de la racionalidad capitalista sobre el resto de la heterogénea estructura económica (con fuerte presencia precapitalista). Lo cierto es

que no es tarea sencilla cambiar, en un período tan corto, las estructuras derivadas de una historia de colonialismo y neocolonialismo de siglos. No obstante, en Bolivia efectivamente se está produciendo una traslación de los ejes de la economía hacia la consolidación de ese Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp) –que se apunta en el nuevo texto constitucional de 2006–, que tiene como objetivo recuperar el control de la política económica por parte de un Estado soberano y que está orientado a alcanzar el Vivir Bien del pueblo boliviano, para poner fin al recrudescimiento de las condiciones de exclusión social que impuso el neoliberalismo en el país andino. En efecto, a casi diez años de haber llegado al poder el MAS, el país se encuentra transitando una primera década ganada en términos de la mejora en la distribución del ingreso a favor de las grandes mayorías populares históricamente marginadas. Los resultados económicos no dejan lugar a duda.

En los últimos nueve años de gobierno el Producto Interno Bruto de Bolivia se triplicó, pasando de 9.525 millones de dólares en 2005 a 30.381 millones de dólares en 2013. La sorprendente consecuencia de este incremento en los ingresos públicos fue que en 2006, esto es, el primer año de gestión de Evo Morales, Bolivia tuviera un superávit fiscal del 4,5% del PIB¹¹²; lo mismo sucedió en los años posteriores, salvo en el año 2009 cuando el gobierno incurrió en déficit para contrarrestar los efectos internos de la recesión mundial¹¹³. A partir de allí se cuentan cuatro años consecutivos de superávit fiscal¹¹⁴ y lo calificamos de sorprendente por una doble razón: la primera, porque desde 1956 el país nunca se había encontrado en situación de superávit fiscal y, en ese sentido,

112 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. *Bolivia: una mirada a los logros más importantes del nuevo modelo económico*, La Paz: 2014.

113 M. Weisbrot *et al.* *Op. cit.*

114 Tuvo superávit global del Sector Público No Financiero (SPNF), pasando del 1,7% del PIB en 2007 a 3,2% en 2008. Tras ubicarse en 2009 en 0,1%, los datos muestran una recuperación de esta variable a partir de 2010, siendo 1,7% en dicho año, 0,8% en 2011, 1,8% en 2012 y 4,8% en 2013 (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. *Op. cit.*).

hay que destacar el éxito en la gestión macroeconómica del primer gobierno de Morales y, en concreto, en su decisión de nacionalizar los hidrocarburos¹¹⁵. La segunda razón es menos complaciente con este aparente éxito y se centra en la cantidad de necesidades insatisfechas que aún tiene la población boliviana y, consecuentemente, en los interrogantes que supone un Estado con capacidad de financiación, que no canaliza esta hacia la satisfacción de esas necesidades de forma inmediata y que hace plantearse la cuestión de si el dogma del superávit presupuestario no se habrá asentado ya como una restricción ineludible en el Gobierno de Evo Morales. Dicho esto, no hay que minusvalorar todo lo logrado en materia fiscal en esta década ganada para el proceso de cambio en Bolivia: los ingresos tributarios crecieron sostenidamente año tras año a partir del 2006 y, en términos absolutos, la recaudación tributaria alcanzó en 2013 un máximo histórico de 8.600 millones de dólares; en términos comparativos, el promedio de recaudación por esta vía entre 1998 y 2005 había sido 1.317 millones de dólares, mientras que en promedio entre 2005 y 2013 ascendió a 5.030 millones de dólares.

Igualmente, resulta destacable la reducción de la deuda pública externa desde el 64% del PIB a fines del año 2003 hasta el 17% del PIB en 2013 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014). Este dato es importante porque la reducción de la deuda pública permite una mayor autonomía y soberanía para el país, y le evita las cláusulas de condicionalidad que suelen imponer sus acreedores (en su mayoría organismos multilaterales internacionales: FMI, BID o BM), los cuales poseían a fines del año 2006 el 87,7% de esa deuda¹¹⁶. Estos son valores relativamente bajos en comparación con el resto de países latinoamericanos e incluso de otros países industrializados.

115 La contribución de esta ha sido decisiva para explicar esos resultados: en el año 2004 los ingresos derivados de la nacionalización de los hidrocarburos suponían el 5,6% del PIB, y en el último cuatrimestre del 2008 ya representaba el 25,7%.

116 Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C. (Cemla). *Programa de fortalecimiento de capacidades de análisis y estrategia de deuda*, Bolivia: 2007.

En términos absolutos, la deuda pública externa se incrementó en 700 millones de dólares entre 2011 y 2012, situándose este último año en 4.196 millones de dólares, suma equivalente al 16,2% del PIB. Es significativo señalar que una gran parte del aumento de la deuda externa se explica por la emisión soberana de títulos de un bono por un valor total de 500 millones de dólares, realizada en octubre de 2012, y que una parte del capital recaudado en dicha emisión se destinó a cancelar deuda pública interna. En consecuencia, el endeudamiento interno se redujo como porcentaje del PIB desde un 20,8% en 2011 hasta un 16,1% al finalizar 2012. En 2013 el endeudamiento externo total ascendió a 5.262 millones de dólares, representando el 17% del PIB, con lo cual el endeudamiento total de Bolivia, es decir la suma de deuda pública externa e interna, representó el 33% del PIB en 2013, reduciéndose enormemente la proporción respecto a 2005, cuando representaba el 80% del PIB.¹¹⁷

En cuanto a la política de gasto público e inversión social, hay que destacar que se ha producido un crecimiento, aunque a un ritmo menor que el de los ingresos. Los egresos totales del SPNF en 2012 (46,3%) crecieron en 12,5 puntos porcentuales del PIB, respecto a 2005 (33,8%). En materia de salarios de funcionarios y personal adscrito al sector público se debe resaltar el contraste entre la reducción del salario de hasta el 44% para el presidente y el resto de altos cargos de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y el aumento sostenido del salario mínimo, que muestra incrementos significativos desde 2006 con una repercusión significativa sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. En 2014 el salario mínimo nacional se ubica en 207 dólares, mientras que en el período 1998-2005 fue en promedio de 57 dólares.¹¹⁸

Además de esta política salarial, hubo un importante aumento en el gasto en dos partidas claves para la mejora de las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos: salud y educación. En el terreno de la educación ha sido prioridad revertir la cruda herencia

117 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. *Op. cit.*

118 *Ibidem.*

de siglos de colonialismo mediante la erradicación del analfabetismo, para lo cual se dispuso la aplicación del programa Yo Sí Puedo, que actualmente continúa su curso con el programa Yo Sí Puedo Seguir. En este sentido, Bolivia fue declarada libre de analfabetismo en 2008 por la Unesco. En términos de inversión social, Bolivia ocupa actualmente el segundo lugar en América Latina, detrás de Cuba, en cuanto al porcentaje del PIB destinado a Educación, que se ubicó en 2013 en 8,7% (alrededor de 2.200 millones de dólares).

Otro rasgo determinante a la hora de afirmar que sí ha habido una década ganada para Bolivia, para las mayorías populares, es la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema en el país andino, así como también la disminución de la tasa de desempleo urbano. La pobreza extrema se redujo casi un 20% entre 2005 y 2013, pasando de 38,2% a 18,8%. En términos de la mejora en la distribución de los recursos, es interesante observar el comportamiento del ingreso del decil más rico a nivel nacional: al inicio de este proceso, la relación era de 128 veces en comparación al ingreso del decil más pobre, y en el año 2012 esta relación se ha reducido hasta 46. También, en términos distributivos, el índice de Gini se ha reducido entre 2005 y 2012 en Bolivia en un 22% (siendo en este último año de 0,472%).¹¹⁹

Todos estos indicadores económicos y sociales no dejan lugar a dudas de la profundidad del proceso de cambios que se viene produciendo en Bolivia a partir de la llegada al poder de Evo Morales, proceso que no mermó su marcha en los últimos años, cuando comienzan a destacar algunas medidas que dan cuenta de avances en el cambio de las relaciones de producción, a la vez que se consolida el fortalecimiento del Estado en su rol de redistribuidor de los recursos del país. Este es el caso de la nacionalización del sector de la electricidad, dispuesto por el gobierno en 2012; la electricidad es un bien básico para el vivir bien del pueblo y como tal es tratado por la Revolución Democrática y Cultural que experimenta la nación

119 *Ibidem*.

andina. Esta disposición no es ni mucho menos un acto aislado, sino que conforma una estrategia estructural de responsabilidad a favor del pueblo boliviano y de apropiación de los recursos propios, que se enmarca en los pilares que sustentan el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp) emanado de la Constitución Política del Estado: 1) crecimiento y desarrollo con base en el aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos, 2) apropiación del excedente económico, 3) redistribución del ingreso, y 4) erradicación de la pobreza y reducción de las desigualdades sociales.¹²⁰

De esta manera, Bolivia sigue en su política de apropiarse de aquello que el pueblo necesita y que le fue expropiado en las décadas sufridas neoliberales. En los años noventa, en pleno apogeo de la política monopolizada bajo el objetivo del pago de la deuda ilegítima financiera, a costa de una mayor deuda social, los programas de desajuste y los planes de desestabilización se habían especializado en capitalizar empresas públicas de un modo en extremo perverso: las empresas públicas eran pseudoprivatizadas a favor de intereses particulares que solo tenían que firmar una promesa de un futuro aporte (50%) en una ampliación de capital. En contraposición, en la actualidad el Gobierno boliviano no se aleja de los problemas de su pueblo y se ha dedicado con eficacia a reducir pobreza y desigualdad, a controlar los sectores estratégicos, a redistribuir el incrementado excedente económico, y a tener una política de precios justos con todos aquellos bienes que son consumidos predominantemente por la mayoría de la población.

Otro ejemplo categórico es el caso de sectores productivos de escaso valor agregado, en los cuales, gracias a la puesta en marcha de una política productiva, creativa y justa, se ha conseguido aumentar el pago a los pequeños productores, reduciendo el margen de ganancia de los monopsonios de las grandes empresas y manteniendo un precio estable fijo para el consumidor final¹²¹.

120 *Ibidem*.

121 Un ejemplo paradigmático de ello es el caso de la leche, antes controlado por la translatina peruana Pil.

Esta es una clara muestra del 'sí se puede', siempre y cuando se desee políticamente garantizar que el pueblo viva bien, buscando los instrumentos técnicos más factibles para ello. En el caso de la electricidad, el motivo de la nacionalización era obvio: las empresas privadas poco se habían preocupado de las zonas rurales con población dispersa porque esto hubiera ido en contra de su única obsesión: la obtención de una alta tasa de beneficio. Evo Morales no defiende la patria boliviana defendiendo los intereses de diez familias; para este presidente la patria se defiende a partir de decisiones de política económica soberana que afecten positivamente a la mayoría del pueblo boliviano; esa fue la razón de ser de este proceso de nacionalización, a pesar de tener en su contra a buena parte de la hegemonía mediática internacional. Pero los tiempos son otros: Bolivia continúa el camino de su década ganada en un marco regional favorable, no sintiéndose solitaria frente a los poderes económicos internacionales, puesto que posee buenos y sólidos aliados en el progresista continente suramericano. Por todo ello, no resulta anómalo que en Bolivia, presidente y vicepresidente hayan sido reelectos en las últimas elecciones de octubre de 2014 con el 61% de los votos, manteniendo altos niveles de aprobación por encima del 50%, lo cual habla de un proceso político consolidado para continuar gobernando el país.¹²²

En efecto, en diez años de Revolución Democrática y Cultural en Bolivia, de cambio de época para los sectores populares, esta década ganada en Bolivia marcó la refundación del Estado, ahora más integral y menos aparente; que ha logrado convertirse en proveedor de bienes y servicios necesarios, que se constituyó en ente regulador para que la economía sea más justa en cuanto a determinación de precios, y que ha podido condicionar dinámicas

¹²² No sería comparable la elección de estos cargos con las elecciones últimas subnacionales que han tenido lugar en marzo de 2015, donde el MAS ha perdido importantes ciudades, pero todavía, en forma agregada, sigue siendo el instrumento político que más municipalidades ha ganado y más votos agregados ha obtenido.

del pasado de una economía que pensaba en seguir exportando a pesar de no haber sido satisfecha la demanda interna en relación con muchas necesidades básicas, muy particularmente en lo que concierne al tema alimenticio.

La consecución nacional del Vivir Bien está íntimamente ligada a la inserción estratégica real de Bolivia en el sistema internacional. A partir de allí, en esta década ganada Bolivia también ha cambiado sustancialmente su modo de relacionarse con el mundo. En estos años de Gobierno de Evo Morales no solo se han llevado a cabo decisiones en pro de mayor soberanía (por ejemplo, la salida del Ciadi), sino que, además, se ha cambiado la forma en que el país participa en la región. Bolivia ha pasado de ser un país que solo pertenecía a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a ser miembro del proyecto ALBA-TCP y a formar parte del Mercosur, quinta economía mundial en la cual se encuentra en proceso de incorporación plena. Este proceso, a la par que constituye una gran oportunidad de poder participar en diferentes espacios (con características propias), puede convertirse también en un gran problema si no es virtuosamente gestionado. Compatibilizar la pertenencia a ese triple espacio es el gran reto de los próximos años para Bolivia.

Cada espacio de integración en la región ofrece unas ventajas que deberían ser aprovechadas por la economía boliviana. La CAN es un viejo espacio en el que Bolivia conoce perfectamente sus posibilidades; es cierto que este bloque ha cambiado mucho después de la salida de Venezuela y, especialmente, por las firmas de los Tratados de Libre Comercio de Perú y Colombia con la Unión Europea. Esto trae serios peligros para Bolivia porque no solo entrarán productos europeos que podrían penetrar en la economía boliviana por la vía CAN, sino que además es probable, como ya pasó con Chile y México, que estas economías (la peruana y colombiana) estrechen su economía, esto es, reduzcan la matriz productiva (menos diversificada), sean menos los productos que produzcan debido a la creciente dependencia importadora de la Unión Europea y, además, se concentren en producir aquellos bienes realmente demandados por los nuevos socios (Unión Europea y

Estados Unidos). Además, la estrategia del bloque europeo en estos momentos de crisis sistémica consiste en reubicar al empresariado (especialmente al mediano y en menos importancia al grande) en nuevos mercados, como podrían ser los que van apareciendo y, con fuerza, en América Latina.¹²³

La entrada de Bolivia en el ALBA-TCP ha sido, sin lugar a dudas, el hecho más importante en cuanto a un cambio drástico en las condiciones de inserción internacional sucedidas hasta ahora. Bolivia, así, demuestra que no desea estar atada bajo las viejas lógicas capitalistas de intercambio desigual que la habían condenado a un desarrollo productivo aparente, más centrado en exportar gas, minería y bienes sin valor agregado derivados del agro que, además, solo traían beneficios para muy pocas unidades productivas; y teniendo efectos perversos sobre la gran mayoría de la compleja estructura económica productiva boliviana. Por el contrario, la entrada al ALBA demuestra una voluntad por querer insertarse de forma diferente en el mundo, apostando por una integración con un grupo de países de la región que poseen un proyecto político común a favor de los pueblos, y que han decidido establecer mecanismos de intercambio respetando las asimetrías sin generar más desigualdades.

En definitiva, tras diez años de Gobierno de Evo Morales se puede afirmar que, frente al decálogo neoliberal del pasado, el MAS optó en esta década ganada por su 'mandar obedeciendo' en la búsqueda del Vivir Bien de las mayorías, en sustitución del Vivir Mejor de unos pocos, que está resumido en estos diez mandamientos: 1) reducción de la pobreza extrema y desigualdad según PNUD, 2) mejoras en alimentación según FAO, 3) se triplicó el PIB, 4) tasa de desempleo es del 5,5%, 4) crecimiento del salario mínimo que casi triplica la inflación acumulada, 5) la inflación pasó del 400% en 1985-2005 al 6,7% en 2005-2013, 6) mejor distribución de las tierras, 7) la inversión pública se multiplicó por diez,

123 Estos retos, desafíos, peligros y posibles contradicciones se verán en profundidad en el capítulo siguiente.

8) se mejora y democratiza la educación y la salud, 9) se mejora el acceso a la energía, y 10) recuperación del Estado para (en términos gramscianos) alterar la hegemonía estatal, volviéndolo más democratizado, participativo y protagónico.

Todos son resultados que ratifican aquello que dice el presidente Evo Morales: "En Bolivia se ha pasado de los *Chicago Boys* a los *Boliviano Boys*". En definitiva, Bolivia, que en el 2001 en pleno auge neoliberal había sido la alumna aventajada del FMI y BM, aplaudida por ambos por sus calificaciones sobresalientes en el denominado Índice de Avances de Reformas Estructurales; hoy, diez años después, en cambio, es felicitada por su pueblo, que experimenta mejoras sustanciales en sus condiciones de vida.

Ecuador

Durante la larga y triste noche neoliberal, los sucesivos gobiernos de Ecuador redujeron la razón de ser del Estado y sus intereses a los intereses de una élite y concentrados grupos económicos, con un resultado social y económico desastroso para la mayoría social. La mirada del Estado estuvo dislocada y subordinada a los condicionamientos de los centros de poder dominantes, quienes incidieron durante décadas en las decisiones políticas y económicas, violentando la soberanía del país. Así se fue consolidando un Estado ilusorio cuya estrategia se centró más en redistribuir a favor de unos pocos, al mismo tiempo que se excluía a gran parte del pueblo ecuatoriano de la riqueza del país. Desde el campo popular, la respuesta ante la exclusión y el empobrecimiento generalizado del pueblo estuvo signada por un profundo ciclo de movilización social, que expresó no solo una profunda crisis de fragilidad institucional al interior del Estado, sino también la "vigencia de un ciclo de desacato y asedio social a las figuras dominantes del ordenamiento político".¹²⁴

124 Franklin Ramírez Gallegos. "Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)", en: Julián Rebon y Massimo Modonesi, (eds.), *Una década en movimiento*:

A partir de la década del noventa, organizaciones y movimientos sociales disputaron en forma permanente a las fuerzas consolidadas el campo de la política ecuatoriana, con la intención de alterar el statu quo imperante. Con esta tensión de fondo, entre los últimos años del siglo xx y los primeros del siglo xxi se sucedieron en el país siete gobiernos, tres de los cuales fueron derrocados en un contexto de revuelta popular (Bucaram en 1997, Mahuad en 2000 y Gutiérrez en 2005). El núcleo común de todos los reclamos era el cuestionamiento profundo a las políticas neoliberales, que resultaban fructíferas solo para unos pocos a cambio del sometimiento de muchos. Parte de estos movimientos sociales, principalmente Pachakutik, habían formado parte del Gobierno de Lucio Gutiérrez, quien había llegado al poder en 2003 con una propuesta de cambio, rápidamente abandonada para continuar profundizando las políticas económicas ortodoxas que se venían aplicando en el país, avaladas por el FMI.

Así, en el año 2005 el país se enfrentaba a una situación política extremadamente compleja. La situación económica era igual de alarmante: evidente reprimarización de la economía con escasa inversión, en búsqueda de ganar más competitividad externa basándose en la reducción de costos del trabajo; obtención de rentas extractivas a costa del deterioro de los ecosistemas, fuerte ineficacia del sistema tributario, alta dependencia de los recursos naturales y un elevado nivel de desigualdad, de exclusión social y de pobreza.

En este contexto, tras un breve paso por el Ministerio de Finanzas durante el Gobierno de transición de Palacio, Rafael Correa –quien había tomado cierto protagonismo al cuestionar desde el Ministerio los acuerdos con el FMI y el endeudamiento externo– comenzó a impulsar una coalición ciudadana que pudiera aglutinar las organizaciones de la izquierda ecuatoriana representando una amplia mayoría popular. En febrero de 2006, retomando

las experiencias de otros movimientos previos como Jubileo 2000, impulsado entre otros por Ricardo Patiño, Iniciativa Ciudadana o la Alianza Bolivariana Alfarista, se lanzó Alianza PAIS como una plataforma política ciudadana que buscaba articular a los sectores de la izquierda para disputar el poder en las elecciones presidenciales de ese año.

El plan de gobierno anunciado por PAÍS durante la campaña electoral incluía cinco ejes programáticos: convocatoria a una asamblea constituyente, lucha contra la corrupción desde una perspectiva de control ciudadano; revolución económica a partir de la democratización de los medios de producción; ampliación de los porcentajes del PIB destinados a salud y educación; y recuperación de la dignidad y la soberanía del país frente a los organismos internacionales. Con esta propuesta de ruptura respecto a los gobiernos de las décadas anteriores, que incluía un tono crítico respecto al FMI y un cuestionamiento de los tratados de libre comercio con EEUU, Alianza PAÍS se posicionó en segundo lugar en las elecciones, dando lugar a una segunda vuelta electoral. En noviembre de 2006, rompiendo con la vieja partidocracia, Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales con la propuesta de una Revolución Ciudadana, dando un primer paso en el camino de derrotar la larga noche neoliberal ecuatoriana. Con un 57% de los sufragios, el candidato de Alianza PAÍS superó al candidato del *establishment* económico, Álvaro Noboa, quien es además uno de los empresarios más ricos del país.

Emergía en Ecuador una nueva fuerza política que se proponía reconstruir el Estado y orientar la política económica hacia la redistribución de la riqueza y la defensa de la soberanía nacional. Luego de las políticas neoliberales impuestas durante el primer lustro del siglo xxi, que habían llevado su economía a un gran retroceso –incluso mayor que en la década de los noventa–, la asunción de Correa y la puesta en marcha del programa político y económico de la Revolución Ciudadana supuso un importante punto de inflexión respecto al pasado, y se inició así el cambio de época en Ecuador en cierta sintonía con el proceso de cambio, ya en marcha en

luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo xxi. Clacso/Prometeo, Buenos Aires: 2011, p.71.

América Latina. El desafío era enorme, pues Ecuador acarreaba una historia política y económica que lo ubicaba como uno de los países más empobrecidos de la región, con una inserción dependiente en el mercado mundial signada por la dependencia histórica de las exportaciones de materias primas sin valor agregado, a favor de una minoría que venía enriqueciéndose enormemente.

Una vez asumida la presidencia, sin perder tiempo se realizó la convocatoria a una Asamblea Constituyente para comenzar a refundar el país, en cuyas elecciones los candidatos de PAÍS obtuvieron alrededor del 70% de los votos. Tras un intenso proceso de debate que contó con una amplia participación popular, el texto estuvo listo en 2008 y el 28 de septiembre fue respaldado en un referéndum aprobatorio con el 64% de los votos. Así, el pueblo refrendó el deseo de transformación estructural del Estado y del modelo de desarrollo nacional. La nueva Constitución abrió un novedoso horizonte de posibilidad en el cielo ecuatoriano, marcando un pronunciado cambio respecto a la historia pasada del país y dando lugar al inicio de una etapa de transformaciones profundas, orientadas a la consolidación de un proyecto político basado en la soberanía económica y en la refundación del Estado, que comenzaría a recobrar un protagonismo clave en el cambio de las relaciones económicas. En palabras de Ramírez Gallegos:

... la nueva Carta Magna constitucionalizó la salida del neoliberalismo, amplió aún más el espectro de los derechos, consagró la plurinacionalidad del Estado, innovó en materia de derechos ambientales, extendió radicalmente los espacios de participación popular y, sobre todo, llevó más lejos que nunca las demandas por la des-partidización del orden político.¹²⁵

También cabe señalar que la propuesta económica en la Constitución pone gran énfasis en el cambio exigido para el patrón exportador e importador, que había condenado a Ecuador a padecer unos

términos de intercambio desigual. Se plantea la necesidad imperiosa de ensanchar la base de la economía a partir de una nueva relación con el mundo; el objetivo era dejar atrás la reprimarización de la economía y evitar la creciente tendencia importadora de bienes y servicios con valor agregado. El modelo económico del pasado había dejado consolidada una doble dependencia: por un lado, una dependencia del sistema-mundo; por otro, la dependencia de un sector económico concentrado en pocas grandes empresas que proveen divisas (gracias a la exportaciones de bienes primarios) y de un sector importador también concentradísimo –a veces se trata de los mismos capitales exportadores que se dedican a estas actividades de importación–. Para hacer frente a esta pesada herencia, la democratización del poder económico exigía otra forma de relacionarse económicamente con el mundo, que permitiera diversificar las relaciones comerciales tanto en bienes como en países, así como también en agentes económicos. Por ello, la propuesta económica constitucional defiende claramente una política económica que conjugue la sustitución de importaciones y la diversificación de las exportaciones, colocando productos con mayor valor agregado en el mercado y fomentando las actividades de los pequeños y medianos productores-exportadores.

Con el rumbo puesto en recuperar la soberanía económica, la nueva Constitución recogió en su Artículo 281 la implantación de una economía social y solidaria como base para la transformación estructural de la sociedad¹²⁶. Esta propuesta del sistema económico social y solidario reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada de la sociedad, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir como nuevo horizonte político.

Cabe aclarar en este punto que el Buen Vivir ecuatoriano no deber ser entendido como un concepto acabado, sino como un

125 F. Ramírez Gallegos. *Op. cit.*, p. 72.

126 Constitución de la República del Ecuador (2008). Título VI, Capítulo III, Artículo 281.

proceso en plena construcción que debe responder a coyunturas específicas con el objetivo de llevar a cabo transformaciones estructurales. En el plano económico, este término representa la disconformidad con la marcha del desarrollo convencional. Es un concepto incluyente que contempla a toda la población y, por tanto, incorpora innegociablemente el criterio normativo de la equidad. La justicia distributiva, como idea rectora, debe ser un pilar transversal en el diseño de la política económica. Es la cuestión distributiva, por tanto, un criterio primordial para cambiar la manera de hacer política y evitar volver al tratamiento neoliberal de la desigualdad supeditada al crecimiento.

En el plano internacional, el Buen Vivir implica, además un potenciamiento de las capacidades domésticas, que repiense la forma de participación en el actual contexto internacional, abonando el terreno para la construcción de una lógica diferente e inteligente de inserción internacional para el Ecuador. En sintonía con este nuevo cambio de rumbo, la nueva Constitución es contundente a la hora de rechazar los tratados internacionales que pudieran tener mayor rango jurídico que cualquier ley nacional. Por ejemplo, el Artículo 417 es claro en este sentido: “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución”¹²⁷. No hay otra interpretación posible; la primacía de la propuesta constitucional por encima de cualquier tratado es algo incuestionable.

A partir de ello, se propone ir construyendo una nueva manera de relacionarse hacia fuera para garantizar y repotenciar la eficacia de las decisiones que se toman adentro. Esto tiene su inmediata traducción en la nueva política económica exterior respecto a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y al sometimiento (neoliberal) frente al Ciadi. Ecuador decide en su Constitución no aceptar aquella regulación extranjera que viene adosada a cualquier TBI, en detrimento de las leyes nacionales en materia de inversión;

tampoco acata los fallos del Ciadi, entidad juez y parte –por ser dependiente del Banco Mundial–, para dirimir en caso de potencial conflicto entre el Estado y la inversión extranjera en cuestión. El rechazo del Ciadi y la creación de una instancia pública para realizar una auditoría de los TBI son pruebas inequívocas de una estrategia emancipadora para relacionarse con el mundo, evitando importar legislación extranjera que siempre ha cuidado la seguridad jurídica del capital transnacional, a costa del Buen Vivir de la mayoría de los ecuatorianos.

En este sentido, la Constitución Económica marca una profunda ruptura con el paradigma neoliberal del libre comercio; más bien respalda la importancia de buscar los mecanismos, en materia de comercio, que defiendan por encima de todo el Buen Vivir, el modelo de desarrollo redefinido en términos constitucionales. Con esta orientación se buscan unas reglas de comercio justo, que sirvan como instrumento para impulsar y fortalecer un patrón de desarrollo endógeno, de cambio de la matriz productiva y de protección inteligente a la producción nacional, para satisfacer la creciente demanda que se genera gracias a las políticas redistributivas del excedente económico.

Esto es claramente incompatible con la firma de tratados de libre comercio porque estos: 1) atentan contra el objetivo del cambio estructural del aparato productivo, 2) perpetúan el patrón primario-exportador del Ecuador, con el correspondiente sufrimiento (para la mayoría social) de un patrón de intercambio desigual; 3) van en detrimento de los esfuerzos para convertirse en un país económicamente independiente y soberano. No obstante, en este punto cabe señalar un aspecto contradictorio en la hoja de ruta marcada en este inicio de cambio de época. Se trata de los acuerdos hasta el momento alcanzados con la Unión Europea para la suscripción de un tratado comercial que, si bien no se denomina de libre comercio, tiene mucho de parecido. Aunque este punto se tratará más adelante (en el capítulo cuarto), merece la pena prestar especial atención a los potenciales inconvenientes en términos estructurales y estratégicos, si finalmente se acaba firmando el

127 Constitución de la República del Ecuador (2008). Título VIII, Capítulo II, Artículo 417.

acuerdo comercial que la Unión Europea ha propuesto (siempre presionando, a través de la renovación año a año del sistema de preferencias arancelarias). La firma de este tipo de tratado (muy similar al mismo firmado entre Colombia y Perú con la Unión Europea) sería dar marcha atrás a la apuesta por una inserción soberana en el plano internacional, tal como siempre fue establecido como principio rector y vertebrador del proyecto de la Revolución Ciudadana, plasmado en la Carta Magna.

La soberanía no aparece en el texto constitucional como un principio exclusivamente declarativo, ni decorativo; se trata de un principio con fuerza expansiva, con fuerza centrípeta, con capacidad de convertirse en vehículo del nuevo proyecto, fundamentalmente como un cordón de seguridad clave para que se puedan efectuar los cambios casa adentro. La soberanía constituye un elemento consustancial a la propuesta de cambio en materia económica; sin una política económica soberana, las opciones de cambio merman; sin soberanía, es imposible la irreversibilidad del proceso de transformación; sin soberanía, la sostenibilidad de un cambio estructural de la economía es ciertamente inalcanzable.

Es justamente por esta razón que la soberanía no se concibe constitucionalmente como un término ambiguo, vacío y superficial, sino todo lo contrario: la soberanía se traduce en lo concreto, en contenidos precisos, en el cambio de paradigma en cuanto a las diferentes relaciones económicas internacionales, tanto en el nivel de políticas económicas –no únicamente comerciales, sino también financieras, productivas, tributarias, monetarias– como en la nueva arquitectura económica internacional que propugna Ecuador para el mundo.

En tal dirección, hay una novedad que merece la pena destacar: la importancia concedida a la dimensión regional en el momento de propugnar una nueva inserción del Ecuador en el orden económico mundial. Desde esta premisa se define una estrategia de inserción en el mundo, priorizando los esfuerzos de integración regional desde la región latinoamericana, sin el relacionamiento aislado con otros bloques. Se plantea implícitamente la necesidad de articulación supranacional como condición sine qua non para proteger

cualquier proceso revolucionario nacional-popular en el país. Sin alianza exterior sólida es imposible realmente defender una soberanía nacional frente a la gran orquesta transnacional del capital mundial. Así, con esta idea estratégica, la propuesta económica constitucional busca participar en una suerte de nuevo consenso para enfrentar al Consenso de Washington; sería una especie de Consenso Bolivariano, como lugar común de encuentro y alianzas desde abajo, desde las mayorías sociales latinoamericanas en este nuevo cambio de época.

Después de aprobada la Constitución de 2008, Ecuador ha pasado a formar parte de un nuevo Sur latinoamericano, participando activamente en la construcción de una nueva arquitectura regional, con una nueva institucionalidad soberana e independiente, sin necesidad de pasar por el Norte. En este sentido, es posible resaltar los múltiples espacios de relacionamiento emancipados del Norte, destacando principalmente el ingreso del Ecuador al ALBA, a la Unasur, y a la Celac. Son tres hechos históricos que no pueden explicarse sin la nueva Constitución Económica en Ecuador, que ha permitido proyectar un nuevo horizonte estratégico para recuperar la soberanía, gracias a una reinserción regional en el sistema-mundo.

Otro hecho para resaltar, más enfocado en los cambios adentro, es que en Ecuador a partir del cambio constitucional los planes de gobierno ya no llevan el nombre de ‘para el desarrollo’, sino que se plantea un nuevo horizonte de ideas a partir de la reelaboración del concepto del Buen Vivir como orientación programática, marcando un punto de inflexión después de tantos años apegados al paradigma del desarrollo. Así, en consonancia con la Constitución Nacional, el Plan Nacional para el Buen Vivir del año 2009-2013 sentó las bases para un cambio en el régimen de acumulación, favoreciendo la distribución y redistribución de los medios de producción, con miras a la construcción de una nueva economía social y solidaria; no entendida como algo marginal y focalizada para unos pocos, sino que fuera la base de la nueva estructura de las relaciones económicas. Este nuevo plan fue fundante en el hecho de

considerar un Estado Plurinacional que promueve la participación social y el poder ciudadano, a la vez que proyectó las bases de un Ecuador postpetrolero y postagroexportador, para realmente gozar de una triple dimensión de la soberanía: alimentaria, energética y tributaria; lo cual evitaría, en gran medida, los efectos derivados de la volatilidad internacional de muchas variables, así como los males de la enfermedad holandesa. De esta manera, se abrió con la Revolución Ciudadana un horizonte cierto en Ecuador para acabar con la herencia de la larga noche neoliberal, quebrando el anterior modelo económico y sentando las bases para poner en marcha de manera integral un nuevo régimen orientado al Buen Vivir con otra economía: social y solidaria.

A este primer plan le sucedió el segundo Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que continúa la senda trazada por el anterior, pero haciendo especial hincapié en la necesidad del cambio de la matriz productiva a la mayor brevedad posible (así como de la matriz de consumo), y en la importancia de la planificación para seguir erradicando la pobreza, para pasar a la sociedad del conocimiento justa y solidaria, y también para continuar con la transformación eficiente del Estado. Por otro lado, en el plano de la transformación de las relaciones de poder en la sociedad y la construcción de una nueva hegemonía cultural y simbólica, la Revolución Ciudadana tiene la tarea de hacer partícipes a las grandes mayorías en la profundización del cambio y la consolidación de un proyecto de país soberano, basado en la construcción del socialismo del Buen Vivir. Para ello, se promueve la democratización del control, la administración y la distribución de los recursos, tanto materiales como culturales y simbólicos.

El conocimiento ocupa un lugar preponderante en el marco de este nuevo proyecto político. Deja de ser entendido como algo excluyente y elitista, para ser concebido como un bien público, común y abierto, accesible para todos los miembros de la sociedad. Entender y gestionar el conocimiento como un bien común implica, además, reorientar el sentido de la investigación y el desarrollo científico, con el horizonte puesto en la conformación de una sociedad que

construya nuevas prácticas de organización y producción solidarias. Según el Programa de Gobierno 2013-2017:

... la investigación debe tener un trasfondo ético y social: debe ser una investigación aplicada en función de las necesidades del país. La decisión de que sea una investigación aplicada tiene un telón de fondo económico: busca construir economías sociales y solidarias. La Revolución Ciudadana propone ubicar, en el centro de la economía social y solidaria, a la generación, acceso, producción y distribución de la información y el conocimiento, como nueva estrategia de acumulación y redistribución.¹²⁸

En el plano social, la enorme deuda heredada del neoliberalismo está siendo saldada a una gran velocidad. Son muchos los indicadores que nos permiten afirmar que durante esta década ganada en Ecuador el objetivo de acabar con la larga noche neoliberal, dejando atrás el empobrecimiento de las mayorías, se ha logrado en gran medida y continúa su marcha. Pero esto no es mérito solo del gran impacto positivo que ha tenido la implementación de los programas de ayudas sociales y transferencias condicionadas, como puede ser el Bono de Desarrollo Humano, sino que, además –y sobre todo–, se llevaron a cabo distintas políticas, entre las que se destacan las de: 1) educación y salud, 2) inversión en infraestructura, de cara a lograr la esperada soberanía energética, 3) reformas tributarias que incrementaron recaudación más progresivamente, 4) ciencia, tecnología y educación superior en aras de una economía del conocimiento y de creatividad que permita mejorar los términos de intercambio para el país, 5) crecimiento de infraestructuras logísticas y comunicaciones, 6) lograr una inserción menos subordinada en el mundo a través del abandono del Ciadi, de denuncia de

128 Alianza PAÍS. *Programa de Gobierno 2013-2017. Gobernar para profundizar el cambio. 35 propuestas para el Socialismo del Buen Vivir*, Ecuador: 2013, p. 102.

los Tratados Bilaterales de Inversión, de más comercio con Sucre (vía ALBA).¹²⁹

El ámbito social ha sido una de las principales preocupaciones en los últimos años, como lo demuestra el crecimiento del presupuesto destinado a este sector, que pasó del 4% del PIB a inicios del siglo xx, a casi el 6% en el 2007 y a 9,6% en el 2013. En forma desagregada, la inversión social destina 24% a educación, 10% a salud, 7% a bienestar social, 4% a desarrollo urbano y vivienda, y 1% a trabajo. En relación con los programas de protección social, las mejoras son indiscutibles. Se amplió la cobertura del Bono de Desarrollo Humano (BDH): desde fines de 2008 se incorporó al programa a las personas con discapacidad, además de madres y adultos mayores de 65 años; así, el número de beneficiarios del BDH pasó de 1.182.103 en diciembre de 2006 a 1,9 millones en diciembre de 2013. Se emprendieron las Misiones Manuela Espejo, para la investigación y registro georeferencial de todas las personas con discapacidades en el país, y la Joaquín Gallegos Lara, que otorga un bono de 240 dólares mensuales para los responsables de cuidar a las personas con discapacidad intelectual o física severa; casi 20 mil personas se beneficiaron de esta ayuda en 2013.

Además, se ha dado un énfasis especial a la educación, lo cual se refleja en el incremento sostenido de la tasa neta de asistencia a la educación básica, en el período 2007–2013, que ha alcanzado niveles del 96,1% a nivel nacional (97% en el área urbana y 94,7% en la rural). Hasta el 2007 este indicador había sido de 91,4% a nivel nacional. También la tasa neta de asistencia a la educación secundaria se ha incrementado del 51,2% en el 2007 al 65,8% en el 2013.

En el ámbito de la educación superior, la Revolución Ciudadana ha logrado un significativo salto cuantitativo y cualitativo. La democratización en el acceso a la educación superior es un hecho incontestable de esta década ganada: la tasa neta de matrícula universitaria se incrementó del 25,1% en 2007 al 33% en 2012, a nivel

129 Siglas de Sistema Único de Compensación Regional. En una sección posterior se explicará con más detalle la importancia de este nuevo instrumento económico.

nacional, mientras que la tasa de no matriculación en la universidad por motivos económicos disminuyó para el mismo período del 45,3% al 27,4%¹³⁰. En el año 2013 Ecuador invirtió 2% del PIB en educación superior. Se han creado programas de apoyo notable para que muchos ecuatorianos puedan formarse en posgrados y doctorados en el exterior; hasta el 2013, 7.168 ecuatorianos estudiaban posgrados en universidades del extranjero, con una inversión de 560 millones de dólares, mientras que de 1996 al 2006 solo había 237 becarios. Al mismo tiempo, el programa Prometeo ha permitido incorporar talento humano a las áreas estratégicas para el país: en el período de 2005 a 2014 se han financiado 123 proyectos investigativos y se han consolidado 89 redes de investigación. También se creó la Empresa Pública Yachay y la primera Zona Especial de Desarrollo Económico, como clara muestra de la apuesta a transitar hacia una economía social del conocimiento que acabe con la neodependencia del siglo xxi.

En el ámbito impositivo, las reformas que se han llevado a cabo desde 2007 a través de la Ley de Equidad Tributaria han estado encaminadas hacia el cumplimiento de los principios definidos por el Artículo 300 de la Constitución, sobre todo los de progresividad, equidad y suficiencia. Entre el 2007 y el 2013 se ha logrado incrementar la recaudación total en un 137%, recaudando este último año 12.758 millones de dólares frente a 5.362 de 2007. Cabe destacar que de esta recaudación el 30% provino del impuesto a la renta, garantizando así que el principal impuesto directo cada vez tome más protagonismo en la matriz tributaria. Esto ayuda a contribuir al objetivo de disponer de un sistema tributario progresivo, que respete los principios de justicia distributiva y con capacidad recaudatoria. La recaudación tributaria se triplicó en 2014 en comparación con el 2006, sumando poco más de 13.000 millones de dólares. Los ingresos tributarios recaudados por el Servicios de Rentas Internas representan más del 60% en el total de ingresos del

130 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), *35 logros de la revolución ciudadana en educación superior, ciencia, tecnología e innovación 2013*, Ecuador: 2013.

Presupuesto General del Estado. El porcentaje de contribuyentes ha aumentado exponencialmente en los últimos años: en 2014 se registraron más de millón seiscientos mil contribuyentes activos, más del doble que en 2006 (600.000); en 2006 apenas el 30% de los ecuatorianos cumplía adecuadamente con sus impuestos, hoy lo hace más del 70%. El gasto anual del sector público no financiero (SPNF) se incrementó del 24,61%, en relación con el PIB en 2007, a 44,38% en 2013.¹³¹

Con referencia a los indicadores económico-sociales, la pobreza a nivel nacional se redujo entre 2007 y 2013 del 37% al 23,6%. La incidencia de la pobreza multidimensional, según mediciones propias de la Cepal, se redujo de 46% a 31% entre 2005 y 2012 (Cepal, 2014). Si bien en el Ecuador la pobreza rural aún es extremadamente alta, 40,9% en marzo 2014, esta se ha reducido constantemente desde el 2007 en más de 16 puntos porcentuales en total. En el área urbana, la reducción entre 2007 y 2013 fue algo inferior, aunque muestra un valor muy significativo: 7 puntos, ubicándose en 16,3%. Se ha observado una reducción de la brecha de pobreza urbana de 3% entre septiembre de 2008 (7,77%) y septiembre de 2014 (4,82%); la severidad también se redujo en el mismo período de 3,84 a 2,18% (INEC, 2014). Este último dato expresa que la reducción de la pobreza también se produjo acompañada de una mejora de la situación relativa de quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, es decir, los más pobres entre los pobres. El porcentaje de personas en pobreza extrema también se redujo fuertemente en el país: tomando el período de junio de 2008 a junio de 2014, la reducción fue de 15,49% a 8,04%. Los datos del último censo disponible (2010) permiten también tener una estimación de la incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 60%, y del 26,8% si se hace referencia al mismo indicador, pero en relación con la extrema pobreza. Comparando con los datos del censo anterior (2001), se ve una caída moderada de ambos indicadores, que en dicho año se ubicaron en 61,3% y 32%, respectivamente.

¹³¹ Ministerio de Coordinación de la Política Económica, *Ecuador Económico, indicadores Macroeconómicos*, Ecuador: 2014.

En términos laborales, se ha mejorado el ingreso procedente del trabajo de una gran parte de la población ecuatoriana que depende en exclusividad de esta fuente para lograr unas dignas condiciones de vida. Según el Banco Central del Ecuador, el índice del salario unificado real se ha incrementado constantemente a razón de un 5% anual, en promedio, durante el período 2007-2013¹³². La tasa de ocupación plena se ha incrementado en más de 7 puntos porcentuales entre diciembre de 2007 (35,29%) y diciembre de 2014, mes en la que fue de 43,15% a nivel nacional; la tasa bruta de subempleo se redujo 6 puntos en el mismo período, de 58,58% hasta 52,49%; igual comportamiento aunque menos pronunciado tuvo la tasa de desempleo, que se situó en el 4,15% en diciembre del 2013 (casi un punto menos que la del 2007). Además, las condiciones de aquellos que tienen un trabajo también han mejorado, como lo demuestra la evolución positiva de los ocupados plenos, afiliados al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS): del 39,22% en diciembre de 2007 pasó al 64,29% en diciembre de 2013.¹³³

Las estadísticas nos permiten observar un crecimiento del país a ritmo acelerado, pero acompañado de una reducción en la brecha entre los más ricos y los más pobres. Las políticas llevadas adelante por la Revolución Ciudadana, de la mano de Correa, han logrado revertir las históricas desigualdades del país, generando una mayor inclusión de los sectores más marginados. El crecimiento ecuatoriano no es empobrecedor, sino todo lo contrario: es un mecanismo distribuidor justo de la nueva renta generada. Es ese un logro de esta década ganada para las mayorías populares. De hecho, la desigualdad económica, medida por el índice de Gini, se reduce en este período de 0,55 en 2007 a 0,485 en 2013. En el área rural, el coeficiente de Gini fue 0,4556 en septiembre del 2014, mientras que el del área urbana fue 0,4619.

Estos datos reflejan el éxito económico y social que tuvieron las políticas de inclusión social acometidas en estos años. Con el

¹³² Banco Central del Ecuador. *Información Estadística Mensual*: 2014

¹³³ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Enemdu, Marzo 2014*, Ecuador: 2014.

triunfo de la Revolución Ciudadana se inició una etapa de transformaciones profundas en el Ecuador, que avanzan a paso firme hacia la consolidación de un proyecto político basado en la soberanía económica, cuestionando los modelos hegemónicos de (sub) desarrollo a partir de la refundación de un nuevo Estado surgido del proceso constituyente. En términos concretos, se redujo considerablemente la extrema pobreza y el hambre, se avanzó progresivamente en la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres, se redujo la mortalidad infantil, se universalizó el acceso a la salud reproductiva, se redujo la deuda externa, se universalizó la educación primaria, y se democratizó en gran medida el acceso a la educación superior.

Pero además, en el tránsito de esta década ganada de la Revolución Ciudadana, el “correísmo” ha conseguido reinventar el lenguaje político y articular un proyecto de país que se consolida en la construcción de una nueva hegemonía cultural y simbólica. El discurso que comenzó como propuesta forajida (*alter ego* de los movimientos de la periferia europea) se plasmó en una nueva Constitución que incorpora un título con el significativo rótulo de Soberanía Económica, y que finalmente ha fraguado en una política que se traduce en aquello que el pueblo demanda: redistribución del excedente económico para saldar definitivamente el endeudamiento social heredado. A su vez, este desplazamiento del eje político en Ecuador se inscribe en un cambio de orden geopolítico en la región a favor de las mayorías populares. Es la década ganada para toda la región y en Ecuador esta década se visibiliza en importantes logros no solo económicos, sino vinculados a la transformación de las prácticas políticas y culturales que hacen a la constitución de un país.

Fundamentalmente, el *correísmo* ha logrado sentar las bases para una transformación profunda del Estado, dotándole de un importante músculo institucional con gran eficacia. De esta forma, en el Ecuador actual se vuelve posible el tránsito entre ese Estado heredado del neoliberalismo, mínimo e ilusorio, monopolizado por unos pocos intereses, hacia un modelo de Estado democrático e integral, capaz de articular en un proyecto común los intereses de

los diversos grupos sociales en beneficio de las mayorías. El mismo se encuentra plasmado, democrática y participativamente, en esa Constitución del 2008.

Con este telón de fondo formado por innegables logros sociales y económicos, y con un gran apoyo popular, Rafael Correa resultó nuevamente electo como presidente del Ecuador en febrero de 2013, obteniendo más del 57% de los votos. Vale la pena recuperar las palabras con que el secretario nacional de Planificación y Desarrollo sintetizaba, luego de este tercer triunfo electoral consecutivo, el espíritu del proceso político ecuatoriano, y el cambio de rumbo propuesto con el horizonte puesto en el buen vivir, a la vez que enfatizaba los enormes desafíos que aún restan hacia futuro:

... la Revolución Ciudadana no es un membrete, es un proceso. (...) Durante el primer período de gobierno se han realizado importantes avances en el campo institucional, económico y social. (...) Con ello, hemos logrado romper el nudo central de las políticas implementadas durante el neoliberalismo y preparar el camino para materializar los derechos plasmados en la Constitución de Montecristi aprobada en consulta popular en el año 2008. Esto representa la ruptura con el pasado y la radicalización de la Revolución Ciudadana.¹³⁴

Con este amplio triunfo en las urnas, Correa ha logrado construir la hegemonía electoral necesaria para profundizar el proceso de cambio y seguir transformando estructuralmente, en armonía con respuestas eficaces, las demandas coyunturales. No hay ninguna duda, en Ecuador ha surgido una nueva identidad política que modifica el campo de la praxis política, y marca un antes y un después de la larga y triste noche neoliberal. El correísmo constituye otra manera de hacer política; los objetivos son tan simples como difíciles de alcanzar: control (con mayor inversión pública) de los sectores estratégicos, nuevas reglas para que el pueblo

¹³⁴ Véase Fander Falconí, “Triunfó el Buen Vivir”, página 12, 22 de febrero de 2013, recuperado el 13 de octubre de 2014, de: <http://www.página12.com.ar/diario/elmundo/4-214369-2013-02-22.html>

ecuatoriano goce de sus excedentes, una inserción regional inteligente y soberana en el mundo, democratización de una educación superior de mayor calidad, un saldo notable en materia de ciencia y tecnología, y una política tributaria que recauda mucho y equitativamente. El correísmo, tanto en su identidad política como económica, ha logrado resignificar desde lo público el objetivo de la eficiencia, disputando el sentido monopólico procedente de la economía privada; la gestión eficiente es concebida como un nuevo tiempo de la política. No hay revolución para el Buen Vivir si no se hacen bien las cosas desde la gestión pública. Este es un rasgo que sirve como ejemplo para todos los procesos de cambio en la región, en tanto Ecuador consiguió en este aspecto ir un paso más allá de la crítica y el cuestionamiento para pasar a la propuesta, reinventando los términos de la vieja política en favor de un proyecto político emancipador.

Pero es importante no perder de vista que para lograr ese 'hasta la victoria siempre', con el que siempre saluda el presidente Correa –al igual que lo hacía Chávez–, no se ha de frenar ni un segundo. No hay tiempo que perder para seguir transformando. Se trata de no detenerse, de seguir profundizando el cambio, seguir radicalizando las políticas de emancipación para pasar de saldar deuda social y paliar pobreza, a erradicarla integralmente y distribuir riqueza en aras de una democracia absolutamente real, anclada en el buen vivir.

Ahora es el momento para acometer el resto de transformaciones, para seguir con la revolución en marcha dentro de la revolución. Es momento de dar un salto adelante para finalizar con el modelo mixto heredado, en el que el sujeto económico no puede predominantemente ser la burguesía compradora-importadora más el sector agroexportador; es el momento del atinado uso de la renta petrolera, de tal forma que el extractivismo sea concebido como un medio necesario para realizar la transición en búsqueda de salir del patrón primario exportador.

El nuevo perfil de especialización productiva necesariamente deberá orientarse, tal como lo plantea el Programa de Gobierno 2013-2017, hacia una economía postextractivista, que sea menos

dependiente de exportaciones primarias y, por ende, menos depredadora de la mano de obra y de la naturaleza. El desarrollo de políticas públicas orientadas a la formación y especialización en Ciencia y Tecnología resulta de importancia estratégica para alcanzar los objetivos planteados; ahí el código social del conocimiento se convierte en un paradigma, en horizonte y también en un instrumento clave para alcanzar este reto histórico y estratégico.

El Consenso Bolivariano; una nueva región, otra América Latina

La acelerada transición geopolítica a la que asistimos en este siglo XXI está provocando una reconfiguración significativa de bloques y países en el tablero económico mundial. Todo se mueve a gran velocidad; los recientes análisis de hace apenas algunos años quedan hoy caducos. El rol que jueguen China y –de forma relativamente subsidiaria– las economías del sudeste asiático puede ser decisivo en el nuevo ajedrez global. Los países llamados emergentes, representados por el Brics (más Argentina)¹³⁵, siguen jugando un papel protagónico en este reordenamiento mundial. La celeridad de esta metamorfosis geopolítica exige actualizar la mirada global, y más para el caso de América Latina que aparece con gran vigor como nueva región, como nuevo bloque proactivo y protagónico en este proceso de reconfiguración.

América Latina ya no es, por supuesto, aquella región de las décadas perdidas en la que las políticas neoliberales fueron implementadas a través de Programas de (des)Ajuste Estructural y Planes de (des)Estabilización. América Latina ya no es aquella región moldeada según el viejo Consenso de Washington; en este siglo XXI ha iniciado un cambio de época que tiene como pilar fundamental el nuevo acuerdo al interior de este espacio: una suerte de *Consenso Bolivariano*. La esencia de este nuevo Consenso puede

¹³⁵ Se ha llegado a llamar a este grupo de países como Bricsa, por la invitación de Argentina a la sexta cumbre del organismo celebrada en Fortaleza (Brasil) en 2014.

resumirse en la pregunta retórica que usó el presidente Rafael Correa a inicios de 2015 al asumir la presidencia pro t mpore de la Celac: “ Por qu  tenemos que resolver nuestros problemas en Washington?” El mensaje no deja lugar a dudas: la Celac es ya una realidad como espacio superador de aquellos procesos de (des) integraci n controlados desde el Norte, que permite dejar atr s el viejo consenso del pasado impuesto por Estados Unidos.

Despu s de los a os que trascurrieron desde que se iniciara el nuevo siglo, mucho ha cambiado el continente latinoamericano; el cambio de  poca en la regi n es un hecho irrefutable que se demuestra, por ejemplo, con la propia Celac, pero tambi n con Unasur, con el ALBA frente al ALCA, con un Mercosur distinto al del pasado. Definitivamente, esta nueva regi n latinoamericana es una regi n que ha decidido repensarse, puertas adentro, para buscar nuevas formas de insertarse hacia fuera.

Para ello, Am rica Latina durante este per odo se ha empe ado con mucha voluntad pol tica en construir y edificar una nueva propuesta convergente de integraci n regional, a pesar de que en su interior a n conviven iniciativas opuestas, que van desde procesos de cambios estructurales contrahegem nicos (que interpelan y cuestionan el capitalismo), pasando por propuestas no-neoliberales moderadas, hasta otras f rmulas ya conocidas, conservadoras del orden establecido, neoliberales y contraprogresistas. No obstante, a pesar de las diferencias, en estos a os Am rica Latina ha demostrado un grado de madurez geopol tica tal que ha logrado superar numerosas dificultades buscando un acuerdo de m nimos: un nuevo Consenso Latinoamericano del siglo xxi, que bien podr a denominarse Consenso Bolivariano y que constituye otro rasgo caracter stico de la nueva d cada ganada para Am rica Latina, de este nuevo cambio de  poca.

A su vez, a lo largo de la  ltima d cada, la d cada ganada para buena parte de Am rica Latina, la regi n ha experimentado grandes cambios en m ltiples dimensiones gracias a procesos pol ticos de cambio. Se han abierto nuevos horizontes pol ticos y discursivos, pol ticas econ micas superadoras de la hegemon a

neoliberal y, fundamentalmente, nuevos espacios de articulaci n de las relaciones econ micas entre pa ses, dando lugar al inicio de un proceso in dito de construcci n de alianzas regionales que no se ve a desde hac a siglos, desde que Bol var procurase aquella gran naci n de naciones. Como venimos sealando, este giro geopol tico se enmarca en un contexto internacional de transici n sist mica geoecon mica a nivel mundial, signado por la reconfiguraci n de las relaciones comerciales, financieras, monetarias y productivas entre pa ses y bloques, y tambi n por la emergencia de nuevas potencias econ micas. En este contexto de transici n hacia un mundo con m ltiples polos de poder, Am rica Latina ha venido buscando posicionarse como un nuevo polo, como un nuevo bloque, con mayor independencia de los poderes econ micos dominantes a escala global.

En este proceso de cambios a nivel de integraci n, es fundamental destacar el papel de Hugo Ch vez como ide logo e impulsor de una nueva arquitectura regional. Nutri ndose de diferentes corrientes te ricas y retomando los n cleos del pensamiento de Bol var, el l der venezolano supo rechazar enf ticamente la visi n dicot mica excluyente entre la pol tica exterior y la interior, y avanzar en una visi n de complementariedad que dio lugar a la emergencia de un in dito proceso de integraci n regional, anclado en principios de solidaridad y cooperaci n.

Ch vez comprendi  que desde el siglo xv en adelante el mundo est  interconectado –aquello que muchos autores denominan la mundializaci n de la econom a–, que los fen menos son interdependientes a escala global. Lo que pasa en un territorio puede que tenga una explicaci n en otro punto del planeta, alejado en lo geogr fico pero muy cercano en lo econ mico, en lo pol tico. Cabe aclarar que con la llegada del neoliberalismo, el proceso *mundializador* del capitalismo aceler  su ritmo de construcci n hegem nica en todos los sentidos posibles: en lo econ mico, lo pol tico, lo cultural, lo social. La globalizaci n de las  ltimas d cadas del siglo xx es simplemente eso, es decir, el proceso de construcci n hegem nica del neoliberalismo a nivel mundial, presentando al mundo

como un todo, pero un todo capitalista a imagen y semejanza del sistema que se pretende instaurar para perpetuarlo sosteniblemente sin contratiempos.

El neoliberalismo trató con todos sus medios de construir eficazmente un tejido de redes, de telarañas, que hicieran dependientes a todos los países satélites del centro de gravitación del capitalismo mundial. Dedicó todos los esfuerzos posibles para lograr que la soberanía de cualquier pueblo siempre acabara subordinada a la tasa de ganancia de un capital privado, exageradamente concentrado en pocas manos. La alianza del capital transnacional fue la estrategia seleccionada por el neoliberalismo para acabar venciendo cualquier batalla contra cualquier pueblo soberano. Pocas manos acabaron teniendo mucho más que el PIB de muchos países; la riqueza de una red reducida del capital transnacional podría controlar el mundo, moviendo hilos en los países como si de marionetas o títeres se tratase. En ello mucho ayudaban los organismos internacionales que se hacían llamar comunidad internacional, aunque excluyeran a la mayoría social de muchos pueblos, representando a una reducida pero poderosa oligarquía económica.

Frente a ello, Chávez –especialmente influenciado por el pensamiento geopolítico de Simón Bolívar– comprendió que cualquier revolución nacional debía tener un alcance transnacional y que, por tanto, conciliar ambas revoluciones (la nacional y la supranacional) era condición sine qua non para la perdurabilidad de los procesos de cambio a favor de las mayorías populares. Solo había una forma de resistir y luchar contra la estrategia del capital transnacional: la disputa debía realizarse desde otra alianza transnacional, alianza de los pueblos, alianza de Estados soberanos. De esa manera, consiguió instalar en el imaginario la idea de que la única manera de combatir eficazmente el grandísimo poder del capital transnacional, que no entiende de nacionalidad ni de patria, es conformando una alianza transnacional que pudiera disputarle el poder de igual a igual.

El líder bolivariano entendía que frente al Consenso de Washington la respuesta debía venir por el lado de generar un consenso regional distinto, un nuevo Consenso Bolivariano: un acuerdo que consensuara una estrategia transnacional para pelear contra la hegemonía neoliberal, inspirado en la corriente ideológica bolivariana, pero donde tenían que caber no solo aquellos países con más afinidad ideológica en el proceso de cambio, sino también los otros, que son necesarios para que la región tenga un tronco común vigoroso, de tal forma que todos los países puedan sentirse beneficiados por avanzar en estrategias conjuntas. Bolívar había muerto pero no su visión geopolítica. Este carácter bolivariano de la integración regional conforma una base esencial del cambio de época para toda América Latina; iniciado seguramente en Venezuela desde que Chávez ganara en las elecciones, pero irradiado, siempre con las especificidades del caso, a toda la región latinoamericana. Chávez se empeñaba por aquel entonces, casi en los primeros pasos del siglo XXI, en poner en práctica esta idea del Sur que había rescatado de aquel libro que pasara desapercibido en el año 1991, *Los Desafíos para el Sur*, coordinado por el presidente de Tanzania, Julius Nyerere.¹³⁶

En el nuevo reordenamiento político y económico del mapa-mundi, que incluyó –tal como se vio anteriormente– la aparición de nuevos polos, el continente latinoamericano emergió no como el conjunto de países aislados entre sí –herencia de los siglos de colonialismo–, sino como un polo de poder articulado en términos económicos y políticos por principios de unión y cooperación. Chávez consideró vital una inserción soberana y regional en el sistema-mundo para que Latinoamérica abandonara definitivamente patrones de intercambio desigual, de subordinación, de dependencia, de yugo colonial; por eso la urgencia de emprender un camino hacia la segunda y definitiva independencia de los pueblos de Nuestramérica, tal como él siempre denominó a la región. El continente debía transitar hacia ese estadio de emancipación

136 Julius Nyerere. *Desafíos para el Sur. Informe de la Comisión del Sur*, Fondo de Cultura Económica, México DF: 1991.

mediante una alianza grannacional en el seno de la región, reubicándose estratégica y soberanamente en el mundo dentro de nuevas relaciones con los países del Sur, sin pisar el Norte. Desde el 2003 hasta el 2012 el mandatario venezolano hizo lo imposible para construir proactivamente, a contra corriente, otra América Latina. Al empezar fueron años de soledad porque desde 1999 hasta 2002 no había en la región ningún país con signo político afín a estas ideas bolivarianas, sino más bien sucedía todo lo contrario: la región continuaba fragmentada, solo unida por los lazos del neoliberalismo a escala global, con fuerte dependencia de los poderes económicos centrales.

Pero justamente por el año 2003, después de ese periplo de soledad, Venezuela comenzó a tener una incipiente y aun tímida compañía en la región; nuevos aires, pero todavía de brisa suave. Apenas había iniciado Lula da Silva su período presidencial en Brasil desde enero de ese año; Néstor Kirchner hacía lo propio en Argentina en mayo. El resto del continente miraba al Norte; el presidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), como uno de los mejores lacayos de Estados Unidos; Sánchez de Lozada en Bolivia (2002-2003) seguía pactando con el Norte ser el mejor alumno del neoliberalismo, hasta que la guerra del gas en octubre del 2003 le pusiera punto y final; Vicente Fox en México (2000-2006), como gran empresario, quería más neoliberalismo para su país; en Chile, Ricardo Lagos (2000-2006), de corte aparente socialdemócrata, no modificaba apenas nada de las estructuras sólidas de la economía neoliberal instalada por Pinochet; en Uruguay, el viejo Partido Colorado, con Jorge Batlle, servía de continuismo servil al capitalismo mundial; en Paraguay, con Nicanor Duarte (2003-2008), algo parecido con representantes de la vieja partidocracia acomodada al neoliberalismo; Alejandro Toledo (2001-2006) traía a Perú todas las reformas que Estados Unidos iba solicitando; Lucio Gutiérrez en Ecuador (2003-2005) engañaba a todos, diciendo una cosa en campaña para después buscar firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y continuar entregando la soberanía nacional a manos extranjeras.

Esta vista panorámica hace evidente lo adverso que era el signo político y económico en la región, como para acometer el utópico reto de forjar una unidad regional basada en los principios bolivarianos. Los aliados por esa fecha eran muy pocos, nada podía hacer suponer en ese momento que solo diez años después se podría hablar de cambio de época, de una nueva arquitectura regional, de nuevas alianzas supranacionales en América Latina sin presencia del Norte. Fue Chávez quien, como arquitecto de esta utopía, se puso manos a la obra, remando contra el huracán neoliberal, contra todos los tentáculos que el capitalismo había logrado penetrar en los Estados soberanos, contra la introyección cultural hegemónica. Ahí radica lo fundamental e imprescindible de su rol como líder regional; fue su impulso, su apetito por lo imposible, su empeño por abrir nuevos horizontes de ideas, su tesón en la lucha contra el neoliberalismo, lo que permitió inaugurar un incipiente camino hacia un nuevo consenso regional, ese Consenso Bolivariano al que se fueron incorporando importantes actores regionales como Lula, Kirchner, Mujica, Ortega, Evo Morales y Correa, pero también otros presidentes que, sin ser progresistas, han entendido que sí o sí han de conformar parte de una nueva América Latina (como es el caso del mismo Santos en Colombia, Ollanta Humala en Perú, Bachelet en Chile, y hasta el mismo Peña Nieto de México); a ello hay que sumarle también el resto de Centroamérica.

La influencia de Chávez en la nueva arquitectura regional puede analizarse al menos en dos aspectos fundamentales. En primer término, lo novedoso en esta integración del siglo XXI es el hecho de haber comenzado a conciliar los procesos de cambio nacionales y la dimensión transnacional, poniendo ambas dimensiones en sintonía; siendo conscientes de que solo así, mediante esta construcción supranacional, se podría resistir, se podría alcanzar un proceso de transformación interna que fuera irreversible y sostenible. Lentamente se fue generando un consenso de ideas que permitió asumir que un cambio de época al interior del país exige una transición de época en su dimensión externa-regional; porque no es posible cambiar adentro si las condiciones

objetivas afuera son las mismas y no se ven alteradas. Ese cordón umbilical, tan eclipsado por la economía neoliberal dominante, es lo que explica por qué una revolución nacional pasa necesariamente por la disputa en el ámbito supranacional. Ese es el puente que Chávez logró edificar con una incansable labor pedagógica, para que el pueblo latinoamericano caminase decididamente a dos aguas, la nacional y la transnacional, sin que lo primero eclipsara la importancia de lo segundo.

Y en este punto es imperioso hacer memoria y recordar que una de las importantes razones que explica el fracaso parcial de los modelos de desarrollo nacionalista durante el siglo xx, basado en la teoría estructuralista de la dependencia, fue precisamente la miopía que impedía ver alianzas fronteras afuera. No todo es posible en casa; no siempre se pueden sustituir importaciones para ofertar producción nacional según la demanda interna, dado que existe un mundo global en el que el capitalismo posee grandes alianzas transnacionales con capacidad de boicotear eficazmente cualquier proyecto de desarrollo estrictamente nacionalista, sin planificación supranacional en lo político y en lo económico.

En segundo lugar, otro aspecto central en el impulso que el presidente venezolano le diera a la integración regional es la ruptura con la idea de que las relaciones económicas son simplemente relaciones comerciales; ese mandamiento venía de lejos. Desde la economía clásica, la economía internacional ha prestado la máxima importancia a la arista comercial como si esta fuera la única que explica los criterios para relacionarse en la economía mundial. El patrón de acumulación capitalista forzó a esta tesis comercial a la hora de definir los mecanismos para relacionarse entre los países a nivel económico. Desde siempre fue así, pero con la llegada de la economía neoclásica se reforzó esta premisa de manera amplificadora. Sus análisis basados en un enfoque parcelario (de parcelar cualquier realidad en compartimentos) ayudaban aún más a concentrar la atención exclusiva en lo comercial, dejando de lado el resto de las variables económicas que entran en juego

cuando se trata de establecer condiciones para relacionarse entre los países.

Chávez, desde una visión integral, abogó por otro enfoque económico basado en que la articulación con el afuera no podía darse solo en el plano comercial, sino que había que sumar lo político, lo social, lo cultural, lo financiero, lo productivo, lo tributario, lo monetario. Este estadio multinivel de integración era un punto de inflexión sobre aquella evolución de los procesos que venían desarrollándose en América Latina y en medio mundo, en la que los Tratados de Libre Comercio se constituían como la única regla de discusión cuando dos países, o dos bloques de países, se sentaban en una mesa para negociar los patrones de intercambio. En contraposición a ello, el líder bolivariano propuso otra arquitectura supranacional en la que las alianzas estuvieran soportadas desde un nuevo Consenso Bolivariano, de índole político, en la línea de la búsqueda de una nueva época.

Se debe comenzar desde abajo, desde lo más básico y no perder de vista que cualquier acuerdo técnico debe partir de un consenso político. Esto no significa que haya coincidencia plena en la elección del modelo económico en cada país aliado; las diferencias entre cada país –políticas, económicas, sociales e históricas– están presentes y así han de ser consideradas. Las asimetrías entre los Estados son parte considerable en cualquier consenso o acuerdo; invisibilizarlas es negar la realidad existente, como lo muestra el caso de la Unión Europea, edificada sobre una farsa: no todos los países europeos son iguales e idénticos, ni histórica ni socialmente, pero tampoco económica ni productivamente, ni en cuanto a estructuras sectoriales, ni en materia de empleo, ni de formación, etc. El tratamiento simétrico de asimetrías es causa de grandes injusticias y de más desigualdades; de una integración de diferentes velocidades. Por esta razón, entre otras, Chávez centró la atención en cimentar la obra desde abajo, desde la política, desde los acuerdos básicos políticos entre los países que construirán cualquier potencial alianza. A partir de ahí se irían colocando nuevas capas económicas, considerando todas las asimetrías para que

no haya una integración desigual ni injusta ni trunca. Desde este enfoque, Chávez consiguió dar impulso a un proceso de unión en la región, inimaginable en los años de la preeminencia neoliberal. Este proceso de nueva conformación de América Latina como bloque es hoy en día una base fundamental estratégica del cambio de época regional.

La aparición del ALBA-TCP y Petrocaribe frente al ALCA y Caricom

En el año 2004 tienen lugar dos hechos de suma relevancia en el proceso de integración regional. Ya con Kirchner y Lula en el poder, Venezuela fue integrada como país asociado al Mercosur en la XXVI Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, celebrada el 8 de julio de 2004 en Puerto Iguazú (Argentina), aunque su incorporación plena llevaría casi una década. A fines del mismo año, en La Habana, en una reunión entre Hugo Chávez y Fidel Castro, nació la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que pasaría a constituir una piedra angular de la nueva arquitectura regional.

El surgimiento de esta alianza tiene un origen reactivo, y otro propositivo y creativo. Lo primero se explica por la necesidad de forjar cuanto antes una alternativa de resistencia a la integración en curso, de orden neoliberal, propuesta desde Estados Unidos para convertir el continente en un gran mercado en el que las asimetrías quedasen para el olvido. Ese era el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que aceleraba su ritmo de conformación con el afán de lograr en un futuro que se continuara sosteniblemente con: a) el patrón de intercambio desigual, b) con transferencia de valor hacia el centro de gravitación del capitalismo, c) perpetuando el capitalismo por desposesión imperialista, d) la injusta división continental del trabajo, e) mantenimiento de brechas productivas y tecnológicas. Con ello, el ALCA buscaba garantizar como fuera que las décadas ganadas del pasado para la

tasa de ganancia del capital continuaran. Frente al riesgo de eternización de más décadas perdidas para la mayoría social, los nuevos vientos de cambio en la región necesitaban a ultranza crear otra opción, una alternativa en la que creer, en la que depositar la esperanza de que otro mundo y otra economía eran posibles.

Así, el año 2005 se inició con el compromiso de forjar el ALBA como otra forma de tejer alianzas, desde un consenso alternativo al del neoliberalismo y al mismo capitalismo en todas sus caras, con una sólida base política, con nuevos principios económicos que se alejaran definitivamente de la competencia como única forma de sobrevivir según el *darwinismo económico*, de la ley del más fuerte que condena a los débiles. El proyecto de integración que se delineaba con la creación del ALBA rechazaba con vehemencia ese principio de competitividad por ser falso, dado que nunca se parte de condiciones de igualdad para competir. Esa injusta competitividad fue impugnada porque solo conduciría a que aquel que partiera de condiciones favorables siguiera acumulando condiciones favorables, y entonces el más fuerte –gracias a una historia de dominación– pudiera legitimar seguir siendo el más fuerte, argumentando que es más competitivo. Defender esta forma de la competitividad sin discutir el origen de las asimetrías es hacer trampas jugando al solitario. Estas trampas teóricas y analíticas se sustentan en un colonialismo epistémico, desde la colonialidad del poder, como diría Aníbal Quijano.¹³⁷

El nuevo consenso regional comenzaba a fraguarse lentamente a partir de esa iniciativa que, aunque no abarcaba a todos los países, suponía un faro bien diferente a lo que venía queriéndose imponer en forma hegemónica. La propuesta del ALBA se sustentaba en otra concepción de la competitividad, más desde una idea de complementariedad, desde la justicia como condición sine qua non para cualquier relación económica entre países, entre agentes económicos. Así comienza el ALBA, inaugurando una

137 Aníbal Quijano. *La colonialidad del poder*, [ponencia presentada en el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología]: 2009.

visión superadora del paradigma capitalista, destinado a marcar los procesos de integración económica. En este sentido, el grito del 'No al ALCA' estuvo íntimamente relacionado con el 'Sí al ALBA'.

En esta primera fase de integración, ese No al ALCA funcionó como un elemento aglutinador para la región, lo cual no significa que todo aquel que apostara por rechazar el ALCA estaría dispuesto linealmente a acatar las condiciones fundacionales del ALBA, más propias de una corriente ideológica profundamente cuestionadora del capitalismo, y no solo de la gestión neoliberal de este. Sin embargo, había puntos de encuentro entre lo uno y lo otro porque en ambos lugares se rechazaba el orden hegemónico neoliberal que reparte el mundo desigualmente. Aunque en la práctica el ALBA no fuera una gran alianza que incluyera a todos los países de la región, la creación de este espacio sirvió para situar en el imaginario que otro continente era posible.

Si bien no hubo un consenso unánime con algunos países centrales que no se incorporaron, como Brasil y Argentina, comenzaba a producirse un desplazamiento del eje político en la región, ya que los líderes de estos dos gigantes fueron aliados de Chávez desde los albores de la construcción de la nueva arquitectura regional. Hay que recordar que en estos dos países del Cono Sur se estaban desarrollando procesos políticos que no rechazaban el capitalismo, ni pretendían hacerlo y, tal vez, tampoco buscaban una propuesta económica diametralmente opuesta al neoliberalismo en todas sus variables, pero sí decidieron realizar una gran reforma para buscar un nuevo orden económico más justo dentro de esas mismas reglas del juego impuestas desde afuera.

Esto no puede ser desdeñado ni minusvalorado, aunque no coincida con las propuestas más rupturistas y refundacionales. En la medida de lo posible, estos dos países, cada uno con la particularidad del caso, se decidían a acabar con la deuda social otorgándole un nuevo rol protagónico al Estado, con nuevas políticas públicas más inclusivas para sacar a mucha población de la pobreza, para reducir las desigualdades, con una economía real más industrializada y recuperando soberanía. Esto no significa que

se cuestionaran algunas estructuras del orden internacional; por ejemplo, Argentina nunca revisó sus tratados bilaterales de inversión ni su sometimiento al Ciadi; o Brasil jamás terminó con una política con gran predilección por la atracción de capital financiero bien retribuido. Ambos países apostaron por un desplazamiento del eje político y económico, pero sin llegar a ser aquel que marcara Chávez en Venezuela, el mismo que fue impulsado en el seno del ALBA.

Los gobiernos de Brasil y Argentina comenzaron decididamente a implementar una política económica basada en políticas sociales redistributivas, de recuperación del Estado, de recuperación de sectores estratégicos, diversificando las relaciones económicas hacia fuera, con más atención sobre la región. Todo ello es notorio si se considera de dónde partían ambos países, después de haber quedado hechos añicos por el neoliberalismo, y eso era acertadamente más que suficiente para generar e impulsar un cambio regional, de la mano de otras iniciativas (como Venezuela en un primer momento, y luego Bolivia y Ecuador) que apostaban más por un modelo de ruptura, de cambio de reglas vía procesos constituyentes.

En este contexto de alianzas políticas, a pesar de las discrepancias ideológicas se llegó a la IV Cumbre Presidencial de las Américas¹³⁸, en Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005. Durante la misma, Estados Unidos y Canadá presionaron para alterar la agenda original y tratar el ALCA. Brasil, Venezuela y Argentina, principalmente, se opusieron enérgicamente, apelando

138 Un siglo después de la Primera Reunión Panamericana (Washington D.C., 1889), en la que ya se hablaba de unión aduanera y de un sistema de arbitraje hemisférico, el presidente George Bush dio a conocer su "Iniciativa Para las Américas", o "Área de Libre Comercio de las Américas" (ALCA). Los preparativos comenzaron en Miami en 1994, en la I Cumbre de las Américas; la segunda se realizó en Santiago de Chile en 1998; la tercera en abril de 2001 en Quebec. Allí mismo se estableció como fecha para el fin de las negociaciones del ALCA el mes de enero de 2005; la IV Cumbre se realizaría en el 2003 en Argentina, pero razones de desacuerdos en las negociaciones llevaron a que recién en noviembre de 2005 se concretara.

a que el objetivo de las alianzas económicas es el de crear trabajo para fortalecer la democracia y combatir la pobreza. Ahí se cimentó buena parte de ese cambio de época hacia una era diferente bolivariana, de absoluto rechazo a la integración dictada por el Norte para gestionar los países del Sur; fue un paso sustancioso en la transición geo-económica, porque muchos países de América Latina comenzaron a rechazar relacionarse entre ellos solo a través del epicentro situado en el Norte. Como Lula, Kirchner tuvo un especial protagonismo en esta tarea, pero fue indudablemente Chávez quien se erigió en centro imprescindible de este momento histórico para América Latina, para los pueblos y para muchos países del mundo que vieron cómo le cerraban la puerta en la cara a Estados Unidos, en el enésimo intento de sometimiento del continente a la tasa de ganancia de sus transnacionales. Así lo relata incluso el *Financial Times*¹³⁹, que afirmó que los hechos dejaban en la ruina la única política norteamericana para América Latina (el ALCA)¹⁴⁰. Fue una gran victoria de Chávez; fue una victoria de América Latina. Ese 'ALCA, ALCA, al carajo'¹⁴¹, refleja, además del ingenio del presidente venezolano, su capacidad osada y atrevida para edificar nuevas formas de resistencia, de intransigencia frente al poder económico y político del Norte.

También en el año 2005 se puso en marcha otro proyecto angular del proceso de integración regional, característico de este cambio de época: Petrocaribe¹⁴²: iniciativa de cooperación energética solidaria

¹³⁹ *Financial Times*, 6 de noviembre de 2005.

¹⁴⁰ Para más detalle, léase a Jerónimo Montero. "Cumbre de las Américas en Mar del Plata: Victorias, debates y limitaciones de la oposición", *ACME. An International E-Journal for Critical Geographies*: 2007.

¹⁴¹ Así fue cantado por Chávez y por un inmensa marea humana, en presencia de Evo Morales (aún sin ser presidente), en la contracumbre que se celebró en la misma ciudad en esas fechas de noviembre del 2005.

¹⁴² El Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe fue formalmente constituido el 29 de junio de 2005, mediante el instrumento jurídico e institucional suscrito en el marco del Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y/o de Gobierno del Caribe sobre Petrocaribe, efectuado en Venezuela. Mediante dicho instrumento los 14 Estados que lo suscribieron fueron: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica,

propuesta por el Gobierno Bolivariano de Venezuela y enmarcada en los principios del ALBA, con el fin de resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos; por la vía de un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre los países de la región caribeña, la mayoría de ellos consumidores de energía y sin el control estatal del suministro de los recursos.

En este sentido, no hemos de olvidar el papel geoestratégico de estos países del Caribe, considerados por EE.UU. como su frontera natural durante todo el siglo xx; un término usado por el propio G. W. Bush, quien calificó a la región como su tercera frontera. Por razones obvias de geoestrategia regional, Washington siempre anheló mantener su influencia diplomática, política y económica en la zona; para ello ha lanzado proyectos económicos y estratégicos dirigidos a crear y mantener los nexos de interdependencia con el Caribe y Latinoamérica. La Caricom (Comunidad de Estados del Caribe) ha sido el soporte natural de las políticas de Washington desde su creación; sin embargo, esta influencia exclusiva quedó en parte cuestionada debido a la importancia creciente de la iniciativa Petrocaribe, un organismo multilateral que aseguró la coordinación y articulación de las políticas de energía, incluyendo petróleo y sus derivados, gas, electricidad, uso eficiente de la misma, cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura energética; así como el aprovechamiento de fuentes alternas, tales como la energía eólica, solar y otras.

El acuerdo Petrocaribe representa un esquema de cooperación y complementariedad energética basado en dos pilares: primero, la solidaridad de un país superavitario en energía, como es el caso de Venezuela, con países de escasas fuentes y recursos energéticos; y segundo, el reconocimiento de las asimetrías entre países de mediano desarrollo económico relativo y países de menor tamaño y desarrollo relativo, como lo son los países centroamericanos y

Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Venezuela. El Salvador se incorporó en junio del 2014. Petrocaribe lleva implícita la articulación de acuerdos existentes anteriormente, como el Convenio de San José y el Acuerdo Energético de Caracas.

caribeños, beneficiarios del acuerdo. Petrocaribe propone una escala de financiamiento muy ventajosa para los países miembros deficitarios en términos energéticos, en tiempos, en descuentos y en forma de pago, porque Venezuela está dispuesta a aceptar que parte del pago diferenciado de la factura se realice con bienes y servicios. Así, Venezuela entrega crudo a los otros miembros con un financiamiento que llega a 40% cuando el precio del petróleo supera los 50 dólares; a 50% si sobrepasa los 80 dólares y a 60% cuando la barrera se sitúa en 100 dólares.

Sumado a esto, desde su firma en el año 2005, el Acuerdo Petrocaribe ha sido el marco referencial para la constitución de diez empresas mixtas en nueve países miembros de la iniciativa, lo que representa una de las herramientas fundamentales para avanzar en la construcción de un sistema económico regional justo y equitativo; los accionistas de estos entes binacionales son los gobiernos. Estas empresas han sido un medio para llevar adelante proyectos de infraestructura energética que han consolidado paulatinamente el proceso de independencia energética regional, al poder contar algunos Estados con capacidades propias de recepción, almacenamiento y distribución de combustibles.

El enfoque social también está presente en este esquema de cooperación, mediante el desarrollo de proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de la población, con énfasis en la dignificación de los sectores excluidos. La perspectiva es que estos entes se afiancen como un mecanismo de financiamiento e inversión autosustentable, que permita seguir ejecutando los diversos planes industriales, así como la transferencia tecnológica y el desarrollo socioproductivo.

La articulación es innegablemente otro pilar central de la propuesta de integración que comenzó a desarrollarse a partir del cambio de época en América Latina. Con ese fin, se creó el Fondo ALBA-Caribe en el marco de la II Cumbre de Presidentes de Petrocaribe en 2005, con el objetivo de ejecutar proyectos de desarrollo socioeconómico de los países miembros, priorizando el acceso a la salud, la educación y la vivienda, así como proyectos socio

productivos que promuevan el desarrollo económico mediante cooperativas, pequeñas y medianas industrias.

En suma, el acuerdo Petrocaribe está orientado a disminuir las grandes brechas de la exclusión, la inequidad y desigualdad social y económica de los pueblos, con esquemas de cooperación no tradicional que entiendan y aborden la pobreza como un fenómeno estructural y multidimensional. Constituye una estrategia de articulación regional, sustentada en principios de solidaridad y complementariedad; a su vez, este fondo financia programas y proyectos sociales, priorizando el acceso a la salud, la educación y la vivienda, así como proyectos socioproductivos que promuevan el desarrollo económico mediante cooperativas y pequeñas y medianas industrias. Hasta el 2014 se han asignado 179 millones de dólares a 85 proyectos, en once países de la región; y 29 millones de dólares a tres proyectos eléctricos.

La importancia estratégica del ALBA-TCP

El ALBA-TCP es indudablemente el proyecto más novedoso en términos de integración impulsado por Venezuela porque tiene múltiples impactos, algunos en lo estrictamente material, en lo económico; a la vez que también posee otros efectos de carácter estratégico hacia adelante, como lo es el hecho de establecer un horizonte utópico que funciona como vela para seguir navegando, en aras de lograr plena irreversibilidad de este cambio de época regional. El ALBA supone un paso determinante para crear una barrera simbólica de no retorno al pasado, y fundamentalmente para tensionar dialécticamente el resto de procesos de integración en curso.

El ALBA, pensada como una integración de rostro humano de pueblos, con pueblos, con soberanía, fue creciendo, conformándose, consolidándose, perfeccionándose, constituyéndose como una verdadera alternativa real, estratégica, básica en el cambio de época para lograr una época ganada definitivamente. En esta evolución, el ALBA fue incorporando nuevos socios; el 29 de abril de 2006

se sumó Bolivia, en 2007 Nicaragua, en 2008 Honduras¹⁴³. Ecuador se incorporó en junio de 2009; también fueron llegando el resto de pequeños Estados caribeños no hispanohablantes, como Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas (pertenecientes a Caricom); en el año 2012 Santa Lucía y Surinam pasaron a adherirse como miembros plenos de la organización; en el 2014 sellaron su ingreso como miembros plenos las naciones caribeñas de Granada y San Cristóbal y Nieves.

La importancia estratégica de esta alianza reside en sus nuevos postulados económicos que interpelan el paradigma dominante de la economía neoliberal. El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas, para compensar las asimetrías entre esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de fondos compensatorios, destinados a la corrección de discapacidades intrínsecas de los países miembros y la aplicación del TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos). Así se quiebra la teoría de las ventajas comparativas, como nudo gordiano explicativo del intercambio comercial.

Con ello se va construyendo muy lentamente y no sin contradicciones un nuevo paradigma económico integracional, explorando nuevas vías para intercambiar a través de la complementariedad, de la cooperación, para rediscutir el valor de cambio en disputa con el valor de uso; y la estructura de la cadena de valor para identificar las transferencias de unos sectores a otros. Estos principios establecidos para un comercio e intercambio más justo suponen un cambio absoluto respecto de aquello que el neoliberalismo venía pregonando como base para relacionarse económicamente entre diferentes países. El ALBA nació con el desafío de abrir un debate sustancioso sobre las formas de armar los patrones de intercambio en la economía mundial, que hasta el momento quedaba cerrado o, en el mejor de los casos, era exclusivo de foros muy limitados en el mundo académico. Este ya es un logro del ALBA como parte de

¹⁴³ País que abandonó el bloque en 2010, tras el golpe de Estado que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya.

esta década ganada, de esta época ganada para América Latina; pero sobre todo, el ALBA además es un ejemplo de saber avanzar en otras aristas económicas a la hora de abordar un proceso de integración. Lo comercial es muy importante, pero también lo es lo financiero, lo monetario y lo productivo y, cómo no, lo social.

En relación con lo primero, en lo financiero es de vital trascendencia disponer de mecanismos propios, capaces de cumplir el rol social que las finanzas han dejado de tener en el panorama capitalista mundial. La emancipación ha de ser también emancipación financiera porque de no ser así se seguiría dependiendo de las instituciones financieras tradicionales, que prestan con el objetivo de condicionar la política económica al mismo tiempo que eternizan la deuda. Salir de este laberinto para muchos de los países de América Latina solo podía ser posible si se constituía una herramienta propia. El ALBA propuso entonces la creación del Banco del Alba como organismo de derecho internacional público, de carácter financiero, con personalidad jurídica propia. Fue fundado en Caracas el 26 de enero de 2008 por los mandatarios del bloque, quienes suscribieron el acta fundacional en el marco de la VI Cumbre del ALBA-TCP¹⁴⁴. De acuerdo con lo establecido:

...el Banco del ALBA tiene por objeto coadyuvar al desarrollo económico y social sostenible, reducir la pobreza y las asimetrías, fortalecer la integración, promover un intercambio económico justo, dinámico, armónico y equitativo entre los países miembros del ALBA, inspirado en los principios de solidaridad, complementariedad, cooperación y respeto a la soberanía de los pueblos.¹⁴⁵

El organismo tiene entre sus funciones financiar programas y proyectos en sectores clave de la economía, orientados a mejorar

¹⁴⁴ Su personalidad jurídica internacional emana de la suscripción, aprobación y ratificación del Convenio Constitutivo del Banco del Alba, adoptado en Caracas en fecha 5 de noviembre de 2008 por algunos representantes ministeriales.

¹⁴⁵ Convenio Constitutivo del Banco del ALBA: 2008.

la productividad y eficiencia; la generación de empleos, el desarrollo científico-técnico, la innovación, la invención, la complementariedad y el desarrollo de las cadenas productivas, la agregación de valor, la maximización del uso de materias primas producidas y explotadas en la región, la protección de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. También se dedica a financiar proyectos de desarrollo social (salud, educación, vivienda, seguridad social, desarrollo comunitario, economía social). Es un banco orientado a la promoción, fortalecimiento y desarrollo de la micro, pequeña, mediana producción y economías asociativas. El Banco del ALBA contó con un capital inicial de más de 1.000 millones de dólares, aportados por todos los participantes según su capacidad financiera. Hasta el momento, dicha institución ha destinado más de 170 millones de dólares a los programas Alba Educación, Alba Cultural y Alba Salud. Muchas críticas a este Banco del ALBA son de magnitud cuantitativa, por el bajo nivel de los recursos empleados en relación con lo que mueve la gran banca internacional.

Siendo cierto, no se puede menospreciar el avance en esta materia porque esta creación supuso un efecto contagio, detonador en muchos casos, de la creación de más bancos soberanos que no dependan de la gran banca privada internacional o aquella banca de los organismos internacionales de iguales características en su conformación y actividad, como es el caso del Banco del Sur (Unasur) previsto para inaugurarse durante el año 2015.

En síntesis, el Banco del ALBA ha supuesto incuestionablemente una nueva ventana alternativa en el mundo financierizado impuesto por el neoliberalismo, resaltando la necesidad de un sistema financiero que satisfaga el rol social financiero para la economía real, sin jugar a la economía de casino. Pero, además, constituye un vigoroso halo de esperanza material sobre el cual seguir edificando una nueva arquitectura financiera regional, en sintonía con aquella que emerja de los pueblos del sur del mundo. Todavía hay enormes desafíos pendientes en este terreno porque la banca internacional es un monstruo de mil cabezas que no se derrota a la primera de cambio; aún es preciso afrontar la articulación idónea

con otras bancas públicas de los países emergentes, que no acaban de renunciar a su enfoque de banca-nación; además, han proliferado afortunadamente otros ensayos de banca interestatal con los que tendrá que producirse nuevos marcos complementarios. Todos estos puntos son tareas obligatorias para la presente década en disputa, pero no por ello se puede obviar el logro en esta materia en la década pasada.

En relación con lo monetario, hasta el momento en que surgió el ALBA, antes del 2008, pocos habían sido los intentos reales de escapar de la hegemonía del dólar como moneda referente de reserva y de transacción comercial a nivel mundial. Mucho tiempo había pasado desde que Keynes propusiera el *bancor* como una unidad monetaria internacional, a partir de una canasta de monedas en las negociaciones (Acuerdos de Bretton Woods) post Segunda Guerra Mundial, y esta fuera rechazada por el dólar estadounidense como moneda global. Parecía un tema pasado de moda, quedando en exclusividad para unos pocos que seguían dándole cabida en discusiones económicas. Sin embargo, una vez más, fue el impulso de Chávez lo que logró traerlo al debate antes de tiempo; lo anticipó como propuesta para desamericanizar/desdolarizar la economía mundial.

La hegemonía del dólar es incompatible con una nueva arquitectura financiera mundial más justa; el dólar abusa de la posición dominante que le da el hecho de no requerir ningún respaldo para ser emitido. Es solo dar a una maquinilla de impresión de dólares a base de teclear en un sistema informático, sin respaldo en riqueza material, sin respaldo en oro, sin respaldo en otras monedas. Es un arma de destrucción masiva empleada por el imperio norteamericano para someter a pueblos a su antojo, para invadir otras economías ocasionándoles una deuda eterna, una dependencia hasta el infinito; el dólar no es una cuestión técnica ni neutral. Propugna la necesidad de nuevas monedas, monedas que puedan ser reflejo de una canasta básica de monedas; que no sea fiel a una hegemonía militar, política y económica.

Frente a ello se explica el surgimiento de la idea de la nueva moneda, el sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional), como unidad de cuenta común de los países del ALBA para llevar a cabo sus intercambios económicos. En noviembre del 2008 se acordó el Sucre entre los países del ALBA (más Ecuador, que todavía no era miembro de la alianza)¹⁴⁶. Fue más adelante, el 27 de enero del 2010, cuando comenzó a ser utilizada en realidad como moneda virtual. De acuerdo con el Artículo 1.º del Tratado Constitutivo, se define al Sucre como un:

...mecanismo de cooperación, integración y complementación económica y financiera, destinado a la promoción del desarrollo integral de la región latinoamericana y caribeña, así como también articular el funcionamiento de dicho sistema con los lineamientos establecidos por el Consejo Ministerial de Complementación Económica del ALBA-TCP.¹⁴⁷

La primera transacción comercial que se realizó mediante el sucre fue la exportación de arroz venezolano a Cuba el 4 de febrero de ese mismo año. La iniciativa de creación de esta moneda demuestra audacia en la praxis para buscar mecanismos efectivos, que tengan por objetivo disminuir progresivamente la dependencia del uso del dólar en las transacciones comerciales entre los países del ALBA, con la finalidad de contribuir a minimizar el impacto económico de vulnerabilidades y volatilidades externas, como consecuencia de crisis o decisiones específicas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Además de ello, se procura que el sucre sirva como impulsor del comercio entre los miembros del ALBA, con vistas a contribuir al logro de la complementariedad de sus economías mediante el intercambio comercial.

146 Cabe señalar que en el mes de marzo de 2013, la República Oriental del Uruguay solicitó su adhesión al Tratado Constitutivo del Sucre y se encuentra cumpliendo los trámites legales pertinentes para su correspondiente incorporación al Sistema.

147 Convenio Constitutivo del Banco del ALBA: 2008.

En ese sentido los avances son significativos: entre los años 2010-2013, el comercio intra ALBA-TCP aumentó de 10 millones de sucres a 852 millones de sucres (aproximadamente 850 millones de dólares durante el año 2013)¹⁴⁸. Desde sus inicios, para el cierre del 2013 se han tramitado 5.178 operaciones por un valor total equivalente a más de dos millones de dólares. Aún representa un valor reducido del total de transacciones comerciales en cada país, pero se evidencia que este novedoso mecanismo se ha convertido en una nueva opción para realizar pagos de operaciones de comercio internacional, permitiendo dar continuidad al desacoplamiento progresivo del uso del dólar en operaciones de pago de esta naturaleza, abonando el camino a la soberanía monetaria y financiera regional. Es una medida de gran calado en la nueva arquitectura económica regional y mundial; es también parte de la época ganada, de esta década ganada.

Esta atinada acción económica de creación de una moneda para el intercambio regional está acompañada en la actualidad –como ya hemos explicado en el primer apartado de este capítulo– por un progresivo fenómeno de transición geoeconómica, a nivel mundial, que pone en cuestión la hegemonía del dólar. En los últimos años aparecieron con más ahínco otras experiencias como esta, con intercambios entre países con monedas propias sin pasar por el dólar; además, muchos países han cambiado su patrón de acumulación de reservas, atesorando cada vez mayor porcentaje en otras monedas que no son el dólar estadounidense. No cabe duda de que el dólar es aún la moneda hegemónica, pero ha comenzado una lenta decadencia porque la arquitectura económica mundial responde a una transición hacia un mundo multipolar, y América Latina también participa activamente en esta transición geoeconómica.

Otro de los logros desde el ALBA, pero que también continuó teniendo identidad propia más allá de este espacio regional, son las empresas grannacionales. Estas son la mayor expresión de

148 Un sucre es equivalente a 1,25 dólares.

contraposición a las transnacionales. Se asocian los Estados soberanos y sus capitales públicos para formar alianzas económicas en sectores geoestratégicos, muy focalizados en la producción de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas básicas que demanden los pueblos. Son sectores que requieren transferencias tecnológicas que a veces tiene un país y otro no, o que exigen cuantías elevadísimas de capitales que pueden aportarse entre diferentes Estados, o que requieren encadenamientos productivos complejos en los que pueden participar diferentes países; otras veces se requieren mercados más amplios que son solo posibles considerando a un conjunto de países. Así, con esta visión, se pone en práctica aquella tesis de Bolívar acerca de la Gran Nación, pero en este caso para algo muy concreto: como alianzas estatales en ciertos sectores porque así se favorecen todos los miembros, siendo capaces de resistir a las transnacionales; y en los nuevos tiempos, también a las translatinas privadas que crecen y crecen en América Latina, aprovechando las bondades del crecimiento distribuidor que tiene lugar en muchos países con economías más redistributivas.

Las grannacionales procuran romper con la lógica de la reproducción y acumulación del capital; las empresas deben inscribirse en la nueva lógica de la unión y la integración del ALBA; acoplarse a los objetivos estratégicos del proyecto unionista, convirtiéndose en instrumentos económicos fundamentales para la creación de una amplia zona de comercio justo en América Latina y el Caribe. Esta nueva modalidad, aún con mucho campo por desarrollar, es un instrumento de gran potencialidad en aras de fomentar una integración productiva virtuosa, con mayor complementariedad, con reparto más justo de los encadenamientos productivos regionales. El mundo abandonó con el neoliberalismo el sistema de producción fordista nacionalista, frontera adentro; eligió, a conveniencia del capitalismo global, un modelo de fragmentación geográfica de la producción mundial.

Los encadenamientos productivos se esparcían por el mundo, siempre bajo el estricto control de la empresa transnacional con

casa matriz en cualquier país central, asegurándose que el reparto del valor fuese en mayores proporciones destinado a acumular el capital en pocas manos. Frente a esta nueva modalidad productiva de tendencia mundial, impuesta desde hace décadas por el capitalismo neoliberal, el ALBA aboga por una respuesta latinoamericana que compita desde bloque a bloque, y no asimétricamente desde país versus capital transnacional. Por ejemplo, un bien básico para la población son los medicamentos, que son controlados y dominados por poderes económicos transnacionales en unas pocas firmas.

¿Cómo encarar efectivamente una propuesta alternativa para producir medicamentos de calidad, pero a precio absolutamente justo para la mayoría social en territorio latinoamericano? Si siguiéramos la opción clásica de la teoría de la dependencia de décadas pasadas (estructuralista de la Cepal), la decisión habría de ser un modelo de sustitución de importaciones en cada país, pero esto sería absolutamente contraproducente porque aumentaría considerablemente los costes unitarios de producción, habría poco aprovechamiento de economías de escalas crecientes, se requerirían elevadísimas inversiones tecnológicas, incluso podría haber demanda interna reducida cuando se tratase de un país pequeño como, por ejemplo, Bolivia o Ecuador. Esos desequilibrios son razones de peso que explican en parte el fallido proceso nacional de sustitución de importaciones. Frente a esto el ALBA, con las grannacionales, realiza una lectura económica diferente a aquella que se impusiera como moda alternativa para romper las cadenas de dependencia de los países centrales.

La impronta bolivariana se plasma en estas empresas grannacionales porque a través de ellas se puede postular un modelo productivo regional, en el que se reparta el valor agregado de forma más justa entre países, procurando que la transferencia tecnológica sea un hecho en vez de una promesa contractual. En el ejemplo de medicamentos, ¿por qué no producir medicamentos genéricos hechos en América Latina a través de grannacionales que se complementen en recursos económicos, en tecnología, en trabajo,

en financiación? Esta vía seguramente es más conveniente que la producción nacional de cada país porque, además, sería ciertamente más competitiva frente al capital transnacional. El ALBA, mediante esta nueva modalidad interestatal, busca utilizar al máximo las capacidades de cada país: recursos energéticos, disponibilidad financiera, disposición de materias primas, grado de cualificación, desarrollo científico y tecnológico, potencialidades objetivas, fondos monetarios, *know-how* y experiencias endógenas. La prioridad para estas empresas es satisfacer el consumo final o industrial del mercado intra ALBA, a objeto de conformar la zona de comercio justo, lo cual no excluye que sus excedentes puedan colocarse en el mercado internacional.

A pesar de que estas grannacionales nacieron desde el ALBA, fueron extendiéndose por todo el continente latinoamericano mediante múltiples alianzas, también en el Mercosur y en otros bloques integracionales que piensan tener capacidad de resistencia efectiva versus el capital transnacional. A lo largo de estos años los resultados son exitosos, dejando mucho por hacer en el futuro porque es preciso asumir esta nueva cultura económica de alianzas en un mundo en el que se ha impuesto el darwinismo económico nacional desde hace años. Hay logros notables en sectores como pesca (Transalba), minería, transporte, telecomunicaciones (Albatel) y agricultura; también la creación de empresas como Puertos del ALBA, S.A., empresa para la construcción de puertos en Cuba y Venezuela; otra es Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), empresa petrolera mixta entre Nicaragua y Venezuela. Cada vez más, brotan los proyectos grannacionales en marcha en nuevos sectores económicos: desde el ALBA Cultural, nuevas refinerías, manufacturas, medicamentos, infraestructuras, energía eléctrica, petróleo y gas, agroalimentación, turismo y muchas otras. Sin duda alguna, este hecho supone verdaderamente una muestra más de la década ganada en esta materia, porque no solo consigue resultados específicos en el corto plazo, sino que también abre hacia futuro un campo estratégico para seguir generando apuestas efectivas, que

caminen hacia la verdadera y definitiva independencia en materia productiva.

Otro Mercosur como nuevo punto de referencia

Por otro lado, en la nueva arquitectura regional ocupa un lugar preponderante el Mercosur, que si bien constituye un espacio de integración preexistente a la iniciativa del ALBA, ha ido mutando en consonancia con el cambio de época regional. Este bloque acarrea –y todavía lo hace– limitaciones estructurales por el hecho de haber nacido como un mero instrumento de intercambio comercial, sin planificación supranacional estratégica y sin atención a las asimetrías en el interior del bloque.

En el seno del Mercosur existen dos países de gran importancia en la región: Brasil y Argentina. Aunque estos países son miembros desde su fundación, en estos últimos años han ido cambiando sustancialmente su rumbo político y económico. De la mano de sus líderes Lula da Silva y Néstor Kirchner, y luego con la continuidad de Dilma Rousseff y Cristina Fernández, son responsables, en buena medida, de que Mercosur haya sufrido un proceso de transformación parcial en comparación con aquel existente en plena época neoliberal. Sin embargo, en Mercosur todavía perduran muchas reglas del viejo neoliberalismo, que no han sido ni mucho menos extirpadas en su totalidad.

A sabiendas de ello, nuevamente el líder venezolano dio lecciones de realismo político en materia económica, porque comprendió acertadamente que era necesario acercar posturas con Mercosur en lugar de forzar las divergencias. Para Chávez, el ALBA era quien debía marcar el horizonte estratégico del cambio de época, pero comprendió que no podía negarse el hecho de que Mercosur era una realidad económica muy importante en la región, con la presencia de dos gigantes (Argentina y Brasil) y que, por tanto, constituía un espacio de integración a considerar, y que se debía disputar su sentido en la medida de lo posible desde su propio seno. Por ello consideró que Venezuela debía estar presente

en esa batalla, en la disputa del sentido económico de esa integración vieja, pero ahora con países con presidentes de signo político diferente: Mujica en Uruguay, Lugo en Paraguay (durante unos años), Lula o Dilma en Brasil, los Kirchner en Argentina. Así, Venezuela abogó por buscar otro punto de encuentro, otra pieza más para seguir armando el nuevo Consenso Bolivariano en el que, sin duda, Mercosur ocupaba un lugar imprescindible.

El proceso de incorporación del país caribeño a Mercosur fue muy lento; la adhesión se había llevado a cabo en 2006, pero recién el 31 de julio del 2012 Venezuela fue proclamada miembro pleno del bloque, después de un largo periplo. Hay que recordar que su incorporación plena había sido sistemáticamente frenada por el senado paraguayo, adverso al Gobierno del presidente Lugo, pero tras el golpe institucional que derrocó al mandatario paraguayo en julio de 2012, Mercosur suspendió a Paraguay como miembro pleno, a partir de lo cual se pudo efectivizar el ingreso de Venezuela, con el acuerdo de Argentina, Brasil y Uruguay. Por otro lado, es interesante notar que con la incorporación de Venezuela al Mercosur se produjo, además, una aceleración del proceso de desintegración de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que se había iniciado de facto después de que algunos de sus miembros irrespetaran sus propias reglas intrabloque para acabar firmando acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Unión Europea, como es el caso de Colombia y Perú.

Con Venezuela como miembro, Mercosur pasó a constituir la quinta economía del mundo en términos de PIB (detrás de Estados Unidos, China, India y Japón, y adelante de Alemania). Se erigió, de esta manera, en un polo económico que aparecía con mucha fuerza en este mundo cada vez más policéntrico. Se trata de un bloque estratégico que cuenta con todo lo necesario para consolidarse como otra centralidad en el tablero internacional: mucho petróleo y otras fuentes de energía como el gas; es el mayor productor de alimentos a nivel mundial; posee un mercado interno en constante expansión, con un creciente poder adquisitivo y un aceptable desarrollo industrial. Además, goza de

un territorio sin conflicto bélico, con importante solidez democrática y con reglas políticas claras. Mercosur es el encuentro de los tres grandes países de Suramérica con un alto potencial de intercambio comercial, de complementariedad productiva, de integración financiera y de flujos monetarios sin dólar. Además de los miembros plenos (Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay, que ya fue reincorporado, y Uruguay), Mercosur tiene como países asociados a Chile, Colombia y Perú, mientras que Bolivia está en proceso de alcanzar la incorporación plena (Ecuador aún pensándose qué hacer a este respecto), para lo cual es necesario que la decisión sea avalada por la totalidad de los parlamentos de los países miembros.

Es importante precisar que si bien Mercosur, sin duda alguna, se convirtió en el nuevo protagonista del siglo XXI en cuanto a espacio integracional, en lo comercial, financiero y productivo, a la vez es un espacio caracterizado por las grandes disparidades de economías participantes: Brasil siendo parte de las nuevas economías emergidas, Argentina también forma parte del G20 y con tendencia de crecimiento creciente, y ahora Venezuela como otra gran potencia; estos tres países conviven con otras economías más pequeñas, que peligran si no se establecen condiciones que eviten intercambios desiguales y –lo que es más importante– se sortee una integración productiva desigual, que dé lugar a encadenamientos productivos con generación desigual de valor para unos y otros. Situación que puede empujar a estos países a estar tentados e incentivados a buscar otras alternativas a través de tratados de libre comercio, o como está sucediendo en Paraguay y también de Uruguay con sus políticas de acercamiento a la Alianza del Pacífico.

En suma, es preciso no olvidar que Mercosur continúa presentando dificultades y desafíos. El principal se deriva de que podría reproducir defectos propios de otros procesos de integración que no gestionan con justicia las asimetrías de economías diversas y, por consiguiente, está sujeto a generar una división del trabajo a lo europeo donde se concentre el valor añadido en algunas economías menoscabando al resto. Por ello, sobre todo para los países con

economías más pequeñas, el espacio del Mercosur sin duda ofrece oportunidades, pero también puede poner zancadillas a futuro si se asume ser un satélite subordinado a la gran potencia brasileña. Sobre esto se profundizará más en el capítulo siguiente.

Completando la nueva arquitectura regional: la Unasur y la Celac

Resulta indispensable reseñar dos hitos claves que cristalizan en buena medida este Consenso Bolivariano, propio del cambio de época que transita América Latina, en el cual hay claras señales tendientes a la consolidación de la región como un polo de poder propio, con miras a posicionarse de manera más soberana en un mundo cada vez más multipolar. Por un lado, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); por otro lado, la más recientemente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Estas dos instituciones completan el cuadro de una nueva arquitectura supranacional sustentada en un consenso regional distinto, que marca una ruptura irreversible con la época neoliberal.

En relación con el primero, Unasur es cosecha del cambio en el horizonte de ideas impulsado por Chávez, Lula y Kirchner, que consiguieron reinstalar en el imaginario social latinoamericano el ideal bolivariano de una Patria Grande, de una gran unión de naciones soberanas. Se granjea institucionalmente todo este impulso que se venía originando en esta década ganada para toda la región. Unasur es una organización internacional creada en 2008¹⁴⁹ para impulsar la integración de

149 El evento que abrió el camino definitivo a la constitución de la Unasur fue la creación de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) durante la tercera Reunión de Presidentes de América del Sur, el 8 de diciembre de 2004 en Cuzco, Perú. La CSN nació para unir dos grandes fuerzas regionales: el grupo de naciones miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur, y el bloque oeste conformado por la Comunidad Andina, CAN. Durante dos reuniones de la CSN efectuadas en 2005 en Brasilia y Cochabamba, los líderes de los países miembros establecieron el

los países miembros en materia energética, educativa, de salud, ambiental, de infraestructura, seguridad y democracia. En materia económica, Unasur se propone “eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”¹⁵⁰. Unasur se postula como un polo activo en la transición sistémica geopolítica, como nuevo espacio propio suramericano independiente y emancipado del Norte. Era necesario, más que nunca, que América del Sur tuviera un órgano conjunto de toma de decisiones, de convergencia política, de planificación estratégica; que participe como región, sin complejos, en el mundo del siglo XXI.

Chávez, Kirchner y Lula fueron sin duda los principales impulsores de este ambicioso proyecto, en el que posteriormente han tenido una importante participación Correa, Evo Morales y últimamente Maduro. Es un proyecto de largo plazo que tampoco se constituye en un día; nació con gran legitimidad, cristalizando institucionalmente el cambio de época en la región. Sin ser una institución de contenido meramente económico, Unasur cuenta con un Consejo Suramericano de Economía y Finanzas que trata, desde su nacimiento, aspectos económicos de vital importancia. Conviene rescatar el encuentro de este Consejo que tuvo lugar en Buenos Aires en noviembre del 2011, en él se fijaron objetivos económicos que ilustran el influjo bolivariano en materia económica, en contraposición a las ideas del viejo Consenso de Washington. Destacan algunos puntos, tales como: a) sustituir importaciones extrarregionales por productos elaborados en nuestros países, b) realizar intercambios comerciales en la región sin necesidad de pagar en dólares, c) constituir un fondo de reservas propio suramericano

plan estratégico y líneas de acción para la concreción de una agenda común de oportunidades y desafíos. No obstante, fue la primera Cumbre Energética Suramericana, que tuvo lugar en abril de 2007 en la Isla de Margarita, Venezuela, el encuentro que fijó prioridades y la CSN cambió su nombre por el de Unasur.

150 Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas: 2008.

para evitar cualquier potencial desestabilización externa, d) identificar la potencialidad y el encadenamiento productivo regionales, y e) instar a la creación de un árbitro regional en el seno de Unasur, para ir abandonando progresivamente el poderío que tiene el Ciadi (dependiente del Banco Mundial) como juez y parte para dirimir conflictos en materia de inversión extranjera entre empresas privadas y Estados soberanos de la región suramericana.

Todavía Unasur, que ha tenido fuerte protagonismo frente a algunas crisis en la región e intentos de golpes de Estado, tiene muchos deberes por delante para no convertirse a futuro en una institución más y lograr afianzar un rol estratégico. Es positivo que Unasur sea un espacio de divergencias donde estén todos los países de esta emergida región en el plano económico mundial, pero este hecho no puede ser a costa de una merma potencial de dirección, de liderazgo y de, lo que es aún peor, una pérdida de una política regional capaz de defender a ultranza el cambio de época a favor de una democracia más real, de la dignidad de las condiciones sociales en las que viven las mayorías y de una inserción soberana e inteligente en el mundo. En la actualidad conviven en Unasur al menos dos formas de entender el proceso de integración: la Alianza Pacífico, que aboga por una lógica neoliberal en el comercio, en lo financiero, en lo social; y al otro lado está Mercosur (con mucho del ALBA ahí adentro), que defiende una integración más postneoliberal –y en algunos casos postcapitalista– si nos centramos particularmente en Venezuela y Bolivia, y también Ecuador (aunque esto dependerá de cuáles sean los caminos de este país en sus acuerdos comerciales con la Unión Europea). Esta concomitancia no será plácida, porque si lo fuese sería en detrimento de los logros de la década ganada.

En otras palabras, si la Alianza del Pacífico logra finalmente suavizar el rol y las funciones de Unasur en la región y en el mundo, habrá que estar preocupados por si se viene otra larga noche de agresión del capitalismo neoliberal. Por todo esto, es fundamental considerar la raíz de Unasur, la Unasur de Chávez, también de Correa, de Evo, de Lula y Dilma, de Mujica, de los Kirchner; esto es, una Unasur de mayor protagonismo en los casos donde existan

flagrantes atentados contra la democracia en algún país de la región y, a la vez, de un papel más proactivo para seguir avanzando en los retos pendientes en materia social, política y económica. Se fijaron estrategias que han de seguir en marcha para que el cambio de época en la región sea absolutamente irreversible, al mismo tiempo que se siga en la senda de la época ganada.

Por último, otra iniciativa que emana de estos vientos de cambio en América Latina es el Banco del Sur. Esta propuesta surge con el propósito de convertirse en un actor clave para la emancipación financiera. El Banco del Sur es una institución dirigida a impulsar la integración de los países latinoamericanos y la creación de proyectos conjuntos para el desarrollo de los pueblos, con respeto a la soberanía y con total independencia de las grandes potencias económicas. Desde hacía algunos años la importancia de la creación de un banco regional para emanciparse del FMI y del BM era un tema que gravitaba en los debates regionales. Finalmente, en 2007 Hugo Chávez y Néstor Kirchner acordaron la creación de una institución bancaria regional cuyo principal objetivo sería romper lazos crediticios con otras instituciones financieras. En Ecuador, en mayo de ese mismo año, se reunieron los presidentes, acompañados de ministros de Economía y Finanzas o de Hacienda, de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Venezuela, para acordar sobre el avance hacia el proyecto del Banco del Sur y sus lineamientos generales. Así se constituyó este banco que aún tiene la dificultad de compatibilizarse con bancos estatales que operan fuera de la frontera, como es el caso del Banco de Desarrollo de Brasil. Este punto también será tratado en el capítulo último, dedicado a la disputa en juego respecto a algunos ejes cruciales para la continuidad irreversible del cambio de época en América Latina.

El Banco del Sur es aún muy pequeño en cuanto a su capacidad financiera real, pero su constitución es una gran señal a favor de una nueva banca de desarrollo para la integración de la región, promotora del financiamiento de proyectos y programas que impulsen el desarrollo de infraestructuras básicas, combatiente de asimetrías y desigualdades en el desarrollo socioeconómico de la

región, y prevista para destinar recursos a inversiones productivas que apunten a la integración de Suramérica. Es otro logro bolivariano de esta década ganada que, a la vez, deja más responsabilidad hacia el futuro.

Para concluir este sinfín de acontecimientos, hitos, logros, conquistas y avances de este proceso de integración logrado, propios de un cambio de época regional, cabe hacer una mención especial a la aparición de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Esta institución, también con fuerte impronta bolivariana, es un organismo intergubernamental de ámbito regional, heredero del Grupo de Río y de la Cumbre de América Latina y del Caribe, que promueve la integración y desarrollo de los países latinoamericanos. La Celac fue creada el 23 de febrero de 2010 en sesión de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, en Playa del Carmen, México. Posteriormente, en la Cumbre de Caracas, Venezuela, realizada los días 2 y 3 de diciembre de 2011, quedó constituida definitivamente la nueva institución regional. En ella se materializan los sueños de unidad, justicia y soberanía de Simón Bolívar, José Martí, el Mariscal Sucre, entre otros grandes próceres de la región.

La Celac también responde a los nuevos tiempos, a los nuevos vientos después de una década ganada, de un cambio de época; es un intento de dotar a la región latinoamericana de más *latinoamericanía*. Constituye un nuevo marco institucional propio que consiguió sustituir a la Organización de Estados Americanos como único espacio aglutinador de todos los países de América Latina. En términos políticos, fue la prueba manifiesta de un cambio de piezas en el contexto regional de su conformación: Cuba por Estados Unidos. Por el momento, la Celac solo ha comenzado a caminar; es imposible valorarla con suficiente retrospectiva histórica; aún tiene casi todo por hacer. Sin embargo, una institución integrada por 33 países, que cubre una superficie territorial de más de 20,5 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 600 millones de habitantes, que constituye la tercera economía del mundo con 6,06 billones de dólares de PIB conjunto, se confirma innegablemente

como determinante en el ámbito geopolítico para los próximos años. Es otra demostración más de la importancia que Chávez ha tenido para la reordenación geopolítica de América Latina y, por consiguiente, para una nueva inserción en el mundo desde un polo más unido y más propio para tener relaciones por sí solos con el resto del mundo.

Definitivamente la Celac es otra pieza más del nuevo Consenso Latinoamericano del siglo XXI, que sustituye al viejo paradigma venido de afuera para decidir qué se puede efectuar adentro; es un nuevo Consenso basado en el respeto de las diferencias existentes en el propio seno de la región. La Celac es realmente el resultado ampliado de eso que persigue el nuevo Consenso Bolivariano; es un consenso donde caben los acuerdos de máximos, pero también de mínimos. Al eje de países no neoliberales que gravitan en torno al ALBA se sumó un Mercosur que nada tiene que ver con aquel de la era neoliberal. Y si bien la Alianza del Pacífico nada tiene que ver con el ALBA o Mercosur, todo suma para constituir un continente emancipado con arquitectura institucional propia, con mecanismos internos para resolver problemas sin tener que consultar afuera.

Este instrumento (así como la Unasur) es una nueva forma de concebir la articulación virtuosa de esos divergentes espacios de integración, con el único objetivo de acordar la configuración de una América Latina como nuevo bloque geopolítico, reinsertada soberanamente en la actual transición hacia un mundo multipolar. Es la Celac una institución con gran potencial para que se pudiera discutir acerca de la necesidad de un centro de arbitraje regional que no dependa del Norte, para que se vaya pensando en una agencia de calificación de riesgo propia; para que se establezca como el primer territorio libre de pobreza, pero también liberado de fondos buitres; para que se puedan usar los fondos propios hacia dentro sin necesidad de buscar intermediarios afuera; para que, además, se pueda negociar económica y políticamente con otros bloques de igual a igual. Después de la III Cumbre de la Celac –que tuvo lugar a inicios del 2015–, se puede afirmar que se está algo más alejado de la constante pretensión de incorporar a América Latina

al viejo redil atlántico, a través de un vínculo (desigual) trilateral en el que Estados Unidos y Europa pudieran seguir a sus anchas, escondiéndose en eso que llaman consenso, tal como se especifica en el informe del Consejo Atlántico: *El Vínculo Trilateral: Inspeccionando una Nueva Era para América Latina, Estados Unidos y Europa*¹⁵¹. Por el contrario, avanzar con esta Celac, con esta Unasur y no con la OEA, es estar más cerca de las aspiraciones de tener una región cada vez más independiente.

CAPÍTULO 3. LOS AÑOS EN DISPUTA: TENSIONES, CONTRADICCIONES Y DESAFÍOS

Afirmar que América Latina está en disputa no es ningún descubrimiento. Tampoco esto quiere decir que no haya habido disputa en los años anteriores, en la década anterior. La disputa es parte consustancial de la política y de la economía y, como tal, está siempre presente. Es imposible sortear este hecho a pesar de que así lo pretendan aquellos que son privilegiados en el actual statu quo: no disputar sería una condición sine qua non para dejar las cosas como están y, entonces, que unos pocos sigan siendo los grandes benefactores de un metabolismo global del capitalismo, que en su propia génesis tiene una estructura dotada de mecanismos de reparto desigual. Es por ello que la disputa se hace necesaria en tanto que permita confrontar y discutir el sentido hacia delante del horizonte estratégico de cada proyecto.

Pero también la disputa permite marcar el campo para dirimir las tensiones que surgen al calor de las diferentes dimensiones de la coyuntura. No es baladí ni ha de ser pasada por alto esta última cuestión: cada una de las tensiones, propias de múltiples contradicciones existentes en los procesos de cambio, acaba resolviéndose/inclinándose hacia un lugar, hacia una determinada dirección que no es neutral ni imparcial. Esa es la disputa a la que hace referencia

151 Transatlantic Task Force on Latin America. *The Trilateral Bond: Mapping a New Era for Latin America, the United States, and Europe*, Washington, DC: 2013.

este último apartado: buscamos poner encima de la mesa el forcejeo vigente en la región latinoamericana hacia delante, una vez que se ha demostrado que las anteriores disputas fueron resueltas a favor de la mayoría social en Venezuela, Bolivia, Ecuador, también en Argentina y, en menor medida, en Brasil y Uruguay.

Se trata de presentar a la política y a la economía como un espacio de disputa en movimiento, repleto de tensiones y contradicciones, de ofensivas y contraofensivas, de pugnas que aún no tienen definido el signo ganador de la propuesta que acabará imponiéndose. Esto argumenta a favor de caracterizar a los próximos años como una nueva década en disputa para América Latina; después de las décadas perdidas neoliberales, llegó una época que por ahora ha representado una década ganada. Desde ahora en adelante se abre un período de disputa, de contienda política y económica entre proyectos y propuestas diferentes, muchas veces antagónicas entre sí.

Una vez expuestos en capítulos anteriores los rasgos de las décadas perdidas y de la década ganada en América Latina, es momento de presentar, desde un enfoque más prospectivo, cuáles son –a nuestro entender– los ejes reales de la disputa en América Latina; por un lado, al interior de la región, tanto en el propio bloque de países progresistas como entre este y el otro grupo de países que siguen apostando al neoliberalismo y, por otro lado, aquella que surge en la relación de la región con el nuevo mundo en plena transición geopolítica y geoeconómica.

Después de haberse producido la década ganada en América Latina, resulta preciso identificar y atender los nuevos desafíos que se abren en adelante para que esta sea una época como tal y no un mero ciclo de transformaciones que tiene fecha de caducidad, simplemente porque es una cuestión de una alternancia de modelos que se turnan cada cierto período de tiempo. Una época es aquella que marca significantes y símbolos, que obliga a un relato y discurso propio, y que desplaza la centralidad política y económica hacia otro estadio desconocido; pero una época también exige sostenibilidad e irreversibilidad de lo conseguido, de todo lo

logrado; que la vuelta atrás no sea una cuestión de espera, sino que cualquier intento de regreso al pasado deba transitar por un largo recorrido lleno de obstáculos y dificultades que la misma mayoría social impone.

Sin embargo, el cambio de época inaugurada a inicios de siglo *xxi* también exhorta a una espiral dinámica hacia delante, en diálogo constante con las nuevas realidades que ya no son, afortunadamente, aquellas que se heredaron del neoliberalismo. Ningún orden económico, ni el contexto interno ni externo, ni el sujeto social mayoritario, ni sus demandas, nada de ello conforma el mismo escenario que había que transformar cuando se iniciaba la década ganada. Es este otro momento que poco tiene que ver con aquello que había que combatir en forma inminente cuando se recibieron países empobrecidos económica, política y socialmente. Toda sociedad está en movimiento y más aún cuando acontecen procesos revolucionarios a tanta velocidad, que han provocado un sinfín de alteraciones en la composición socioeconómica, en las nuevas estructuras, en el nuevo sentido común, en las nuevas alianzas, y también en la nueva oposición que se reconfigura al son de la nueva época, aunque ello no quiera decir que haya perdido la esencia de las viejas derechas. Es preciso afrontar esta dialéctica procedente de la necesidad de buscar las nuevas respuestas ante las nuevas preguntas que surgen como centralidad del nuevo imaginario mayoritario. Eso que llaman pueblo no es ninguna fotografía estática, sino que es tan amorfo como dinámico.

Esta es la médula de la disputa: considerar que nada es igual a lo de antes. En tanto más se haya avanzado en el proceso de cambio (revolucionario en muchos casos), mayor será la necesidad de reidentificar los nuevos objetivos en adelante; es decir, para identificar la disputa hacia delante es preciso abandonar el espíritu *lampedusiano* (que todo cambie para que nada cambie). Cualquier cambio exitoso exige, en consecuencia, continuar hacia delante con la búsqueda de las nuevas demandas de las mayorías; las viejas demandas satisfechas no pueden seguir siendo el núcleo del proceso de cambio que requiere revisión continua. Es obligatorio

comprobar cuáles son los nuevos temas en discusión, en tensión, en contradicción; y no porque haya habido errores (que seguramente también existen y son parte de cualquier proceso político y económico), sino porque seguramente ha habido modificaciones de los cimientos que requieren revisión, reclamando reacomodos o incluso nuevas definiciones estructurales.

Dar la espalda a este tipo de controversia, a esta disputa que está en juego, es lo mismo que decidir tirar la toalla creyendo que todo está o que se puede seguir con el mismo eje cartesiano del pasado para afrontar el presente. El acierto del pasado frente a la hegemonía neoliberal fue precisamente haber actualizado el análisis que el orden dominante no quiso aceptar: fue Hugo Chávez quien entendió que existía un país real, que nada tenía que ver con el país oficial que venía expuesto por cualquier organismo internacional; lo mismo hizo Evo Morales en Bolivia, o Rafael Correa en Ecuador, o Nestor Kirchner en Argentina o Lula da Silva en Brasil. Todos ellos supieron analizar acertadamente aquello que eran tensiones y contradicciones en el seno de la hegemonía neoliberal, y descartaron precisamente esos discursos dominantes que seguían anclados en el pasado, casi al inicio de los años perdidos, como si el pueblo real, o la política y economía real, pudieran resistir obsoletos enunciados o realidades ya inexistentes.

Ahora se trata justamente de anticiparse y adelantarse, evitando caer en la misma trampa en que cayó la vieja hegemonía neoliberal: creyeron que todo era posible desde su condición dominante para seguir construyendo artificialmente un sentido común, que había dejado de ser el verdadero sentido común de la mayoría social. He aquí la cuestión central para la viabilidad y la sostenibilidad de este cambio de época. La irreversibilidad será más efectiva en tanto sea posible encarar los próximos años en disputa, acertando en la identificación de las nuevas tensiones y contradicciones surgidas por la propia dinámica del proceso acelerado de cambio, pero también por el mundo de afuera, que ya no es el mismo ni geopolítica ni geoeconómicamente, y tampoco en cuanto a las alianzas adentro y por los propios vaivenes de la política interna, de la correlación

de fuerzas partidarias y no partidarias; por la nueva conformación económica, los nuevos y viejos agentes; y por las nuevas demandas sociales y económicas de la mayoría social, que ha visto mejorar pero que sigue queriendo mejoras.

Son dimensiones de obligado abordaje a la hora de discutir con rigor la disputa que se avecina en la región; no mirar hacia delante seguramente hará más compleja la posibilidad de seguir avanzando (a favor de la mayoría social), en relación con lo complejo que ya es ir a contracorriente en un mundo que todavía sigue siendo hegemonizado por un capitalismo neoliberal. Es imprescindible revisar ahora cuáles son esos nuevos puntos nodales y definitorios que condicionan el futuro horizonte del cambio de época que puede presumir de haber derrotado al neoliberalismo, pero que aún debe definir con más precisión qué es exactamente eso del postneoliberalismo. Aunque también es preciso no perder de vista que la derrota nunca es sine día; el orden neoliberal sigue siendo predominante en el mundo y goza de muchas fortalezas, historia y lazos para poder seguir penetrando y resucitando en lugares donde parece haber muerto. El metabolismo del capital todavía no ha sido extinguido en sus múltiples formas de accionar en cada economía, a pesar de que esta tome un rumbo diferente (sea Socialismo Bolivariano del Siglo XXI de Venezuela, el Socialismo Comunitario del Vivir Bien de Bolivia, o el Socialismo del Buen Vivir en Ecuador). Así lo expone Mészáros en su libro *Más allá del capital*.¹⁵²

El metabolismo social del capital está arraigado desde hace siglos y no resulta fácil expulsarlo de raíz, ni eliminarlo de las innumerables expresiones en las que se presenta en cada momento de la vida de los ciudadanos. En otras palabras, el capital siempre acaba adaptándose al nuevo marco de una propuesta alternativa postcapitalista y postneoliberal, de tal forma que las posibilidades de transformación continua son siempre más complicadas. Pero, además, los logros alcanzados siempre están sujetos a ser revertidos

152 István Mészáros. *Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición*, Vadell Hermanos, Caracas: 2001.

por una suerte de constante guerra económica procedente de la propia estructura capitalista, inquilina y residente en las nuevas condiciones de habitabilidad. Dicho de otro modo, la connivencia de cualquier nuevo horizonte de época (poscapitalista o postneoliberal) con elementos constitutivos del capitalismo (neoliberal) en su escala local o bajo el influjo global (hasta el momento imposible de evitar) es un incentivo más para encarar cuanto antes las nuevas contradicciones que surgen al calor de esta tensión dialéctica, porque el riesgo real de volver atrás es omnipresente cuando hay una fuerza que procura conseguirlo, impidiendo así que se prosiga con el futuro de pendientes transformaciones democratizadoras del poder económico.

Cualquier proceso de transformación de alta velocidad, como los descritos en el capítulo anterior, trae consigo innumerables tensiones y contradicciones propias de la disputa entre el cambio apresurado y la inercia conservadora (de conservar lo que se viene logrando). Lo importante es no descarrilar en ningún momento, que nada de lo logrado se pierda y que todo lo que reste por lograr se pueda alcanzar. Se trata de diferenciar entre de dos planos que son plenamente complementarios e interdependientes: uno, de irreversibilidad relativa de todo lo que se ha logrado; y dos, de reversibilidad de todo lo que resta aún por lograr. La clave, por tanto, está en volver a mirar adelante, obligándose a traspasar una especie de barrera del no retorno que solo se construye considerando y afrontando la disputa real y actual. Seguir enfrentando una disputa pasada en vez de esta disputa presente y futura es un error estratégico no subsanable en forma sencilla y que, además, sería condicionar el cambio de época circunscribiéndolo exclusivamente a unos años buenos pero pasajeros.

El libro de Álvaro García Linera, *Las tensiones creativas de la Revolución*¹⁵³, enfocado a la discusión del proceso de cambio en Bolivia, inaugura un necesario debate acerca de las contradicciones

153 Álvaro García Linera. *Las tensiones creativas de la Revolución. Quinta fase del Proceso de Cambio*, Ediciones de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz: 2011.

surgidas no exclusivamente entre bloques de poder antagónicos, sino que también son importantes aquellas producidas al interior del bloque nacional-popular: las tensiones entre los propios sectores que protagonizan el cambio, que disputan sentidos en torno a cómo llevarlo adelante. La tesis sostiene esta fase como la quinta de un proceso amplio que se ha venido produciendo en Bolivia, en la que se originan contradicciones creativas con capacidad para ayudar a impulsar el curso de la propia revolución. Para el vicepresidente boliviano, el centro de gravedad del debate en Bolivia reside precisamente en las contradicciones, fundamentales y secundarias; el foco se pone tanto en las contradicciones entre nuevas propuestas de cambio y lo que resta (que no es poco) del neoliberalismo, como en aquellas otras contradicciones emanadas en el seno del propio pueblo, como las llamaba el presidente chino Mao Tse Tung. Cualquier proceso de cambio que transita desde una opción contrahegemónica hacia una propuesta política que acaba siendo nueva hegemonía ha de afrontar inexorablemente todas estas contradicciones, adentro del bloque, pero también afuera; las unas y las otras no son divisibles como si fueran compartimentos estancos. Son las unas y las otras las que conforman ese universo dialéctico que está en disputa, lleno de tensiones, de contradicciones.

Quizás ahora es momento de revisar nuevamente, desde una perspectiva regional, el debate que apropiadamente trajo el texto de García Linera hace unos años, cuando todavía algunos procesos no habían tenido el tiempo necesario para consolidar suficientemente el nuevo proyecto hegemónico. Es momento de aprovechar la ventana que se quedó abierta después de esta discusión para que se pueda actualizar la reformulación de cuáles son, al día de hoy, esas nuevas tensiones; para indagar si aquellas que son válidas para Bolivia también sirven para pensar otros países de la región que viven procesos de cambio muy específicos; para preguntarse si el cambiante contexto geoeconómico y geopolítico ha modificado la lectura de esas contradicciones planteadas, etc. El ejercicio analítico, desde la teoría y la praxis política, requiere de un reajuste sin

descanso para identificar y profundizar en esas contradicciones, porque todo cambia vertiginosamente adentro y afuera.

El objetivo aquí no es redundar ni criticar los planteamientos de García Linera sobre las tensiones secundarias, creativas de la revolución existente en Bolivia¹⁵⁴, sino todo lo contrario: tomar como impulso este debate abierto para continuarlo, para llevarlo al presente y, en la medida de lo posible, poder realizar algún tipo de ejercicio prospectivo para los años venideros. El reto es aprovechar esta controversia para actualizarla, para problematizarla al día de hoy, para ponerla en perspectiva estratégica de cara a esta década que ya está en disputa.

Además de las contradicciones propias de los procesos de cambio, sean fundamentales o secundarias, hay que considerar también los nuevos problemas que van surgiendo por errores propios, por la misma erosión de tantos años de gestión, por la pérdida paulatina de adrenalina y entusiasmo después de una década ganada, por las nuevas demandas y nuevas preguntas que requieren nuevas respuestas; pero también por los nuevos reacomodos de la economía global, las nuevas fórmulas de interdependencia que no son aquellas del siglo xx, los nuevos mecanismos para derrocar gobiernos elegidos democráticamente, y las nuevas maneras que tiene la oposición de reinventar candidaturas. Todo este cúmulo de circunstancias y dimensiones conforma un nuevo universo en disputa, a modo de magma en constante erupción que ha de ser desgranado y expuesto controversialmente. Con este interés, se exponen a continuación algunos ejes que constituyen el centro estratégico de gravedad de la disputa en juego en América Latina, con la única intención de seguir contribuyendo a un debate sin cierre ni candados, siempre en movimiento. Son diez a modo de

¹⁵⁴El texto de García Linera recoge cuatro contradicciones secundarias para el caso boliviano: 1) relación entre Estado y movimientos sociales, 2) flexibilidad hegemónica frente a firmeza en el núcleo social, 3) intereses generales frente a intereses particulares y privados, y 4) socialismo comunitario del Vivir Bien (A. García Linera. *Op. cit.*).

síntesis, pero podrían ser muchos más; se presenta en las próximas líneas esta suerte de decálogo en disputa en América Latina.

Entre lo irreversible y lo reversible

No son términos objetivos ni aislados; la irreversibilidad se alcanzará a medida que prosigan los avances y viceversa. Es lo uno sumado a lo otro, interconectados a modo de tándem estratégico indisoluble. Ambos términos se retroalimentan y se fortalecen entre sí porque la irreversibilidad no es un concepto absoluto, sino relativo a los tiempos, a los avances. Aquello que se deseaba que fuera irreversible hace una década, puede que al transcurrir del tiempo deba ser reajustado por el mismo proceso de cambio histórico; por ejemplo, a mayor avance en la democratización económica, más sólidas serán las condiciones para garantizar la irreversibilidad, pero a la vez es probable que ese horizonte determine las nuevas demandas en el futuro. Seguramente, las nuevas demandas estarán en función de lo que se ha venido consiguiendo. La relación entre aquello que se desea como irreversible y todo lo que está pendiente por revertir es dinámica e interdependiente; lo uno depende de lo otro.

Aceptar que en algunos países de América Latina se vive un cambio de época, y no un mero recambio electoral ni una renovación de élites políticas, implica considerar la cuestión de la irreversibilidad como una condición determinante. Para muchos autores, la irreversibilidad es un término que ha de venir acompañado del calificativo relativo, porque nada ha de ser asumido como irreversible si concebimos la democracia como expresión de un sistema político que garantiza que cualquier cambio sea posible si así lo decide la mayoría social. Sin embargo, el término de irreversibilidad no solo ha de estar sujeto a ese enfoque (más en la línea de la democracia liberal), sino que podría ir más allá, superándolo. La irreversibilidad también ha de significar que no haya marcha atrás en la ampliación de la satisfacción de los derechos sociales, en la democratización real, en garantizar la soberanía de un país. Son

metas alcanzadas que deben ser innegociables para sostener los nuevos procesos inmersos en un cambio de época. Es esta la irreversibilidad a construir, aquella que no se limita a una discusión acerca de quién ganará las elecciones, sino que por encima de ello existe un pacto social y económico que tiene unos mínimos para respetar, que no se pueden quebrantar.

Esto de la irreversibilidad muchas veces se puede observar mejor en el sentido opuesto. ¿Construyó el neoliberalismo irreversibilidad de su proyecto a lo largo de su período hegemónico en muchos países? Definitivamente sí, porque aun después de haberse iniciado el cambio de época, todavía restan vestigios de este orden político-económico-social-cultural que no han podido ser quebrantados. El neoliberalismo ha permitido penetrar de tal forma a nivel institucional, en el sentido común, en los cuerpos orgánicos e ideológicos, que son todavía muchas las estructuras y superestructuras que permanecen incólumes a pesar de los nuevos tiempos, de la nueva época. He ahí un aspecto clave que explica por qué una hegemonía no se deconstruye tan rápidamente. Su carácter perenne se debe en gran medida a esta capacidad de haber construido un grado de irreversibilidad que va más allá de quién sea el ganador de las elecciones; el neoliberalismo en América Latina penetró hasta tal punto, que todavía hay disputas pendientes de revertir aunque haya procesos de cambio que lleven ya más de una década en el gobierno.

En este sentido se ha de hablar de irreversibilidad, pero ahora desde otra perspectiva para garantizar la perdurabilidad de los objetivos estratégicos de los procesos de cambio iniciados a partir del siglo XXI. El Estado es, sin duda, un espacio fundamental para disputar este desafío en adelante; el nuevo Estado, cada vez menos aparente, más descorporativizado, es una esfera clave para seguir forjando más irreversibilidad. Un Estado más integral, más vigoroso, que logra llevar a cabo políticas tributarias con capacidad recaudatoria, respetando los principios de justicia social; que se reapropia de los sectores estratégicos; que no se queda al margen de las decisiones ni de la actividad económica del país; que se erige

como garante, sí o sí, caiga quien caiga, de los derechos sociales de los ciudadanos; un Estado que redistribuye a través de su política social, que asegura el avance material de la independencia política y económica de un país, y que permite una inserción más soberana en el mundo; un Estado así es realmente una condición sine qua non para fraguar mayor irreversibilidad. Transitar del Estado aparente neoliberal a este otro Estado es la senda obligatoria para seguir evitando una vuelta atrás de forma trágica, pero no solo se trata de un Estado más fuerte en cuanto a tamaño y responsabilidad, sino que también ha de ser tarea obligatoria que este Estado opere y actúe con eficiencia (aspecto que se verá en un siguiente punto).

Además de este aspecto, cabe señalar otro que sí ha de ser tenido en cuenta a la hora de discutir acerca de la irreversibilidad. Lo que el Banco Mundial denomina 'la nueva clase media' es un hecho a considerar; sin entrar aquí en el debate en torno al concepto de clase media, es cierto que las clases populares han disfrutado de un salto cualitativo y cuantitativo en lo social, en lo económico y también en lo estrictamente político, en estos años ganados que ya no son ni por asomo aquellos que iniciaron el siglo XXI. Se podría afirmar que el bloque histórico del cambio de época es otro, renovado gracias a las exitosas políticas económicas y sociales de los procesos que se han llevado a cabo en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y también en Argentina y Brasil. ¿Se ha ido fidelizando a estos nuevos sectores sociales a medida que han venido sucediéndose los cambios económicos y sociales? ¿Se tuvo y se tiene en cuenta que este cambio significativo en las condiciones de vida a la vez modifica las demandas, las aspiraciones que presentan ahora rasgos novedosos? Es esta otra cuestión central para seguir repensando la irreversibilidad de un proyecto de mayorías que ahora constituyen otro sujeto social (otro aspecto tratado más adelante).

La irreversibilidad tiene, además, otro componente en relación con los factores y motivaciones que hacen seguir adhiriendo a las causas fundamentales de este cambio de época. Son muchos los que consideran que, debido a la no perseverancia de altas dosis de

entusiasmo político, las soluciones y respuestas han de descansar más en las instituciones, en la normalidad, en la estabilidad. Siendo cierta esta premisa, esto no puede minusvalorar la importancia que posee la pasión, la efusividad y el componente emotivo en este cambio de época, sea en Venezuela, Bolivia o Ecuador (y también en Argentina). La nueva política en estos nuevos procesos no es tal como la corriente institucionalista la describe. Por encima del desiderátum de este paradigma teórico que todo lo resuelve vía instituciones, estos procesos se fundaron desde otros principios, entendiendo la política desde la confrontación, pacífica, pero no exenta de pasiones y efusiones. Restar esta variable en la ecuación política es ignorar una cuota primordial para entender cómo se han venido conformando estos procesos.

Es verdad que esta característica no se mantiene intacta a lo largo del tiempo, pero también es innegable que sin ella no se puede explicar la política en este cambio de época. Sería imposible explicar por qué sigue apoyando la mayoría social a la propuesta chavista solo desde los buenos números sociales de esta década ganada; lo mismo ocurre para Evo Morales o Correa o incluso para el kirchnerismo. Hay resultados materiales, pero también hay una épica y emotividad inmaterial que ha sumado mucho para lograr lealtad y fidelidad en estos procesos de cambio. La irreversibilidad también reside en este asunto y depende de cómo se aborde el nuevo relato, las nuevas banderas, los nuevos estandartes y motivaciones; de cómo se afronte al nuevo enemigo histórico (ahora revestido de siglo XXI). De todo eso también depende la sostenibilidad de cada proceso de cambio.

Las urgencias coyunturales y las exigencias estructurales

Otra imprescindible discusión es cómo se resuelve la vieja tensión dialéctica entre aquello que exige una respuesta inminente y todo objetivo de carácter estructural. El *ahora economicus* goza de tanta prioridad como cualquier reto de cara al futuro; el hoy ha de estar siempre presente como condición básica para pensar en el

mañana. El largo plazo existe cuando se resuelve el corto. El futuro es válido si se construye sobre las soluciones del presente. Es algo que muchas veces se ignora por parte de muchos economistas heterodoxos, que piensan que se puede construir los cambios estructurales sin atender a las urgencias coyunturales. Asumir esta tesis es desconocer la realidad política como hábitat real en el que se deben tomar las decisiones económicas.

Omitir los intentos de desestabilización por parte de los poderes económicos hegemónicos a nivel mundial contra estos procesos de cambio es no considerar una parte significativa de los retos que se deben afrontar en cada momento histórico. A veces, cuando un determinado gobierno diseña una planificación estratégica para los próximos años, sea para un cambio de la matriz productiva o para ganar en soberanía energética, estos retos han de convivir con enormes presiones internas y externas que buscan obstaculizar los procesos de cambio positivo para las mayorías. Están forzados así a convivir, por ejemplo, con una devaluación forzada en el caso argentino, cuando la Shell compró a fines del año 2013 más de un millón de dólares a un tipo de cambio superior al fijado; o cuando en la misma Argentina los exportadores de soja no liquidan sus ventas en dólares para evitar que estos entren en el país, procurando provocar un mayor estrangulamiento interno en divisas; con sentencias que van en detrimento de la soberanía, como en Argentina con el caso de la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de los fondos buitres, que obligaba al país a pagar cantidades desorbitadas y que, de aceptar el fallo, hubieran implicado drásticas consecuencias en términos de soberanía económica.

Lo mismo cuando se produce en Venezuela un período de guarimbas impulsadas por la oposición, que han ocasionado graves daños económicos y sociales; o también cuando contra Venezuela, *The Economist* o cualquiera de las agencias internacionales de calificación (Moody's viene siendo la más activa en este terreno) procuran crear alarmismo para encarecer los bonos de deuda pública; tampoco se puede pasar por alto la presión que ejerce la Unión Europea sobre Ecuador, cuando amenaza con quitarles las

preferencias arancelarias SG Plus si no firma el acuerdo comercial con el bloque europeo; o el empeño de Chevron en seguir en el Ciadi exigiendo lo que la justicia ecuatoriana le deniega; o lo mismo en Bolivia, que a pesar de que ahora se encuentra en un cierto período de calma relativa tuvo que superar intentos de golpe de Estado o desconocimiento del presidente Evo en buena parte del oriente del país o, sin ir más lejos, al hecho intolerable de haberlo retenido en Europa en su propio avión presidencial. Sería interminable la lista de sucesos que ponen en jaque a cada proceso torpedeando cualquier avance, lo que implica que pensar hacia adelante oblique constantemente a resolver de la manera más efectiva e inmediata cada una de estas zancadillas. Obviarlos es inventar una realidad ideal que no existe.

Pero no son solo problemas venidos de afuera o con pretensiones desestabilizadoras, sino que muchas otras veces se trata de problemas que apremian respuestas inaplazables. Cualquier error de cálculo político—como fue, por ejemplo, el intento de eliminar una parte reducida del subsidio al combustible en Bolivia, que provocó una fuerte movilización en contra del gobierno en diciembre del año 2010— puede alterar cualquier tipo de planificación estratégica a largo plazo, si cae el gobierno en ese momento o si pierde apoyo prolongadamente a partir de un detonante de este tipo. Algo similar en Venezuela si no se resuelve a la mayor brevedad posible la cuestión de los precios o los problemas de abastecimiento de determinados bienes que, a pesar de tener fallas estructurales y también explicaciones políticas, han de tener una respuesta rápida y satisfactoria para que no se genere una erosión electoral del gobierno.

En Argentina sucede lo mismo cada vez que el dólar ilegal paralelo sube su cotización, porque aún sigue siendo un referente más importante de lo que sería ideal, lo cual exige actuar con celeridad y eficacia para evitar que una amplia clase media se refugie en el dólar, dándole la espalda al peso. En Ecuador, la pérdida de la representativa alcaldía de la capital, Quito, ha hecho también mella en un presidente Correa que hasta el momento estaba acostumbrado a ganar; al parecer este hecho ha surtido un cierto efecto en

su decisión de no querer someter (hasta el momento) a consulta popular la posibilidad legítima de reformar la Constitución¹⁵⁵ para poder presentarse a las nuevas elecciones. Esto también podría significar un contratiempo que ha de superarse sin pérdida de capacidad para seguir avanzando en los temas que son verdaderamente claves en términos estratégicos. Son todos esos casos ejemplos válidos para también mostrar cómo desde adentro—desde lo que podrían ser las propias contradicciones secundarias a las que antes hacíamos mención— se abren necesidades nuevas e inesperadas situaciones adversas, que han de resolverse si se quiere seguir avanzando en nuevos retos estratégicos.

Este aspecto representa también una disputa que no puede ser descuidada, porque lo cotidiano ha de estar omnipresente para seguir repensando cómo organizar económicamente la sociedad. No hay ecuación económica que no deba tener primero en cuenta cómo vive la gente en su día a día, y cómo se sortea cualquier meteoro que venga intencionadamente o no a alterar las condiciones objetivas y subjetivas en el presente. Este imperativo no debe ser negociable; requiere, por el contrario, siempre respuestas rápidas e impostergables; es ahora, es ya, es algo totalmente urgente tener soluciones inmediatas cuando se trata de garantizar condiciones humanas dignas para vivir, sean estas afectadas por desaciertos, por propios desequilibrios coyunturales, por restricciones externas derivadas de un escenario macroeconómico global en crisis, o por *shocks* inducidos para ocasionar dificultades al interior de cada uno de los procesos.

Sea como fuere, es esencial buscar esa sintonía virtuosa entre aquello que la gente exige cada día, mientras se siguen construyendo condiciones estructurales en el largo plazo para sostener el buen presente sine día. La paciencia del largoplacismo solo se logra si esta se sustenta en la capacidad de remediar urgente y

155 Está propuesto hasta el momento que sea enmienda constitucional vía Asamblea legislativa, cuestión que si bien es legal, no estaría acorde con el espíritu de la Revolución Ciudadana que siempre prefirió las urnas para dirimir cualquier tipo de decisión estratégica.

exitosamente cualquier situación coyuntural adversa. Solo es viable aquella planificación que comienza por subordinar las metas temporales a la prioridad de garantizar en cada momento actual la satisfacción de las necesidades humanas básicas del pueblo. En otras palabras, la transformación estructural es válida siempre y cuando las urgencias coyunturales sean exitosamente resueltas. De lo contrario, la coyuntura acaba engullendo las buenas intenciones del análisis prospectivo a favor de cualquier cambio estructural.

No obstante, esto no quiere decir que haya una dictadura del ahora sin pensar hacia adelante. Se trata de conseguir un equilibrio virtuoso entre lo uno y lo otro, de tal manera que el día a día tampoco fagocite el pensar la política mirando hacia un nuevo horizonte estratégico de época. No es, ni mucho menos, recomendable ni acertado creer que solamente desde una buena respuesta a cada incendio que se aparezca se puede construir un proyecto sostenible, diferente a lo que se ha heredado. Transformar el paradigma estratégico exige verdaderamente disputar su sentido, su arquitectura, sus horizontes, su tránsito, y también sus respuestas a las exigencias de coyuntura. Esto último es parte de, pero no puede ser considerado como un todo que eclipse al resto de dimensiones necesarias para diseñar el plano estratégico, motor del cambio de época. De ahí viene la dificultad en esta disputa central hacia el futuro: se trata de que lo coyuntural no desplace a la discusión estratégica, pero tampoco que esta última reste importancia a cada necesidad de la coyuntura.

La gestión estatal y la eficiencia como nuevo tempo de la política

Tal como se había comentado previamente, la gestión es otra cuestión fundamental si se pretende avanzar en la construcción de condiciones de irreversibilidad de este cambio de época. Estos nuevos procesos de cambio que levantan la bandera de la justicia social han de considerar que esta será mayor a medida que las políticas públicas sean más efectivas. En otras palabras, la

democratización real de la economía será más positiva a medida que se reduzca el despilfarro, los errores de gestión, la corrupción. La eficiencia también debe ser un criterio central en la implementación de los nuevos modelos económicos que desean poner punto y final al neoliberalismo en América Latina; solo así, con una gestión eficiente de los nuevos Estados, se podrá disponer de argumentos para refutar la vieja tesis de que lo público y estatal no funcionan y, por tanto, es mejor dejarlo en manos del sector privado. Este dogma, aplicado como excusa para implementar el modelo privatizador de las décadas pérdidas, ha de ser rebatido a partir de verdaderos logros en la nueva administración pública, en la gestión de los servicios públicos y en cada una de las actividades en las que intervenga el Estado.

Un ejemplo de esta línea en disputa es la que el mismo presidente Chávez abre con la Misión Eficiencia o Nada en octubre del 2012, reconociendo en plena campaña electoral que había “errores muchos. Ineficiencia, por ejemplo, burocratismo, falta de seguimiento a los proyectos que se aprueban”¹⁵⁶. Chávez entendía, de hecho, que esta nueva Misión Eficiencia o Nada no era otra Misión más, sino una:

... operación eficiencia o nada, eficiencia político administrativa, económica, productiva y calidad revolucionaria (...) muchas veces la culpa es de nosotros mismos, de este nivel de gobierno, por falta de planificación, de previsión, de tener la visión estratégica. Yo siempre lo he dicho, yo lo he repetido no sé cuántas veces compañeros, hace poco lo dije, si nosotros inauguramos una fábrica puede ser de la mejor tecnología del mundo y la dejamos como una isla en el mar del capitalismo, esa fábrica va a fracasar, se la traga el mar

¹⁵⁶ En entrevista con Rangel el 30 de septiembre de 2012, días antes de las elecciones del 7 de octubre (José Vicente Rangel, *De Yare a Miraflores, el mismo subversivo. Entrevistas al comandante Hugo Chávez, 1992-2012*, (3.ª ed.), Ediciones Correo del Orinoco, Caracas: 2013).

capitalista, el monstruo, una especie de hidra de mil cabezas es el capitalismo.¹⁵⁷

La justicia social ha de ser compatible con la eficiencia socialista o con otro tipo de eficiencia no neoliberal que emerja de los nuevos objetivos en cada uno de los pactos sociales que explican este cambio de época latinoamericano. Ambos objetivos han de ser parte indisoluble de los objetivos estratégicos en el nuevo horizonte; es preciso dotar a los procesos políticos de mayor énfasis en la eficiencia como criterio en la nueva época, como nuevo tempo de la política. Sin eficiencia el impacto de acertadas políticas económicas es menor al deseado, a aquel que podría lograrse; sin eficiencia la justicia tarda más en implementarse y los impactos de la política redistributiva se reducen. Se trata de tener mayor eficiencia para mejores resultados sociales. El notable rol del Estado en los nuevos proyectos en América Latina requiere justamente un desempeño con eficacia y eficiencia, porque lo contrario sería invitar nuevamente a la crítica neoliberal en contra del sector público. Se abre en adelante el reto estratégico de consolidar una nueva agenda de transformaciones del Estado, en busca de una eficaz dotación de institucionalidad revolucionaria, acorde a la nueva arquitectura económica que se pretenda alcanzar.

No obstante, parte de esta disputa también recae sobre la significación del sentido de esta mejora de la eficiencia. Ganar en hacer bien las cosas no puede ralentizar el proceso de transformación del Estado. Aquí surge el dilema entre mejorar la eficiencia de lo que ya está, lo heredado o, por el contrario, mejorar la eficiencia mientras se transforma. Esto último es el gran reto porque si no se plantea la mejor gestión desde esta perspectiva, podría caerse en la trampa de mejorar exclusivamente el diseño de un Estado pensado para otros fines no propios de este cambio de época. Es este un punto central en la nueva

disputa: tensionar gestión mientras se cambia, a la par, con una planificación intertemporal acertada.

Son infinitos los ejemplos que se pueden citar para explicar esta contradicción definitoria de la construcción de la nueva época. Si un modelo de administración tributaria mejora su eficiencia en la gestión y recaudación impositiva, esto podría ser idóneo siempre y cuando se haya transformado la estructura impositiva para hacerla acorde a los nuevos criterios de justicia social. En caso de no haberse hecho esto y seguir bajo la vieja matriz tributaria, entonces se podrá mejorar la eficiencia recaudatoria, pero se estarían infringiendo criterios de la nueva época. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el sistema educativo: si no se cambia el paradigma educativo, dotándole de más entidad emancipatoria y diferenciándolo de aquel sistema heredado en el que la calidad se mide con criterios absolutamente afines a otro modelo, entonces se puede mejorar en la eficiencia con mayor presupuesto y mejor gestión, pero no se habrá logrado contribuir a los nuevos objetivos estratégicos en este cambio de época. El reto es transformar con eficiencia, pero no exclusivamente mejorar la eficiencia de lo que ya existe como herencia neoliberal.

Además, la eficiencia no puede asimilarse al discurso neoliberal que confunde tal cuestión con el pragmatismo o cualquier otra medida que vaya encaminada a reducir el Estado, a recortar inversión social. Por el contrario, el desafío estratégico en esta disputa que se avecina es resignificar la eficiencia como criterio de una política pública en el marco de nuevos proyectos de transición, que buscan alejarse cada vez más del capitalismo neoliberal. Por lo tanto, no se trata de la eficiencia que se usa en el sector empresarial privado, en el que impera como único objetivo la máxima rentabilidad económica (crematística) –lograda, entre otras razones, a costa de reducir costos como la retribución a la fuerza de trabajo–, sino que la nueva eficiencia y/o eficacia han de redefinirse según el nuevo sentido común de época, estando al servicio de los objetivos estratégicos, nacionales e históricos.

Se debe evitar caer en opciones dadas, venidas de afuera, implementadas por control remoto e importadas como si se tratara de cualquier mercancía que se puede comprar en un supermercado.

157 Así se expresó en el Consejo de Ministros del 5 de noviembre de 2012, después de ganar las elecciones presidenciales (Hugo Chávez, c.p. Debate Socialista. “Chávez: les prometo un sacudón” [entrada del portal Rebelión o Muerte], recuperado 11 de noviembre de 2012, en: <http://www.revolucionomuerte.org/index.php/discursos/discursos-comandante-hugo-chavez/14-chavez-les-prometo-un-sacudon>)

Habrà que rehacer este debate para buscar criterios acordes al nuevo tiempo, a la nueva época, y dejar de usar ciertos indicadores característicos de la época neoliberal, que ha venido mercantilizando aspectos sociales que ahora son garantizados innegociablemente. Así que será tarea para el futuro cercano la definición de nuevos indicadores postneoliberales, de gestión pública, diseñados ad hoc por otros protagonistas y otros actores en esta época ganada. De esta forma, los logros solo podrán ser irreversibles en tanto que se proceda a una acertada planificación y ejecución de políticas públicas, como reto ineludible en la construcción del nuevo Estado, bajo criterios estrictos de eficiencia acordes a los nuevos horizontes (Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, el Socialismo Comunitario del Vivir Bien en Bolivia, o el Socialismo del Buen Vivir en Ecuador).

La disputa por la nueva renta en destino: el papel del rentismo importador

Desde hace décadas se analizan las relaciones de dependencia de la periferia con los países centrales. En América Latina, en los años sesenta y setenta cobró una gran importancia la escuela estructuralista de la Cepal –encabezada por autores como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Fernando Cardoso y Osvaldo Sunkel, entre otros–, que propugnó la denominada teoría de la dependencia, centrada en el análisis de las relaciones de dependencia que existen entre las economías enriquecidas del Norte y aquellas más empobrecidas que residen en el Sur. Esta corriente teórica defendió –y todavía defiende– que la producción y riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo de otros, y frente a ello surge la necesidad de cambiar la matriz productiva con el objetivo de reducir dicha dependencia mediante un proceso de alcance nacional de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). El objetivo fundamental de este tipo de política es alterar el patrón de intercambio desigual de algunos países con el mundo: por un lado, dejar de importar tanto valor agregado y, por

otro lado, llegar a abandonar el patrón primario exportador precisamente exportando nuevos bienes más industrializados (con valor agregado). Este es uno de los temas más recurrentes en los últimos años: la importancia de salir del patrón primario exportador para insertarse de otra forma en el sistema-mundo.

Pero esta no fue la única escuela que cuestionó el desarrollo hegemónico traído del Norte (la teoría modernizadora del crecimiento económico, de Rostow). La visión neomarxista, con autores como Paul Baran, Gunder Frank y Samir Amin, también tomó cierto protagonismo en este debate. La diferencia fundamental de este enfoque respecto al anterior es que no concibe posibilidad real dentro del capitalismo para que la periferia llegue a ser desarrollada; es decir, este enfoque considera que el cambio de la matriz productiva ha de venir obligatoriamente acompañado por el cambio de las relaciones sociales y económicas de producción, modificando así también al sujeto productivo y su modo de producir. Este viejo debate es traído hasta el presente, en la mayoría de las ocasiones, como si nada hubiera cambiado en estos nuevos tiempos del siglo XXI; como si la hegemonía neoliberal no hubiese impuesto a los países nuevas formas de relacionarse económicamente. Sería un error creer que la discusión de cómo combatir a la dependencia exportadora de materias primas sin valor agregado se debe copiar-pegar sin importar cómo ha cambiado el escenario geoeconómico y geopolítico (con sus nuevas alianzas y con un mundo cada vez más multipolar como telón de fondo), cómo se alteraron las maneras de producir en el mundo, cómo se ha implementado un orden económico mundial financiarizado, que relega a la economía real a un segundo plano, etc.

Tampoco se podría trasladar el viejo debate a la actualidad sin considerar que los propios procesos de cambio de época en América Latina también han atravesado ya por una primera etapa en la que disputaron con éxito y ahínco la renta de los recursos naturales en origen, esto es, se reapropiaron con soberanía, en gran medida, de este sector estratégico y de su renta generada (por ejemplo, Pdvs en Venezuela, YPFB en Bolivia, Petroecuador en Ecuador, y en

menor pero relevante porcentaje Argentina con YPF). Son, en definitiva, dos grandes aspectos que no pueden pasar inadvertidos, si queremos realmente afrontar el reto de acabar con la dependencia en el siglo XXI: en primer lugar, lo que ya se ha avanzado en cada uno de los procesos de cambio en América Latina (considerando la fase en la que se encuentran para determinar cuál es el siguiente salto adelante) y, en segundo lugar, la nueva economía mundial bajo la hegemonía neoliberal.

En relación con lo primero, es preciso recordar que el cambio de época en América Latina se comenzó a sustentar, entre otros factores, gracias a la disputa ganada en relación con la renta petrolera en Venezuela y Ecuador, o renta del gas o renta del litio en el caso boliviano. Cada presidente entendió rápidamente que esta disputa se trataba del caballo de batalla de la política y de la propia política económica. La política económica en torno a estos recursos naturales había sido, de una u otra forma, favorable para el capital extranjero; la soberanía se fugaba a través de la renta petrolera, que se iba en proporciones muy elevadas hacia afuera. Era, por tanto, la reapropiación en origen de la renta de esos recursos naturales la piedra angular sobre la que se tenía que edificar el nuevo orden económico; este fue el primer paso de obligado cumplimiento aunque costase sudor y lágrimas (en gran medida esto explica el golpe contra Chávez en el 2002, y seguramente también tuvo que ver en el intento de derrocar a Evo Morales o a Rafael Correa), porque después de haberlo logrado esta nueva renta generada reapropiada permitió llevar a cabo nuevas políticas sociales y económicas a favor de la mayoría social.

Ha sido tal la magnitud del proceso de redistribución de esta renta en origen (como se ha descrito en el capítulo anterior), tanto en forma de políticas sociales como también mejorando el empleo y el salario real, que ha originado una nueva demanda muy vigorosa que además de haber aumentado en volumen también lo ha hecho distribuyéndose más entre la mayoría social. Realmente se ha producido un proceso de amplia democratización del consumo; dicho de forma simple: el proceso redistributivo de la renta

petrolera en origen ha sido tan sustancial, que la nueva mayoría social no solo demanda bienes básicos sino que puede consumir otros bienes accesorios. Es este el motivo que ocasiona cierto desfase estructural entre la pujante demanda interna y la insuficiente oferta. Fue mucho más veloz el proceso de reparto de la renta de los recursos naturales en origen que el proceso de disponer de una oferta productiva para las consecuencias de dicho reparto en el consumo de la mayoría social.

¿Quién se ha venido aprovechando de este nuevo fenómeno económico en estos procesos de cambio? Mézáros nos da una respuesta concluyente: el “sistema del capital postcapitalista”¹⁵⁸, esto es, el capitalismo –nacional o transnacional– que se quedó a residir en cada uno de estos países a pesar del viraje en el rumbo económico, pero que a sabiendas de que tenía poca fuerza para disputar victoriosamente la renta de los recursos naturales (petróleo y gas) en origen, se dedicó entonces a enfocar la disputa en esa misma renta pero ahora en destino, es decir, en las manos de los consumidores y en las manos del propio Estado que cada vez lleva adelante políticas de compras públicas más importantes. En otras palabras, el sector empresarial privado concentró toda su actividad económica en un sector importador –no productivo– dedicado a comprar afuera y vender adentro para satisfacer la creciente y democratizada demanda del pueblo y del Estado (vía compras públicas).

Esto es lo que Samir Amin (1973) denominó burguesía importadora¹⁵⁹: un nuevo sector empresarial nacional en conexión privilegiada con el capital transnacional que es, a su vez, el que provee estos bienes, garantizándose así también su gran porción en el reparto del nuevo pastel. Esta suerte de rentismo importador del siglo XXI actúa como mecanismo especulador en contra de las posibilidades de una emergente y renovada economía real; además, este fenómeno requiere un alto volumen de divisas que en su mayoría

158 I. Mézáros. *Op. cit.*

159 Samir Amin. *Le développement inégal, Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique*, Éditions de Minuit, París: 1973.

son ociosas porque no acaban en el ámbito productivo, provocando así que se tenga una restricción externa cada vez más acuciante.

En definitiva, el rentismo importador del siglo XXI en América Latina es aquella actividad económica no productiva, dedicada a la compra-venta –comprar afuera y vender adentro– aprovechándose de una posición dominante de mercado, tanto a nivel internacional para importar como a nivel interno para ser el oferente puertas adentro. Este rentismo importador del siglo XXI es una actividad meramente especulativa, ociosa en tanto que no se dedica a producir, basada fundamentalmente en una actividad comercial y caracterizada por: 1) alto poder de mercado por disfrutar de privilegios en la actividad importadora gracias a las alianzas con las empresas transnacionales que le proveen, 2) ser formadora de precios debido a su poder de mercado, 3) no ser generadora de empleo porque se basan en actividades no productivas, puramente comerciales; 4) constituir un freno a los incentivos de la actividad productiva e industrial, 5) reapropiarse de una gran parte de la nueva renta generada en el país (reapropiada en origen, pero disputada en destino), 6) garantizar la reproducción del régimen de acumulación concentrador de riqueza a favor de unos pocos, y 7) facilitar la sostenibilidad de un metabolismo social del capital contrario a cualquier proceso de cambio democratizador de la riqueza.

Este nuevo universo económico es resultado de la disputa en torno a la renta de los recursos naturales en destino. Por ejemplo, la renta petrolera en el caso venezolano ya no se fuga en el origen, sino que se queda adentro y como tal es usada, en gran medida, para el consumo interno y para políticas a favor del Estado de las Misiones. Algo similar ha venido ocurriendo en Bolivia y en Ecuador. He aquí la nueva gran disputa para los próximos años: cómo reapropiarse en destino de la nueva renta de los recursos naturales que fue reapropiada en el origen. Aclarar que al decir reapropiarse en destino no implica necesariamente nacionalizar o estatizar esa nueva renta, sino que la disputa está en ver qué se puede hacer para que esa renta en destino no acabe beneficiando a otro modelo

especulativo, no productivo, ocioso y, nuevamente, dependiente de los países centrales. Lo que realmente significa esta nueva disputa es reapropiarse de tal forma que la renta no se acabe fugando por otros mecanismos, ni tampoco acabe concentrándose en muy pocas manos, perpetuando un régimen de acumulación injusto y que, por el contrario, esta renta sea la palanca para seguir consolidando otro orden económico interno, con mayor generación de riqueza y mejor distribuida.

La nueva renta generada y reapropiada en origen, distribuida puertas adentro, debe ser también fuente de ahorro interno con el objetivo de ser reinvertida en nuevas actividades productivas. En conclusión, la nueva renta en destino ha de volver a lo que muchos llaman el flujo circular de la renta en cada proceso, en cada país, y esto solo ha de poder realizarse con nuevas políticas tributarias más acordes a la nueva renta generada, con una nueva política financiera y con una política productiva integral (tema para un próximo punto de las disputas presentadas). Si, por el contrario, esta hemorragia no se detiene, seguramente se acabará imponiendo ese sistema del capital postcapitalista adentro de cada proceso de cambio, lo cual podría provocar que siga prevaleciendo el metabolismo social del capital¹⁶⁰ a pesar de los nuevos horizontes estratégicos planteados en el cambio de época, a lo que hay que añadir que seguirá una dependencia hacia fuera, agravando en muchas situaciones la necesidad de divisas para importar (esto es, la restricción externa).

El metabolismo social del capital está arraigado desde hace siglos y goza de una hegemonía global favorable, que hace todavía más difícil expulsarlo de raíz y eliminarlo de las innumerables expresiones en las que se presenta en cada momento de la vida de los ciudadanos. Ese rentismo importador se asemeja a un inquilino capitalista no productivo que no se va tan fácilmente de una casa,

¹⁶⁰El metabolismo social del capital es la forma orgánica que tiene el capital para imponer su reproducción, esto es, el capitalismo goza de mecanismos, engranajes, reglas y sistemas que permiten condicionar el funcionamiento económico siempre desde sus propios intereses.

aunque el nuevo dueño le diga que ya no puede seguir viviendo y actuando como antes. Es por ello que en esta nueva fase del cambio de época, habiendo superado con éxito la anterior fase de reapropiación de la renta en origen, no hay tiempo que perder para buscar las formas y mecanismos de reapropiarse de la nueva renta en destino, en manos de la ciudadanía, directa o indirectamente, ya sea esta destinada a consumo privado o consumo y compras públicas. Afrontar este rentismo importador del siglo XXI es tan importante como seguir pensando cómo salir del rentismo exportador (de materias primas) del siglo pasado.

La disputa productiva como centralidad económica

El punto anterior está íntimamente relacionado con este otro aspecto en la disputa actual para la continuidad del cambio de época en América Latina. Se afirmaba previamente que existen dos importantes aspectos que no pueden descuidarse a la hora de afrontar el nuevo tempo económico y político: uno, es considerar que los actuales procesos de cambio se encuentran al día de hoy en una fase diferente a aquella que disputaba la renta originada por el control de los recursos naturales; y dos, es tener en cuenta la nueva economía mundial bajo la hegemonía neoliberal para afrontar el gran reto productivo como centralidad estratégica para América Latina.

No se descubre absolutamente nada nuevo en afirmar que la gran tarea pendiente de este cambio de época es aún la revolución productiva, que permitiría resolver los desfases estructurales económicos previamente explicados, para así construir verdaderas barreras de irreversibilidad, aunque también para seguir adelante con la ampliación sostenible de las mejoras en las condiciones sociales-económicas para la mayoría social. Pero la disputa sobre este asunto no ha de convertirse en una discusión maniquea acerca de si es importante o no producir; esto ya es por todos conocido, sin embargo, lo que todavía resta por profundizar es la discusión acerca de cómo producir, con base en qué insumos, qué tipo de

bienes y servicios, bajo qué alianzas supranacionales, cómo planificar temporalmente dicha producción y con qué agentes económicos contar para este nuevo modelo productivo. Afrontar el reto productivo no es algo tan simple; no se trata de reproducir el viejo modelo ISI como si nada hubiera cambiado a nuestro alrededor.

Son muchos los aspectos claves a considerar en esta disputa productiva. Lo primero y principal es precisar mejor a qué nos referimos si hablamos del cambio de la matriz productiva. ¿Es simplemente un nuevo modelo que produzca nuevos productos? ¿O es también aquel modelo que, además de producir nuevos productos, los debe realizar con nuevos productores y con nuevas formas de producir? ¿El cambio de la matriz productiva ha de considerar exclusivamente lo nacional/internacional como si fueran esferas excluyentes, o debe tener en cuenta la nueva transición geoeconómica que ha modificado esa relación tan clásica? Son las preguntas a responder si de verdad se plantea con rigor la cuestión productiva en esta disputa en América Latina.

La transformación productiva en un sentido no neoliberal del término significa introducir nuevos bienes producidos nacionalmente en la economía, pero también implica cambiar la forma de producirlos e incluir la participación de nuevos agentes económicos en el modelo productivo alternativo. No solo hay que transformar los términos de intercambio hacia fuera, sino que estos han de estar acompañados también por la transformación de los términos de intercambio hacia adentro. No basta con producir bienes diferentes, hay que hacerlo con un nuevo sujeto productivo que deje de ser exclusivamente el (gran) actor capitalista y por fuera de las relaciones sociales del capitalismo. Si se cambia la matriz productiva para elaborar nuevos bienes que reduzcan la dependencia de las importaciones, pero se deja que sea un sector empresarial privado nacional, concentrado en muy pocas manos, el que asuma exclusivamente la tarea de erigirse como nuevo sujeto productivo, entonces no habrá cambio en el régimen de acumulación ni tampoco en la reproducción del metabolismo social del capitalismo. Una distribución primaria del ingreso más justa solo

se conseguirá si se logra reemplazar la matriz productiva, por otra en la que también participen nuevos productores, sea con más presencia del Estado y/o con la pequeña y mediana empresa.

Es así como, además de reducir la dependencia externa, también se puede reducir la dependencia interna de otros sectores económicos oligopólicos. En este caso, por ejemplo, en Venezuela esto tiene una traducción inmediata: el poder comunal ha de tener un rol protagónico como nuevo sujeto productivo socialista para la próxima década en disputa, para que así se pueda realizar un proceso pleno de democratización de la economía; como dice el propio Plan de la Patria 2013-2019, que se pueda:

... propiciar la democratización de los medios de producción tendientes al socialismo (...)
 construir el nuevo tejido productivo del país en nuevas relaciones sociales de producción, garantizando la transformación de los insumos primarios de producción nacional (...)
 garantizar la participación protagónica del pueblo organizado en la formación y transformación del modelo económico productivo desde las instancias de participación popular (...)
 acelerar la promoción de la participación del pueblo en los sistemas comunales de agregación (...)
 instaurar la corresponsabilidad en la planificación comunal, regional y territorial.

En Ecuador, este desafío se concreta en otra forma de abordar la economía popular y solidaria para que sea algo más que una economía marginal y limitada a ciertos sectores; es obligatorio insertar a esta economía como parte central del nuevo modelo productivo, aunque no sea una cuestión inmediata (se requiere tiempo y políticas de planificación para que esto se vaya produciendo cada vez más integralmente). Además, la ciudad del conocimiento, Yachay, creada recientemente como forma real para impulsar un verdadero cambio de la matriz productiva, basada en la economía del conocimiento, con potencialidad para ir acabando

con la neodependencia, constituye una oportunidad ideal para dar los pasos inteligentes en esta disputa, siempre y cuando siga siendo el Estado quien asuma la rectoría y coordinación, no permitiendo que sea un Silicon Valley al servicio del modelo tecnológico del capitalismo mundial.

En este sentido también se está apostando por un nuevo código social del conocimiento como una novedosa forma de gestionar del conocimiento como bien común, desafiando al paradigma dominante (implementado desde afuera) de regímenes de propiedad intelectual, que viene privatizando el conocimiento a favor de unos pocos y en detrimento de la mayoría social. Ecuador defiende que la gestión del conocimiento es más eficaz desde una concepción de lo común, de lo público.

En Bolivia el interés por el cambio de la matriz productiva ha tenido gran protagonismo en los últimos años y tiene una gran ventaja en relación con el resto de países: su estructura productiva está mucho más democratizada. La estructura económica boliviana es mucho más abigarrada, muy diversa, con gran fuerza de las lógicas comunitarias y familiares en el ámbito productivo, aunque después se hayan impuesto en la comercialización y distribución las reglas mercantiles capitalistas. Por ello, el desafío en cuanto al objetivo del cambio de la matriz productiva es usar estratégicamente esta fortaleza para que el Socialismo Comunitario del Vivir Bien también se apropie del nuevo patrón productivo.

Por otro lado, la disputa acerca del cambio de la matriz productiva también debe tener en cuenta que el siglo XXI impone, después de décadas de hegemonía neoliberal, condiciones externas diferentes y adversas para pensar en el clásico modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Desde que se conformó el nuevo orden dominante neoliberal, ningún país produce ya de manera autárquica, sino que existe una fragmentación geográfica de la producción mundial, que tiene como agentes rectores a las transnacionales. Por ello se puede hablar de la importancia en la era neoliberal de las Cadenas Globales de Valor (CGV) como concepto asociado a las transformaciones productivas

contemporáneas. Ahora la fábrica no está en un país, sino que existen infinitas fábricas desagregadas para una o más fases de la cadena de producción, repartidas por el mundo.

De manera similar a lo que sucede con la globalización neoliberal financiera, también el ámbito productivo es rehén de un expansionismo sin fronteras para que la acumulación capitalista pueda optimizar todo el territorio mundial. Como explicamos en capítulos anteriores, se pasa de una mercancía *made in USA* a una *made in the world*. Sin embargo, la vigente transición geoeconómica multipolar cuestiona ese orden neoliberal también en materia productiva; los nuevos polos económicos regionales, con sus alianzas, proporcionan nuevas facilidades para elegir formas de producción alternativas a la decidida por el capital transnacional hasta el momento. América Latina es un continente ideal para ello. ¿Por qué no transitar del *made in USA*, del *made in China*, o del vigente *made in the world*, hacia un patrón productivo *hecho en Latinoamérica*, pero con diferentes reglas del juego, con diferentes relaciones sociales y económicas de producción más congruentes con este cambio de época?

Considerando el nuevo escenario global, entonces se hace necesario repensar cómo cambiar la matriz productiva evitando reproducir viejos modelos fallidos del pasado, porque es imposible producir todo en cada país por muchas razones: una, porque no se tiene la capacidad instalada para ello; dos, porque no se posee el necesario saber hacer; tres, porque muchas veces acaba siendo aparente aquel cambio de la matriz productiva basado en un proceso de ensamblaje al interior del país (bajo componente nacional) que importa la mayoría del valor agregado; y cuatro, porque las economías pequeñas no cuentan con economías de escalas crecientes para niveles productivos reducidos, pero tampoco cuentan con mercados internos tan rentables para realizar este tipo de apuesta. Es por ello que al reflexionar sobre la planificación de una nueva matriz productiva, es preciso considerar que puede haber muchos escenarios en los que sea más conveniente no producir el bien final y, por el contrario, optar por producir un

determinado insumo intermedio que se exporte para insertarlo en algún eslabón productivo regional, saliendo así del patrón primario exportador y obteniendo divisas extras que compensen otras importaciones imprescindibles.

En definitiva, se trataría de pensar más en nueva formación latinoamericana del valor agregado en algunos sectores económicos para este cambio de época, que exige una organización supranacional productiva; esto es, una especie de modelo ISI a nivel regional. Es este debate y no otro el que puede dar respuestas estratégicas a la cuestión de la inflación, que sigue siendo empleada como mecanismo para desestabilizar algunas economías que no se adhieren, a rajatablas, a los mandatos de ciertos poderes hegemónicos internacionales. Si persiste una estructura productiva desequilibrada, en discordancia con una pujante demanda, entonces se estaría permitiendo que los agentes privados importadores (con altos índices de concentración empresarial) tengan oportunidad para hacer efectiva una guerra económica a través de sus armas de destrucción masiva: inflación, desabastecimiento, dólares ociosos, etc. Esta grieta ha de ser atendida con una verdadera revolución productiva que considere las problemáticas anteriormente discutidas, y así se podría buscar una manera de afrontar la subida de los precios, que es indudablemente una tarea por resolver, por ejemplo, en economías como la venezolana y la argentina.

La inflación es otro aspecto central en la disputa actual en América Latina. Para afrontar esta problemática no sirven credos neoliberales ni dogmas propios de la economía neoclásica. La solución no está ni en la reducción de los salarios de los trabajadores ni en la disminución de la inversión social, ni necesariamente en la expansión monetaria. Este último punto es una controversia actual para los *think tanks* económicos, que siguen explicando la inflación a partir de una simple ecuación matemática: a más expansión monetaria, más subida de los precios. Esto no siempre es así; por ejemplo, en el caso venezolano no se cumple la tesis que la misma

Cepal recientemente afirmó¹⁶¹: la inflación de los años 2013 y 2014 venía explicada por la política monetaria fuertemente expansiva. Este informe consideró que se produjo un aumento interanual medio de los agregados monetarios M1 y M2 del 66% y el 65%, respectivamente, muy superior a la inflación media interanual (que fue del 40%); y que durante los primeros cuatro meses de 2014 la política monetaria siguió siendo marcadamente expansiva y los agregados M1 y M2 presentaron en promedio aumentos interanuales del 76% y el 75%, en forma respectiva. La inflación media interanual en el mismo período fue del 59%.

Sin embargo, el documento de la Cepal¹⁶² no revisó los datos de unos años atrás en los que en la misma Venezuela, en el año 2005, el incremento monetario interanual fue por encima del 100% y la inflación anual fue del 14,4% (véase el trabajo de José Gregorio Piña Torres en *El mito de la maquinita*¹⁶³). Otro ejemplo que contradice esta teoría es aquel que se observa en el documento *La falsabilidad del monetarismo*, en el que citando a Zaiat se afirma que en Argentina:

... en el lapso 2007-2013, con momento de expansión y contracción monetaria, los índices de precios se mantuvieron en niveles altos estables, ya sea en el indicador oficial (10 por ciento) o en los privados (20-25 por ciento). O sea, las tensiones inflacionarias fueron constantes independientemente del mayor o menor crecimiento de la base monetaria (emisión de dinero).¹⁶⁴

Además, se añade que en:

161 Comisión Económica para América Latina (Cepal). *El panorama social de América Latina*. Santiago de Chile: 2014.

162 *Ibidem*.

163 José Gregorio Piña Torres. *El mito de la maquinita*, Centro de Estudios de Economía Política, Universidad Bolivariana de Venezuela, Caracas: 2015.

164 A. González. *Op. cit.*

... el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos no sobrepasó el 10,3% de 2008 a 2012 mientras que la emisión monetaria fue de casi el 160% en el mismo período; en el Reino Unido marcó 16,4% habiendo sido su emisión casi un 203%, para Brasil la variación de precios resultó de 27,6% y habiéndose expandido su emisión casi un 123% y China tuvo una variación de precios del 16,6% para un crecimiento de la emisión de poco más del 100%; en el período ya señalado.¹⁶⁵

En definitiva, la relación entre emisión monetaria e inflación no es una relación vinculante y exclusiva, sino que la conformación de los precios es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores de la economía real y de la *realpolitik*. Es preciso, por tanto, asumir que la inflación es una ecuación de economía política, cuyas causas residen en la estructura de la economía concentrada –en muy pocas manos–, que detenta el suficiente poder de mercado para fijar precios. La inflación es el resultado de una puja distributiva en la que pugnan el capital privado concentrado, que desea el máximo beneficio posible, y un pueblo con capacidad adquisitiva. Precisamente por esto se hace fundamental considerar la cuestión productiva, en el sentido más integral que sea posible, en esta disputa inflacionaria, que es un lugar común en el manual para poner en riesgo la irreversibilidad de este cambio de época.

Redistribuir no es lo mismo que distribuir

La ciencia económica dominante ha asumido como propio el tópico de la economía de la desigualdad desde hace varias décadas. Desde los años setenta, a partir de los artículos seminales de Sen y Atkinson¹⁶⁶, han proliferado los trabajos que profundizan en el análisis de la desigualdad económica, pero la mayoría de ellos

165 *Ibidem*.

166 Anthony Atkinson, *Poverty in Britain and the Reform of Social Security*, University Press, Cambridge: 1970a (Amartya Sen. *On Economic Inequality*, Clarendon Press, Oxford: 1973).

han dedicado especial atención a las cuestiones metodológicas, dando la espalda a otros asuntos conceptuales. Poco se ha investigado sobre otros aspectos que son determinantes para entender de qué tipo de desigualdad estamos hablando. En este cambio de época en América Latina se ha puesto especial énfasis en la lucha contra la desigualdad, en acabar con las injusticias sociales. Este ha sido, sin duda, un eje transversal en el proceso de cambio que viene ocurriendo en Venezuela, Bolivia, Ecuador, y también en Argentina, Brasil y Uruguay. Como ya se ha mostrado en el capítulo anterior, buena parte de la época ganada se sustenta en esta mejora significativa en términos de justicia social, en la reducción de la desigualdad, de la pobreza, de las necesidades básicas insatisfechas. Los logros están ahí y son incuestionables por cualquier organismo internacional, llámese Cepal, BM, FMI, OIT o PNUD.

Sin embargo, en este punto, en este momento del ciclo ampliado de transformaciones, y especialmente frente a esta disputa, es ineludible dar otro paso adelante para seguir profundizando los procesos de revolución en materia de justicia social. El verdadero desafío estratégico, después de haber mejorado sustancialmente en materia de políticas redistributivas que han contribuido a saldar buena parte de la deuda social, siempre respetando los criterios de justicia, es centrarse también en las posibilidades reales de comenzar a distribuir la matriz primaria del ingreso. Este es el gran desafío estratégico para la próxima década en disputa: ver las formas que existen para iniciar un proceso de democratización de la economía desde los ingresos primarios, es decir, desde la propia generación de la riqueza para ir modificando la acumulación originaria que se viene gestando en este cambio de época. Se trata de repensar mejor la equidad desde el propio proceso de acumulación, sin que ello signifique que se abandonen las políticas redistributivas para seguir persiguiendo la justicia social, mientras sigue vigente un modelo económico que genera riqueza concentrada. El estudio de la democratización de los medios de producción es el primer prerrequisito para abordar más estructuralmente los objetivos de justicia distributiva; por ello, en relación con la

importancia de las políticas para distribuir los medios de producción, cabe preguntarse en este punto sobre el sector financiero, la composición estructural de los sectores tecnológicos, las reformas agrarias como agenda pendiente, una nueva política del agua, los sistemas de educación superior, etc.

Detrás de esta disputa también está la vieja pugna por el reparto de la retribución entre capital y trabajo, a lo que hay que añadir la consideración de la generación de rentas mixtas, que son cada vez más importantes en los nuevos tiempos que corren. Este eje ha de ser central en la nueva disputa en América Latina: las políticas distributivas, entre estos factores, son tan o más importantes que cualquier política redistributiva a posteriori que se deba realizar. Mantener un desbalance originario a favor de las rentas del capital, sea capital industrial-productivo o el financiero, en detrimento para la retribución salarial, es tener un punto de partida complejo que obliga a mucho esfuerzo en las políticas redistributivas. En América Latina, Caputo¹⁶⁷ asegura que la participación de los salarios en el PIB pasó del 42,3% en 1970 al 34,2% en 2004. Esto fue lo que ocasionó el neoliberalismo. Si solo nos centráramos en la redistribución de la masa salarial, estaríamos dejando por fuera un porcentaje muy grande del PIB que se quedaría a favor de un modelo económico concentrador de riqueza. Así que es oportuno acudir al coeficiente de Gini para observar cómo avanza el impacto redistributivo de las políticas sociales, propias de este cambio de época en América Latina, pero esto debe venir acompañado de una mirada más amplia, capaz de observar qué sucede en las rentas del capital, las rentas mixtas, etc.

La disputa gira también alrededor de cómo ha crecido en los últimos años la retribución del capital, especialmente del capital no productivo. El proceso de financiarización de la economía como piedra angular del nuevo orden económico neoliberal ha de estar

167 Orlando Caputo. (2010). "Crisis de la economía mundial: aumento de las ganancias y disminución de salarios", en: Marco A. Gandásegui, hijo, y Dídimo Castillo Fernández, (coords.), *Estados Unidos: la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación*, Siglo XXI, México: 2012.

presente en la disputa de estos próximos años en América Latina. Es juez y parte en la nueva economía que se pretende construir en el cambio de época. Atender a esta dimensión es elemental para buscar los mecanismos y herramientas de política económica para seguir avanzando en materia de justicia social. Puede existir el mejor de los sistemas redistributivos, pero si está condicionado por un patrón de acumulación con alto componente financiero que distribuye injustamente la riqueza generada, entonces tenemos doble falla estratégica: por un lado, la redistribución se hace más ineficaz relativamente a medida que más desigual sea la distribución de partida y, por otro lado, la redistribución se hace cada vez más obligada y, por tanto, se constituye como centralidad de la política económica, renunciando relativamente a otros objetivos. Dicho de otra forma: si no se altera la distribución de partida, se va creando un círculo vicioso de tal forma que la injusta distribución primaria hace que sea más necesaria la redistribución, y entonces esto condena a la política económica a estar concentrada primordialmente en esta tarea, desatendiendo a otros retos y desafíos estratégicos.

En definitiva, esta otra importante disputa se deriva de que la redistribución es un proceso y no un fin en sí mismo. El fin estratégico de estos procesos de cambio en América Latina es precisamente ir construyendo un modelo económico que sea cada vez más justo desde su raíz, desde las propias estructuras primarias de reparto sin que ello implique restar eficacia ni capacidad de generar riquezas (no entendida esta desde la teoría económica neoclásica). En esta tarea juega un papel fundamental la política tributaria que, además de tener el objetivo de redistribuir, ha de reformularse pensando en función de los nuevos retos distributivos. De esta forma, la eficacia de la política tributaria deberá medirse según satisfaga los siguientes objetivos: 1) recaudar fondos públicos para seguir financiando las políticas sociales y el resto de políticas económicas (se podría hablar de seguir ganando soberanía tributaria frente a las restricciones externas), 2) seguir respetando los principios de justicia social (progresividad e impacto redistributivo

positivo), y 3) contribuir activamente en la consolidación del nuevo patrón económico, con una nueva matriz productiva, creador de empleo, democratizar los poderes económicos, y coadyuvar a que se vaya conformando una estructura primaria del ingreso más justa. Este último aspecto es determinante para disputar el horizonte estratégico de la economía en el cambio de época; se trata de sintonizar la nueva política tributaria con esta otra labor superadora del viejo enfoque tributarista, asentado en la idea de que los impuestos solo sirven para recaudar.

Recientemente, el trabajo de Piketty¹⁶⁸ ha conseguido revitalizar el debate sobre la importancia que tienen las condiciones iniciales de reparto a la hora de querer redistribuir; es momento oportuno de aprovechar esta tesis para que enriquezca la discusión en torno a la disputa vigente en América Latina. El patrimonio acumulado, conservado de generación en generación, es un factor condicionante de lo que se ha venido a llamar el mito de la igualdad de oportunidades. Este lema es válido siempre y cuando no haya una desigualdad acumulada, que sea la variable explicativa de lo que se pueda lograr a posteriori. Piketty, sin adentrarse en las causas estructurales de ese reparto desigual, demuestra que el capitalismo no ha logrado realmente una verdadera igualdad de oportunidades, porque esta es incompatible con el contraste que se observa entre el lento crecimiento de los ingresos de la mayoría de la población y el espectacular ascenso de las rentas de las clases altas.

Es más, añade en su libro que las sociedades occidentales anteriores a la Primera Guerra Mundial efectivamente estaban dominadas por una oligarquía cuya riqueza era heredada, y en el presente se vuelve a repetir esa misma tendencia. De hecho, se atreve a hablar de una suerte de capitalismo esencialmente patrimonial: donde el crecimiento, la competencia y el progreso técnico no provocan espontáneamente la nivelación económica; donde el reparto de la riqueza está basado, sobre todo, en relaciones políticas

168 Thomas Piketty. *Le capital au siècle XXI*, Éditions du Seuil, París: 2013.

de fuerza; y donde la herencia, soporte esencial del privilegio, no está lejos de alcanzar en nuestro tiempo la importancia que tuvo hace dos siglos. Replanteando esta discusión para con este otro eje en disputa en América Latina, se hace imprescindible estudiar cómo se transmiten las estructuras distributivas de generación a generación, cómo se puede romper esta inercia, qué políticas económicas pueden afectar estos cimientos repartidores de riqueza.

Conciliar los cambios nacionales con las transformaciones supranacionales

Uno de los mayores logros de esta década ganada en América Latina es haber aprendido que no existe cambio interno sostenible si no se producen cambios afuera. En este mundo tan interrelacionado no cabe la separación clásica entre cada país y el resto del mundo, ni pretender abordar las relaciones económicas internacionales como si fuesen un plano separado. Desde la mundialización de la economía, del siglo xvi en adelante, las relaciones económicas entre países son plenamente interdependientes. Desde entonces, cada Estado latinoamericano ha sido una pieza insertada en el tablero económico mundial. El neoliberalismo, si cabe, afianzó y consolidó aún más esta relación global bajo un patrón de acumulación capitalista reformulado (financiarización, cadenas globales de valor en lo productivo, mayor control transnacional de la actividad económica, etc.).

El cambio de época en América Latina se inicia sobre la base de no descuidar este fenómeno; haber ignorado esta caracterización global hubiese supuesto un intento fallido de transformación, fronteras adentro de cada país, porque esa transformación ha de venir acompañada necesariamente de una disputa más allá de las fronteras nacionales. Solo desde una acertada estrategia supranacional se pueden lograr en forma sostenible los avances democráticos propios de cada revolución nacional. Si no se cuenta con alianzas internacionales, es imposible que un proceso de transformación nacional tenga éxito duradero en el tiempo. Son demasiados los

lazos que unen lo que sucede adentro con lo que pasa fronteras afuera para que estos sean descuidados o minusvalorados.

Esta nueva concepción, influenciada por el pensamiento económico y geopolítico de Hugo Chávez, es una suerte de cosmovisión bolivariana actualizada que considera que las dimensiones nacional y supranacional son necesariamente complementarias. La relación interior-exterior, nacional-supranacional, no se basa en una dicotomía excluyente, sino todo lo contrario; esta tesis fue determinante para disputar inicialmente el sentido común de época frente a la hegemonía del neoliberalismo. No hay que olvidar que con la llegada del neoliberalismo el proceso mundializador del capitalismo aceleró su ritmo de construcción hegemónica en múltiples sentidos –económico, social, cultural, político–; el capitalismo neoliberal construyó sólidamente, y en pocos años, una suerte de telaraña económica –en ámbitos como el comercial, productivo, financiero, tecnológico e institucional– en beneficio de las operaciones del capital transnacional a nivel mundial. El plan neoliberal podía así parecer invencible: la disputa se daba entre el capital transnacional con todo a su favor, frente a unos Estados-nación presos y dependientes de ese mundo capitalista.

Buena parte del éxito de muchos procesos de cambio se debe principalmente a considerar que frente a la alianza transnacional del capital solo se podría resistir en primera instancia (y acabar venciendo en una segunda fase) gracias a otra alianza grannacional. Esta dimensión supranacional constituye realmente una nueva forma desde la cual afrontar la guerra de posiciones existente a nivel mundial en el siglo xxi. Se trata de buscar una disputa más equilibrada, bloque a bloque, superando la anterior disputa desigual propuesta por el neoliberalismo: un país contra un bloque hegemónico, de la que siempre sale victorioso el capital. Frente a ello, sin alianza de los pueblos, sin alianza de Estados-nación soberanos, es verdaderamente imposible combatir con pragmatismo el desmesurado poder del capital transnacional. Es por ello que este cambio de época se ha venido sustentando sobre una nueva articulación supranacional como condición sine qua non para proteger

cualquier proceso revolucionario nacional-popular en América Latina.

Se ha venido forjando una suerte de Consenso Bolivariano con la intención de sustituir definitivamente al Consenso de Washington. Esta nueva estrategia ha sido eficaz, como se ha visto en el capítulo anterior, avanzando a pasos agigantados en la construcción tanto de un nuevo sentido común de época en lo regional/latinoamericano/bolivariano, como en los nuevos espacios de integración (ALBA, Unasur, Celac, un nuevo Mercosur). Esta nueva hoja de ruta ha permitido también mejorar los patrones de intercambio desigual que sufría la región con el poder capitalista mundial; se han reducido las cadenas de dependencia, desplazando el protagonismo de instituciones del Norte mediante la creación de un nuevo marco institucional-político desde el propio Sur latinoamericano, creándose múltiples espacios de relacionamiento emancipados del yugo del Norte; y se han diversificado las relaciones con otro Sur sin tener que pasar por Washington, París, Fráncfort o Londres. De ahí que el Consenso Bolivariano haya sido y siga siendo determinante para el cambio de época que vive América Latina, porque ha logrado relegar en gran medida al Consenso de Washington como núcleo común de las políticas económicas en los países de la región.

Sin embargo, una vez alcanzado este alto grado de consolidación regional, también resulta preciso considerar los nuevos desafíos que surgen a partir de las contradicciones naturales, derivadas de la tensión dialéctica entre lo nacional y lo transnacional. Esta es una realidad que no puede ignorarse: cada proceso tiene sus propios objetivos estratégicos y urgencias coyunturales, y no siempre estos son compatibles conciliadoramente con una política regional común. De ahí que cada día sea más importante prestar especial atención a este proceso de integración en marcha, que ha de afrontar nuevos retos precisamente al calor de posibles pugnas que se puedan dar entre países que, a pesar de haber iniciado un proceso de cambio (para poner punto y final al neoliberalismo), pueden tener posiciones antagónicas en determinados aspectos; o simplemente puede que existan diferentes puntos en disenso por

un conflicto fronterizo (véase lo sucedido por el caso de la papelera Botnia, en conflicto Uruguay-Argentina, o el conflicto por salida al mar entre Bolivia-Chile), o por el fragor de una batalla electoral (que condiciona tácticamente ciertos pronunciamientos a favor de uno u otro).

A veces también ocurre que hay un exceso de mirada nacionalista, comprensible en tanto que son procesos que arrancan desde esta tesis, pero que pueden conllevar a plantearse la misma iniciativa en cada país, siendo más que contraproducente esta opción; un ejemplo habitual es el anuncio de creación de empresa nacional de medicamentos genéricos en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, cuando esto se trata de un esfuerzo complejo que requiere mucha inversión y lo aconsejable sería usar alianzas supranacionales para acometer este objetivo. Otras veces los conflictos surgen de haber tomado caminos diferentes, lo cual también es legítimo en cada proceso. Esto se ve, por ejemplo, cuando se analiza cómo cada país ha decidido resolver los conflictos con la inversión extranjera directa en caso de que los haya: algunos países como Bolivia no permiten acudir a ninguna instancia fuera de sus fronteras, aunque sea regional. En este caso, la acertada apuesta por la creación de un árbitro regional, independiente del Ciadi, no es fácil desde la perspectiva boliviana, aunque sí es de gran ayuda para el resto de países porque es un salto en el largo camino de la deseada y definitiva independencia. ¿Cómo diseñar esa nueva instancia regional en armonía con todos los intereses nacionales? He aquí un reto a considerar en el futuro inmediato.

A esto se puede sumar el rol que juegan actualmente las translatinas que operan en todo el continente latinoamericano, aunque tengan su casa matriz en un determinado país; este nuevo fenómeno también ha ocasionado otros conflictos inesperados derivados de la propia dinámica de operaciones y actividades económicas. Pero no son solamente las translatinas; también las transnacionales originan dificultades porque pueden ser aliadas de algún país, pero enemigas para otro. Es el caso de Chevron, enfrentada a Ecuador (por no respetar una sentencia de la justicia ecuatoriana), pero

que opera en Argentina y en Venezuela como si nada. Así, podríamos seguir citando numerosos casos que demuestran la existente confrontación de índole supranacional entre países amigos que comparten el camino del cambio de no neoliberal; esto es algo natural si consideramos que se trata de procesos que izaron la bandera de lo nacional-popular como forma de decir 'basta ya' frente a tanta pérdida de soberanía de la época neoliberal. Es, por tanto, una cuestión a encarar en estos próximos años, una dimensión que necesariamente está en disputa y que, sin duda, constituye en buena medida lo que ha de ser el nuevo centro de gravitación de los procesos de integración regional. Después de todo lo avanzado, en este momento es turno de acelerarlos, de dotarlos de más mecanismos reales para superar esta contradicción secundaria en el propio seno del bloque de los países que han iniciado este proceso de cambio en el continente.

Ya se ha comentado antes que uno de los temas pendientes es la discusión productiva supranacional, en lo regional, como cuota esencial de la carta de navegación para afrontar la disputa en estos próximos años. A ello hay que sumarle otros planos económicos pendientes, en aras de disfrutar de un vigoroso cordón de seguridad en el ámbito regional que sea eficaz en caso de cualquier *shock* externo, o frente a cualquier restricción externa (y a veces también interna). Un mayor intercambio económico, no exclusivamente comercial, con complementariedad en la región es la única manera de emanciparse –al menos parcialmente– de las relaciones desiguales con el centro económico mundial. No puede haber integración plena y virtuosa, si no existe integración comercial, productiva, financiera, social, en infraestructura, tecnológica y energética con base en la complementariedad. Esto constituye en la actualidad uno de los principales desafíos para la siguiente década: un nuevo impulso en la rearticulación supranacional en el seno del mismo grupo de países que son actores en el cambio de época en América Latina, que logre sintonizar armoniosamente con las políticas de cada uno de los procesos nacionales, de tal forma que se consideren las asimetrías existentes y los vaivenes de la vida política en cada caso en particular.

En esta tarea, desde su inicio, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) tiene un papel fundamental, tal como resaltábamos anteriormente. El ALBA ha recorrido exitosamente muchas etapas, mientras en la región se producía un reordenamiento político-social-económico en un escenario mundial de transición geoeconómica. Muchas críticas derivan de los aún pingües resultados cuantitativos en intercambio comercial. Aspecto totalmente cierto que, sin embargo, ha de ser relativizado en virtud de otras cuestiones que sí han supuesto un verdadero impulso de cambio en la región, con efectos directos e indirectos en muchos países y en otras instancias supranacionales. Por ejemplo, a través del Sucre como moneda de compensación regional –que además incorpora criterios de intercambio complementario–, el ALBA adelantó un debate que ahora es de máxima actualidad: la necesidad de desamericanizar las relaciones económicas a nivel mundial.

Además, en el máximo apogeo del enfoque reduccionista de lo comercial en el debate integracional, el ALBA planteó una integración multinivel que no fuera exclusivamente en ese plano del comercio, sino que añadiera la cuestión financiera, social, cultural, energética. En estos últimos años el ALBA también facilitó una respuesta precisa frente al emergente poder de las transnacionales, y muy especialmente las translatinas, a partir de una estrategia deliberada de crear acuerdos entre grandes empresas estatales, en forma de grannacionales. Estas nuevas alianzas públicas ya han comenzado a labrar un camino para abordar sectores estratégicos (alimentación, infraestructura, ciencia y tecnología, energía, finanzas), aunque todavía resta mucho por hacer. Lo productivo había sido probablemente el eslabón más desatendido en este proyecto integrador, hasta que hace pocos meses se ha comenzado a poner especial énfasis en esta tarea.

No obstante, el ALBA tiene para los próximos años nuevos retos en función de la nueva disputa vigente en América Latina. La configuración geopolítica de los albores del ALBA no es la misma que la actual; es preciso repensar cómo el ALBA se relaciona hacia

afuera con los actuales bloques que se vienen conformando en la región (con Centroamérica, con Mercosur, qué papel ha de jugar en Unasur o en la Celac). En este sentido, es necesario delinear una hoja de ruta clara que permita establecer tiempos y prioridades, a qué dedicar sus esfuerzos y a qué no, qué compartir con otros espacios y qué no, a qué sectores económicos atender y a cuáles no. Son cuestiones para responder en los próximos años, para que el ALBA no sea visto como un hermoso proyecto del pasado sin capacidad de participar en la disputa por el futuro.

Pero esta disputa, la que tiene lugar adentro del propio bloque, no es la única: existe otra disputa afuera, en la misma región en la que participan otros países que todavía insisten con la idea de más neoliberalismo. No sería justo afirmar que nada ha cambiado en estos países desde que se iniciara esta suerte de Consenso Bolivariano que, si lo hacemos extensible a más países, bien se podría denominar Consenso Latinoamericano del siglo *xxi*. La Celac es realmente el resultado ampliado de ese consenso deseado por Chávez desde inicios de este siglo. Es un consenso donde caben los acuerdos de máximos pero también de mínimos; al eje de países postneoliberales que gravitan en torno al ALBA se sumó un Mercosur que nada tiene que ver con aquel de la era neoliberal. Y si bien la Alianza del Pacífico nada tiene que ver con el ALBA o Mercosur, todo suma para constituir un continente emancipado con arquitectura institucional propia, con mecanismos internos para resolver problemas sin tener que consultar afuera.

Es la Celac (y también la Unasur) una nueva forma de concebir la articulación virtuosa de esos divergentes espacios de integración, con el único objetivo de acordar la configuración de una América Latina como nuevo bloque geopolítico, reinsertado soberanamente en la actual transición hacia un mundo multipolar. Es la Celac una institución con gran potencial para que se pueda discutir en adelante acerca de la necesidad de un centro de arbitraje regional que no dependa del Norte (como ya se ha iniciado en Unasur); para que se vaya pensando en una agencia de calificación de riesgo propia, que no acepte más el criterio de Moody's, Standard & Poor y

Fitch; para que se establezca América Latina como el primer territorio libre de pobreza, pero también liberado de fondos buitres; para que se puedan usar los fondos propios hacia dentro sin necesidad de buscar intermediarios afuera; para que, además, se pueda negociar económica y políticamente con otros bloques de igual a igual.

Estos desafíos constituyen esa otra disputa, aquella que se produce no en el grupo de países que han optado por una vía más similar, sino que es otra disputa igual de primordial a la anterior porque también existe una pugna en el continente entre propuestas antagónicas. Ahí está ese otro campo de confrontación que por su propia naturaleza política y económica jamás está en calma; de la forma en que se resuelva esta tensión depende también la irreversibilidad de este cambio de época en América Latina. El objetivo de afuera es una América Latina partida en dos; este es el deseo de Estados Unidos y de otras potencias económicas. Una América Latina desgajada en, al menos, dos grandes partes que deje de ser el bloque monolítico que ha venido conformándose en el nuevo mundo policéntrico.

Esta es la ambición también de buena parte de la oligarquía financiera, del poder hegemónico mediático, del capital transnacional y de los magnos caciques nacionales. Una región dividida en dos mitades, que disipe cualquier posibilidad de seguir mostrándole al planeta que se puede construir un nuevo mundo postneoliberal, en paz, sin guerras, con redistribución de los excedentes económicos, con mejoras sociales inclusivas. Esta América Latina bipolar –fracturada y enfrentada– es el ideal, en definitiva, de esa minoría para que nada cambie a favor de las mayorías. El objetivo desde afuera es, sin duda, poner en práctica la frase de impreciso origen, pero muchas veces atribuida al dictador y emperador Julio César: “Divide y vencerás”.

En este aspecto juega un papel concluyente la Alianza del Pacífico (AP), que sigue pretendiendo conformar una versión mini del intento fallido del ALCA en América Latina. Esta reedición imperialista tomó buena nota del fracaso del pasado y desde su formación apuesta a otra forma de presentarse en esta pugna: por un lado,

la AP pretende mostrarse con una imagen más latinoamericanista, aparentemente independizada –al menos en la escenografía– de los países del Norte, pues Estados Unidos ya no es el país de antes, tan favorablemente valorado por las mayorías populares en estos países; por otro lado, la AP muestra en apariencia una predisposición diferente a entenderse con sus vecinos latinoamericanos debido a que existe una elevada dependencia económica con estos. El Pacífico sabe que no debe romper abruptamente con esta región tan vigorosa económica y socialmente en el nuevo mundo multipolar en transición.

Se abre entonces una nueva fase en la que la región cuenta con esta Alianza conformada por cuatro países, con economías grandes, con otras formas de hacer las cosas, aunque tenga los viejos objetivos marcados por el patrón de acumulación neoliberal; pero cabe preguntarse si esta AP es realmente tan inquebrantable y saludable como se empecinan en presentarla los medios de comunicación dominantes en el mundo. No todo lo que reluce es oro. Una gran primera debilidad estructural de esta alianza es que se trata de un bloque con un escaso comercio intrarregional que no alcanza ni el 4% de sus exportaciones.

Otro punto flaco es que la AP se trata de un conjunto de países que han ido estrechando su base económica como consecuencia de sus Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea; son economías sin verdaderas posibilidades de complementariedad productiva porque han ido dedicándose a una mega especialización exportadora (de materias primas) marcada subordinadamente desde los países centrales. Todas ellas importan aquello que no producen las otras; sus proveedores son siempre las grandes transnacionales del Norte. La AP tiene, además, un serio opositor interno derivado del enorme descontento social de su pueblo después de haber sufrido el capitalismo por desposesión y las políticas privatizadoras neoliberales. Las protestas de campesinos, estudiantes, profesores, médicos y funcionarios no deben ser infravaloradas en los próximos tiempos, si la AP sigue por esta vía de servidumbre al Norte.

Como se puede observar, la tensión está en todos los frentes, adentro del bloque histórico (que ha iniciado este cambio de época), en la pugna contra el otro bloque neoliberal (AP), también en ese otro marco de convivencia regional que abarca a todos los países con independencia de los colores ideológicos (Celac y Unasur). Pero a ello cabe añadir otro actor determinante en esta disputa: Mercosur. Este espacio no puede ser tratado como uno más, por su tamaño y por los cambios que ha tenido en los últimos años (la llegada de Venezuela, la próxima entrada de Bolivia), y muy especialmente porque en su interior cuenta con un país que juega adentro, pero que también juega fuera: Brasil (relacionado íntimamente con el siguiente subapartado, dedicado en parte a las contradicciones que representa una supuesta inserción bricsiana en el mundo por encima de una inserción bolivariana).

Mercosur es un lugar clave en esta disputa regional, en esta tensión dialéctica entre lo nacional y lo supranacional, porque abre muchas posibilidades, desafíos y también dificultades. En primer lugar, este espacio geoeconómico está conformado por tres gigantes y dos países pequeños (más otro que viene en camino, Bolivia), lo que supone un marco complicado para buscar equilibrios frente a tantas asimetrías, y más teniendo en cuenta que la alianza Argentina-Brasil es más fuerte que el resto. El objetivo es, además, evitar una división del trabajo/capital a lo europeo donde se concentre el valor añadido en algunas economías menoscabando al resto; se trataría de sortear una integración basada en una doble velocidad en la que se constituyen unos países periféricos dependientes del centro (o sea, Brasil).

En segundo lugar, otro desafío es construir una integración superadora de la dimensión exclusivamente comercial, ocupándose así de relaciones económicas con contenido social y humano, ecológico, productivo, financiero, monetario y tributario. Sería interesante explorar las posibilidades de comenzar a realizar transacciones comerciales en monedas sin pasar por el dólar; ver qué posibilidades existen de conformar fondos comunes de reservas que impidan ataques especulativos venidos de afuera; buscar cómo plantear cuestiones de sistemas de información compartida en lo

tributario y en lo bancario; qué tipo de relaciones se debe tener con el resto de bloques, fuera de América Latina y también adentro. Son muchos los temas a seguir trabajando en el futuro inmediato para que Mercosur siga alejándose de aquello que fue en la era neoliberal, para que en adelante sea cada vez más un pivote sobre el cual moverse geoeconómica y geopolíticamente para que el cambio de época siga avanzando.

La disputa geoeconómica mundial: inserción *bricsiana* frente a la subordinación atlántica

La disputa no solo tiene lugar dentro de la región, sino que está en absoluta relación con lo que ocurre en el mundo en plena transición geopolítica. Lo que pasa al interior de América Latina no puede ser observado sin atender a los cambios constantes que suceden afuera, en un mapamundi cada vez más interconectado como un todo, pero a la par, cada vez más fragmentado en muchos polos que han roto definitivamente la hegemonía unipolar de Estados Unidos (ayudado de sus satélites: Unión Europea y Japón). Este siglo *xxi* poco tiene que ver con aquel siglo que bien describiera Arrighi en su libro *El largo siglo xx*.¹⁶⁹

En los últimos años ha crecido significativamente la velocidad del cambio del orden geopolítico mundial. Después de 2008 el mundo económico financiarizado estalló por los aires; la burbuja se pinchó. La economía capitalista financiera había gozado de plena autonomía, con visado propio, para proceder como quisiera y sin dar explicaciones ni siquiera a la economía capitalista real. Pero la burbuja no se pinchó por arte de magia ni por cuestión meteorológica; el estallido se debía a las propias reglas orgánicas del mismo sistema capitalista que había favorecido la tremenda expansión financiera¹⁷⁰ en detrimento de la economía real. A las

169 G. Arrighi. *Op. cit.*

170 Según las estimaciones del propio Banco Mundial, el sector financiero global alcanzó un tamaño de 255,9 billones de dólares en 2011, esto es 3,7 veces el PIB mundial; si añadimos a esto el valor de los derivados

consecuencias de este modelo muchos les siguen llamando crisis, porque así evitan explicar las causas estructurales del sistema capitalista en modalidad neoliberal.

Es importante recalcar que en estas décadas de neoliberalismo los países centrales, con Estados Unidos a la cabeza y seguidos por la Unión Europea y Japón, abogaron por un modelo económico desindustrializador, prefirieron que la producción se fragmentara mundialmente bajo el control –del proceso, del valor agregado y de la tasa de ganancia– del capital transnacional. El consumo interno se venía sosteniendo en un alto porcentaje con un sistema financiero escasamente anclado en la economía real. El caso de Estados Unidos es el más llamativo: un alto crecimiento del consumo con endeudamiento externo –alto déficit comercial y alto déficit presupuestario–, sin ahorro interno. Por todo ello, afirmar que la crisis económica mundial es una crisis financiera por culpa de las hipotecas *subprime* o hipotecas basura, es decir demasiado poco sobre lo que pasó; por ello, considerar que la quiebra de Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac y Lehman Brothers son las razones de la crisis, es como decir que la casa se sostiene por el tejado sin considerar cuáles son los cimientos.

A partir de ese momento, realmente se han producido notables cambios en el tablero mundial, en clave geoeconómica que necesariamente debe tenerse en cuenta para abordar la actual disputa en América Latina. Si lo de afuera cambia, también cambian los patrones de intercambio del conjunto de países constituyentes de este cambio de época en América Latina. Ni Estados Unidos (EE.UU.) ni la Unión Europea (UE) son los mismos después de este punto de inflexión, ni sus salidas adelante toman los mismos caminos. Y además, también hay que considerar cuál es la reacción de la vieja hegemonía EE.UU.-UE frente a la emergencia (ya emergida) de otros bloques hegemónicos. Nada será como antes y esto sí

financieros y las operaciones extrabursátiles –que poseen para el mismo año valores de 407 y 605 billones de dólares, respectivamente–, la relación entre economía financiera y economía real es de 18,1 veces a favor de la primera.

tiene repercusión para América Latina y, muy especialmente, para aquellos países que han optado por un papel proactivo en la disputa global geopolítica; porque al mismo tiempo que se venía desvaneciendo la hegemonía de la alianza atlántica (EE.UU.-EU), se han venido consolidando las economías de otros países con un rol clave en el escenario internacional.

Estados Unidos no quiere perder esta disputa y, por ello, busca cómo volver a ser quien era, aunque ahora tenga enfrente a una China que dejó de ser un gigante asiático para convertirse en el gran gigante mundial. Todos los pronósticos afirman que China en breve será una economía más importante que la de EE.UU. La recuperación de la economía de los Estados Unidos sigue siendo muy moderada (crecimiento del 2,1% en 2014; levemente inferior al 2,2% de 2013), basada en buena medida por un proceso de desintoxicación financiera más que por el impulso de la demanda interna. La política de compra de bonos por parte de la Reserva Federal ha puesto cierto orden en el caótico tablero financiero interno, aunque sea a costa de no respetar su autoimposición monetaria (violaron la relajación cuantitativa y emitieron dólares, garantizando que la banca privada norteamericana pudiera sanearse). Sin embargo, esto no se traduce en recuperación de la economía real; no se observan mejoras en la industrialización ni tampoco una reactivación de la demanda interna; el déficit comercial y el déficit fiscal siguen siendo problemas estructurales de la economía estadounidense.

Esta restricción interna es un importante obstáculo para afrontar la disputa en clave geoeconómica que ha provocado que Estados Unidos busque recuperar su protagonismo mediante diferentes ofensivas con repercusiones también para América Latina. En primer lugar, optó por una devaluación de su moneda entrando en una guerra de posiciones trasladada al ámbito comercial, para recuperar cierta competitividad exportadora frente a otras economías que están ocupando posiciones privilegiadas. Esto ha provocado justamente movimientos en los tipos de cambio en el continente para reaccionar a este juego de ajedrez por parte de EE.UU. Véase a Colombia y Brasil cómo han respondido con

devaluaciones. Es cada día más oportuna una discusión sobre los pros y contras de cualquier sistema cambiario (tanto en relación con el tipo cambiario como con el propio sistema, sea fijo, variable o de flotación administrada) en este escenario tan diferente al de hace una década. No es un tema menor ni sencillo de abordar porque el sistema de tipo de cambios afecta de múltiples formas en la economía.

En tal sentido, el caso venezolano merece comentario especial porque es una economía fuertemente dependiente del dólar por sus exportaciones petroleras y por su dinámica importadora y, además, está sometida a una gran presión nacional/internacional que pugna por acabar con el actual proceso revolucionario. Es por ello que Chávez, después de una notable fuga de dólares, apostó por un control de cambios fijo que limitara cualquier salida desestabilizadora de dólares; pero después de años y luego de una presión elevadísima de agentes económicos que han logrado crear un mercado de dólares con tipo de cambio ilegal muy elevado, el Gobierno Bolivariano se ha visto obligado a plantear un modelo de justicia cambiaria muy específico: tipo de cambio 6,3 (bolívares por dólar) que se mantiene fijo para los bienes y servicios que suponen necesidades básicas del país, un tipo de cambio de subasta controlada (que cotiza alrededor de 12 bolívares) para aquellos otros bienes también considerados de prioridad y, por último, un tipo de cambio libre según oferta y demanda. Este nuevo ordenamiento cambiario pretende contrarrestar el mercado ilegal, al mismo tiempo que se sigue evitando una devaluación que tenga repercusiones negativas en el acceso de bienes básicos para la mayoría social. En el caso argentino también existe una fuerte presión devaluatoria, pero esta está orquestada a favor de los exportadores privados que serían los más beneficiados. En todos los casos, las medidas que se adopten serán codependientes de lo que hagan otros países vecinos: si, por ejemplo, Brasil continúa con su tendencia devaluatoria, esto ha de ser considerado por parte de Argentina; si Colombia también devalúa, Ecuador también debe responder con otras medidas de índole arancelarias para evitar perder competitividad de sus

productos. En definitiva, esta es una guerra abierta de divisas que solo ha comenzado y que debe ser tenida en cuenta en la nueva disputa que afronta América Latina en los próximos años.

En segundo lugar, Estados Unidos prosigue en el intento de repatriar capitales que se habían reubicado en otras economías en estos años pasados; para ello, la Reserva Federal ha anunciado constantemente la subida de la tasa de interés, medida que hasta el momento no ha llegado a materializarse. A este anuncio le ha acompañado otra estrategia más centrada en divulgar el mal estado económico de los países llamados emergentes, con el fin de ponerlos en aprietos y forzar que el capital huya de esos enclaves. De hecho, en el caso que nos ocupa también se ha iniciado una feroz campaña por parte de Estados Unidos y sus organismos (llamados erróneamente internacionales) en contra de Venezuela y Argentina, con el único objetivo de imponer un mayor estrangulamiento financiero externo. En esta ofensiva se enmarcan el fallo del juez Griesa en contra de Argentina, que ha sido un ejemplo claro en este sentido; y las permanentes declaraciones de Ricardo Hausmann (profesor venezolano de la Universidad de Harvard) quien continúa insistiendo desde hace años en que Venezuela está en *default* (mismo término usado por la oposición argentina).

Las agencias descalificadoras de riesgo también hacen su trabajo; Fitch y Moody's, por ejemplo, contraatacaron el mismo día que fallecía Chávez planteando "una perspectiva negativa" sobre Venezuela, lo que podría indicar una posible rebaja (en la nota de la deuda pública, encareciéndola); estos son los mismos que anticiparon los posibles riesgos acerca de la gobernabilidad en la era post Chávez, o que anunciaron que Venezuela tiene un riesgo muy alto de sufrir una rebelión en este año. *The Economist* también se sumó al festín, precisamente afirmando el año pasado que en Argentina y Venezuela "se acabó la fiesta", haciendo alusión al fin de un ciclo económico y político. Estos ataques continuos no pueden ser ignorados en la disputa abierta que afrontan estos países en la región, sin que ello sirva como una constante excusa para estar a la defensiva todo el tiempo; es importante mencionar este incesante intento

de generar malas expectativas y, por ende, encarecimiento de las fuentes de financiación tradicionales. Ante ello, cada día es más importante la necesidad de repensar nuevas fuentes de financiación para evitar contagio interno de este agravamiento de la restricción externa; como veremos luego, el Brics y especialmente China juegan un papel clave en esta tarea.

Tercero, Estados Unidos realiza una importante apuesta en materia petrolera a partir del uso de las reservas propias, vía *fracking* (que se estiman que se agoten en el muy corto plazo) con el objetivo de repercutir en la baja de los precios hasta el punto de poner en jaque a ciertas economías emergentes dependientes de este recurso natural. En este sentido, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina han de afrontar esta nueva restricción externa por la caída de los precios del petróleo. Aún es prematuro para hacer previsiones catastrofistas; es difícil pronosticar con exactitud cuál será el nuevo precio del petróleo para los próximos años; no sirven solo esos modelos de oferta y demanda porque las razones políticas tienen un peso más que importante en esta disputa. Si bien todo apunta a que el precio no volverá a estar por encima de 100 dólares el barril, como sucediera años atrás, tampoco parece lógico que se quede por debajo de los 50 dólares¹⁷¹. Esto obliga a algunas economías de América Latina a reimpulsar el objetivo de la soberanía tributaria para contrarrestar los vaivenes y volatilidades externas. La dependencia de los precios del petróleo es un hecho incontable al día de hoy, y pensar que es solucionable en el medio plazo es creer en una realidad que no existe. No obstante, este momento delicado afuera por la caída de los precios del petróleo es una oportunidad para replantearse nuevos mecanismos para una mayor soberanía tributaria, para buscar nuevas vías de lograr autosuficiencia en la generación de recursos para algunos proyectos públicos productivos, para revisar la política de regulación de las

171 Hasta la misma Agencia Internacional de la Energía pronostica que el precio del petróleo tendría que subir progresivamente hasta 73 dólares en 2020.

remesas de utilidades netas de las grandes transnacionales, que implica una tasa muy baja en materia de reinversión.

En último lugar, en lo que respecta a la intentona de Estados Unidos por recuperar su hegemonía, vuelve a la carga con su viejo sueño: la alianza trilateral entre Estados Unidos, Unión Europea y toda América Latina. Estados Unidos no quiere perder el poder que antaño tenía sobre América Latina; viendo cada vez más sólida la alianza entre muchos países de América Latina con China, con Rusia, el gigante norteamericano ha vuelto a encontrar nuevas formas para estrechar lazos e impedir que ningún otro invitado se cuele en esta fiesta. En este sentido, al conocido esfuerzo por impulsar la Alianza del Pacífico y al financiamiento para la búsqueda de líderes opositores que sean capaces de ganar en las urnas a las opciones progresistas, se suma una macroestrategia que pretende el reacomodamiento de piezas mediante la reformulación de los vínculos comerciales a nivel global. Esto queda claro en las producciones de las usinas de pensamiento liberal que delinean esta estrategia con el viejo afán de dominación de la región latinoamericana, asignándole un rol en el escenario mundial favorable a sus intereses. La misma se plasma de manera esclarecedora en el ya mencionado documento del Consejo Atlántico de la OTAN, *The Trilateral Bond: Mapping a New Era for Latin America, the United States, and Europe*.¹⁷²

Llama la atención lo desapercibido que ha pasado este documento a pesar de ser claramente una hoja de ruta marcada desde Estados Unidos y Europa sobre lo que pretende para América Latina en los próximos años. Se retoma, según se afirma, el deseo de incorporar a este bloque latinoamericano al redil atlántico, constituyéndose así en una prioridad en la política exterior de Estados Unidos y Europa.

172 Consejo Atlántico de la OTAN, *The Trilateral Bond: Mapping a New Era for Latin America, the United States, and Europe* [El Vínculo Trilateral: Inspeccionando una Nueva Era para América Latina, EE.UU. y Europa], Washington, DC: 2013.

América Latina no es solo una región en disputa interna, sino un continente con mayor influencia en el sistema interestatal y, por tanto, se enfrenta en los próximos años a tomar decisiones en torno a su forma de insertarse en clave geopolítica; una alternativa es la subordinación atlántica, tal como lo procuran los viejos aliados, y la otra opción consiste en apostar a la vía bricsiana sin que ello implique dejar de lado la inserción bolivariana en el mundo.

En lo que concierne a la primera alternativa, desde el Consejo Atlántico los intelectuales de la derecha mundial ya constatan la madurez de Latinoamérica y su mayor peso global y, por tanto, abogan por un espacio geopolítico trilateral: Unión Europea-Estados Unidos-América Latina, con base en sus comunes raíces occidentales, en términos estrictamente liberales: derechos individuales y mercados abiertos. La estrategia plasmada en el documento insta a que se abra un diálogo trilateral entre las Américas y la Unión Europea. ¿Qué hay detrás de ello? América Latina en esta década ganada ha comenzado una senda de crecimiento que va a continuar a pesar de que pueda tener momentos de desaceleración en estos años. Es una región en paz, sin guerras (salvo con contadas excepciones), con un peso muy importante en posesión de recursos naturales y con una sustancial demanda interna que sigue creciendo.¹⁷³

El objetivo final es lograr que el conjunto de acuerdos de libre comercio existente hasta el momento (solo entre países de la Alianza del Pacífico y Estados Unidos y Unión Europea) se convierta en un gran acuerdo de libre comercio entre las tres entidades geopolíticas, esto es, acabar en un *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP, por sus siglas en inglés; aprovechando precisamente que ahora avanza a buen ritmo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Unión Europea). Con este objetivo estratégico por delante, desde el Norte se recomienda compatibilizar los mercados financieros y las normas jurídicas de

173 Se estima en el documento que en los próximos años haya una clase media consumidora de alrededor de unos 225 millones de personas en América Latina.

los tres bloques, lo que permitiría contar con un mercado trilateral, obviamente controlado por los intereses de las grandes transnacionales. De hecho, para este citado informe la situación económica de América Latina ha cambiado fuertemente en las últimas décadas; esta región necesitaba de la inyección de dinero en el pasado, pero en cambio ahora necesita de quienes puedan establecer relaciones comerciales con el objetivo de expandir su comercio, desarrollar sus estrategias tecnológicas, diversificar su economía y fortalecer la construcción de sus instituciones democráticas. Se redonda en la idea de la necesidad de crear capital humano, administrar las riquezas energéticas y otros recursos naturales, luchar contra el crimen transnacional y fortalecer los marcos institucionales de las tres regiones. En este sentido, se sugiere la creación de un nuevo marco institucional permanente entre las tres regiones, que pudiera sustituir los organismos existentes (es decir, intentar acabar con la Celac).

¿Y cómo procuran seducir a América Latina para incorporarla al redil atlántico? Una de las ofertas es que el centro del poder global (EE.UU.-UE) ceda ante una de las reivindicaciones geopolíticas de la región, otorgándole un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es un tema cualquiera, a sabiendas de cómo se resuelven ciertas disputas en la esfera global; sin embargo, ceder para eso significaría acabar cediendo verdaderamente la soberanía que se viene ganando en estos años pasados, porque detrás de este pretendido acuerdo están todas las consecuencias –ya conocidas de sobra– después de firmar cualquier acuerdo comercial, tratado bilateral de inversión, del sometimiento al Ciadi cada vez que toca dirimir en caso de conflicto, etc. Lo que se pretende de facto es una suerte de ALCA ampliado, de tal forma que el viejo sueño americano ahora se amplíe con la participación europea para que vuelva la época de las carabelas. Habrá que estar atentos a esta disputa.

En contraposición a este intento desde Estados Unidos y Europa está la importancia creciente del Brics a nivel mundial y, consecuentemente, en las relaciones con América Latina. Hoy por hoy, el grupo Brics ha dejado de ser un conjunto de siglas para

erigirse en el nuevo espacio geoeconómico que ha puesto el mapa-mundi patas arriba. Los acuerdos de Bretton Woods, nacidos post Segunda Guerra Mundial con el afán de organizar la casa mundial capitalista, sienten de cerca el aliento de este conjunto de países que han decidido no continuar acatando la totalidad de las reglas del juego destinadas a garantizar, solidificar y potenciar la hegemonía económica de Estados Unidos. La consolidación del Brics fija fecha de caducidad al modelo económico de pensamiento único, que tiene su fiel reflejo en el dólar como moneda monopólica en las relaciones económicas internacionales, o en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como instituciones financieras con licencia para amedrentar.

La importancia del Brics ha tenido un importante efecto-empuje en la progresiva desamericanización de las economías (en relación con EE.UU.) debido a una política de acumulación de reservas cada vez más diversificada en divisas y a una política comercial sin necesidad de transitar por el dólar. Esto abre un panorama favorable para muchos países de América Latina, que podrían ir reduciendo su dependencia del dólar acudiendo a otros mecanismos en alianzas con este nuevo bloque. Se abre con el Brics un nuevo multilateralismo propicio para seguir ganando en la disputa en estos próximos años. Por ejemplo, en la cumbre de Fortaleza (Brasil) de mediados del año 2014, el Brics dio un paso al frente con la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y el Fondo de Reservas (FR), que son el puntapié para una nueva arquitectura financiera internacional que tiene consecuencias positivas para un orden económico mejor distribuido, porque sustituye el único polo hegemónico –con sus satélites de primera clase y sus respectivas categorías periféricas– por una nueva multipolaridad con renovados dispositivos de coordinación contrahegemónicos.

El ejemplo más cabal de esto es el hecho de que el NBD elimina definitivamente la exclusividad del FMI para repartir ayuda financiera a cambio de endeudamiento social, con las importantes consecuencias económicas, pero sobre todo políticas que ello implica. El NBD recientemente creado comenzará a funcionar

en 2016 con un capital inicial de 50 mil millones de dólares y con sede en Shangai. La presidencia se rotará cada cinco años entre los países miembros, comenzando por India, lo cual marca una notable diferencia respecto al modo de organización del FMI y el Banco Mundial. Además, el NBD podría convertirse en un valioso acicate a favor de un nuevo paradigma de ayuda financiera al desarrollo, si esta se realizara a través de mecanismos más equitativos, con miras en el desarrollo productivo, respetando criterios de justicia social y priorizando la humanización de la economía. Por su parte, el FR también podría favorecer la soberanía de los pueblos en América Latina, si este pone su intencionalidad en evitar ataques especulativos contra monedas nacionales, o sirviendo como herramienta de compensación por desequilibrios externos o internos que impliquen necesidades de divisas.

El mundo multipolar es siempre bienvenido frente a cualquier imposición unipolar. Sin embargo, es necesario no perder de vista que esta suerte de génesis de Consenso de Fortaleza o Consenso Bricsiano entra en una relación de tensión dialéctica con el proceso de emancipación que se viene fraguando en muchos países de América Latina. Al respecto, cabe sacar a colación algunos interrogantes con el objetivo de no descuidar el proceso de integración regional, dejándose llevar por cantos de sirena provenientes de otras latitudes. ¿En qué lugar queda la iniciativa del Banco del Sur frente al BND? ¿Cómo compatibilizará Brasil tener un pie en el Brics y otro en Mercosur/Unasur/Celac? ¿Cuál es la relación entre el deseado arbitraje regional de Unasur ante futuros tratados constitutivos en materia de inversiones-Brics? ¿Qué marco de integración se acabará imponiendo? ¿Aquel de la complementariedad-solidaridad u otro anclado en el dogma chino ganar-ganar (sin aclararse quién gana cuánto)? ¿Están en riesgo las pequeñas-medianas empresas y las grannacionales frente a las transnacionales con casa matriz en cualquier país Brics? ¿Es compatible la democratización económica, si el Brics llega a reconcentrar el poder económico en otro polo económico?

En este sentido, el periodista y economista argentino Alfredo Zaiat repasó recientemente en una columna de opinión las oportunidades y desafíos que brinda para la región el escenario económico actual:

América Latina tiene la oportunidad de mejorar sus propias instituciones para diseñar una arquitectura financiera regional con el objetivo, precisamente, de protegerse del factor de inestabilidad global que significa el FMI y las políticas de ajuste que promueven Estados Unidos y Europa. Existen marcos de integración financiera regional que requieren su consolidación, con cooperación y confianza entre los países de la Unasur. Uno de ellos es el sistema multilateral de pagos basado en el uso de las monedas locales para transacciones comerciales intrarregionales. Otro es el fondo de reserva regional para actuar como amortiguador de eventuales impactos de perturbaciones externas. Ese fondo serviría, como el de los Brics por 100 mil millones de dólares, para estabilizar desequilibrios transitorios de la balanza de pagos de los países pertenecientes al bloque, otorgando créditos o garantizando préstamos a terceros; para mejorar las condiciones de inversión de las reservas internacionales efectuadas por los países miembro; y para contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y financieras. El Banco del Sur es otra de las instituciones necesarias para la consolidación regional. Esa entidad integrada por siete países de la Unasur (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) podría brindar condiciones más ventajosas, en plazos y tasas de interés, que las que ofrece el mercado financiero, para ser aplicados a proyectos de desarrollo, infraestructura e integración regional. (...) [Así] el banco de desarrollo y el fondo Brics abren la puerta para animar a los países latinoamericanos, pese a la resistencia brasileña, a construir una arquitectura financiera regional que permita ganar autonomía de las instituciones multilaterales tradicionales. El actual ciclo político en la región tiene el rasgo esencial de la profundización de la identidad integracionista; llegó el turno de traducirlo en avances en materia

económica y financiera. El banco y el fondo Brics están marcando el sendero a transitar.¹⁷⁴

De esta manera se pone encima de la mesa una cuestión central en esta nueva disputa: cuánto de positivo puede tener la inserción bricsiana en el mundo y cuántos riesgos puede ocasionar en cuanto a una posible ralentización de la inserción regional; se trata de calibrar las consecuencias de este nuevo escenario geopolítico en favor de América Latina. El cambio de época de la región justamente se ha venido edificando sobre un sentido común bolivariano, que ha permitido estimular la creación de un gran polo económico-político-social más emancipado. La proliferación de instituciones supranacionales propias es un buen ejemplo de ello.

La búsqueda de soberanía nacional para muchos países en América Latina ha venido de la mano de una inserción bolivariana que no ha de ser exactamente la misma que se reclame desde la inserción bricsiana. Esta tensión constituye un nuevo campo en disputa política y económica para los próximos años. La clave será en adelante construir una relación virtuosa capaz de aprovechar este viento a favor gracias al Brics, evitando que este acabe fagocitando el proceso de cambio regional que venía produciéndose. Se abre a futuro un mejor y nuevo escenario geopolítico que exige, a la vez, rediscutir y actualizar tácticamente la nueva política económica interior-exterior con el afán de no perder jamás el horizonte estratégico trazado desde el Sur, sorteando así cualquier posibilidad de caer en las redes seductoras de cualquier Otro Norte, si este se produjera.

Más que nunca, es momento para que América Latina *latinoamericanice* virtuosamente la necesaria relación con el Brics, pero de igual a igual, sin sentimiento de inferioridad, con soberanía y sin neodependentismo. Como dice aquel proverbio chino –nunca mejor dicho–: “El fuego es básico para cocinar, pero también puede

acabar quemando una cocina”. Así que, después del anuncio chino de invertir en la región hasta 250.000 millones de dólares en la próxima década¹⁷⁵, es preciso estar contento pero también alerta en el tipo de inversión requerida¹⁷⁶, en qué condiciones, qué nuevas relaciones de dependencia se crean, etc. Por ello, es fundamental para América Latina identificar qué tipo de relación simbiótica se quiere con el Brics para evitar el parasitismo histórico del coloniaje. Tal como diría Chávez, es hora de otro salto adelante según las ventajosas circunstancias históricas que se avecinan, pero siempre atentos a que esta oportunidad no acabe siendo una nueva imposición desde afuera.

En suma, los años venideros serán decisivos para la región en términos del lugar que se ocupe en el escenario mundial. Son muchos los nuevos espacios donde América Latina participa con otro protagonismo; véase, por ejemplo, el papel que tomó Bolivia en la coordinación del G77+China en el año 2014 (que representa el 60% de la población mundial y más de un tercio del PIB global). Es fruto del nuevo cambio de época también a nivel mundial, pero siempre que hay movimiento existe disputa, tensiones y contradicciones; es este plano, el geopolítico, uno más a la hora de afrontar la disputa de estos próximos años. Los países de América Latina, inmersos en este cambio de época, deben seguir buscando la mejor forma de insertarse soberana, estratégica e inteligentemente en el mundo, desde la propia región, aprovechando el nuevo viento del Brics y esquivando la subordinación al redil atlántico propuesta por Estados Unidos y Europa.

175 Es el anuncio de la cumbre Celac-China en diciembre de 2014, que supone unos 25.000 millones anuales, una cifra muy por encima de los aproximadamente 10.000 millones que las empresas del gigante asiático han desembolsado cada año, desde 2010, en estos países.

176 Se ha decidido que esta inversión sea en seis áreas prioritarias: energía y recursos naturales, construcción de infraestructuras, agricultura, manufactura, innovación y tecnologías de la información y la comunicación.

174 Alfredo Zaiat. “Banco y fondo Brics”, en: *Página 12*, 19 de julio de 2014, recuperado de: <http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-251092-2014-07-19.html>

La confrontación con una nueva otredad: la nueva derecha regional y mundial

Después de que Chávez ganara las elecciones en 1998, no ha existido ninguna victoria electoral opositora a los nuevos procesos de cambio en América Latina. En Venezuela, Hugo Chávez ganó cuatro veces consecutivas la disputa presidencial (1998, 2000, 2006, 2012) y Nicolás Maduro una (2013); en Argentina, los Kirchner vencieron también en tres ocasiones sucesivas (2003, 2007, 2011); en Brasil, Lula da Silva ganó dos veces (2002, 2006) y Dilma Rousseff otras dos más (2010, 2014); en Bolivia, Evo Morales venció tres veces seguidas (2005, 2009, 2014); en Ecuador, Rafael Correa también logró tres victorias ininterrumpidas (2006, 2009, 2013); en Uruguay, el Frente Amplio (con Tabaré Vázquez y Pepe Mujica) ganó tres (2004, 2009, 2014). Visto lo visto, la oposición en la región solo ha logrado cambiar de signo político mediante golpes antidemocráticos tanto en Honduras (2009) como en Paraguay (2012); hasta el momento, nunca por la vía electoral.

Parece que no es nada fácil disputar la hegemonía electoral a los nuevos liderazgos que conducen procesos, que han logrado poner punto y final a las décadas perdidas del neoliberalismo con base en una nueva política. Ningún *performance* electoral opositor ha logrado acertar con la tecla oportuna para contrarrestar el apoyo mayoritario que existe a escala nacional en cada proceso de transformación. A pesar de que lo siguen legítimamente ensayando, el intento de restauración conservadora es simplemente eso: un intento que no resulta eficaz en el propósito de volver la página atrás. Ni Capriles en Venezuela, ni el paso fugaz de Marina Silva ni la vieja escuela de Aécio Neves en Brasil, ni Doria Medina en Bolivia, ni Mauricio Rodas (que aunque ganó elecciones en Quito, perdió un año antes las presidenciales), ni tampoco el banquero Lasso en Ecuador, ni Lacalle Pou en Uruguay; ninguno de ellos saben cómo se puede ganar elecciones presidenciales en América Latina, en los países que han iniciado el camino hacia un cambio de época. Si bien es cierto que han mejorado en muchos

casos en votos obtenidos, esto puede deberse en gran medida al propio desgaste de los partidos después de llevar tantos años en la gestión gubernamental. Todavía falta por ver si ese mismo perfil tiene éxito en Argentina con Sergio Massa, o con la política de la buena onda que trae ahora consigo el candidato Mauricio Macri, pero hasta el momento la oposición no encuentra la táctica precisa para desbancar a los procesos que han logrado mucho a favor de la mayoría social, en términos de mejora en las condiciones de vida.

La mejor entre todas las imágenes posibles no puede competir con procesos reales que, a pesar de sus contradicciones y errores, han hecho que esta década sea ganada en muchos aspectos básicos de la vida cotidiana del buen vivir ciudadano. Cada proceso, con sus particularidades, ha conseguido reducir pobreza y desigualdad, eliminar la exclusión política, cultural, social y económica; mejorar el empleo y el salario real, mejorar la capacidad adquisitiva en forma inclusiva; garantizar el acceso público y gratuito a la educación y la sanidad; facilitar mejores opciones en términos de vivienda; solventar el acceso a servicios básicos; y algo que no es menos importante: recuperar el sentido de soberanía y de sentirse orgulloso de pertenecer a un proyecto de país. Esta década ganada como parte de una época ganada es una fortaleza política que sigue siendo muy rentable en términos electorales. Es por todo ello que lo iniciado desde finales del siglo pasado en América Latina no puede ser únicamente concebido como un cambio de ciclo electoral, es verdaderamente un cambio de ciclo político que constituye un cambio de época. Precisamente es esto, el cambio de sentido común, lo que obliga a la oposición a forzar mucho en la preparación de su candidato, que debe jugar ahora en una cancha adversa en la que no puede ya afirmar alegremente eso de los recortes sociales, ni la austeridad, ni planes de ajuste ni nada que se le parezca, ni hablar de exceso de gasto social.

En este nuevo marco hegemónico –siempre en construcción, en disputa– reside realmente la dificultad que tiene la derecha regional de reubicarse como opción convincente para ser respaldada por la mayoría popular. Esta creciente complejidad está comenzando a

desquiciar a una oposición cada vez menos monolítica, derivando en una alta gama de opciones y estrategias diferentes. Por un lado, está el sector empresarial de las grandes corporaciones que no sabe si confrontar y poner en jaque a los actuales gobiernos, o nadar y guardar la ropa porque saben que probablemente también les vaya bien con estos procesos de cambio si saben aprovechar las mejoras internas, aceptando que ya no pueden ser ellos los tomadores de decisión política. Por otro lado, los medios privados de comunicación dominantes no terminan de entender que su pasado glorioso ya pasó, y que en los últimos años los nuevos liderazgos del cambio lograron desconectar cierto fusible, de tal modo que ahora ellos se comunican directamente con el pueblo sin necesidad de tanta intermediación. Es más, esta oposición mediática sigue empeñada en el mismo relato del pasado que no convence ni a la mayoría ni a los propios candidatos opositores.

Continúan con una narrativa obsoleta, más propia de las décadas de los ochenta y noventa, creyendo que hablar de inversión extranjera, de los mitos del mercado o del libre comercio es rentable electoralmente, a pesar de que las cuentas electorales les siguen contradiciendo. Afirmar frívolamente que todo está mal cuando todo no está mal tampoco suena a la mejor música elegida para convencer a los que deben votar. Una portada o un titular mediático lo aguanta todo, pero lo que no tiene es capacidad ni fuerza para rivalizar con la mejora realmente producida en el aspecto más cotidiano de la persona que debe acudir a emitir su voto. Esta disociación entre buena parte del discurso mediático dominante y las nuevas propuestas electorales de la oposición es una dificultad añadida en esta ardua tarea de lograr ganar una contienda electoral. En lo que sí hay acuerdo es en torno al núcleo de otras demandas: corrupción, inseguridad e inflación; esto es un factor común en casi todos los países. Ciertamente estos son problemas para atajar, pero en lo que se confunde la oposición es en creer que estos por sí solos pueden ensombrecer plenamente los logros económicos y sociales alcanzados por los nuevos procesos de cambio.

Mientras la oposición crea que los problemas de hoy se resuelven con propuestas y discursos del ayer, o simplemente con una buena puesta en escena con un candidato de la era de la postpolítica (aparentemente neutral, despolitizado, tecnocrático), mientras suceda lo uno y/o lo otro, seguirán sin ganar elecciones salvo que los gobiernos actuales se equivoquen demasiado. Como diría Evo Morales: “Ganar elecciones es muy sencillo”; se trata de hacer aquello que le conviene a cada pueblo, aunque a eso le llaman populismo. Mientras tanto, la oposición –la partidaria y la que no– sigue buscando el candidato ideal para ganar la próxima cita electoral.

Muchos hablan de la nueva derecha que aparece en la región¹⁷⁷, con una nueva forma de opositar, o mejor dicho de opositar tangencialmente para evitar confrontar plenamente. Esta verdad que viene imponiéndose cada vez más velozmente en América Latina ha de ser matizada en algunos aspectos: en primer lugar, es cierto que hay una nueva derecha pero también esta convive con la vieja derecha que no termina de desaparecer; en segundo lugar, no se puede hablar de una derecha como un todo monolítico y homogéneo porque habría que diferenciar entre la derecha mediática, la empresarial, la partidaria, las nuevas candidaturas ciudadanas y, cómo no, la derecha de afuera, esa que todavía está íntimamente interconectada mundialmente; es una derecha poliédrica que ciertamente se viene transformando al calor del cambio de época en la región. Esto inaugura también un nuevo tiempo porque cada disputa electoral es diferente a aquella que se daba en la fase inicial de estos procesos. Tener enfrente a otro contrincante, aunque este todavía no ha logrado ganar elecciones, obliga a modificar también el campo de la pugna electoral, aparecen nuevos marcos de discusión que exigen nuevas estrategias, no solo para ganar elecciones, sino para no perder apoyo político en este nuevo ciclo en adelante ahora, que ya se ha superado la etapa encantadora

177 Véase el número 254 de la *Revista Nueva Sociedad*, dedicado plenamente a esta temática, Los rostros de la nueva derecha en América Latina: 2014.

de los inicios. Realmente es una cuestión a considerar en los nuevos tiempos la disputa con esa renovada otredad que constituye un arco opositor muy heterogéneo al interior, pero que siempre tiene un punto de unión: acabar con el cambio de época en América Latina. Conocer mejor la cartografía del siglo XXI de las propuestas opositoras es imprescindible para no seguir pensando que se tiene enfrente al viejo enemigo político que venía saliendo de la larga noche neoliberal.

Un nuevo relato para un nuevo tiempo (acorde al cambio de época)

Seguir usando milimétricamente el relato que logró convencer a la mayoría social de que era necesario acabar con el neoliberalismo en América Latina sería tan absurdo como seguir creyendo que esa mayoría social es la misma de antaño. Si todo cambia, también cambia el sujeto social mayoritario, sus condiciones objetivas y sus subjetividades. Nada es igual a esa vieja disputa que requería de un relato con el objetivo de adherir el apoyo de una ciudadanía, que en su gran mayoría se veía afectada por las políticas de empobrecimiento social venidas con el neoliberalismo. Las demandas de inicios del siglo XXI no son las mismas demandas que ahora se hace mayoritariamente el pueblo latinoamericano, que ha visto mejorar muchos aspectos de las necesidades básicas (educación, sanidad, vivienda, empleo, otros servicios básicos). Es por ello que ahora en la nueva disputa se requiere de nuevas respuestas, según sean los nuevos interrogantes que se abren en este proceso de cambio. La construcción de un discurso y relato actualizado es una tarea pendiente que será determinante en los próximos años para continuar consolidando este cambio de época.

La cuestión de la pedagogía-política, que tanto resultado ha dado en la ruptura y primeros años de esta nueva época, precisa de un constante proceso de renovación acorde a esta nueva fase política. Al igual que en su momento fue fundamental generar un nuevo consenso de ideas, un nuevo sentido común de época que permitió

cuestionar e interpelar a aquel sentido común característico del orden hegemónico, en estos años se requiere de retomar este objetivo estratégico. Es obligatorio volver al campo de batalla de lo simbólico, de los significantes, de las banderas, de hilvanar discursivamente lo logrado con lo que resta por lograr, de los nuevos hitos motivantes hacia delante. Se vuelve a necesitar toda la imaginación y elocuencia que sea necesaria para continuar reinventando categorías y horizontes que impulsen hacia adelante.

Hay generaciones que prácticamente han nacido durante estos procesos y han podido disfrutar de las bondades de esta época ganada. Esto repercute en la eficacia del uso de una narrativa basada, exclusivamente, en la victoria del pasado frente a la larga noche neoliberal. Es preciso renovar el argumentario, la identificación de las nuevas formas del enemigo histórico, el horizonte estratégico, el abordaje de nuevas coyunturas adversas que no pueden seguir basándose en una posición contrahegemónica. Lo que antes era posible desde una posición contrahegemónica, minoritaria, subalterna, después de estos años se ha convertido en una posición hegemónica, mayoritaria y dominante. Por ejemplo, en el caso venezolano, usar dilatadamente el término guerra económica, sine die, no es la mejor manera de afrontar esta verdadera guerra económica porque sería conceder al enemigo una posición dominante que había perdido.

Es decir, es importante esa caracterización, pero no puede ser que impregne el relato en la forma tan totalitaria como lo ha hecho durante 2013 y 2014. Es una oportunidad para, por ejemplo, plantear la importancia de la paz económica, de seguir saltando adelante, con desafíos en positivo y no a la defensiva. El ejemplo ecuatoriano también es interesante para observar cómo todavía el relato de Correa continúa anclado contra los medios de comunicación y contra la banca; este hilo discursivo que fue exitoso en la fase inicial, ahora demanda otra construcción más acorde con el nuevo imaginario de la mayoría ecuatoriana. El caso argentino se caracteriza por haber sido capaz de dar una respuesta siempre rápida y diferente a cada contratempo; frente a la ofensiva de los fondos

buitre, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández supo contrarrestar el conflicto sacando partida a la nueva disputa, 'patria o buitres', obligando así a que cada uno se pusiera a un lado u otro de esta pugna. Por otro lado, en Bolivia Evo Morales ha sabido plantear –por ejemplo, en la última elección de octubre del año 2014– nuevos hitos: 'Bolivia potencia'; a la vez que le ha dado también una fuerte impronta juvenil a toda la campaña electoral.

Pero no se trata solo de buscar alguna idea electoral fugaz que sirva para una coyuntura específica. El verdadero desafío estratégico consiste en: a) prestar especial atención a los procesos de construcción de sentido en la articulación y desarticulación de los sistemas hegemónicos que siguen en construcción, b) seguir enriqueciendo la formación discursiva propia que continúa instituyendo un campo de aceptabilidad, determinando lo que puede/debe decirse de aquello que no puede/no debe decirse, c) proponer una matriz de estructuración de significantes-maestros a través de una narrativa propia, dinámica, de lo que podría ser el proyecto nacional, apelando a mitos, al rescate de las raíces, realzando los enunciados de lo popular, el alma nacional, lo cívico-militar y lo revolucionario, siempre en movimiento.

En momentos además complicados que vienen y/o puedan venir –sea por ataques desde afuera, pero también por el propio desgaste de años de gobierno– una herramienta para la disputa está en mejorar a la hora de las explicaciones de cada situación; los por qué suelen ser muy útiles para entender el *cómo* debe salirse de una situación adversa. Las nuevas preguntas que hace una nueva mayoría social han de estar integradas en las nuevas respuestas; seguir respondiendo a viejas preguntas es dar demasiada ventaja a un adversario político que busca la manera de construir su otro sentido común.

Como cierre de este libro, este capítulo es solamente un primer aperitivo con la intención de provocar un debate a futuro sobre cuál es el centro neurálgico de la disputa en América Latina. En los apartados anteriores no se alude a todas las dimensiones de la pugna; por fuera quedan otras disputas que también ameritan ser

tratadas como, por ejemplo, la tensión entre justicia social y justicia ambiental o, lo que es lo mismo, la discusión entre ese neopachamamismo/neoecologismo resurgido más desde cierto colonialismo epistemológico y la forma efectiva de resolver con fondos públicos la deuda social heredada por el neoliberalismo.

El caso del Yasuní-ITT en Ecuador o el caso del Tipnis en Bolivia han sido seguramente los que más han llamado la atención en relación con esta contradicción que surge en cualquier proceso de cambio. No tiene solución fácil ni única y es indudable que se trata de otra disputa más que hay que tener en cuenta, pero por el momento –como ha sucedido con otras cuestiones– este tema queda como una disputa secundaria porque ahora las prioridades son otras, más en la línea de los ejes estratégicos que se han formulado anteriormente. Es seguramente un interesante ejercicio intelectual seguir discutiendo acerca del postdesarrollismo contra el desarrollismo, pero este tipo de debate no ocupa hasta el momento los principales lugares en la lista de prioridades de los gobiernos encargados de seguir pilotando este cambio de época. Del mismo modo, algo similar ocurre si consideramos otras contradicciones (la que existe entre Estado y movimientos sociales, y entre las alianzas para consolidar hegemonía y el núcleo central del horizonte estratégico) que son notables, pero que podrían llamarse de segundo orden dada la fase del ciclo de transformaciones en la que tiene lugar la disputa actual, en este cambio de época en América Latina. Con este decálogo, presentado a modo de disputas de primer orden, se pretende abrir un debate necesario e impostergable en torno a algunos principales ejes estratégicos en pugna en América Latina, surgidos de contradicciones secundarias (en el sentido de contradicciones al interior del propio bloque) y de contradicciones fundamentales derivadas de la pugna contra propuestas contrapuestas y antagónicas que aún existen, tanto en la región como fuera de ella. Después de las décadas perdidas llegó la década ganada para la mayoría social, y a partir de ahora el signo de los próximos años dependerá de cómo se afronte esta nueva América Latina en disputa.

REFERENCIAS

- Alianza PAIS. (2013). *Programa de Gobierno 2013-2019. Gobernar para profundizar el cambio. 35 propuestas para el Socialismo del Buen Vivir*. Ecuador.
- Amin, Samir. (1973). *Le développement inégal, Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique*. París: Éditions de Minuit.
- Aronskind, Ricardo. (2010, 30 de abril). Exitoso en subdesarrollar al país. *Página 12*. Recuperado en marzo de 2015, de: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-144925-2010-04-30.html>
- Arrighi, Giovanni. (1999). *El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época*. Madrid: Akal.
- Atehortúa Cruz, Adolfo León y Rojas Rivera, Diana Marcela. (2005). Venezuela antes de Chávez, auge y derrumbe del sistema de "Punto Fijo". *Anuario colombiano de historia social y de la cultura*, (32), pp. 255-274.
- Atkinson, Anthony. (1970a). *Poverty in Britain and the Reform of Social Security*. Cambridge: University Press.
- Atkinson, Anthony. (1970b). On the measurement of Inequality. *Journal of Economic Theory*, (2), pp. 244-263.
- Banco Central del Ecuador. (2014). *Información Estadística Mensual*, (1945).

- Bell Lara, José y López, Delia. (2004). *La cosecha del neoliberalismo en América Latina*. Cuadernos Clacso.
- Burch, Sally. (2007, 2 de marzo). La política de Bush hacia América Latina. *América Latina en movimiento*. Recuperado en marzo de 2015, de: <http://www.alainet.org/es/active/16141>
- Caputo, Orlando. (2010). Crisis de la economía mundial: aumento de las ganancias y disminución de salarios. En: Gandásogui, Marco A., hijo, y Castillo Fernández, Dídimo. (Coords.). *Estados Unidos: la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación*. México: Siglo XXI.
- Cariaga, Juan. (1996). *Estabilización y Desarrollo. Importantes Lecciones del Programa Económico de Bolivia*, La Paz: FCE-Los amigos del libro.
- Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C. (Cemla). (2007). *Programa de fortalecimiento de capacidades de análisis y estrategia de deuda*. Bolivia.
- Comisión Económica para América Latina (Cepal). (2003). *El Panorama Social de América Latina*. Santiago de Chile.
- Comisión Económica para América Latina (Cepal). (2008). *El Panorama Social de América Latina*. Santiago de Chile.
- Comisión Económica para América Latina (Cepal). (2014). *El Panorama Social de América Latina*. Santiago de Chile.
- Constitución de la República del Ecuador. (2008).
- Consejo Atlántico de la OTAN. (2013). *The Trilateral Bond: Mapping a New Era for Latin America, the United States, and Europe*. Washington, DC.
- Convenio Constitutivo del Banco del ALBA. (2008).
- De Cabo, Antonio. (2006). Las transformaciones institucionales. En: Torres López, Juan. (Coord.). *Venezuela, a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana*. Madrid: Icaria.
- Debate Socialista. (2012, 11 de noviembre). Chávez: les prometo un sacudón. Portal: *Rebelión o Muerte*. Recuperado en marzo de 2015, de: <http://www.revolucionomuerte.org/index.php/discursos/discursos-comandante-hugo-chavez/14-chavez-les-prometo-un-sacudon>
- Del Castillo, Gustavo. (1987). El proteccionismo estadounidense en la era de Reagan. *Comercio Exterior*, 37, (11), pp. 887-895.
- Falconí, Fander. (2013, 22 de febrero). Triunfó el Buen Vivir. *Página 12*. Recuperado en marzo de 2015, de: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-214369-2013-02-22.html>
- Galbraith, John Kenneth. (1984). *La economía del fraude inocente*. Barcelona: Crítica.
- García Linera, Álvaro. (2011). *Las tensiones creativas de la Revolución. Quinta fase del Proceso de Cambio*. La Paz: Ediciones de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Goldman Sachs. (2003). Dreaming with BRICs: The Path to 2050. *Global Economics Paper*, (99).
- González, Adrián. (2014). *La falsabilidad del monetarismo*. Caracas: Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria.
- Gray, George. (2005). *La economía boliviana más allá del gas*. Bolivia: PNUD.
- Guerra, Francisco. (2001). *Análisis del modelo económico y social ecuatoriano*. Tesis de maestría no publicada. Quito: Flacso.
- Harvey, David. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (2014). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU, marzo 2014*. Ecuador.
- Kapusiński, Ryszard. (2000). *Ébano*. Barcelona, España: Editorial Anagrama.
- Kotz, David. (2009). The financial and economic crisis of 2008: a systemic crisis of neoliberal capitalism. *Review of Radical Political Economics*, 11, (3), pp. 305-317.
- Krugman, Paul. (1994). The myth of Asia's miracle. A cautionary fable. *Foreign Affairs*, 73, (6), pp. 62-78.
- Lora, Eduardo. (2001). Las reformas estructurales en América Latina: qué se ha reformado y cómo medirlo. [documento de trabajo 348]. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Marcuse, Herbert. (1965). *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. México DF: Joaquín Mortiz.

- Márquez, Patricia y Piñango, Ramón. (Eds.). (2003). *En esta Venezuela. Realidades y nuevos caminos*. Caracas: IESA.
- Martín-Mayoral, Fernando. (2009). Estado y mercado en la historia de Ecuador. *Nueva Sociedad*, (221), pp. 120-136.
- Martínez, Rubén. (2011). El proceso constituyente: la activación de la soberanía. En: Errejón, Iñigo y Serrano, Alfredo. *¡Ahora es cuando, carajo! Del asalto a la transformación del Estado*. Madrid: El Viejo Topo.
- Mas Mok, Susana. (2004). Transnacionalización de la economía mundial. [Documento de trabajo 09/04]. La Habana: Centro de Investigaciones de la Economía Mundial.
- Medialdea, Bibiana. (2010). *Subdesarrollo, capital extranjero y financiarización. La trampa financiera de la economía brasilera*; tesis doctoral no publicada, Universidad Complutense de Madrid.
- Mészáros, István. (2001). *Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición*. Caracas: Vadell Hermanos.
- Ministerio de Coordinación de la Política Económica. (2014). *Ecuador Económico. Indicadores Macroeconómicos*. Ecuador.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2014). *Bolivia: una mirada a los logros más importantes del nuevo modelo económico*. La Paz.
- Ministerio de Planificación y Desarrollo. (2006). *Plan Nacional de Desarrollo*. Bolivia.
- Mommer, Bernard. (2003). *Petróleo global y Estado nacional*. Caracas: Editorial Comalas.
- Montero, Alberto. (2006). Petróleo, el maná de la discordia. En: Torres López, Juan. (Coord.). *Venezuela, a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana*. Madrid: Icaria.
- Montero, Jerónimo. (2007). Cumbre de las Américas en Mar del Plata: Victorias, debates y limitaciones de la oposición, *ACME. An International E-Journal for Critical Geographies*, 6, (1), pp. 124-130.
- Nyerere, Julius. (1991). *Desafíos para el Sur. Informe de la Comisión del Sur*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Piketty, Thomas. (2013). *Le capital au siècle XXI*. París: Éditions du Seuil.
- Piña Torres, José Gregorio. (2015). *El mito de la maquinita*. Caracas: Centro de Estudios de Economía Política, Universidad Bolivariana de Venezuela.
- Pollin, Robert. (2005). *Los contornos del declive*. Madrid: Akal.
- Quijano, Aníbal. (2000). El fantasma del desarrollo en América Latina. *Revista de Economía y Ciencias Sociales*, 6, (2), pp. 73-90.
- Quijano, Aníbal. (2009, septiembre). *La colonialidad del poder*. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.
- Ramírez Gallegos, Franklin. (2011). Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010). En: Julián Rebon y Massimo Modonesi. (Eds.). *Una década en movimiento: luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI*. Buenos Aires: Clacso/Prometeo Libros.
- Ramírez, René. (2015). *La virtud de los comunes*. Barcelona, España: El Viejo Topo.
- Rangel, José Vicente. (2013). *De Yare a Miraflores, el mismo subversivo. Entrevistas al comandante Hugo Chávez, 1992-2012*. (3.ª ed.). Caracas: Ediciones Correo del Orinoco.
- Revista Nueva Sociedad. *Los rostros de la nueva derecha en América Latina*. (2014), (254).
- Sader, Emir. (2009). *El nuevo topo: los caminos de la izquierda latinoamericana*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Sánchez, Joan-Eugeni. (2008, mayo). *El poder de las empresas multinacionales*. X Coloquio Internacional de Geocrítica: Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias sociales, 1999-2008. Universidad de Barcelona, Barcelona.
- Sapir, Jacques. (2010). *Cuatro pistas para salir de la crisis*. Madrid: El Viejo Topo.
- Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). (2013). *35 logros de la revolución ciudadana en educación superior, ciencia, tecnología e innovación 2013*. Ecuador.
- Sen, Amartya. (1973). *On Economic Inequality*. Oxford: Clarendon Press.
- Sen, Amartya. (1976). Poverty: An Ordinal Approach to Measurement. *Econometrica*, (44), pp. 219-232.

- Sen, Amartya. (1979). *Sobre la desigualdad económica*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Serrano, Alfredo. (2014). *El pensamiento económico de Hugo Chávez*. Caracas: Vadell Hermanos.
- Serrano, Alfredo y Acosta, Alberto. (2009). Ecuador frente a la crisis económica internacional: un reto de múltiples aristas. *Revista de Economía Crítica*, (8), pp. 145-167.
- Tanzi, Vito. (2000). El papel del Estado y la calidad del sector público. *Revista de la Cepal*, (71), pp. 7-22.
- Torres López, Juan. (2006). La economía: tiempos de convulsión, luces y sombras. En: Torres López, Juan. (Coord.). *Venezuela, a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana*. Barcelona: Icaria.
- Torres López, Juan y Montero Soler, Alberto. (2004). ¿Ha hundido Chávez la economía venezolana?. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, (31).
- Townsend, Peter. (1971). A plan to help the low paid: the reform of earned income relief. *Poverty: Journal of the Child Poverty Action Group*, (18).
- Transatlantic Task Force on Latin America. (2013). *The Trilateral Bond: Mapping a New Era for Latin America, the United States, and Europe*. Washington, DC.
- Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. (2008).
- Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape). (2006). *Economía y Política Económica*. Bolivia.
- Viciano, Roberto. (2006). La columna vertebral de la Revolución: el fenómeno participativo en la Venezuela Bolivariana. En: Torres López, Juan. (Coord.). *Venezuela, a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana*. Madrid: Icaria.
- Vives, Xavier. (2010). *Information and learning in markets: the impact of market microstructure*. Princeton University Press.
- Wallerstein, Immanuel. (2003). La debilidad de los Estados Unidos y la lucha por la hegemonía. *Monthly Review*.
- Weisbrot, Mark, Ray, Rebecca y Johnston, Jake. (2009). *La economía bajo el Gobierno de Morales*. Washington: Center for Economic and Policy Research.
- Williamson, John. (1990). What Washington means by policy reform. En: Williamson, John. (Ed.). *Latin American adjustment: how much has happened*. Washington: Institute for International Economics.
- Zavaleta, René. (1990). *El Estado en América Latina*. La Paz-Cochabamba: Editorial Los amigos del libro.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO 11

CAPÍTULO 1. ERA NEOLIBERAL: EL TIEMPO

DE LAS DÉCADAS PERDIDAS 23

Emergencia y consolidación del neoliberalismo como paradigma hegemónico a nivel mundial	23
La llegada del neoliberalismo a América Latina	66
Algunos resultados de las décadas perdidas: Venezuela, Bolivia, Ecuador y apuntes sobre el resto de América Latina	74
Apuntes sobre el resto de América Latina	103

CAPÍTULO 2. LA ÉPOCA GANADA: MÁS QUE UNA DÉCADA GANADA 109

El contexto geoeconómico del siglo XXI. La reconfiguración del sistema-mundo entre la hegemonía del neoliberalismo y la transición hacia un mundo multipolar	119
La emergencia del cambio en América Latina: Venezuela, Bolivia y Ecuador	140
El Consenso Bolivariano; una nueva región, otra América Latina	197

CAPÍTULO 3. LOS AÑOS EN DISPUTA: TENSIONES, CONTRADICCIONES Y DESAFÍOS 233

Entre lo irreversible y lo reversible	241
Las urgencias coyunturales y las exigencias estructurales	244
La gestión estatal y la eficiencia como nuevo tempo de la política	248
La disputa por la nueva renta en destino: el papel del rentismo importador	252
La disputa productiva como centralidad económica	258
Redistribuir no es lo mismo que distribuir	265
Conciliar los cambios nacionales con las transformaciones supranacionales	270

La disputa geoeconómica mundial: inserción <i>bricsiana</i> frente a la subordinación atlántica	280
---	-----

La confrontación con una nueva otredad: la nueva derecha regional y mundial	294
---	-----

Un nuevo relato para un nuevo tiempo (acorde al cambio de época)	298
--	-----

REFERENCIAS 303

3.000 EJEMPLARES

Se terminó de imprimir en la
Fundación Imprenta de la Cultura

Caracas, agosto de 2015

ALFREDO SERRANO MANCILLA

(España, 9 de octubre de 1975)

Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (España) y postdoctorado por la Université Laval (Québec, Canadá). Actual director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico (Celag) y asesor de Telesur. Dirige la línea de investigación en Análisis Coyuntural y Desafíos Estratégicos de la Economía Venezolana en el Grupo de Investigación Social Siglo XXI. Es profesor en universidades internacionales, asesor y consultor internacional en estudios de economía internacional, economía del desarrollo y políticas públicas para América Latina. Recientemente ha publicado *La nueva economía en la nueva Constitución del Ecuador* (2015), *El pensamiento económico de Hugo Chávez* (2014), *¡Ahora es cuando, carajo! Del asalto a la transformación de Estado en Bolivia* (España, 2011). Es también articulista de opinión en *Página 12* (Argentina), *El Telégrafo* (Ecuador), *Público* (España) y *Correo del Orinoco* (Venezuela).

Alfredo Serrano presenta con estilo diáfano un recuento analítico por la historia reciente de Latinoamérica. Tomando a Venezuela, Bolivia y Ecuador como referentes de las transformaciones político-sociales de la región, sin despreciar la riqueza de experiencias de otros países hermanos, Serrano recorre las peculiaridades de tres períodos de nuestra historia contemporánea, el último de los cuales –argumentará– se encuentra en franca disputa entre diversos modelos de gestión de realidades políticas, económicas y sociales. Al mismo tiempo, reflexiona acerca de los tránsitos que deben asumir los nuevos discursos y afirma que no solo deben operar bajo las coyunturas nacionales actuales, sino que deben contribuir a replantear la hegemonía simbólica en un mapa mundial en el que el polo latinoamericano se constituya como una figura soberana.

